

Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión del Riesgo de Desastres (iGOPP)

Protocolo de Aplicación

Sergio Lacambra
Cassandra Rogers
Ginés Suarez
Tsuneki Hori
Lina P. Salazar
Maricarmen Esquivel
Lizardo Narváez
Omar Darío Cardona
Rolando Durán
Ana Maria Torres
Ernesto Visconti

División de
Medioambiente,
Desarrollo Rural y
Administración de
Riesgos por Desastres

NOTA TÉCNICA N°
IDB-TN-913

Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión del Riesgo de Desastres (iGOPP)

Protocolo de Aplicación

Sergio Lacambra
Cassandra Rogers
Ginés Suarez
Tsuneki Hori
Lina P. Salazar
Maricarmen Esquivel
Lizardo Narváez
Omar Darío Cardona
Rolando Durán
Ana Maria Torres
Ernesto Visconti

Octubre 2015

Catalogación en la fuente proporcionada por la
Biblioteca Felipe Herrera del
Banco Interamericano de Desarrollo

Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión de Riesgo de Desastres (iGOPP): protocolo de aplicación / Sergio Lacambra, Cassandra Rogers, Tsuneki Hori, Ginés Suárez, Lina P. Salazar, Maricarmen Esquivel, Lizardo Narváez, Omar Darío Cardona, Rolando Durán, Ana Maria Torres, Ernesto Visconti.

p. cm. — (Nota técnica del BID ; 913)

1. Natural disasters—Government policy. 2. Emergency management—Government policy. 3. Environmental risk assessment—Government policy. 4. Climatic changes—Risk management. 5. Natural disasters—Risk management. I. Lacambra, Sergio. II. Rogers, Cassandra. III. Hori, Tsuneki. IV. Suárez, Ginés. V. Salazar, Lina P. VI. Esquivel, Maricarmen. VII. Narváez, Lizardo. VIII. Cardona, Omar Darío. IX. Durán, Rolando. X. Torres, Ana Maria. XI. Visconti, Ernesto. XII. Banco Interamericano de Desarrollo. División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgos por Desastres. XIII. Serie.

IDB-TN-913

JEL code: Q540

Palabras claves: iGOPP, Índice de Gobernabilidad de Políticas Públicas, GRD, Gestión de Riesgo de Desastres, Clima, Cambio Climático, Inundaciones.

<http://www.iadb.org>

Copyright © 2015 Banco Interamericano de Desarrollo. Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons IGO 3.0 Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND) (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode>) y puede ser reproducida para cualquier uso no-comercial otorgando el reconocimiento respectivo al BID. No se permiten obras derivadas.

Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de conformidad con las reglas de la CNUDMI (UNCITRAL). El uso del nombre del BID para cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID, no están autorizados por esta licencia CC-IGO y requieren de un acuerdo de licencia adicional.

Note que el enlace URL incluye términos y condiciones adicionales de esta licencia.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.



Contacto: Sergio Lacambra (slacambra@iadb.org); Tsuneki Hori (tsunekih@iadb.org)

Ginés Suarez (giness@iadb.org)

Este documento fue preparado por:

Los especialistas del BID en Gestión del Riesgo: Sergio Lacambra (Jefe de Equipo), Ginés Suárez, Tsuneki Hori y Cassandra Rogers.

Los economistas del BID: Lina P. Salazar

La especialista del BID en Adaptación al Cambio Climático: Maricarmen Esquivel

Los consultores externos en Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático: Lizardo Narváez (Compilador principal); Omar Darío Cardona, Rolando Durán y Ana María Torres.

Para cuestiones normativas y de revisión de indicadores desde el punto de vista legal, se contó con la asesoría del abogado especializado en marcos legales para la Gestión del Riesgo: Ernesto Visconti.

Para el enfoque de Gobernabilidad, se contó con la asesoría de Xavier Ballart, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración del Instituto de Gobierno y Política Pública (Universidad Autónoma de Barcelona).

También se contó con valiosos aportes de Laura Gurza (Ex Coordinadora Nacional de Protección Civil de México) y Zoila Navarro (Directora General de Política Fiscal de Perú).

El desarrollo y publicación de este documento fue financiado por medio de la Cooperación Técnica Regional RG-T2064, financiada por el Fondo Multidonante de Prevención de Desastres con contribuciones de Canadá, España, Japón y Korea.

Presentación

El protocolo describe de forma detallada los pasos necesarios para la medida de los indicadores, incluyendo la información a recopilar, el proceso de valoración, recomendaciones y ejemplos basados en la aplicación realizada, así como en experiencias de otros países de la región. Asimismo, el protocolo contiene algunos ejemplos hipotéticos con situaciones que pueden encontrarse en los países y sugerencias sobre opciones para recolectar la información en los distintos contextos.

Igualmente, este protocolo con el fin de ajustarse a su metodología y al proceso de valoración de sus indicadores, es sensible hacia aquellas diferencias de orden jurídico-constitucional que dan lugar a esquemas con diversos grados de federalismo y centralismo.

Objetivo del protocolo de aplicación

Exponer los elementos objetivos que deben ser verificados en cada país para que se cumpla la condición positiva (mínimo requerido) en cada indicador del iGOPP.

Organización del protocolo de aplicación

El documento está organizado según el código de cada indicador de iGOPP iniciando por MG, luego IR, RR, PR RC y finalmente PF. Se describe cada indicador brevemente y se presentan recomendaciones y pautas para su correcta aplicación.

Siglas

ACC	Adaptación al cambio climático
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CC	Cambio climático
CEP	Curva de excedencia de pérdidas
GRD	Gestión del riesgo de desastres
IPCC	Panel Intergubernamental de Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate Change)
IR	Identificación y conocimiento del riesgo (componente del índice)
MG	Marco general de la gobernabilidad (componente del índice)
PBL	Préstamo Programático de Reforma de Políticas (Policy-Based Loan)
PMP	Pérdida máxima probable
PAE	Pérdida anual esperada
PF	Protección financiera (componente del índice)
PR	Preparación de la respuesta (componente del índice)
PPR	Prima pura de riesgo
RC	Planificación de la recuperación post-desastre (componente del índice)
RR	Reducción del riesgo de desastres (componente del índice)

Glosario

1. **Adaptación (al cambio climático)⁺**: En los sistemas humanos, el proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos, a fin de moderar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. En los sistemas naturales, el proceso de ajuste al clima real y sus efectos; la intervención humana puede facilitar el ajuste al clima proyectado.

NOTA: En el caso de los eventos hidrometeorológicos “la *Adaptación al Cambio Climático* corresponde a la gestión del riesgo de desastres en la medida en que está encaminada a la reducción de la vulnerabilidad o al mejoramiento de la resiliencia en respuesta a los cambios observados o esperados del clima y su variabilidad”. (Ver capítulo sobre lineamiento básicos, relación entre gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático).

2. **Amenaza⁺⁺**: Peligro latente que representa la probable manifestación de un fenómeno físico de origen natural, socio-natural o antropogénico, que se anticipa puede producir efectos adversos en las personas, la producción, la infraestructura y los bienes y servicios. Es un factor de riesgo físico externo a un elemento o grupo de elementos sociales expuestos, que se expresa como la probabilidad de que un fenómeno se presente con una cierta intensidad, en un sitio específico y dentro de un periodo de tiempo definido¹.
3. **Análisis (evaluación) del riesgo⁺⁺**: En su forma más simple, es el postulado de que el riesgo resulta de relacionar la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos y consecuencias sociales, económicas y ambientales asociadas a uno o varios fenómenos peligrosos en un territorio y con referencia a grupos o unidades sociales y económicas particulares. Cambios en uno o más de estos parámetros modifican el riesgo en sí mismo, es decir, el total de pérdidas esperadas y las consecuencias en un área determinada. Análisis de amenazas y de vulnerabilidades componen facetas del análisis de riesgo y deben estar articulados con este propósito y no comprender actividades separadas e independientes.

¹ En el presente documento sólo se considerarán las amenazas de origen natural; incluyendo eventos tipo “slow onset” o de lenta formación.

4. **Bienes de responsabilidad fiscal del Estado⁺⁺⁺⁺**: Portafolio de elementos expuestos que incluye activos públicos y en determinados casos los activos de la población de bajos ingresos², es decir los activos por los cuales el gobierno cubriría o pagaría la reposición.
5. **Cambio climático⁺**: Un cambio en el estado del clima que puede ser identificado (por ejemplo, mediante pruebas estadísticas) por cambios en el valor medio de sus propiedades y/o por la variabilidad de las mismas, que persiste durante largos periodos de tiempo, generalmente decenios o periodos más largos. El cambio climático puede deberse a procesos internos naturales, a forzamientos externos o a cambios antropogénicos persistentes en la composición de la atmósfera o en el uso de la tierra.
6. **Curva de excedencia de pérdidas (CEP)⁺⁺⁺⁺**: La CEP representa la frecuencia anual con que determinada pérdida económica será excedida. Es la medida más importante y robusta del riesgo, dado que brinda la información básica para la planeación y destinación de recursos necesarios con el fin de cumplir con objetivos de gestión particulares. La CEP se puede calcular a partir del mayor evento probable en un año o de manera uniforme para todos los eventos posibles, en función de su periodo de retorno. Generalmente se prefiere el segundo enfoque, dado que permite considerar más de un evento catastrófico al año.
7. **Desastre⁺⁺**: Situación o proceso social que se desencadena como resultado de la manifestación de un fenómeno de origen natural, socio-natural o antrópico que, al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en una población y en su estructura productiva e infraestructura, causa alteraciones intensas, graves y extendidas en las condiciones normales de funcionamiento del país, región, zona o comunidad afectada, las cuales, en muchos casos, no pueden ser enfrentadas o resueltas de manera autónoma utilizando los recursos disponibles a la unidad social directamente afectada. Estas alteraciones están representadas de forma diversa y diferenciada, entre otras cosas, por la pérdida de vida y salud de la población; la destrucción, pérdida o inutilización total o parcial de bienes de la colectividad y de los individuos, así como daños severos en el

² Los activos de la población de bajos ingresos muchas veces se incluyen de forma implícita como bienes de responsabilidad fiscal del estado; es posible que determinados países excluyan estos activos o los incluyan de forma expresa.

ambiente; requiriendo de una respuesta inmediata de las autoridades y de la población para atender a los afectados y restablecer umbrales aceptables de bienestar y oportunidades de vida.

8. **Emergencia⁺⁺**: Estado directamente relacionado con la ocurrencia de un fenómeno físico peligroso o por la inminencia del mismo, que requiere de una reacción inmediata y exige la atención de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general. Cuando es inminente el evento, pueden presentarse confusión, desorden, incertidumbre y desorientación entre la población. La fase inmediata después del impacto es caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, zona o región y las condiciones mínimas necesarias para la supervivencia y funcionamiento de la unidad social afectada. Constituye una fase o componente de una condición de desastre pero no es, per se, una noción sustitutiva de desastre. Puede haber condiciones de emergencia sin un desastre.
9. **Exposición⁺**: La presencia de personas, medios de subsistencia servicios y recursos ambientales, infraestructura, o activos económicos, sociales o culturales en lugares que podrían verse afectados negativamente.
10. **Gestión del riesgo de desastres⁺**: Procesos para diseñar, aplicar y evaluar estrategias, políticas y medidas destinadas a mejorar la comprensión de los riesgos de desastre, fomentar la reducción y la protección financiera de riesgos de desastre, y promover la mejora continua en las prácticas de preparación, respuesta y recuperación para los casos de desastre, con el objeto explícito de aumentar la seguridad humana, el bienestar, la calidad de vida, la resiliencia y el desarrollo sostenible.

NOTA: La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad y la seguridad territorial y los derechos e intereses colectivos, y por lo tanto está intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro y con la gestión ambiental territorial sostenible en todos los niveles de gobierno.

11. **Gestión de emergencias (gestión o manejo de desastres)⁺⁺**: Organización y gestión de recursos y responsabilidades para el manejo de todos los aspectos de las

emergencias, en particular preparación, respuesta y rehabilitación. La gestión de emergencias incluye planes, estructuras y acuerdos que permitan comprometer los esfuerzos del gobierno de entidades voluntarias y privadas de una manera coordinada y comprensiva para responder a todas las necesidades asociadas con una emergencia. El concepto de gestión de emergencias es también conocido como "gestión de desastres".

12. **Gobernabilidad:** la capacidad que tienen las sociedades para orientar y organizar sus instituciones públicas y sociales de modo que ofrezcan a las personas más y mejores oportunidades para llevar el tipo de vida que valoran, incluyéndolas en las decisiones que les afectan (PNUD).
13. **Identificación del riesgo de desastres:** proceso de la gestión del riesgo de desastres enfocado en el conocimiento sobre orígenes, causas, alcance, frecuencia y posible evolución, entre otros aspectos, de los fenómenos potencialmente peligrosos, así como la ubicación, causas, evolución y capacidad de resistencia y de recuperación de elementos socioeconómicos expuestos. Este proceso incluye el análisis anticipado de las consecuencias y admite tanto interpretaciones objetivas y científicas como de percepción social e individual.
14. **Instalaciones vitales⁺⁺⁺⁺:** Las estructuras físicas, instalaciones técnicas y sistemas principales que son social, económica u operativamente esenciales para el funcionamiento de una sociedad o comunidad, tanto en circunstancias habituales como extremas durante una emergencia. Comentario: Las instalaciones vitales son elementos de la infraestructura que respaldan los servicios esenciales en una sociedad. Éstas incluyen sistemas de transporte, puertos aéreos y marítimos, sistemas de electricidad, de suministro de agua y de comunicaciones; hospitales y clínicas de salud, y centros de servicios de bomberos, policía y de administración pública.
15. **Infraestructura crítica:** ver instalaciones vitales.
16. **Instrumentos de protección financiera⁺⁺⁺:** instrumentos de financiamiento ante la ocurrencia de desastres; se clasifican en instrumentos ex – ante, tales como reservas, créditos contingentes e instrumentos de transferencia del riesgo y ex – post, tales como reasignación presupuestal, incremento de impuestos y contratación de deuda.

17. **Instrumentos financieros/Productos financieros⁺⁺⁺⁺⁺⁺:** Instrumentos de transferencia de fondos entre agentes económicos que se caracterizan por su liquidez, riesgo y rentabilidad. Supone una forma de mantener riqueza para quienes la poseen (los inversores) y un pasivo para quienes los generan. Estos activos pueden ser transmitidos de unas unidades económicas a otras, e incluso existen productos financieros derivados.
18. **Gestión (intervención) correctiva⁺⁺:** Proceso que pretende reducir los niveles de riesgo existentes en la sociedad o en un subcomponente de la sociedad, producto de procesos históricos de ocupación del territorio, de fomento a la producción y la construcción de infraestructuras y edificaciones entre otras cosas. Reacciona a, y compensa riesgo ya construido en la sociedad. Ejemplos de acciones o instrumentos de la gestión correctiva incluyen la construcción de diques para proteger poblaciones ubicadas en zonas de inundación, el reforzamiento estructural de edificios para dotarlos de niveles adecuados de protección sísmica resistente o contra huracanes, cambios en el patrón de cultivos para adecuarse a condiciones ambientales adversas, reforestación o recuperación de cuencas para disminuir procesos de erosión, deslizamiento e inundación.

NOTA: el concepto de mitigación (reducción) del riesgo de desastres está asociado a la gestión (intervención) correctiva.

19. **Gestión (intervención) prospectiva⁺⁺:** Un proceso a través del cual se prevé (previene) un riesgo que podría construirse asociado con nuevos procesos de desarrollo e inversión, tomando las medidas para garantizar que nuevas condiciones de riesgo no surjan con las iniciativas de localización, construcción, producción, circulación, comercialización, etc. La gestión prospectiva debe verse como un componente integral de la planificación del desarrollo y del ciclo de planificación de nuevos proyectos, sean éstos desarrollados por gobierno, sector privado o sociedad civil. El objetivo último de este tipo de gestión es evitar nuevos riesgos, garantizar adecuados niveles de sostenibilidad de las inversiones, y con esto, evitar tener que aplicar medidas costosas de gestión correctiva en el futuro.

20. **Manejo de desastres:** ver gestión de emergencias o desastres
21. **Marco de Gasto de Mediano Plazo**⁺⁺⁺⁺⁺: Contiene las proyecciones de las principales prioridades sectoriales y los niveles máximos de gasto, distribuidos por sectores y componentes de gasto del Presupuesto General de la Nación para el periodo de gobierno y se revisa anualmente.
22. **Niveles de gobierno:** Incluye gobierno central, entidades autónomas y descentralizadas, empresas del estado, gobiernos locales y regionales, y los sectores y ministerios.
23. **Niveles territoriales:** Integra lo local, municipal, cantonal, parroquial, distrital, departamental, regional, estadual o provincial, dependiendo de la división político administrativa de cada país.
24. **Pasivo contingente**⁺⁺⁺⁺⁺⁺: Los pasivos tradicionales se caracterizan porque las condiciones que determinan el valor de las obligaciones que se contraen son conocidas, al contrario de los pasivos contingentes cuyo valor depende de la ocurrencia de hechos futuros e inciertos
25. **Parámetros y lineamientos:** Se refiere a instructivos que pueden ser o no de obligatorio cumplimiento y que establecen estándares sobre las mejores prácticas para la realización de una actividad a cargo de una entidad o institución específica.
26. **Pérdida Anual Esperada (PAE)**⁺⁺⁺⁺: La PAE se calcula como la suma del producto entre las perdidas esperadas para determinado evento y la frecuencia de ocurrencia de dicho evento en un periodo de un año y para todos los eventos estocásticos considerados. En términos probabilistas, la PAE es la esperanza matemática de la pérdida anual.
27. **Pérdida máxima probable (PMP)**⁺⁺⁺⁺: La PMP representa un nivel de pérdida para una excedencia esperada. Dependiendo de la capacidad de un país, región o entidad para la gestión del riesgo, se puede optar por intervenir las pérdidas potenciales hasta determinado periodo de retorno que se considere apropiado.

28. **Plan de gestión del riesgo⁺⁺**: Conjunto coherente y ordenado de estrategias, programas y proyectos, que se formula para orientar las actividades de reducción o mitigación, prevención, previsión y control de riesgos, y la recuperación en caso de desastre. Ofrece el marco global e integrado, el detalle de las políticas y estrategias globales y los niveles jerárquicos y de coordinación existentes para el desarrollo de planes específicos, sectoriales, temáticos o territoriales relacionados con los distintos aspectos del riesgo y desastre. Al garantizar condiciones apropiadas de seguridad frente a los diversos riesgos existentes y disminuir las potenciales pérdidas materiales y consecuencias sociales que se derivan de los desastres, se mantiene la calidad de vida de la población y se aumenta la sostenibilidad.
29. **Plan de emergencias⁺⁺**: Definición de funciones, responsabilidades y procedimientos generales de reacción y alerta institucional, inventario de recursos, coordinación de actividades operativas y simulación para la capacitación, con el fin de salvaguardar la vida, proteger los bienes y recobrar la normalidad de la sociedad tan pronto como sea posible después de que se presente un fenómeno peligroso. Consiste en una propuesta normada de organización de las acciones, personas, servicios y recursos disponibles para la atención del desastre, con base en la evaluación de riesgos, disponibilidad de recursos materiales y humanos, preparación a la comunidad, capacidad de respuesta local e internacional, etc. Determina la estructura jerárquica y funcional de las autoridades y organismos llamados a intervenir en la atención y establece el sistema de coordinación de las instituciones, los recursos y medios tanto públicos como privados necesarios para cumplir el objetivo propuesto.
30. **Plan de contingencia**: son procedimientos alternativos, de respuesta inmediata, al orden normal de una empresa, cuyo fin es permitir el normal funcionamiento de ésta, aun cuando alguna de sus funciones se viese dañada por un accidente interno o externo.
31. **Plan de continuidad de negocio⁺⁺⁺⁺⁺⁺**: su propósito es analizar las vulnerabilidades del ente para crear y validar planes logísticos para preparar a la organización para recuperar y restaurar sus funciones críticas parcial o totalmente interrumpidas después de un desastre, de forma que no se ponga en peligro su misión y se mejore la resiliencia de la organización. Un Plan de Continuidad de Negocio, a diferencia de una Plan de Contingencia, está orientado al mantenimiento del negocio de la organización, con lo

que priorizará las operaciones de negocio críticas necesarias para continuar después de un incidente no planificado. Un plan de continuidad de negocio incluye un plan de contingencia.

32. **Preparación (preparativos) de la respuesta:** proceso de la gestión del riesgo de desastres cuyo objetivo es planificar, organizar y poner a prueba los procedimientos y protocolos de respuesta de la sociedad en caso de desastre, garantizando una adecuada y oportuna atención de personas afectadas, así como la rehabilitación de los servicios básicos indispensables, permitiendo normalizar las actividades en la zona afectada por el desastre. La preparación se lleva a cabo mediante el monitoreo de eventos y la definición de escenarios de riesgo, la planificación, organización, entrenamiento, dotación de recursos y simulación para las acciones de alerta, evacuación, búsqueda, rescate, socorro, asistencia humanitaria que deben realizarse en caso de emergencia y las actividades de recuperación física, económica y social posteriores.
33. **Prevención del riesgo⁺⁺:** Medidas y acciones dispuestas con anticipación que buscan prevenir nuevos riesgos o impedir que se desarrollen y se consoliden. Significa trabajar en torno a amenazas y vulnerabilidades latentes. Visto de esta manera, la prevención de riesgos se encaja en la Gestión Prospectiva del Riesgo. Dado que la prevención absoluta rara vez es posible, la prevención tiene una connotación semi-utópica y debe ser vista a la luz de consideraciones sobre el riesgo aceptable, el cual es socialmente determinado en sus niveles.
34. **Prima pura de riesgo (PPR)⁺⁺⁺⁺:** La PPR corresponde al valor de la PAE dividido por el valor reposición del activo. Indica el costo que debe ser pagado anualmente para cubrir las pérdidas esperadas en el futuro.
35. **Protección financiera⁺⁺⁺:** Combinación óptima de mecanismos o instrumentos financieros de retención y transferencia del riesgo que permite acceder de manera ex post a recursos económicos oportunos, lo cual mejora la capacidad de respuesta ante la ocurrencia de desastres (eventos menores y recurrentes y grandes desastres de baja recurrencia) y protege el balance fiscal del Estado.

36. **Recuperación⁺⁺**: Proceso de restablecimiento de condiciones aceptables y sostenibles de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción de la infraestructura, bienes y servicios destruidos, interrumpidos o deteriorados en el área afectada, y la reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad bajo condiciones de menor riesgo que lo que existía antes del desastre.
37. **Reducción del riesgo de desastres⁺⁺**: Proceso de la gestión del riesgo de desastres enfocado en minimizar vulnerabilidades y riesgos en una sociedad, para evitar (prevención) o limitar (mitigación y preparación) el impacto adverso de amenazas, dentro del amplio contexto del desarrollo sostenible.
38. **Rehabilitación**: Etapa de la recuperación que corresponden al restablecimiento de los servicios vitales indispensables interrumpidos o deteriorados por el desastre. Es una etapa o situación temporal en la cual se continúa con la atención de la población, pero en la cual se restablece el funcionamiento de las líneas vitales, como la energía, el agua, las vías y las comunicaciones, y otros servicios básicos como la salud y el abastecimiento de alimentos y víveres.
39. **Reconstrucción**: Etapa de la recuperación que corresponde al proceso de restitución y refuerzo de las construcciones afectadas y de reparación del daño físico de las edificaciones, la infraestructura y los centros de producción después de un desastre.
40. **Resiliencia⁺**: La habilidad de un sistema y sus componentes para anticipar, absorber, adaptarse o recuperarse de los efectos de un fenómeno peligroso, de forma oportuna y eficiente, incluso velando por la conservación, restauración o mejora de sus estructuras y funciones básicas esenciales.
41. **Respuesta⁺⁺**: Etapa de la atención que corresponde a la ejecución de las acciones previstas en la etapa de preparación y que, en algunos casos, ya han sido antecedidas por actividades de alistamiento y movilización, motivadas por la declaración de diferentes estados de alerta. Corresponde a la reacción inmediata para la atención oportuna de la población.

42. **Riesgo de desastres⁺**: La probabilidad de que, durante un periodo específico de tiempo, se produzcan alteraciones graves del funcionamiento normal de una comunidad o una sociedad debido a los fenómenos físicos peligrosos que interactúan con condiciones sociales vulnerables, dando lugar a efectos humanos, materiales y económicos o ambientales adversos generalizados que requieren de una respuesta inmediata a la emergencia para satisfacer las necesidades humanas esenciales, y que pueden requerir apoyo externo para la recuperación.
43. **Subsidiaridad (principio de)**: en su definición más amplia, dispone que un asunto debe ser resuelto por la autoridad (normativa, política o económica) más próxima al objeto del problema.
44. **Vulnerabilidad⁺⁺**: Factor de riesgo interno de un elemento o grupo de elementos expuestos a una amenaza. Corresponde a la predisposición o susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se manifieste un fenómeno peligroso de origen natural, socio natural o antropogénico. Representa también las condiciones que imposibilitan o dificultan la recuperación autónoma posterior. Las diferencias de vulnerabilidad del contexto social y material expuesto ante un fenómeno peligroso determinan el carácter selectivo de la severidad de sus efectos. Sistema de condiciones y procesos resultantes de factores físicos, sociales, económicos y medioambientales que aumentan la susceptibilidad de una comunidad al impacto de los peligros.
45. **Unidades de gestión territorial**: gobiernos locales y regionales en sus distintas formas de organización político administrativa.

Fuentes:

- + IPCC, (2012). “Resumen para responsables de políticas” en el informe especial sobre la gestión de los riesgos de fenómenos hidrometeorológicos extremos y desastres para mejorar la adaptación al cambio climático [edición a cargo de C. B. Field, C. B., V. Barros, T. F. Stocker, D. Qin, D. J. Dokken, K. L. Ebi, M. D. Mastrandrea, K. J. Mach, G. –K. Plattners, S. K. Allen, M. Tignor, y P. M. Midgley]. Informe Especial de los Grupos de Trabajo I y II del IPCC, Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, Estados Unidos de América, págs. 1-19.
- ++ CRID. Vocabulario Controlado sobre Desastres (VCD). Consulta en Línea (<http://vcd.cridlac.org/index.php>). Fuente: Lavell, A. et. al., (2003). La gestión local del riesgo: nociones y precisiones en torno al concepto y la práctica. CEPREDENAC, PNUD.
- +++ Ghesquiere y Mahul, (2010). Financial Protection of the State against Natural Disasters, A Primer, The World Bank, Latin American and the Caribbean Region, Finance and Private Sector Development, Sustainable Development Network, September 2010
- ++++ UNISDR (2009). Terminología sobre Reducción del Riesgo de Desastres. Publicada por la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas (UNISDR). Ginebra, Suiza, mayo de 2009.
- +++++ UNISDR (2011). Informe Global sobre el Riesgo de Desastres (GAR).
- # BID (2009). Programa de Capacitación, Anexo de la Guía del Participante. Módulos S1-S2, Apéndice II, Glosario General del Documento.
- ++++++ Adaptado de <http://www.minhacienda.gov.co>
- +++++++ Diccionario ESPASA (1998). Economía y Negocios. Arthur Andersen.
- +++++++ Adaptado de Wikipedia, Business Continuity Management, Good Practice Guidelines 2008 Business Continuity Institute, A Management Guide to Implementing Global Good Practice in Business Continuity Management y Guía de Desarrollo de un Plan de Continuidad de Negocio, Escuela Universitaria de Informática, Universidad Politécnica de Madrid, Trabajo de tesis de Laura del Pino Jimenez en 2007.
- +++++++ Cebotari Aliona, Contingent Liabilities: Issues and Practice, International Monetary Fund.

Aspectos generales

a. Sobre el concepto de normatividad.

La explicación o argumentación con la que se justifique la respuesta positiva de cada indicador, deberá estar sustentada en normas jurídicas que hayan sido formalmente aprobados por una instancia competente sobre la materia y jurisdicción que se trate. Para este efecto, esas normas en cuestión deberán (i) estar vigente durante el levantamiento de la información y previo a la presentación de las conclusiones del iGOPP; y (ii) **deberán ser permanentes, es decir, que su existencia no esté determinada por el tiempo que dure el encargo o respon**

sabilidad de aquellos que la dictaron, sino que subsistirá hasta que, de acuerdo a los procedimientos establecidos previamente, sea derogada por una nueva norma, o bien, que cumpla con las condiciones establecidas originalmente para que cese su vigencia.

El verificable por excelencia es la ley principal o de la materia, y aquellas otras relacionadas o que le sean complementarias y, en su caso, el reglamento del sector (por su vigencia e importancia para definir el mandato del sector o aspecto intersectorial), aunque podrían aceptarse tanto los planes sectoriales, las políticas y las normas de carácter administrativo pero siendo exigentes en lo referente a su vigencia, permanencia y validez.

En el caso de los planes sectoriales, los que hayan sido aprobados de forma que sean vinculantes o de cumplimiento obligatorio para el sector, que estén vigentes pero cuya validez no trascienda un periodo de gobierno podrían utilizarse como verificables para preguntas del tipo *cuenta el sector transporte con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años (...)* que se incluyen en el componente PR.

b. Sobre la fecha de cumplimiento de los indicadores.

Situaciones que pueden encontrarse y formas de asignar fechas de cumplimiento

En el caso de *indicadores relativos a normatividad* (se mencionan situaciones hipotéticas):

1. *Un país tenía un marco legal que cumplía la condición analizada pero ese marco legal se modificó, y el marco actual igualmente permite el cumplimiento de la condición.* Por ejemplo, digamos que un país tenía un marco legal de GRD del año 1990 y con ese marco legal cumplía a cabalidad las condiciones del indicador en cuestión, esa fecha es la que habría que utilizar como fecha de cumplimiento (1990). Si posteriormente este marco legal se modificó y el nuevo marco legal sigue cumpliendo con la condición, esta modificación del marco legal que sigue cumpliendo con la condición se debe comentar en el cuadro de observaciones. En este caso habría que subir ambos verificables: la normativa de 1990 y la actualmente vigente.
2. *Un país tenía un marco legal que cumplía la condición analizada pero ese marco legal se modificó, y el nuevo marco legal no cumple con la condición.* Este caso es altamente improbable, pero la respuesta debería ser que no cumple, aunque se menciona en observaciones que si cumplía con el primer marco legal, mencionando la fecha. No se sube ningún verificable.

3. *Un país cumple con el marco legal más reciente, aunque tenía avances con marcos legales anteriores.* En este país el marco legal de GRD del año 90 casi cumplía la condición, pero no a cabalidad. No es hasta que se aprueba el marco legal de digamos 2010, que deroga el de 1990, que se cumple a cabalidad la condición. La fecha de cumplimiento y el verificable es el de 2010 aunque queda a discreción del aplicador del IGOPP mencionar en observaciones la evolución y que casi cumplía la condición en 1990.
4. *Un país cumple con la suma de varios marcos legales de varias fechas.* En este país el marco legal de GRD del año 1990 cumplía parcialmente la condición, pero no a cabalidad. No es hasta que se aprueba el marco legal de digamos 2010, que complementa al de 1990, que se cumple a cabalidad la condición. La fecha de cumplimiento es el 2010, pero los verificables que deben de incluirse son los verificables de 1990 y 2010, pues es la suma de ambos es la que hace que se cumpla. En las observaciones se debe mencionar la evolución y de qué forma los marcos de ambas fechas se complementan para que el país cumpla.

En los *indicadores que combinan aspectos de planes y aspectos presupuestarios* del tipo *¿cuenta el sector transporte (o equivalente) con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?*, y *¿su entidad coordinadora o rectora ha recibido recursos para la preparación en caso de desastres en la última vigencia fiscal?*, y que aparecen en el componente de PR se debe poner como fecha de cumplimiento la fecha en que se aprobó el plan y no la fecha de dotación presupuestaria.

En el caso de indicadores relacionados con la *disponibilidad presupuestaria* no aplican estos criterios y sólo se debe mencionar la fecha más reciente de cumplimiento dentro de los márgenes de tiempo que establece la pregunta.

c. Explicación de los verificables en la matriz de la aplicación.

En caso de que se considere que el indicador se cumple:

En la celda correspondiente al indicador en la columna de “Explicación de los verificables”, y considerando que son los verificables los que dan sustancia a cada argumentación, se debe iniciar con la mención del verificable principal, para lo cual se deberá señalar su nombre o título completo (evitando el uso de abreviaturas, apócope o cualquier otra figura similar), es decir, tal y como aparecen en el órgano oficial correspondiente, así como la fecha de publicación, su inicio de vigencia, promulgación, etc., precisando siempre esa circunstancia. Ejemplo: “*La Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio del 2012 (MG-1A-5a), establece en su Artículo 7 que...*”. En su caso, se incluirán siguiendo ese mismo formato, los verificables complementarios o relacionados.

Una vez transcrito los artículos (si se trata de una norma) o las paráfrasis que conciernan al argumento ofrecido (si corresponde a un documento diverso) de los verificables, se explicará de forma escueta, deducida y razonada cómo esa información permite cumplir con las hipótesis contenidas en los indicadores. Posteriormente al cuerpo principal de la explicación se puede comentar cualquier aspecto adicional que se considere relevante, pero en un párrafo

separado (por ejemplo otras leyes relacionadas pero que no verifican el cumplimiento). Se recomienda no extenderse con aspectos que no contribuyen a explicar el cumplimiento de la condición para mayor claridad.

En la celda de la columna “verificables y ruta” se debe incluir los verificables que justifican el cumplimiento de la condición, pero únicamente estos, no otros verificables que puedan haberse comentado a título informativo. Para lo cual se escribirá el nombre completo del verificable, la fecha consignada y el código asignado en el repositorio. Por ejemplo:

Ley General de Protección Civil, del 12 de junio del 2012, MG-1A-5a.

Es importante mencionar el año de cada documento tanto en la columna de “explicación de los verificables” como en la de “verificables y ruta”, para poder contrastar esta fecha con la que aparece en la columna de año de cumplimiento. Ejemplo:

Pregunta	Si/No	Año	Explicación de los verificables	Verificables y ruta
RC-1A-3 ¿Existe normatividad que establezca esquemas institucionales para la coordinación de la reconstrucción post-desastre?	1	2010	La Ley General de Protección Civil publicada el 6 de junio de 2012 (RC-1A-3a), precisa lo que es un desastre (artículo 2, fracción XVI) y una declaratoria de desastre (artículos 7, fracción IV, y 19, fracción XI) y luego en el Capítulo XII “De los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos”, establece un régimen de gestión financiera, fijando para ello los requisitos para detonar la declaratoria de desastre condición sine qua non para poder acceder a los recursos del fondo de desastres. Todo esto como un proceso estándar que se repite permanentemente. En ese capítulo el Artículo 63 supedita a la normativa administrativa, es decir las Reglas Generales del FONDEN (RC-1A-3b) y a los Lineamientos de Operación Específicos del FONDEN (RC-1A-3c) la regulación de los procedimientos.	<p>Ley General de Protección Civil, del 6 de junio de 2012 RC-1A-3a.pdf</p> <p>Reglas Generales del FONDEN, de diciembre de 2010 RC-1A-3b.pdf</p> <p>Lineamientos de Operación del FONDEN, de enero de 2011 RC-1A-3c.pdf</p>

En el caso de que se considere que el indicador no se cumple:

En la celda correspondiente al indicador en la columna de “Explicación de los verificables” se deben describir los pasos, leyes analizadas y entrevistas mantenidas para concluir que no se cumple el indicador. También se pueden comentar dificultades en el acceso a información que no permitieron verificar el cumplimiento del indicador. Se debe ser también conciso en el texto. Siempre se deben incluir fechas y códigos de las leyes o instrumentos legales analizados para más claridad.

La celda de la columna “verificables y ruta” se dejará en blanco, no se incluirán verificables.
Ejemplo:

Pregunta	Si/No	Año	Explicación de los verificables	Verificables y ruta
¿Existe normatividad que establezca que los estudios de amenaza por eventos climáticos e hidrológicos deben considerar la frecuencia de ocurrencia asociada a los niveles de intensidad de los eventos?	0	N/A	El SENAMHI (adscrito al Ministerio del Ambiente) se creó mediante el Decreto Ley N° 17532 de 1969. La Ley Orgánica del SENAMHI es la Ley 24031 de 1984, el Artículo 4 se detallan las responsabilidades de esta entidad. Está claro que es responsable de realizar estudios climáticos en el país, aunque no se especifica que tengan que ser estudios de amenaza como tal (de forma literal en la norma) y tampoco establece de forma taxativa que los estudios deben considerar la frecuencia de ocurrencia asociada a los niveles de intensidad de los eventos.	No Aplica

ÍNDICE

Código: MG 1A.....	1
Código: MG 1B.....	9
Código: MG 1C.....	12
Código: MG 2	17
Código: MG 3	28
Código: IR 1A.....	33
Código: IR 1B	38
Código: IR 1C	61
Código: IR 2.....	65
Código: IR 3.....	81
Código: RR 1A.....	87
Código: RR 1B.....	94
Código: RR 1C.....	118
Código: RR 2.....	124
Código: RR 3.....	138
Código: PR 1A	144
Código: PR 1B	154
Código: PR 1C	177
Código: PR 2.....	182
Código: PR 3.....	204
Código: RC 1A.....	212
Código: RC 1B.....	223
Código: RC 1C.....	234
Código: RC 2.....	237
Código: RC 3.....	247
Código: PF 1A.....	252
Código: PF 1B.....	258
Código: PF 1C.....	264
Código: PF 2	269
Código: PF 3	288

Pregunta de respuesta cerrada

1. ¿Existe normatividad nacional que establece un marco de responsabilidades sobre la gestión del riesgo de desastres para todos los niveles de gobierno?

Descripción general del indicador

Se refiere al marco jurídico del sistema o estructura, ya sea nacional o federal, que provee las atribuciones y competencias relativas a los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), así como las necesarias para articular sus partes o elementos, incluyendo a los distintos niveles de gobierno.

Ahora, la normatividad puede estar contenida en una sola Ley, o bien, un conjunto de leyes. Lo importante es reconocer o “premiar” a los países que han integrado en su legislación acciones relacionadas con gestión prospectiva y correctiva del riesgo. De manera que un país que sólo cuente con un marco normativo para las acciones “*ex-post*” o de gestión reactiva, no cumpliría con la condición mínima requerida por este indicador para una respuesta positiva.

Es necesario tener claridad sobre el marco conceptual de la GRD y, al mismo tiempo, analizar la división u organización política-administrativa del país. Los distintos niveles de gobierno están definidos en el glosario del índice.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Indagar por la existencia de una normativa específica de carácter nacional que regule la GRD.
2. Verificar si dicha normativa establece concretamente el concepto de GRD de forma comprehensiva. Ver en el glosario los “procesos de GRD” como modo de cotejar si el concepto establecido en la norma es comprehensivo o identificar en la norma si se hace referencia a los procesos relacionados con la gestión prospectiva, correctiva y reactiva.
3. Verificar si dicha normativa específica define responsabilidades para todos los niveles de gobierno (ver glosario) para la GRD.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Para responder positivamente esta pregunta es necesario que se cumplan las dos condiciones establecidas: (1) la normativa nacional debe incluir la gestión del riesgo de forma comprehensiva, **integrando todos los procesos de la gestión del riesgo** y (2) debe establecer responsabilidades **en todos los niveles de gobierno**.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Posible verificables: en esta pregunta, al igual que en todos los indicadores del MG1, el verificable principal será la misma ley nacional de gestión del riesgo, ley de protección civil, o la normativa principal que regule estos procesos. Sin embargo, es importante considerar que se trata de indagar en el conjunto de la normativa y no exclusivamente en una ley. Por tanto, otras normativas como reglamentos, normas administrativas, protocolos, decretos específicos, etc. – siempre y cuando sean vinculantes – pueden servir como verificable.

Ejemplos:

Perú: La Ley N° 29664, del 8 de febrero de 2011, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) establece, en el artículo 2, que la GRD es de aplicación y cumplimiento obligatorio para “...todas las entidades y empresas públicas de todos los niveles de gobierno”; asimismo, en el artículo 6 numeral 2 define los “...procesos de la gestión del riesgo de desastres”.

Colombia: La Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la política nacional de GRD y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, la cual establece en su Artículo 2 que “La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano... En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”.

Pregunta de respuesta cerrada
2. ¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece instrumentos de política para su implementación?
Descripción general del indicador
<p>Es posible que la normativa nacional postule los temas de la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) de manera muy general, y que los aspectos más específicos estén considerados en normas de menor jerarquía, tales como reglamentos, normas de carácter administrativo, decretos, estrategias o planes, etc., según el país de que se trate. Sin embargo, es factible que el marco jurídico de la GRD sea reducido y no contemple los diversos instrumentos para su implementación, generando así vacíos jurídicos y por tanto la inoperancia, o bien, una operatividad limitada por parte de las autoridades responsables. Se considera entonces una atribución de calidad el que esté claramente regulado cuáles son los instrumentos de orden político, estratégico, técnico, operativo, presupuestario o cualquier otro que sea necesario para cumplir con la ley. Algunos instrumentos pueden ser: una política nacional de GRD, un plan o programa nacional de GRD, un plan nacional de emergencia, un sistema nacional de información para la GRD o una estrategia nacional para la protección financiera (o similar), un fondo nacional o instrumentos financieros de GRD, entre otros.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar por la existencia de una normativa específica de carácter nacional que regule la GRD. 2. Verificar si contempla instrumentos de política para la implementación de la GRD. 3. Confirmar si la norma (Ley o instrumento que determina las competencias y responsabilidades sobre la GRD) establece los instrumentos para su implementación o, en su defecto, debe buscarse en otros textos normativos de inferior jerarquía.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Para que se cumpla la condición en esta pregunta, la normativa debe indicar explícitamente que se deben establecer instrumentos de aplicación, o bien enumerar los instrumentos mínimos.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Colombia: Ley 1523 de 2012 (Abril 24), en el Capítulo III, llamado Instrumentos de planificación, establece de forma explícita el mandato de elaborar una serie de instrumentos con clara identificación de responsabilidades (ejemplos):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planes de gestión del riesgo de desastres. • Estrategia nacional para la respuesta a emergencias. • Planes departamentales, distritales y municipales de gestión del riesgo y estrategias de respuesta. <p>Perú: Ley N° 29664 del 8 de febrero de 2011, que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD), en su Título IV, Artículo 19, establece los “Instrumentos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (ejemplos):</p> <ul style="list-style-type: none"> • El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres • La estrategia financiera de gestión del riesgo de desastres <p>Los mecanismos de coordinación, decisión, comunicación y gestión de la información.</p>

Pregunta de respuesta cerrada

3. *¿La normatividad nacional de GRD establece que la coordinación y articulación de los instrumentos de política se debe realizar desde un nivel jerárquico igual o superior al ministerial?*

Descripción general del indicador

En los países donde la normativa nacional establece expresamente la creación de una institución con competencia en Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y, por lo tanto, para la coordinación de su sistema o estructura nacional, es una buena práctica que esa competencia vaya acompañada de un nivel jerárquico igual o superior al ministerial, de manera que le reporte directamente al presidente o primer ministro. En muchos casos, cuando esa responsabilidad recae en instancias que se encuentran por debajo del nivel de ministerio o secretaría de estado o gobierno, puede reducir notablemente la capacidad de incidencia y articulación.

Este indicador, cuando se refiere a las labores de coordinación, lo hace dando preeminencia a la coordinación de orden operativo que se ejerce sobre el sistema o la estructura nacional de la GRD relativa a la instrumentación de los programas y las políticas; y no a la estratégica, como ocurre en aquellos países en los que crean consejos o comités nacionales integrados generalmente por secretarios de estado o ministros y presididos por el presidente o primer ministro. Sin embargo, este indicador busca privilegiar la coordinación operativa.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Indagar por la existencia de una normativa específica de carácter nacional que regule la GRD.
2. Identificar el articulado en el cual se establece la estructura de coordinación y gestión.
3. Verificar que este articulado conceda a la instancia de coordinación operativa, un nivel igual o superior al ministerial o de secretaría de estado.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Para que se cumpla la condición en esta pregunta, la instancia de coordinación general de los procesos de GRD que establezca la norma nacional, **debe de corresponder a un nivel igual o superior al secretario de estado o ministerial**, o bien, que no se encuentre jerárquicamente bajo un ministerio, y que haya sido dotado de personalidad jurídica propia o autonomía jurídica. Por tal razón debe de responder directamente al Presidente de la República o al Primer Ministro.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Perú: La Ley N° 29664 del 8 de febrero de 2011, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SINAGERD, establece en su artículo 8, acápites b y f que uno de los objetivos del sistema es precisamente la articulación de los procesos de la GRD y de los instrumentos de política. La condición se complementa con el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664. Este Decreto Supremo reglamenta en el artículo 4, numeral 4.2, que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en su calidad de ente rector del SINAGERD, es responsable de facilitar "*los procesos de coordinación y articulación de las entidades integrantes del Sistema*". La PCM es de nivel jerárquico superior al Ministerial.

Pregunta de respuesta cerrada
4. ¿La normatividad nacional de GRD establece la articulación con otras normas relacionadas con adaptación al cambio climático, gestión integrada de recursos hídricos o planificación y ordenamiento territorial?
Descripción general del indicador
<p>Los mecanismos de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) están relacionados con instrumentos y políticas sectoriales o integradas en otros sistemas que usualmente forman parte de otro instrumento jurídico (normas habilitadoras).</p> <p>Algunas normas relacionadas con la GRD pueden ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adaptación al cambio climático (ACC) - Gestión integrada de recursos hídricos (GIRH) - Planificación y ordenamiento territorial <p>La mención a la articulación con dichas normas debe estar incluida no solo en la normativa principal, sino además en su reglamento, donde se puede encontrar una explicación más amplia de la articulación de las normas con los procesos de la GRD.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar por la existencia de una normativa específica de carácter nacional que regule la GRD. 2. Verificar que en la normativa se establezca, de forma expresa, que se debe realizar la articulación de la GRD con otras normas de carácter integral y multisectorial. 3. Confirmar si la norma nacional en GRD tiene más de cinco años de aprobada, es posible que no aparezca esta integración de forma expresa. En este caso debe buscarse esa vinculación en normas diversas de la GRD, tales como el reglamento de la ley, la política, estrategia o plan nacional, normas administrativas, etc., que hayan sido aprobados posteriormente. (No debe indagarse en la normatividad sectorial o multisectorial, sino en la normativa nacional específica de GRD)
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Para que esta respuesta se considere positiva, la normativa nacional en GRD debe establecer de forma explícita que se debe articular con otras políticas de carácter integral o multisectorial, o bien debe mencionar de forma explícita políticas específicas como ACC, GIRH o planificación territorial.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>México: La Ley General de Protección Civil, del 6 de junio de 2012, establece en el artículo 7, sección VII, que corresponde la facultad al Ejecutivo Federal de <i>"Dictar los lineamientos generales en materia de protección civil para inducir y fomentar que el principio de la Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, sea un valor de política pública y una tarea transversal para que con ello se realicen acciones de orden preventivo, con especial énfasis en aquellas que tienen relación directa con la salud, la educación, el ordenamiento territorial, la planeación urbano-regional, la conservación y empleo de los recursos naturales, la gobernabilidad y la seguridad"</i>.</p> <p>Perú: El Reglamento de la Ley N° 29664, aprobado según Decreto Supremo N° 048-2011-PCM de fecha 25 de mayo de 2011, señala en el Título III, Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, artículo 21, apartado 21.4 e inciso G, que son instrumentos de la Política Nacional de GRD también <i>"los instrumentos de política, estrategia y planificación relacionados con el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano, protección del ambiente, cambio climático, la educación y comunicación"</i>.</p>

Pregunta de respuesta cerrada
5. ¿El Plan Nacional de Desarrollo (o instrumento equivalente), establece objetivos, metas, o indicadores en la gestión del riesgo de desastres?
Descripción general del indicador
<p>Con el fin de comprobar que la GRD no es una política aislada, se deberá buscar su inclusión en las prioridades nacionales, los procesos de planeación del desarrollo y sus instrumentos. Estos instrumentos deberán tener indicadores concretos para observar el impacto de los compromisos de política.</p> <p>Posibles verificables son: políticas, estrategias o el plan de desarrollo (o instrumento similar que establezca la visión y los compromisos de desarrollo del país). Puede ser también indicadores u otro instrumento programático principal de la nación que implique que la GRD es tenida en cuenta en el desarrollo nacional.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar por la existencia de un plan, política o estrategia de desarrollo nacional. 2. Verificar que el o los instrumentos vigentes establecen criterios, metas, compromisos e indicadores sobre procesos de GRD.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Para que esta respuesta se considere positiva, el plan, política o estrategia nacional de desarrollo debe contener metas, compromisos o indicadores sobre alguno de los procesos de GRD.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>República Dominicana: La Ley No. 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, del 26 de enero de 2012, precisa en el Artículo 10 el Cuarto Eje, que procura una Sociedad de Producción y Consumo Ambientalmente Sostenible que Adapta al Cambio Climático, que describe su visión como "<i>Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenible, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio climático</i>". Estableciendo los siguientes objetivos generales que son relativos a la GRD: "<i>Objetivo General 4.1. Manejo sostenible del medio ambiente. Objetivo General 4.2. Eficaz gestión de riesgos para minimizar pérdidas humanas, económicas y ambientales. Objetivo General 4.3. Adecuada adaptación al cambio climático</i>".</p> <p>México: El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, incluye explícitamente a la Gestión Integral del Riesgo en la Primer Meta Nacional: <i>México en paz</i>, bajo el título "Protección civil y prevención de desastres", y la retoma en el capítulo de objetivos, estrategias y líneas de acción, donde se incluyen bajo Objetivo 1.6. Salvar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano, dos estrategias con sus respectivas líneas de acción: <u>Estrategia 1.6.1. Política estratégica para la prevención de desastres</u> y <u>1.6.2. Gestión de emergencias y atención eficaz de desastres</u>. Adicionalmente, bajo la Meta México Próspero, el Objetivo 4.1 (Mantener la estabilidad macroeconómica del país) incluye la <u>Estrategia 4.1.1. Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico</u>, que introduce una línea de acción relacionada con instrumentos de protección financiera ante desastres naturales.</p>

Pregunta de respuesta cerrada

6. ¿El Plan Nacional de Desarrollo (o instrumento equivalente), establece objetivos, metas, o indicadores en ACC?

Descripción general del indicador

Una política de Adaptación al Cambio Climático (ACC), insertada dentro de los procesos de desarrollo, implicará una contribución importante a la reducción del riesgo. Por tanto, interesa constatar no solo la existencia de esta política, sino su inclusión en los procesos nacionales, con indicadores de impacto.

Posibles verificables son: políticas, estrategias o el plan nacional de desarrollo (o instrumento similar que establezca la visión y los compromisos de desarrollo del país). Pueden ser también indicadores u otro instrumento programático principal de la nación que implique que la ACC es tomada en cuenta en el desarrollo nacional.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Indagar por la existencia de un plan, política o estrategia de desarrollo nacional.
2. Verificar que el o los instrumentos vigentes establecen criterios, metas, compromisos o indicadores sobre los procesos de ACC.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Para que esta respuesta se considere positiva, el plan, política o estrategia nacional de desarrollo **debe contener** objetivos, metas o indicadores sobre los procesos de ACC.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

México: El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 hace muchas referencias a la ACC como política o estrategia, e introduce la noción de cambio climático como una causa o factor de riesgo dentro de las Metas Nacionales denominadas “México en paz” y “México próspero”. Como ejemplo, incluye bajo la Estrategia 4.4.1., de la Meta Nacional “México próspero”, una línea de acción para *“Impulsar una política en mares y costas que promueva oportunidades económicas, fomente la competitividad, la coordinación y enfrente los efectos del cambio climático protegiendo los bienes y servicios ambientales”*.

Panamá: El Plan Estratégico del Gobierno 2009-2014 (PNG), incluye explícitamente al Cambio Climático en el contexto del apartado de "Medio Ambiente y Desarrollo Económico". En ese sentido, el plan de inversión quinquenal de este Programa incluye las siguientes actividades prioritarias: *“... implementación de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, formación de capacidades en cambio climático, e implementación del plan de acción de cambio climático en Panamá”*. Entre los compromisos concretos en el tema incluye el desarrollo de estudios de vulnerabilidad actual y futura en cuencas hidrográficas y áreas protegidas, que beneficiarán alrededor de 149,673 personas.

Pregunta de respuesta cerrada
7. ¿Existe normatividad de cambio climático que establece la gestión del riesgo de desastres como una meta, fin, propósito o resultado?
Descripción general del indicador
La articulación entre los instrumentos, mecanismos y procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y los de la Adaptación al Cambio Climático (ACC) es un elemento clave en términos de coherencia, aprovechamiento de capacidades y enfoque integral. Se busca que las estrategias de ACC y GRD se incluyan una a la otra de forma articulada, observando los puntos en común y evitando la duplicación de esfuerzos y recursos.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar sobre la existencia de normativa que establezca una política nacional de cambio climático. 2. Identificar dentro de la normatividad existente si se cuenta con objetivos, metas, fines o propósitos explícitos de GRD.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Para que esta respuesta se considere positiva, la normatividad de cambio climático debe tener, de forma explícita, objetivos, metas, fines o propósitos de la GRD.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Guatemala: Política Nacional de Cambio Climático, emitida mediante Acuerdo Gubernativo 329-2009, del 9 de diciembre de 2009, Establece como Objetivo General: <i>“Que el Estado de Guatemala, a través del Gobierno Central, las municipalidades, la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general, adopte prácticas de prevención de riesgo, reducción de la vulnerabilidad y mejora de la adaptación al cambio climático...”</i>. Por otro lado, establece en el Capítulo IV, Objetivos General y Específicos de la Política Nacional de Cambio Climático, el siguiente objetivo específico: <i>"2. Reducción de la Vulnerabilidad y Mejoramiento de la Adaptación al Cambio Climático: a. Incrementar y reforzar los programas de prevención y gestión de riesgo para minimizar las pérdidas de vidas humanas y de infraestructura. b. Reducir la vulnerabilidad de la población del país a los efectos producidos en la variabilidad por el Cambio Climático, especialmente en la salud; la agricultura, la ganadería y la seguridad alimentaria; en lo que corresponde a los recursos forestales; los recursos hídricos; los suelos y la infraestructura."</i></p> <p>Perú: La Estrategia Nacional de Cambio Climático, aprobada por el Decreto Supremo N° 086-2003-PCM, del 24 de octubre de 2003, establece específicamente en el apartado VI, la Línea Estratégica 2: <i>"Promover políticas, medidas y proyectos para desarrollar la capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático y reducción de la vulnerabilidad"</i>, y el Objetivo Estratégico 2.1 precisa <i>"Fortalecer las capacidades de las instituciones y organismos involucrados en la gestión de riesgos y prevención de desastres para formular y ejecutar proyectos de ACC"</i>.</p>

Código: MG 1A-8

Pregunta de respuesta cerrada
8. <i>¿Existe normatividad que establece un régimen de carrera profesional en la administración pública aplicable a las entidades responsables de la GRD en el país?</i>
Descripción general del indicador
La existencia de normativa tipo “carrera administrativa” o “carrera profesional”, puede contribuir a mejorar la estabilidad del personal y por tanto a preservar inversiones en formación y la experiencia generada con la práctica.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none">1. Indagar sobre la existencia de normativa que establezca un régimen de carrera profesional en la administración pública, servicio civil, o similar.2. Comprobar si el personal de la entidad(es) nacional de GRD está cubierto por este régimen.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Para que esta respuesta se considere positiva, debe existir una normativa que establezca un régimen de carrera profesional o de servicio civil en la administración pública que se aplique a las entidades responsables de la GRD.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: Ley 30057 del Servicio Civil, del 3 de julio de 2013, que establece un régimen único de carrera profesional en la administración pública (aplicable a las entidades responsables de la GRD en el país), es exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de estos.</p> <p>México: La Ley General de Protección Civil publicada en junio de 2012, incluye el Capítulo VIII denominado "De la Profesionalización de la Protección Civil", que incluye los artículos del 46 al 48 y en el que se obliga esta profesionalización de los servidores públicos integrantes del SINAPROC a nivel federal, estatal y municipal, con el objeto de lograr un servicio mejor y más eficiente y un personal más desarrollado. Adicionalmente, la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, LSPC, aprobada el 10 de abril del 2003 establece el régimen de carrera profesional para todos los funcionarios públicos federales. A partir de esta Ley casi todos los estados de la República han replicado su propia versión dentro de sus jurisdicciones.</p>

Código: MG 1B-1**Pregunta de respuesta cerrada**

1. *¿Existe normatividad sobre gestión integrada de recursos hídricos que establece la gestión del riesgo de desastres como un propósito, fin o resultado?*

Descripción general del indicador

Uno de los factores físicos más relevantes en la constitución del riesgo está ligado con los fenómenos hidrometeorológicos y climáticos y en particular con todo el ciclo del agua. De tal manera, las estrategias de Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) constituyen uno de los principales mecanismos para incidir sobre las causas y factores del riesgo. Se busca que estas estrategias contengan elementos concretos vinculados de forma integral con los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD).

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Indagar sobre la existencia de normativa en GIRH (es importante considerar que en pocos países existe este tipo de normativa, puesto que las leyes relacionadas con agua no se han actualizado).
2. Contemplar que algunos verificables de la norma pueden ser leyes o políticas de GIRH que identifican la GRD como instrumento o prioridad relacionada.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Para que esta respuesta se considere positiva, debe existir una normativa que establezca **explícitamente la GIRH o la gestión integrada del agua**. En los casos en que se encuentren normativas fraccionadas o diferenciadas (por sector, servicio o usuario, por ejemplo) no podrá calificarse como positivo este indicador, puesto que faltaría el carácter integrado de la GIRH.

Sí existe esta normatividad, **deberá incluir explícitamente** una articulación con la GRD. Esta articulación se materializará si los objetivos de la GIRH hacen suyos o reconocen los criterios de la GRD, o bien, al establecer expresamente la coordinación con esa política. También en caso de que incluya objetivos, metas o indicadores relativos con la GRD.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Perú: La Ley N° 29338 de Recursos Hídricos, del 30 de marzo de 2009, en el Título XI, Los Fenómenos Naturales, específicamente en el artículo 119, Programas de control de avenidas, desastres e inundaciones, define que "*La Autoridad Nacional, conjuntamente con los Consejos de Cuenca respectivos, fomenta programas integrales de control de avenidas, desastres naturales o artificiales y prevención de daños por inundaciones (...) promoviendo la coordinación de acciones estructurales, institucionales y operativas necesarias*".

Guatemala: La Política Nacional de Recursos Hídricos, aprobada a través del Decreto Ejecutivo 480 de abril de 2013 (MG 1B-1a), incorpora dentro de sus principios, el "Derecho a la Prevención", estableciendo que la gestión integrada de los recursos hídricos debe tomar en cuenta un enfoque de *reducción de vulnerabilidad* a través de una gestión integral del riesgo. De la misma manera, incorpora la gestión de riesgo de desastres dentro del Objetivo General de la Política. Adicionalmente, la Reglamentación de la Ley 44 de Cuencas Hidrográficas, también aprobada en 2013, a través del Decreto Ejecutivo 479, (MG 1B-1b), establece dentro de su artículo 3 que contribuye con aspectos relacionados de reducción de riesgos de desastres.

Código: MG 1B-2

Pregunta de respuesta cerrada
2. <i>¿Existe normatividad sobre gestión integrada de recursos hídricos que establece la adaptación al cambio climático como un propósito, fin o resultado?</i>
Descripción general del indicador
Dada la coincidencia de objetivos e impacto de las políticas y acciones entre la Adaptación al Cambio Climático (ACC) y la Gestión del Riesgo de Desastres (GDR), la existencia de objetivos o resultados de adaptación en las políticas integrales del agua, implica necesariamente una contribución en la gestión del riesgo.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar sobre la existencia de normativa sobre Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH). (Es importante considerar que en pocos países existe este tipo de normativa, puesto que las leyes relacionadas con agua no se han actualizado) 2. Contemplar que algunos verificables de la norma pueden ser leyes o políticas de la GIRH que identifican la ACC como instrumento o prioridad relacionada.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Para que esta respuesta se considere positiva, debe existir una normativa que establezca explícitamente la GIRH o de la gestión integrada del agua. En los casos en que se encuentren normativas fraccionadas o diferenciadas (por sector, servicio o usuario, por ejemplo) no podrá calificarse como positivo este indicador, puesto que faltaría el carácter integrado de la GIRH.</p> <p>Esta normatividad deberá contar, de forma explícita, con propósitos, fines o resultados de ACC.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: La Ley N° 29338 de Recursos Hídricos, del 30 de marzo de 2009, la cual establece en el Título V, Protección del Agua, y en el artículo 89, Prevención ante efectos del cambio climático, que <i>"La Autoridad Nacional, en coordinación con la autoridad del ambiente, debe desarrollar estrategias y planes para la prevención y adaptación a los efectos del cambio climático y sus efectos..."</i>.</p> <p>Costa Rica: La Política Hídrica Nacional, emitida en el 2009 por el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, define en el numeral 5.5, Lineamientos estratégicos, sus objetivos y acciones estratégicas principales en las que incluye la "Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático" de manera específica, eleje que desglosa posteriormente en el numeral 5.5.7 Vulnerabilidad y adaptación frente al cambio climático, con los siguientes consideraciones: <i>"... 5.5.7.1. Garantizar las acciones alternativas de mitigación y adaptación dirigidas a los sectores dependientes de los múltiples usos del agua, que le permitan atender la vulnerabilidad del recurso y del sector hídrico al Cambio Climático ... 5.5.7.2. Incorporar en la gestión hídrica la variable de Cambio Climático y sus efectos en el ciclo hidrológico e hidrosocial, para desarrollar una adecuada toma de decisiones en las medidas de adaptación y mitigación ... 5.5.7.3. Incrementar las alianzas nacionales y regionales tanto públicas como privadas, para valorar el riesgo, y establecer medidas mitigación, adaptación y prevención ante eventos hidrológicos extremos..."</i></p> <p>Panamá: La Política Nacional de Recursos Hídricos, aprobada a través del Decreto Ejecutivo No. 480 de abril de 2013, incorpora dentro de Objetivo Específico No. 1 (sobre la Gestión del Recurso Hídrico), la Línea de Acción No. 4 <i>"... la reducción de la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático"</i>. Adicionalmente, la Reglamentación de la Ley 44 de Cuencas Hidrográficas, también aprobada en 2013, a través del Decreto Ejecutivo 479, establece dentro de su artículo 3 que contribuye con aspectos relacionados a la adaptación al cambio climático.</p>

Código: MG 1B-3**Pregunta de respuesta cerrada**

3. *¿La normatividad que regula la realización de evaluaciones de impacto ambiental (o proceso equivalente), integra el análisis de riesgo de desastres?*

Descripción general del indicador

Las evaluaciones de impacto ambiental se han convertido en una práctica común en la región. Tanto el estudio previo, como el control que se realiza sobre su cumplimiento, ofrecen buenas oportunidades para que se constituyan en instrumentos de gestión prospectiva y correctiva del riesgo. Por lo tanto, es considerada una buena práctica que la norma que las regula, establezca que se analicen elementos de riesgo de desastres.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Identificar la normativa que regula la realización de estudios de impacto ambiental en el país.
2. Verificar si la normativa incluye dentro de los aspectos a analizar, como parte de los estudios de impacto ambiental, el análisis del riesgo de desastre, es decir, el análisis probabilístico que el proyecto pueda sufrir pérdidas económicas o humanas por efecto de un desastre y, en su caso, si el proyecto puede incrementar el riesgo de desastre existente.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

La normatividad debe tener de forma expresa contenidos sobre el riesgo de desastre o sus elementos constitutivos: amenaza, exposición o vulnerabilidad. No se considera válido mencionar el riesgo cuando se refiere al riesgo de impacto del proyecto sobre el medio ambiente, sino que se debe mencionar de forma explícita que se analizará como parte de la evaluación de impacto ambiental (o el proceso equivalente) el análisis de si el proyecto puede aumentar el riesgo de desastre o ser afectado por un desastre. En el caso de que en la normatividad que crea la figura de la evaluación de impacto ambiental se mencione el término riesgo, pero no se clarifique si se trata de riesgo de desastre se deben analizar las metodologías oficialmente aprobadas para la evaluación de impacto ambiental, para identificar si realmente incorporan el análisis del riesgo de desastres.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Costa Rica: El Decreto Ejecutivo N° 32967, Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental (Manual de EIA), del 20 de febrero de 2006, considera en su apartado 4. Principios Generales a ser considerados: "... 4.5 También forma parte del sustento técnico del presente procedimiento los otros principios y lineamientos técnicos establecidos en la diversas leyes sectoriales vigentes y que forman parte del marco jurídico nacional y que se refieren a la administración de temas sectoriales tales como... la prevención de desastres y la atención de emergencias y toda la otra legislación vinculada." Asimismo, en el Apartado 6, Procedimiento para realizar el informe de alcance ambiental del desarrollo propuesto, considera diversos elementos para la formulación del diagnóstico de la condición ambiental general del territorio y refiere: "... 6.4.1 Este componente se realiza utilizando como base los resultados del cartografiado... y ... la Evaluación de Efectos Acumulativos ... tales como: ... b) Presión existente sobre el medio ambiente considerando lo siguientes factores ambientales: ... (v) vulnerabilidad a las amenazas/riesgos naturales y antrópicos..." Finalmente, en el Anexo 3. Protocolo Técnico, en el Punto 3 Principios que sustentan la aplicación del protocolo, considera "a) Principio de prevención del riesgo natural: implica la consideración del factor de riesgo, en función de criterios técnicos y científicos de previo a que suceda el evento que desencadene resultados negativos a las personas o el ambiente humano..."

Guatemala: La Guía de Términos de Referencia para los Estudios de Evaluación Ambiental, elaborada en el 2004 por la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARNA), incluye en la sección de amenazas naturales, el análisis de riesgo como parte del Plan de Gestión Ambiental (PGA), que se requiere para los proyectos de mediano a alto impacto ambiental. Esta Guía es vinculante para las evaluaciones de impacto ambiental en virtud del Acuerdo Gubernativo N° 431-2007, Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, del 17 de septiembre de 2007, que es la normativa que regula la evaluación, control y seguimiento ambiental, y que en su Artículo 12 indica: "Los términos de referencia, contenidos y procedimientos técnicos específicos para el desarrollo de cada uno de los instrumentos serán determinados por el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales".

Pregunta de respuesta cerrada
1. ¿Existe normatividad que descentralice las responsabilidades en materia de planificación del desarrollo, ordenamiento territorial u otros instrumentos de planificación y gestión del territorio a las unidades de gestión territorial?
Descripción general del indicador
<p>La descentralización y la gestión local son pilares fundamentales para asegurar la calidad de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y la Adaptación al Cambio Climático (ACC). Ahora, la descentralización tal y como se concibe en el presente indicador, va dirigida hacia aquellos países que en función de su historia y diversas características, han adoptado un sistema de organización estatal en el que la mayoría de las decisiones emanan de un gobierno central. Por lo tanto se debe indagar si existe una normativa que oriente ese proceso de descentralización -en materia de planificación del desarrollo, ordenamiento territorial u otros instrumentos de planificación y gestión del territorio- en beneficio de las unidades de gestión territorial, aún y cuando este proceso no haya sido culminado.</p> <p>En el caso de países con regímenes distintos al centralizado, se deberá explicar esa situación, resolviendo sobre la existencia de normas que otorguen jurisdicción a las unidades de gestión territorial en estas mismas materias.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar, en el caso de países con sistemas centralizados, los instrumentos normativos que regulan la descentralización. Estos pueden ser: leyes de descentralización, leyes municipales o códigos municipales, así como leyes de planificación y de ordenamiento territorial. 2. Verificar que dichas leyes o códigos establezcan responsabilidades a las unidades de gestión territorial para llevar a cabo procesos de planificación del desarrollo, ordenamiento territorial u otros instrumentos de gestión territorial. En países con sistemas no centralizados, se deberá encontrar la legislación que asigna competencia a las unidades de gestión territorial en esas mismas materias.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Para que esta respuesta se considere positiva, la normativa debe establecer explícitamente competencia a las unidades de gestión territorial en materia de ordenamiento territorial, planificación del desarrollo u otros instrumentos de gestión territorial.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Países Centralizados</p> <p>Bolivia: Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Bóñez”, del 17 de julio de 2010. En el Artículo 8, Funciones generales de las autonomías, introduce las funciones de gestión del territorio, desarrollo económico y productivo, desarrollo urbano y prestación de servicios públicos, para las autonomías Indígena Originaria Campesina, Departamental, Municipal y Regional.</p> <p>Perú: La Ley N° 27972, Orgánica de Municipalidades, del 26 mayo de 2003, en su artículo 73, Materias de Competencia Municipal, define en el apartado (a), que las municipalidades deben "<i>planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el nivel provincial. Las municipalidades provinciales son responsables de promover e impulsar el proceso de planeamiento para el desarrollo integral correspondiente al ámbito de su provincia, recogiendo las prioridades propuestas en los procesos de planeación de desarrollo local de carácter distrital</i>".</p> <p>Países Federales</p> <p>Argentina: La Constitución Nacional, última reforma del 22 de agosto de 1994, dispone en el Artículo 1 que la República Argentina adopta la forma de gobierno federal, de manera que el Artículo 5 señala que los</p>

estados provinciales gozan de autonomía y tienen la potestad de dictar su propia constitución, administrar su sistema judicial, régimen municipal y la educación primaria. Con respecto al régimen municipal establece que las provincias dictarán su constitución "*asegurando la autonomía municipal y regulando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero*" (Artículo 123). No existe una norma a nivel nacional que defina la organización de los municipios o delimite el alcance de la autonomía municipal. Los lineamientos de los regímenes municipales se encuentran en las constituciones provinciales y las normas que regulan aspectos específicos en las leyes orgánicas provinciales o cartas orgánicas municipales. Los criterios de definición y organización de los municipios difieren entre provincias. En materia de ordenamiento territorial no existe aún normativa a nivel nacional. Existe un anteproyecto de Ley Nacional de Planificación y Ordenamiento Territorial elaborado en el marco del PET por el Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial (COFEPLAN), que se aprobó por la VII Asamblea de COFEPLAN el 1º de noviembre de 2012. El COFEPLAN es una instancia institucional entre las provincias, la CABA y la Nación para participar en la planificación, articulación y armonización de las políticas de planificación y ordenamiento territorial, dirigidas a lograr un país equilibrado, integrado, sustentable y socialmente justo.

México: La Constitución Política de los Estados Mexicanos, publicada el 15 de febrero de 1917 (última reforma publicada DOF 19-07-2013), establece claramente en su Artículo Constitucional 115, numeral V, las bases jurídicas y políticas de los municipios en materia, entre otras, de planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial. Adicionalmente, la Ley General de Asentamientos Humanos, del 21 de julio de 1993, retoma este mandato en su Artículo 6 y enlista en los artículos 7, 8 y 9 las atribuciones que corresponden a la Federación, estados y municipios, respectivamente.

Código: MG 1C-2

Pregunta de respuesta cerrada
2. <i>¿Existe normatividad que establece un enfoque de cuenca o eco-región para la gestión ambiental o de recursos hídricos?</i>
Descripción general del indicador
Las asimetrías o la no coincidencia entre los mapas de riesgos en un territorio nacional con el mapa que configura su división político-administrativa y las jurisdicciones de las distintas Unidades de Gestión Territorial, pueden representar una serie de dificultades en los procesos de gestión ambiental o de recursos hídricos. Por el contrario, la existencia de normativas, políticas, estrategias o instrumentos de gestión a nivel regional, que dispongan un enfoque de cuencas o ecosistemas entre otros, puede dar un valor agregado a la GRD en términos de su eficacia.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar si existe normativa tal como leyes, programas o políticas sobre agua o gestión integral de recursos hídricos, así como de gestión ambiental. 2. Verificar que dicha normativa establezca un enfoque de cuenca o eco – región para la gestión ambiental y del recurso hídrico.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Para que esta respuesta se considere positiva, la normativa debe establecer de forma explícita que las cuencas o eco-regiones sean consideradas la base territorial para la gestión ambiental o del recurso hídrico.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>México: Ley de Aguas Nacionales 1992. Artículo 6: Establece la responsabilidad del Ejecutivo Federal de reglamentar por cuenca hidrológica y acuífero la explotación o aprovechamiento de las aguas. Artículo 7 bis: Declara de Interés Público I. la cuenca conjuntamente con los acuíferos como la unidad territorial básica para la gestión integrada de los recursos hídricos; II. La descentralización y mejoramiento de la gestión de los recursos hídricos por cuenca hidrológica, a través de Organismos de Cuenca de índole gubernamental y de Consejos de Cuenca de composición mixta, con participación de los tres órdenes de gobierno, de los usuarios del agua y de las organizaciones de la sociedad en la toma de decisiones y asunción de compromisos;</p> <p>La Ley de Aguas Nacionales publicada en 1992, define en el artículo 3, fracción XVI, a la cuenca hidrológica que califica como "... la unidad del territorio, diferenciada de otras unidades, normalmente delimitada por un parte aguas o divisoria de las aguas...la unidad de gestión de los recursos hídricos...". El artículo 6 por su lado señala que Ejecutivo Federal deberá reglamentar con base en la noción de la cuenca hidrológica y acuífero la explotación o aprovechamiento de las aguas.</p> <p>Perú: Ley N. 29338 del 30 de marzo de 2009 - Ley de Recursos Hídricos. Art 3. Principios: 10. Principio de gestión integrada participativa por cuenca hidrográfica, indica que la gestión debe ser integrada por cuenca hidrográfica y con participación activa de la población organizada. Art. 24. Naturaleza de los Consejos de Cuenca. La Ley N° 29338 de Recursos Hídricos, del 30 de marzo de 2009, define como principio en su Título Preliminar, artículo III, numeral 10, que la "... gestión debe ser integrada por cuenca hidrográfica y con participación activa de la población organizada". Los Consejos de Cuenca son órganos de naturaleza permanente integrantes de la Autoridad Nacional.</p>

Código: MG 1C-3**Pregunta de respuesta cerrada**

3. *¿Existe normatividad que faculte a las Unidades de Gestión Territorial para la formación de redes, acuerdos, alianzas o convenios territoriales aplicables a la GRD?*

Descripción general del indicador

La representación territorial del riesgo no concuerda con el mapa de las jurisdicciones de las distintas Unidades de Gestión Territorial (UGT). Esta situación hace que las UGT busquen la asociación entre sí, con el objetivo de obtener ventajas en la generación de economías de escala y otro tipo de acciones generadoras de sinergia, y así establecer mecanismos más eficientes para la gestión del riesgo.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Indagar sobre la existencia de normativa que faculte la formación de acuerdos, alianzas o convenios aplicable a la GRD entre los gobiernos de las distintas UGT.
2. Contemplar entre los posibles verificables las leyes de ordenamiento territorial, así como políticas o programas para el mejoramiento de la gestión del territorio.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Para que esta respuesta se considere positiva, debe existir una normativa que **faculte** la formación de acuerdos, redes o convenios aplicable a la GRD entre las UGT.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región**Países centralizados**

Perú: La Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades, del 26 mayo de 2003, define en el artículo 73, Materias de Competencia Municipal, en el apartado (c), la responsabilidad de "Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales que presenten, objetivamente, externalidades o economías de escala de ámbito provincial; para cuyo efecto, suscriben los convenios pertinentes con las respectivas municipalidades distritales".

Costa Rica: Ley N° 7794 Código Municipal, del 30 de abril de 1998, establece: "Artículo 9. Las municipalidades podrán pactar entre sí convenios cuyo objeto sea facilitar y posibilitar el cumplimiento de sus objetivos o su administración, a fin de lograr una mayor eficacia y eficiencia en sus acciones. Artículo 10. Las municipalidades podrán integrarse en federaciones y confederaciones; sus relaciones se establecerán en los estatutos que aprueben las partes, los cuales regularán los mecanismos de organización, administración y funcionamiento de estas entidades." por su parte, la Ley N° 4240, Ley de Planificación Urbana, del 15 de noviembre de 1968 estipula: "Artículo 62. Las municipalidades de territorios contiguos pueden concretar entre sí convenios para fundar y mantener servicios conjuntos de planificación, conforme lo dispongan las leyes de organización municipal".

Código: MG 1C-4**Pregunta de respuesta cerrada**

4. *¿Existe normatividad que faculte la formación de estructuras de gestión territorial para la gestión integrada de recursos hídricos o manejo de ecosistemas?*

Descripción general del indicador

El enfoque de constituir estructuras de gestión en territorios que corresponden al de las cuencas o de determinados ecosistemas se considera un objetivo cada vez más deseable para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH). Sin embargo, para ello hace falta que exista legislación en esa materia, y de esa manera dotar a estas estructuras de gestión territorial de la GIRH con un soporte jurídico que establezca tanto la jurisdicción, la autoridad, la definición de los territorios y demás aspectos necesarios para su funcionamiento.

Posiblemente los casos son reducidos pero esta condición se considera como una característica de calidad.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Indagar la existencia de normatividad relacionada con la creación de estructuras de gestión territorial en GIRH. Esta normativa puede ser en materia hídrica, leyes municipales o regionales.
2. Identificar si se establece la creación de esas unidades de gestión basadas en cuencas o ecosistemas.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Para que esta respuesta se considere positiva, la normatividad debe establecer a la cuenca o ecosistema como una unidad de gestión, con responsabilidades explícitas, diferentes a las de las distintas UGT.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

México: La Ley de Aguas Nacionales publicada en 1992, establece en su Artículo 3, fracción XV, que serán los Consejos de Cuenca las instancias de coordinación y concertación, apoyo, consulta y asesoría, entre la Comisión Nacional de Agua, incluyendo el Organismo de Cuenca que corresponda, y las dependencias y entidades federales, estatal o municipales, y los representantes de los usuarios de agua y de las organizaciones de la sociedad, de la respectiva cuenca hidrológica o región hidrológica.

Costa Rica: El Decreto N° 37623- PLAN-MINAET-MIVAH, Política Nacional de Ordenamiento Territorial, del 19 de octubre de 2012, considera en su Lineamiento 14 lo siguiente: "Manejo de cuencas y recursos hídricos. El Estado impulsará el manejo integral de las cuencas hidrográficas en los diversos planes de ordenamiento territorial, con el fin de disminuir el riesgo en los asentamientos humanos, minimizar el impacto en zonas costeras y garantizar la conservación, el uso y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, brindando especial atención al recurso hídrico como medio indispensable para el desarrollo. Se incentivará la asociación intermunicipal y entre más entes del Estado, para la gestión conjunta de las cuencas hidrográficas, como estrategia para la protección y conservación del recurso hídrico con miras a la adaptación al cambio climático".

Panamá: La Reglamentación de la Ley 44 de Cuencas Hidrográficas, aprobada por Decreto Ejecutivo N° 479 de abril 2013, establece la conformación de Comités de Cuenca y Subcuenca en todo el territorio (excepto la Cuenca del Canal que cuenta con un régimen legal especial). Estos Comités tienen una participación amplia de sector público y sociedad civil.

Código: MG 2-1

Pregunta de respuesta cerrada
<i>1. ¿Existe un documento aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (o quien haga sus veces) que establece la estrategia financiera o las políticas para la gestión financiera del riesgo de desastres en el país?</i>
Descripción general del indicador
En todos los países son sus gobiernos y la capacidad financiera, la última instancia que responderá ante las exigencias y demandas que traigan consigo los desastres y sus consecuencias. Ante esta situación, se considera como un factor de calidad para el presente indicador, que exista una estrategia o plan contenido en un documento que resuma los elementos de protección financiera que faciliten el uso más eficiente de los recursos disponibles, y al mismo tiempo maximizando los resultados de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD).
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none">1. Investigar la existencia de un documento formal que describa al menos, las acciones que el país ha identificado para reducir su vulnerabilidad fiscal ante la ocurrencia de desastres.2. Indagar ante la autoridad hacendaria, de economía o finanzas, además de revisar en su página institucional en la web.3. Hacer consultas a la entidad rectora de la GRD en el país.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>El documento que contenga la estrategia de gestión o protección financiera deberá describir: (i) las amenazas y los rangos de exposición más relevantes a cubrir; (ii) estimaciones sobre el impacto financiero ante los escenarios más probables de desastre; (iii) los ejes que el país ha identificado para reducir su vulnerabilidad fiscal ante la ocurrencia de desastres y (iv) las acciones a llevar a cabo para implementar cada uno de los ejes seleccionados.</p> <p>Ese documento deberá estar publicado en el órgano oficial, aprobado o expedido mediante un decreto o por resolución ministerial, estar publicado en la página institucional de la entidad competente en el tema, o cualquier otra formalidad que prescriba la norma correspondiente y que confiera al documento el carácter de estrategia.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
Colombia: En 2012, el Gobierno de Colombia publicó en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el documento “Estrategia financiera para disminuir la vulnerabilidad fiscal del estado ante la ocurrencia de un desastre natural”, que incluye, entre otros, una descripción del marco legal e institucional para la gestión financiera del riesgo de desastres, una evaluación del impacto fiscal de los desastres y una descripción de los instrumentos a considerar en el desarrollo de la estrategia de gestión financiera del riesgo de desastres.

Código: MG 2-2**Pregunta de respuesta cerrada**

2. *¿El ente responsable de las funciones de rectoría o coordinación o articulación de la gestión del riesgo de desastres en el país, ha recibido recursos para estas funciones en la última vigencia fiscal?*

Descripción general del indicador

La disponibilidad de recursos, ya sean humanos, materiales o financieros; es determinante para que el ente responsable de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), esté en posición de dar cumplimiento a la normatividad nacional y las actividades asignadas para la coordinación o articulación de la GRD. Con ese fin, se debe verificar que se le hayan dispuesto recursos cuando menos para actividades tales como: (i) convocatoria de los actores del sistema; y (ii) desarrollo de los instrumentos de la política de gestión del riesgo de desastres (por ejemplo, el Plan de de Gestión del Riesgo).

No será suficiente para el presente indicador que el presupuesto contemple simplemente el suministro de recursos para el funcionamiento de ese ente rector, sino que deberá desglosar a detalle las funciones de coordinación o articulación de la GRD.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Verificar el presupuesto general de la nación o del estado y los informes de ejecución presupuestal y del gasto.
2. Consultar al ente responsable de las funciones de rectoría o coordinación o articulación de la GRD.
3. Indagar, en caso que se hayan realizado actividades tales como la convocatoria de los actores del sistema o estructura de la GRD y el desarrollo de los instrumentos de la política, sobre la fuente de financiamiento de estas actividades. No interesa a este indicador si ha habido recursos de cooperación internacional para tales fines.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Confirmación de la existencia de recursos asignados, vía presupuestal, al ente rector responsable de las funciones de coordinación o articulación de la GRD, de manera que pueda llevar a cabo cuando menos las siguientes actividades: (i) convocatoria de los actores del sistema y (ii) desarrollo de los instrumentos de la política de gestión del riesgo de desastres.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Costa Rica: La Comisión Nacional de Prevención y Atención de Emergencias financió con recursos propios el 5to Foro Nacional de Gestión de Riesgos (agosto de 2013), en el cual se discutieron los avances en la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgos. Lo anterior, evidencia la asignación de recursos para la coordinación o articulación de la gestión del riesgo de desastres en el país.

México: En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, publicado el 27 de diciembre de 2012, se dedica el Ramo Administrativo 04 a la Secretaría de Gobernación SEGOB, dentro del cual ubica el programa presupuestario N001, que corresponde a la "Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil" que recae en la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), en su calidad de delegatario de la coordinación ejecutiva del SINAPROC, de acuerdo al artículo 19 de la Ley General de Protección Civil (LGPC), es la institución que articula y coordina la GRD en México.

Código: MG 2-3

Pregunta de respuesta cerrada
3. <i>¿Existe un objeto de gasto o etiquetador presupuestal (o instrumento equivalente) en el presupuesto nacional para asignar recursos a actividades ex ante de gestión del riesgo de desastres?</i>
Descripción general del indicador
La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) implica necesariamente la realización de actividades <i>ex-ante</i> tales como identificación de los riesgos, su reducción y las acciones de preparación hacia el desastre. Para ello, se concede suma importancia a la disposición de recursos presupuestales para cumplir con ese objeto, para lo cual este indicador reconoce el valor de la existencia de un objeto de gasto, etiquetador presupuestal o mecanismo equivalente que permita identificar y realizar un seguimiento del gasto público en la GRD. La ausencia de estos criterios de tipificación del gasto, no permite garantizar que efectivamente se hayan invertido recursos en actividades <i>ex-ante</i> de GRD.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un objeto de gasto, etiquetador presupuestal o mecanismo equivalente en el presupuesto nacional; se sugiere indagar ante la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, particularmente con las áreas encargadas del tema presupuestal. 2. Comprobar si está estructurado de tal forma que incluye categorías de gasto que permiten asignar y dar seguimiento a los recursos destinados para actividades <i>ex-ante</i> de GRD.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Evidencia de un objeto de gasto, etiquetador presupuestal o mecanismo equivalente en el presupuesto nacional que incluya categorías de gasto explícitas de GRD.</p> <p>Se admite como condición positiva la existencia de programas en el presupuesto a través de los cuales las diferentes entidades pueden solicitar recursos para actividades <i>ex-ante</i> de GRD.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: El Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 General del Sistema Nacional de Presupuesto de 2005, del 29 de diciembre de 2012, en el Título III, Normas Complementarias para la Gestión Presupuestaria, el Capítulo IV, Presupuesto por Resultados (PPR), establece un esquema cuyo numeral 79.1 define como “...una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población”, así mismo el numeral 79.2 instruye para que “... el Presupuesto por Resultados (PPR) se implementa progresivamente a través de los programas presupuestales”. En 2010 se diseñó el Programa Presupuestal Estratégico de la Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres en el Marco del Presupuesto por Resultados. En la Ley N° 29951 del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, del 4 de diciembre de 2012, se evidencia en el Programa Presupuestal Estratégico PPR 068 denominado Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, la asignación de recursos a diferentes actividades <i>ex-ante</i> de GRD (págs. 1628 a 1731).</p> <p>Guatemala: La herramienta “Seguimiento especial del gasto” (SEG), que consiste en una aplicación informática del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- dentro de sus múltiples funciones identifica analíticamente las asignaciones presupuestarias que se relacionan con algún programa o política de gobierno. La herramienta (etiquetador) no forma parte de la partida presupuestaria (función de producción), pero utiliza la información de ésta para realizar agrupaciones relevantes de las asignaciones presupuestarias, y está disponible para que cada institución marque sus estructuras presupuestarias institucionales que dan respuesta a la Gestión para la Reducción de Riesgos a Desastres -GRD. Las estructuras quedan asociadas al SEG y se cargan a la ejecución para llevar el seguimiento en línea. El clasificador presupuestario es Finalidad 040000, Función N° 040200, Decisión N° 040201 “Gestión Prospectiva de Riesgos a Desastres” y el verificable es la “Guía de Gestión para la Reducción de Riesgos a Desastres, Presupuesto, Público y Seguimiento del Gasto, de junio de 2011 (MG-2-3a)</p> <p>Panamá: La Resolución Administrativa No. 030 del 28 de marzo de 2013, por la cual el Ministerio de Economía y Finanzas MEF, modifica el Manual de Clasificaciones Presupuestales y se crea el Objeto de Gasto en Gestión de Riesgo de Desastres. Este objeto de gasto está destinado para ser utilizado por las</p>

instituciones que planifiquen actividades de inversión *ex-ante* de GRD en sus propuestas presupuestarias a la Dirección Nacional de Presupuesto de la Nación (DIPRENA).

México: El Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2013, permite visibilizar recursos asignados a actividades de GRD: En el ANEXO 19 del PEF 2013, PROGRAMAS DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, se destina un monto de 322.92 MDP en el apartado de PROVISIONES ECONÓMICAS para el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales o FOPREDEN. El FOPREDEN se regula por el ACUERDO por el que se establecen las Reglas de Operación de este fondo (ROFOPREDEN) publicadas el 23 de diciembre del 2010, y que tienen por objeto, según su Artículo 4 *”...la promoción y fomento a la actividad preventiva tendiente a reducir los riesgos, y disminuir o evitar los efectos del impacto destructivo originado por fenómenos naturales, bajo los principios señalados en el artículo anterior, así como promover el desarrollo de estudios orientados a la Gestión Integral del Riesgo para fomentar y apoyar la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico en favor de la prevención de desastres y mitigación de riesgos derivados de fenómenos naturales perturbadores y la adaptación a sus efectos...”*.

Código: MG 2-4**Pregunta de respuesta cerrada**

4. *¿Existe un objeto de gasto o etiquetador presupuestal (o instrumento equivalente) en el presupuesto nacional para asignar recursos a actividades de adaptación al cambio climático?*

Descripción general del indicador

Las políticas de Adaptación al Cambio Climático (ACC), requieren necesariamente la asignación de recursos presupuestales para el cumplimiento de su normativa específica y de sus objetivos y estrategias, de manera que se considera valioso que exista un mecanismo de clasificación presupuestal (objeto de gasto, etiquetador presupuestal o sistema equivalente) que permita asignar y realizar un seguimiento del gasto público para identificar las actividades de ACC.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Verificar si existe un objeto de gasto o etiquetador presupuestal (o instrumento equivalente) en el presupuesto nacional; se sugiere indagar por estos temas ante la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, particularmente con las áreas responsables de la atención y seguimiento al Presupuesto.
2. Comprobar, una vez identificado dicho instrumento presupuestal, si está estructurado de tal forma que incluye categorías de gasto que permiten asignar y dar seguimiento a los recursos destinados para actividades de ACC.
3. Consultar a las autoridades competentes en ACC o medio ambiente.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Evidencia de la existencia de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal (o instrumento equivalente) en el presupuesto nacional que incluya categorías de gasto explícitas de ACC.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Perú: El Decreto Supremo N° 068-2008-EF, que aprueba el Clasificador Funcional del Sector Público, del 24 de mayo 2008, en su artículo 1 dispone el Clasificador Funcional del Sector Público y los lineamientos del Clasificador Programático y “... *los que permitan la adecuación de los Programas Estratégicos a dicho Clasificador*”. Dicho Decreto Supremo fue modificado en virtud de la Resolución Directoral N° 002-2011-EF/50.01, para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público, del 7 de junio de 2011. En el Anexo, que corresponde a la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Directoral No. 003-2011-EF/68.01, Anexo SNIP 01, que corresponde al Clasificador Funcional Programático, se encuentra dentro de la Función 17 Medio Ambiente y, a su vez, dentro del Programa 054 Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural, el Subprograma 0121 Gestión del Cambio Climático.

México: El Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2013, permite visibilizar los recursos asignados a actividades de ACC: Anexo 15 "Recursos para la Mitigación de los Efectos del Cambio Climático", transversaliza esa política y distribuye recursos con ese fin en varias dependencias y entidades federales. Entre las acciones contempladas en el Anexo 15 se incluyen "programas hídricos integrales". De acuerdo a la descripción que muestra el portal electrónico de la Comisión Nacional del Agua CONAGUA, del contenido de los programas presupuestarios, el Programa K.134-Programas Hídricos Integrales tiene como objetivo "...lograr el aprovechamiento integral del agua y disminuir al máximo las condiciones de riesgo y vulnerabilidad a que está sujeta la población, sus actividades económicas y los ecosistemas frente a la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos y los posibles efectos del cambio climático".

Código: MG 2-5

Pregunta de respuesta cerrada
5. ¿Existe un fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades <i>ex ante</i> de gestión del riesgo de desastres?
Descripción general del indicador
La disponibilidad de recursos es determinante para realizar actividades <i>ex-ante</i> de GRD, ya sea por parte de las autoridades centrales o federales, o si la norma correspondiente lo permite, de instituciones de los diferentes niveles de gobierno e incluso las de los sectores social y privado. Luego entonces la existencia de fondos o mecanismos equivalentes, así como sus normas o reglamentos, facilitan los procesos para el financiamiento o cofinanciamiento de estas actividades y pueden aportar transparencia y certeza jurídica. Cabe mencionar, que para efectos de este indicador no se consideran como fondos los conceptos de gasto dentro del presupuesto que tengan como fin la realización de actividades <i>ex-ante</i> de GRD.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar que existan uno o varios fondos o mecanismos equivalentes habilitados para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades <i>ex-ante</i> de GRD. 2. Constatar esa habilitación en el acto jurídico o título legal que ordenó su creación, ya sea el propio presupuesto nacional, la norma, reglamento o decreto dictado por una autoridad competente. 3. Comprobar si a dichos fondos o mecanismos equivalentes se les han asignado recursos para ese fin durante el ejercicio fiscal presente, ya sea vía presupuestal o alguna otra que esté dispuesta en una norma o decreto. 4. Descartar aquellos fondos para la gestión de emergencias o para realizar actividades <i>ex-post</i> de GRD, los que serán objeto de un indicador diverso. 5. Consultar a las diferentes áreas de la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, pues si aún no se ha diseñado la estrategia financiera de GRD es probable que no todas las áreas tengan conocimiento sobre el tema. 6. Cuestionar al respecto a la entidad rectora de la GRD en el país.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
La vigencia de un título legal que habilite a uno o varios fondos o mecanismos equivalentes para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades <i>ex-ante</i> de GRD, y que además se le hayan asignado recursos para ese fin durante el presente ejercicio fiscal.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>México: El Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), normado por el ACUERDO por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (ROFOPREDEN), del 23 de diciembre de 2010. Las ROFOPREDEN suministran recursos para la realización de proyectos preventivos orientados a reducir riesgos, a evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo de los fenómenos naturales perturbadores (artículo 2). Dispone su artículo 10 que podrán solicitar sus recursos los estados, cualquier instancia pública de orden federal, instituciones académicas y de investigación federales, y los municipios. Otros programas que se pueden mencionar son: (i) el Programa de Prevención de Riesgos en Asentamientos Humanos que busca contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los municipios en materia de prevención de riesgos, a través de las obras y acciones que reduzcan la vulnerabilidad de la población ante el impacto de fenómenos naturales, de acuerdo a lo estipulado en 2.1 Reglas Generales PRAH; (ii) HABITAT, que en su numeral 3.5. Tipos y montos de apoyo (del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa HABITAT, para el ejercicio fiscal 2013, del 28 de febrero de 2013, indica que el Programa comprende tres modalidades, una de ellas es: "... b) Mejoramiento del Entorno Urbano, que apoya obras y acciones para la introducción o mejoramiento de infraestructura urbana y social básica, el mejoramiento del entorno natural, la prevención y mitigación de riesgos, entre otros..."</p> <p>Perú: La Ley N° 29125, que establece la implementación y el funcionamiento del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local-FONIPREL, del 30 de octubre de 2007, Mediante Resolución Directoral N° 005-2012-EF/63.01, que aprueba los Lineamientos para la formulación de Proyectos de Inversión Pública de Apoyo al Desarrollo Productivo y para Proyectos de Inversión Pública que incluyan el enfoque de Prevención de Desastres, del julio 2012, disponiendo en el numeral 1.2 la aprobación de los Lineamientos para los proyectos de inversión pública que incluyen el enfoque de prevención de desastres, contenidos en el Anexo 02 de esa Resolución Directoral (MG-2-5c).</p>

Pregunta de respuesta cerrada
6. <i>¿Existe un fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de adaptación al cambio climático?</i>
Descripción general del indicador
<p>Una política de Adaptación al Cambio Climático (ACC) requiere necesariamente de recursos para la consecución de sus objetivos y el cumplimiento de su marco jurídico. En ese tenor, resulta meritorio para este indicador la existencia de fondos o mecanismos equivalentes, así como sus normas o reglamentos de funcionamiento, para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de ACC, ya sea que estos sean dirigidas solamente a las autoridades centrales o federales, o si la norma correspondiente lo permite, a las instituciones de los diferentes niveles de gobierno e incluso las de los sectores social y privado.</p> <p>Para efectos de este indicador no se consideran como fondos los conceptos de gasto dentro del presupuesto que tengan como fin la realización de actividades de ACC.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar que exista uno o varios fondos o mecanismos equivalentes que estén habilitados para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de ACC. 2. Constatar esa habilitación en el acto jurídico o el título legal que ordenó su creación, ya sea el propio presupuesto nacional, la norma, reglamento o decreto dictado por autoridad competente. 3. Comprobar si a dichos fondos o mecanismos equivalentes se les han asignado recursos para ese fin durante el ejercicio fiscal presente, ya sea vía presupuestal o alguna otra que esté dispuesto en una norma o decreto. 4. Consultar a las diferentes áreas de la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas. 5. Cuestionar a la autoridad competente en materia de ACC o de medio ambiente.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>La vigencia de un título legal que habilite a uno o varios fondos o mecanismos equivalentes para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de ACC, y que además se le hayan asignado recursos para ese fin durante el presente ejercicio fiscal.</p> <p>NOTA: No se deberá de considerar que cumplen con la condición los casos de fondos creados específicamente para eventos de orden hidrometeorológico, y sobre los que no se haya previsto una vigencia mayor a un proceso de recuperación de un desastre específico.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Chile: El Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas Prioritarias (FONDAP) de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) para el año 2013, considera entre sus áreas prioritarias la siguiente: "6. Recursos Hídricos: El desarrollo futuro del país demanda una creciente cantidad y calidad de recursos hídricos, en particular, para la agricultura y la minería. Bajo este escenario de creciente demanda -y eventualmente disminución de la oferta debido al cambio climático- resulta imperioso realizar investigación científica y tecnológica que permita desarrollar y adoptar soluciones innovadoras que mejoren el manejo integrado del recurso hídrico...".</p> <p>México: La Ley General de Cambio Climático (LGCC) del 6 de junio de 2012, dispone en el Capítulo VII la creación del Fondo para el Cambio Climático, precisando en su artículo 80 que ese Fondo tiene como objeto captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales, para apoyar la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático. De acuerdo al artículo 82, los recursos del Fondo se destinarán, entre otros para: "I. Acciones para la adaptación al cambio climático atendiendo prioritariamente a los grupos sociales ubicados en las zonas más vulnerables del país; II. Proyectos que contribuyan simultáneamente a la mitigación y adaptación al cambio climático,...". Según la Gaceta Parlamentaria, Número 3679-I, del jueves 3 de enero de 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que el 30 de noviembre de 2012 fue constituido el fideicomiso público denominado "Fondo para el Cambio Climático", en cumplimiento al artículo noveno transitorio de la Ley General de Cambio Climático. No obstante la condición es negativa, pues en el PEF no se encontró evidencia de asignación de recursos para este Fondo. Cabe mencionar que en el PEF se asignan recursos para la mitigación de los efectos del cambio climático.</p>

Código: MG 2-7**Pregunta de respuesta cerrada**

7. *¿Existe un fondo o mecanismo equivalente del nivel nacional, habilitado para la contratación de instrumentos de transferencia del riesgo de desastres para un portafolio de bienes de responsabilidad fiscal del Estado?*

Descripción general del indicador

Cualquier estrategia de gestión financiera del riesgo de desastres en un país, adquiere valor según este indicador, si existe una norma que disponga la creación de un fondo o mecanismo que esté habilitado para contratar instrumentos de transferencia del riesgo de desastres para un portafolio de bienes de responsabilidad fiscal del Estado, es decir, aquellos que permitan mediante el pago de una prima, trasladar determinadas pérdidas probables por causa de desastres futuros hacia los mercados especializados.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Investigar en el marco legal de los fondos habilitados para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de GRD, se considera la contratación de instrumentos de transferencia del riesgo respecto de bienes de responsabilidad fiscal del Estado.
2. Consultar a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, en las áreas responsables de la contratación estatal, sobre la existencia de alguna norma que contemple otro fondo que cumpla con esa condición.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

La existencia de una normativa que contemple uno o varios fondos o mecanismos equivalentes que se encuentren habilitados para la contratación de instrumentos de transferencia del riesgo de desastres para portafolios de bienes de responsabilidad fiscal del Estado.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Panamá: El Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) cuenta con capacidad de contratación de instrumentos de transferencia del riesgo. De acuerdo a lo estipulado en la Ley No. 38, de junio de 2012, y al Decreto Ejecutivo 10108 del FAP, de septiembre de 2012, en los artículos 6 y 7 respectivamente, dicen que el FAP cuenta con capacidad para la contratación de un seguro catastrófico. Cabe mencionar que los recursos iniciales girados a FAP corresponden a los registrados en el balance del Fondo de Desarrollo Fiduciario a marzo de 2012 (alrededor de US\$ 1.200 millones).

Colombia: La Ley 1523 del 2012, por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, estipula en el Artículo 51, Subcuentas para apoyar el financiamiento de la gestión del riesgo, la creación de subcuentas de protección financiera del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. *"Los recursos de esta subcuenta serán destinados a apoyar el financiamiento de la protección financiera. A través de esta subcuenta, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público gestionará, adquirirá o celebrará los instrumentos o contratos con entidades nacionales o extranjeras que permitan la protección financiera frente al riesgo de desastres".*

México: El fondo para la contratación de los instrumentos de transferencia del riesgo de desastres es el Fondo de Desastres Naturales FONDEN, según lo estipulan las Reglas Generales del FONDEN (RGFONDEN) en su artículo 4, fracción V, en el que determina como fin de ese Fondo el "... Otorgar recursos para la realización de proyectos y el establecimiento de instrumentos de administración y transferencia de riesgos que estén relacionados con la prevención y atención de los efectos ocasionados por fenómenos naturales perturbadores; para la protección financiera del patrimonio del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, así como para los servicios necesarios relacionados con dichas contrataciones, en términos de lo previsto en los Lineamientos de Operación específicos que regulan cada uno de los procedimientos a que hacen referencia las presentes Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales...".

Código: MG 2-8

Pregunta de respuesta cerrada
8. ¿Al menos uno de los tres fondos nacionales de desarrollo (o instrumento equivalente) con mayor asignación de recursos, está habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades <i>ex ante</i> en gestión del riesgo de desastres?
Descripción general del indicador
<p>Los fondos nacionales de desarrollo o también conocidos como cuentas de inversión social (o instrumento equivalente) se enfocan principalmente en dotar recursos para la inversión a distintas escalas, y de forma integrada contribuyen hacia la visión de desarrollo de los países. Estos fondos pueden ser de regalías, fondos de inversión, acción o cohesión social, etc.</p> <p>El presente indicador valora el hecho de que estos fondos de desarrollo incluyan o consideren el financiamiento de actividades <i>ex-ante</i> de GRD, aun y cuando no estén insertos en esa política. De manera que se trate de un reconocimiento de cómo la reducción de riesgos contribuye en el desarrollo local, regional y nacional.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccionar los tres fondos nacionales de desarrollo o cuentas de inversión social (o instrumentos equivalentes) más importantes del país, en función de la cantidad de recursos que administra. 2. Identificar dentro de ese conjunto aquel fondo o fondos cuya normativa o estatuto los habilite para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades <i>ex-ante</i> de GRD.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Al menos uno de los tres fondos nacionales o cuentas de inversión social (o instrumentos equivalentes) más importantes del país, en términos de los recursos disponibles para el financiamiento, están legalmente habilitados para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades <i>ex-ante</i> de GRD.</p> <p>En el caso que la condición que plantea el presente indicador no se cumpla, de cualquier forma en la sección de explicación del verificable se deberán listar, en su caso, los tres principales fondos consultados.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Colombia: La Ley 1606, de diciembre de 2012, la cual decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el periodo del 1^{ro} de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014 incluye recursos, entre otros, para: (i) Apoyo a la gestión integral de riesgos y fortalecimiento de los organismos para la prevención y atención de desastres en el Departamento de Caquetá y (ii) gestión de riesgos (para el OCAD Región Centro Sur).</p> <p>México: El Fondo Metropolitano, que recibió una asignación en el PEF 2013 de \$8,616,058,106.00. El objeto del Fondo Metropolitano según el ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, del 11 de abril de 2011, en su apartado III, inciso b, es la “... <i>viabilidad y disminución de la vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica...</i>”</p>

Código: MG 2-9

Pregunta de respuesta cerrada
9. ¿Existen incentivos presupuestales para que las unidades de gestión territorial implementen acciones en gestión del riesgo de desastre <i>ex ante</i> ?
Descripción general del indicador
Es importante que las Unidades de Gestión Territorial (UGT) promuevan y desarrollen acciones en GRD, pues es en sus jurisdicciones donde ocurren los desastres. En ese sentido, se considera una buena práctica generar incentivos presupuestales para que las UGT implementen acciones o actividades. En el entendido que un “Incentivo” no significa la obligación de programar una partida en el presupuesto nacional, sino que exista un mecanismo que represente a las UGT ventajas presupuestales por realizar esas actividades <i>ex-ante</i> de la GRD.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar en el presupuesto nacional al menos un caso de incentivos o estímulos dirigidos a las UGT, con el fin que estas obtengan determinadas ventajas o beneficios por realizar actividades <i>ex-ante</i> de GRD. 2. Consultar a las autoridades ya sea hacendaria, de economía o de finanzas, y en su caso la de planeación, dirigiéndose particularmente con las áreas de presupuesto y de inversión; igualmente si hace falta, con la entidad rectora de la GRD. 3. Verificar que esas actividades <i>ex-ante</i> estén previstas de manera explícita dentro de las condicionantes establecidas en el presupuesto nacional para tener acceso a esos incentivos.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Ofrecer al menos un ejemplo de incentivos o estímulos para las UGT, que estén contenidos en el presupuesto nacional, y cuyas ventajas o beneficios tengan como condicionante la realización de actividades <i>ex-ante</i> de GRD.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: Plan de incentivos para la mejora de la gestión municipal, programa de modernización municipal, el cual fue creado mediante Ley N° 29332, modificado mediante Decreto de Urgencia N° 119-2009 e incorporado en las Leyes de Presupuesto del Sector Público de los años sucesivos. Dicho plan incluye dentro de sus objetivos prevenir riesgos de desastres.</p> <p>México: Las RO-FOPREDEN, del 23 de diciembre de 2010, suministran recursos para la realización de proyectos preventivos orientados a reducir riesgos, a evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo de los fenómenos naturales perturbadores (artículo 2). Los beneficiarios (dispone el artículo 10) podrán ser los estados y, en su caso, los municipios o delegaciones del Distrito Federal (con base en las prioridades de su Atlas de Riesgos y con arreglo a la norma estatal que para ese efecto se haya expedido). Para ese efecto, los proyectos preventivos que se autoricen, serán financiados (artículo 21) de acuerdo con una coparticipación variable definida en función de dos criterios y una metodología definida en su Anexo 5, la cual refleja que se incentivan aquellos proyectos que se orientan más a la identificación y conocimiento de los riesgos, y adicionalmente los que se enfocan a la población más marginada.</p>

Pregunta de respuesta cerrada

10 ¿Existen incentivos presupuestales para que los distintos sectores (ministerios) implementen acciones en gestión del riesgo de desastres *ex ante*?

Descripción general del indicador

Es importante que los distintos sectores desarrollen, programen y ejecuten acciones *ex-ante* de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), esto en virtud de que los ministerios o secretarías involucradas en cada sector, son responsables de la administración de un número determinado de bienes de responsabilidad fiscal del estado, que pueden ser afectados por los desastres. En ese sentido, se considera una buena práctica generar incentivos presupuestales para que los distintos sectores implementen esas acciones. Esto, en el entendido que un “Incentivo” no significa la obligación para programar una partida en el presupuesto nacional, sino que exista un mecanismo que represente a los sectores ventajas de orden presupuestal por realizar esas actividades *ex-ante* de la GRD.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Identificar en el presupuesto nacional al menos un caso de incentivos o estímulos dirigidos a uno o varios sectores, con el fin que sus ministerios o secretarías obtengan determinadas ventajas o beneficios por realizar actividades *ex-ante* de GRD.
2. Consultar a las autoridades ya sea hacendaria, de economía o de finanzas, y en su caso la de planeación, dirigiéndose particularmente con las áreas de presupuesto y de inversión; igualmente si hace falta con la entidad rectora de la GRD.
3. Verificar que esas actividades *ex-ante* estén previstas de manera explícita dentro de las condicionantes establecidas en el presupuesto nacional para tener acceso a esos incentivos.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Ofrecer al menos un ejemplo de incentivos o estímulos para los sectores, que estén contenidos en el presupuesto nacional, y cuyas ventajas o beneficios tengan como condicionante la realización de actividades *ex-ante* de GRD.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

México: Las RO-FOPREDEN, del 23 de diciembre de 2010, suministran recursos para la realización de proyectos preventivos orientados a reducir riesgos, a evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo de los fenómenos naturales perturbadores (artículo 2). Los beneficiarios (dispone el artículo 10) podrán ser entre otros, las dependencias y en general cualquier instancia pública de orden federal cuyas atribuciones o competencia sean compatibles con los objetivos del FOPREDEN (con base en las prioridades de su Atlas de Riesgos y con arreglo a la norma estatal que para ese efecto se haya expedido). Para ese efecto, los proyectos preventivos que se autoricen, serán financiados (artículo 21) de acuerdo con una coparticipación variable definida en función de dos criterios y una metodología definida en su Anexo 5, la cual refleja que se incentivan aquellos proyectos que se orientan más a la identificación y conocimiento de los riesgos, y adicionalmente los que se enfocan a la población más marginada.

Código: MG 3-1

Pregunta de respuesta cerrada
<p><i>1. ¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que la gestión del riesgo de desastres debe ser sometida a control por las respectivas organizaciones autorizadas?</i></p>
Descripción general del indicador
<p>La función pública de control, auditoría, fiscalización, contraloría, etc., ejecutada por órganos de control, auditorías o contralorías nacionales o cualquier otra institución equivalente, está dirigida a vigilar la legalidad de la gestión de la administración pública nacional o federal, el uso efectivo y transparente de los recursos públicos y el cumplimiento de los presupuestos, planes y programas.</p> <p>No obstante que el marco legal de la función pública de control supone su ejercicio en la integralidad de la administración pública nacional o federal, este indicador reconoce como buena práctica que sea la propia normativa nacional de Gestión Integral del Riesgo (GRD), la que señale con precisión aquellos aspectos de legalidad, gasto y finanzas, funcionamiento o cumplimiento de metas u objetivos, etc., que de manera expresa deban fiscalizar los órganos de control.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar por la existencia de una normativa específica de carácter nacional que regule la GRD. 2. Verificar si dicha normativa nacional de GRD dispone que la totalidad de sus preceptos o algunos en particular, quedarán sujetos al ejercicio del control por parte de las entidades de control. 3. Investigar si dentro del marco legal de la GRD, se ha expedido alguna otra norma o decreto, posterior a la publicación de la normativa nacional y en la que se asignen a las entidades nacionales de control, nuevas tareas en la materia.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Para que se cumpla la condición en esta pregunta, la normativa nacional de GRD debe establecer explícitamente que el cumplimiento de sus preceptos quedará sujeto a la fiscalización por parte de las entidades nacionales de control.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Países centralizados</p> <p>Costa Rica: Ley 8488 del 22 de noviembre de 2005. Artículo 28. Fiscalización. Este artículo establece la responsabilidad de la Contraloría General de la República y de las auditorías internas de las instituciones públicas de vigilar la aplicación de normas para manejar las causas del riesgo, así como la consideración explícita de medidas de prevención.</p> <p>Perú: La Ley N. 29664 del 8 de febrero de 2011, que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD) (artículo 4, numeral VIII) establece la implicación de las entidades de control en la GRD.</p> <p>País federal</p> <p>México: La Ley General de Protección Civil, publicada en junio de 2012, dispone en su Artículo 5 que las autoridades de protección civil (enumeradas en el artículo 27 de esta Ley), deberán actuar con base en principios, entre los que señala en su fracción VI: "Legalidad, control, eficacia, racionalidad, equidad, transparencia y rendición de cuentas en la administración de los recursos públicos". Adicionalmente la misma Ley establece: Artículo 63, Párrafo Quinto "<i>Las Dependencias y entidades federales facilitarán que la Función Pública directamente o, en su caso, a través de los órganos internos de control en las Dependencias y entidades Federales puedan realizar, en cualquier momento, de acuerdo a su ámbito de competencia, la inspección, fiscalización y vigilancia de dichos recursos, incluyendo la revisión programática-presupuestal y la inspección física de las obras y acciones apoyadas con recursos federales, así como recibir, turnar y dar seguimiento a las quejas y denuncias que se presenten sobre su manejo</i>".</p>

Código: MG 3-2**Pregunta de respuesta cerrada**

2. *¿Existe normatividad sobre transparencia en cuanto a como es la GRD administrada publicamente?*

Descripción general del indicador

El ejercicio del poder desde la administración pública en todos los niveles de gobierno no se concibe en la actualidad si no va aparejada con la voluntad política de hacer pública la información que se genere en el desarrollo de su quehacer. Con ese fin se expide una normativa de transparencia en la que se estipule el marco en el que se habrá de cumplir esa premisa.

La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) encuentra en la política de transparencia un elemento a favor del cumplimiento de sus objetivos, pues permite en general que la población tenga un conocimiento más amplio de lo que implica la gestión del riesgo y en que forma intervienen las autoridades, y en particular, para la población que se encuentra con determinado grado de exposición y vulnerabilidad puede aportarle conocimiento sobre las posibles medidas de prevención y autoprotección.

Además, las normativas de transparencia y rendición de cuentas constituyen una oportunidad fundamental para la reducción de elementos generadores de riesgo ligados con la corrupción y con la incorrecta aplicación de normas y procedimientos existentes.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Indagar sobre la existencia de una normativa en materia de transparencia en la gestión pública.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Para que esta respuesta se considere positiva, **debe existir una normativa** con plena vigencia que establezca los principios de transparencia en la gestión pública en el país. No se espera que exista una mención expresa sobre la GRD.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Guatemala: La Ley de Acceso a la Información Pública emitida mediante (Decreto N° 57-2008) del 23 de septiembre de 2008 es aplicable a la GRD. Asimismo el Reglamento de la Ley N° 109-96, Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado (CONRED), adoptado por Acuerdo Gubernativo N° 49-2012, del 14 de marzo del 2012 en su Artículo 55 establece la Unidad de Información Pública". Dicha Unidad es "la responsable de recibir y gestionar la información pública solicitada por personas individuales o jurídicas interesadas y que se encuentran en los archivos de la Secretaría Ejecutiva de CONRED..." en cumplimiento del Decreto Legislativo No. 57-2008, "Ley de Acceso a la Información Pública".

México: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, LFTAIPG, del 11 de junio de 2002, ordena en su Artículo 1 que esta Ley es de orden público y tiene como finalidad garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal. El alcance del Artículo 1 incluye la información pública que manejen las autoridades involucradas en la GDR, y con las excepciones que esa misma Ley dicte. El artículo 5 precisa que se considera información: "La contenida en los documentos que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título".

Código: MG 3-3**Pregunta de respuesta cerrada**

3. *¿El ente nacional de control ha realizado al menos una evaluación del cumplimiento de la normativa existente en gestión del riesgo de desastres en los últimos 5 años?*

Descripción general del indicador

La existencia de un mecanismo de seguimiento externo a las entidades responsables de la coordinación de la GRD, puede generar una mayor transparencia en la identificación y aplicación de mecanismos de control y ajuste. Se busca que las entidades nacionales responsables de este tipo de procesos de supervisión y auditoría general del estado integren en sus procesos el análisis de la implementación de la normativa en GRD.

No se incluye en este análisis las evaluaciones en temas que no sean explícitamente relacionados con la norma de GRD, tales como evaluaciones sobre procedimientos contractuales en caso de desastre.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Investigar la estructura del Sistema Nacional de Control. No en todos los países está estructurado como sistema; en estos casos se debe identificar la existencia de Contraloría de la República, Corte Nacional de Cuentas o entidad similar.
2. Indagar sobre la realización de al menos una verificación o evaluación del cumplimiento de la normativa de la GRD en los últimos 5 años en el país.
3. Considerar entre los posibles verificables los reportes de contraloría sobre la gestión de desastres luego de una situación catastrófica. Estos reportes deberían abordar temas relacionados con los procesos de estimación del riesgo, prevención y reducción y no solamente por los procesos de respuesta.
4. Acudir directamente al ente encargado del proceso de evaluación, ya que resulta difícil encontrar este tipo de evaluaciones por internet.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Para que esta respuesta se considere positiva, **debe existir al menos un reporte de evaluación** del cumplimiento de la normativa existente en la GRD en los últimos 5 años.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Costa Rica: El Informe N° DFOE-PGAA-IF-17-2010, del 15 de julio de 2010, de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa en la Contraloría General de la República, relativo a las Limitaciones que Presenta la Gestión de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) en la Coordinación, Supervisión y Control de la Atención de las Emergencias en las Fases de Rehabilitación y Reconstrucción, asimismo el Informe N° DFOE-PGAA-IF-15-2009 del 3 de septiembre de 2009, de la misma División Fiscalizadora sobre la Gestión de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias en Materia de Prevención, son instrumentos de cumplimiento en el indicador.

Colombia: La Contraloría General de la República publicó en julio de 2012, el Informe sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente. 2011– 2012 en el que se hace una evaluación del desempeño tanto de las entidades nacionales como de los entes territoriales en materia de GRD para el periodo mencionado. Adicionalmente, varias contralorías departamentales han emitido en 2013 "funciones de advertencia". Se presenta como verificable el caso de la CG del Putumayo al Gobernador y a los alcaldes municipales sobre el cumplimiento de lo estipulado en la Ley 1523 de 2012 en relación con el cumplimiento de la normativa de GDR.

Código: MG 3-4**Pregunta de respuesta cerrada**

4. *¿La entidad nacional coordinadora de la GRD ha realizado en los últimos 3 años una evaluación de la gestión del riesgo de desastres en el país con participación de sectores y niveles territoriales?*

Descripción general del indicador

Las evaluaciones que llevan a cabo las entidades nacionales en materia de GRD corresponde por ejemplo a los ejercicios de aplicación de la plantilla monitor del Marco de Acción de Hyogo o evaluaciones sobre la Implementación del Plan Nacional de GRD.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Indagar sobre la realización de al menos una evaluación de la GRD en los últimos 3 años en el país por parte de la entidad nacional coordinadora de la GRD.
2. La evaluación puede ser sobre cualquiera de los procesos de la GRD, excepto de la preparación y la respuesta (los cuales serán vistos en el PP4).

Existe al menos una fuente importante, y común a casi todos los países: El reporte a la plataforma global de la ONU-EIRD sobre el cumplimiento del Marco de Acción de Hyogo. NOTA: esta autoevaluación es realizada por las mismas instituciones que se califican, es decir, no es una evaluación externa.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Para que esta respuesta se considere positiva, debe **existir al menos un reporte de evaluación** por parte de la entidad coordinadora de la GRD en los últimos 3 años.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Monitor de Hyogo: Autoevaluación de los países sobre el cumplimiento del MAH:

Argentina: Reporte de avances en la implementación del MAH (2011-2013).

<http://www.preventionweb.net/english/policies/v.php?id=28905&cid=7>

Bolivia: Reporte de avances en la implementación del MAH (2011-2013)

<http://www.preventionweb.net/english/policies/v.php?id=32828&cid=21>

México: El Fondo de Prevención de Desastres Naturales, FOPREDEN financió en 2013 la "Evaluación al Sistema Nacional de Protección Civil", presentado por la Coordinación General de Protección Civil, autorizado en términos de los artículos 44 y 45 de las RO-FOPREDEN y financiado por un monto de €372,043.00 (Trescientos setenta y dos mil cuarenta y tres Euros 00/100), publicado en orden de dar cumplimiento al artículo 22 fracción X de las ROFOPREDEN. Esta evaluación la ejecutó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con base en su metodología Reviews of Risk Management Policies (Evaluaciones de las Políticas de la Gestión del Riesgo y basado en el documento, The Emerging Risks in the 21st Century)

Código: MG 3-5

Pregunta de respuesta cerrada
5. <i>¿Existe al menos un mecanismo de participación de la sociedad civil aplicable a la gestión del riesgo de desastres?</i>
Descripción general del indicador
El hecho de que la normativa incluya criterios de participación social otorga un atributo de calidad al marco normativo. Se debe verificar si al menos se ha activado un mecanismo de participación de acuerdo con lo establecido por la Ley.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar si la normativa existente incluye la creación de mecanismos de participación y consulta. 2. Verificar si estos mecanismos existen en la ley y si están integrados e incluyen instancias comunitarias, de sociedad civil y sector privado. 3. Indagar si procesos de fomento de la participación, tipo mesas de concertación, diálogos nacionales o mesas de consulta, no creados en la norma expresa, han sido validados por las entidades de la GRD como mecanismos de consulta (los procesos de elaboración del reporte del MAH pueden ser una fuente de información).
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Para que esta respuesta se considere positiva, debe existir al menos un mecanismo de participación y consulta integrado que incluya organizaciones comunitarias, la sociedad civil y del sector privado en la GRD y que se reúna o que establezca el intercambio de opiniones de forma periódica al menos una vez al año.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Guatemala: La Mesa Nacional de Diálogo en Gestión para la Reducción de Riesgo de Desastres fue establecida el 24 de marzo de 2009 por el Gobierno de Guatemala, como un espacio de convergencia y coordinación público-privada, de duración indefinida, cuyo propósito es elevar los consensos sobre la gestión para la reducción de riesgo a desastres al Presidente de la República y al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. El Protocolo de Funcionamiento, en su primer borrador de septiembre de 2009, define su alcance y objetivos. La Mesa Nacional de Diálogo publicó en junio de 2012 el Informe de la Sesión Extraordinaria de seguimiento a la de estrategia de implementación de la Política Nacional de RRD.</p> <p>México: La Ley de Planeación, del 5 de enero de 1983, dispone en su Artículo 1 como se deben llevar a cabo los procesos de planeación en México, estableciendo "... IV. <i>Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales así como de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del Plan y los programas a que se refiere esta Ley...</i>". Estas bases representan la garantía para la participación de la sociedad en general en estos procesos. En el ámbito de la GRD, tal atribución la ejecuta la Secretaría de Gobierno, a través de la Comisión Nacional de Protección Civil, con el Programa Nacional de Protección Civil, cuya formulación es elaborada en base a consultas, tal y como se consigna en el capítulo Consulta Pública para Elaborar el Programa.</p>

Código: IR 1A-1

Pregunta de respuesta cerrada
1. ¿Existe normatividad que designe un actor nacional responsable de brindar asistencia técnica y lineamientos a niveles territoriales y sectoriales para el análisis del riesgo de desastres?
Descripción general del indicador
<p>Este indicador concede suma importancia al hecho que exista normativa que disponga la existencia de una instancia de carácter técnico, dotada de competencia, presupuesto y una estructura que entre sus principales funciones se encuentre las de realizar estudios integrales sobre el riesgo de desastre (con sus componentes peligro, vulnerabilidad y exposición), así como establecer líneas, criterios, estándares y parámetros, etc., que sirvan para cuantificar y cualificar los valores y escalas para el análisis de los riesgos de desastre, y en ese contexto suministren asistencia y orientación a todos los sectores nacionales, los distintos niveles de gobierno y, en su caso, a los sectores social y privado.</p> <p>Esta instancia no debe confundirse con entidades científicas o técnicas especializadas responsables de realizar en campo los estudios específicos sobre fenómenos naturales y amenazas (como pudieran ser por ejemplo, los institutos o servicios de geología o de hidrología).</p> <p>Al igual que en otros procesos de la gestión del riesgo, es posible que en el país exista una entidad nacional encargada, por ejemplo de “estudios territoriales”. En esos casos se debe verificar si la norma de dicha entidad considera el análisis de riesgo.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Investigar la existencia de normativa que haya dispuesto una instancia competente de estudiar (analizar) integralmente el riesgo. 2. Descartar aquellos casos con otros entes que realizan estudios científicos o técnicos sobre procesos naturales peligrosos; es decir sólo de amenazas o peligros. 3. Revisar la normativa sobre estudios territoriales, o normatividad asociada con el Ordenamiento Territorial (OT) (puede suceder que en el marco del OT se cree un instituto de investigación o análisis del territorio encargado de los estudios básicos; en estos casos se deberá analizar si la norma de dicha entidad considera o no el análisis del riesgo de desastres de forma explícita como una de sus funciones).
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Normatividad que designe un actor nacional responsable de promover en el país el análisis del riesgo de desastres como proceso que evalúa daños de forma anticipada y que acompaña a entes territoriales o sectoriales en estas actividades.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: La Ley N° 29664 (SINAGERD), en su Capítulo III crea el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) y a través del artículo 12, numeral "d" establece que el CENEPRED debe “... asesorar en el desarrollo de las acciones y procedimientos que permitan identificar los peligros de origen natural o los inducidos por el hombre, analizar las vulnerabilidades y establecer los niveles de riesgo que permitan la toma de decisiones en la Gestión del Riesgo de Desastres. Adicionalmente, en el numeral "f" se le asigna la responsabilidad de “... elaborar los lineamientos para el desarrollo de los instrumentos técnicos que las entidades públicas puedan utilizar para la planificación, organización, ejecución y seguimiento de las acciones de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres”.</p> <p>México: La Ley General de Protección Civil, del 6 de Junio del 2012, establece que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) es según el Artículo 23 “... la institución técnica-científica de la Coordinación Nacional de Protección Civil encargada de crear, gestionar y promover políticas públicas en materia de prevención de desastres y reducción de riesgos a través de la investigación, el monitoreo, la capacitación y la difusión. Tiene entre sus atribuciones, el apoyo técnico al Sistema Nacional, así como la integración del Atlas Nacional de Riesgos”. Asimismo, el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación (RI-SEGOB), del 2 de abril de 2013, establece en su Artículo 109 que “El Centro Nacional de Prevención de Desastres tiene las siguientes atribuciones: ... II. Integrar el Atlas Nacional de Riesgos y promover la instrumentación de un Subsistema de información sobre riesgos, peligros y vulnerabilidad, así como supervisar y, en su caso, asesorar a las Entidades Federativas para la integración de sus atlas de riesgos...”.</p>

Código: IR 1A-2

Pregunta de respuesta cerrada
2. <i>¿Existe normatividad que designe un actor nacional responsable de la definición de metodologías para la elaboración de estudios sobre efectos de cambio climático?</i>
Descripción general del indicador
En el caso del del Cambio Climático (CC), se valora fundamental la existencia de una normativa que disponga una instancia de carácter técnico con competencia para establecer metodologías que sirvan para realizar estudios e investigación sobre sus efectos. Normalmente lo hacen instituciones adscritas al sector ambiental o hidrometeorológico nacional pero otras veces no es una responsabilidad expresada en una normatividad. Por lo tanto este indicador reconoce a los países en los que está vigente una normativa en la que se determine la competencia de definir tales metodologías.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar, en los casos de países donde se tiene una entidad formalmente encargada de acompañar los procesos de análisis del riesgo (indicador IR 1A-1), si esa normativa dispone también estudios sobre los efectos probables del CC. Nótese que al igual que en el indicador IR 1A-1, lo que interesa es verificar los “efectos probables”, no se trata de estudios físicos sobre el clima sino sobre sus efectos potenciales. 2. Analizar las comunicaciones nacionales sobre cambio climático; en éstas normalmente se incluye una descripción del marco legal e institucional nacional frente al CC. 3. Analizar la normativa del país en materia de CC.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
La existencia de una normatividad que expresamente designe una instancia institucional responsable de la definición de metodologías para la elaboración de estudios sobre efectos de CC. También se considera como positiva la condición cuando la normatividad designa a un responsable en el país de realizar los estudios sobre los “efectos” probables del CC. (Nota, debe ser expresamente “efectos”, no se trata de estudios del clima <i>per se</i>).
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Argentina: El Decreto N° 2213 del Poder Ejecutivo Nacional, sobre la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se designa a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable Autoridad de Aplicación de la Ley N° 24.295, del 5 de noviembre de 2002. La condición se cumple en 2007 a través de la Resolución No. 58/2007, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que aprueba las aperturas inferiores del primer nivel operativo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, del 9 de marzo de 2007, la cual responsabiliza a la Dirección de Cambio Climático (DCC) que en su Anexo II, se refiere a la Dirección de Cambio Climático, que dentro de las acciones que le son instruidas, está la de "3. <i>Elaborar y proponer al Director Nacional de Gestión del Desarrollo Sustentable, para su aprobación, los lineamientos de políticas en materia de cambio climático; la identificación de áreas sectoriales prioritarias para implementar actividades de mitigación; la determinación de las metas nacionales para la posible reducción de emisiones por sector; y la definición de estrategias y lineamientos para las actividades de mitigación por sector, concordantes con las políticas nacionales de desarrollo sustentable</i>". Además de "4. <i>Coordinar la elaboración de las Comunicaciones Nacionales que forman parte de los compromisos resultantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático</i>", y es por medio de las Comunicaciones Nacionales que la DCC define los distintos componentes y metodologías para la elaboración de estudios sobre efectos de cambio climático. Según informa la página: http://www.ambiente.gov.ar, actualmente se trabaja en la Tercera Comunicación Nacional, siendo la última la 2^{da}. Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, de octubre de 2007, en la que se menciona constantemente el uso de metodologías, pero por señalar un ejemplo en el índice aparece el Capítulo 3, Inventario de gases de efecto invernadero de la República Argentina; 3.1 Inventario de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero (INVGEI), no controlados por el Protocolo de Montreal; 3.1 Introducción; 3.1.1 Metodología.</p> <p>México: La Estrategia Nacional de Cambio Climático, del día 3 de junio de 2013, refiere en la página 8: “... <i>El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) es el instituto de investigación que crea la Ley General de Cambio Climático para coordinar y realizar estudios y proyectos de</i></p>

investigación científica y tecnológica con instituciones académicas, de investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras en materia de cambio climático. Es la institución encargada de realizar los análisis de prospectiva sectorial y de colaborar en la elaboración de estrategias, planes, programas, instrumentos y acciones relacionadas con cambio climático, incluyendo la estimación de los costos futuros asociados a este fenómeno y de los beneficios derivados de las acciones para enfrentarlo...”.

Código: IR 1A-3

Pregunta de respuesta cerrada
3. <i>¿Existe normatividad que ordene la creación y mantenimiento de Sistemas de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres?</i>
Descripción general del indicador
<p>Se considera una buena medida en materia de políticas públicas referidas a la GRD, que la normatividad ordene la creación de Sistemas de Información como un instrumento que permita la recolección, almacenamiento, ordenamiento, sistematización, mantenimiento y acceso de información útil para apoyar las labores de gestión del riesgo.</p> <p>Estos sistemas deberán ser desconcentrados, de acceso libre y gratuito y en la medida de lo posible contener información en escalas locales. Adicionalmente deben estar enmarcados en las iniciativas de estandarización de metadatos dentro de las infraestructuras de datos espaciales.</p> <p>El sistema puede ser un “subsistema” de otros sistemas relacionados, como podría ser un Sistema Nacional de Información Ambiental que tuviera un módulo de “riesgo de desastres” o similares.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar la normativa de GRD, sobre estudios territoriales, sistemas de información o la documentación de procesos ambientales (por ejemplo normas tipo “observatorios ambientales”). 2. Comprobar si esa normativa dispone la creación y mantenimiento de sistemas de información para la administración de información útil para las labores de GRD, que sirvan para determinar escenarios de probable afectación, es decir, que integren datos tanto sobre la ocurrencia de eventos naturales, como las condiciones de vulnerabilidad y exposición. 3. Confirmar que esos sistemas de información están desconcentrados y son de acceso libre y gratuito. 4. Descartar que esos sistemas de información sean generados a partir del monitoreo de procesos físicos naturales y los que registran los datos históricos de los desastres.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>No debe confundirse con sistemas de monitoreo de procesos físicos naturales (redes de observación del clima o de los volcanes, por ejemplo), y tampoco con sistemas de información que registran los daños o las emergencias o los desastres históricos. Para que sea considerado un sistema de información en temas de riesgo, deberá necesariamente servir para determinar escenarios de probable afectación futura, es decir que debe integrar aspectos de la probable ocurrencia de eventos físicos y además las condiciones de exposición y vulnerabilidad (aun de forma indicativa) de los elementos socioeconómicos en el territorio.</p> <p>Lo que se indaga no es si existe un sistema de información para la GRD en el país sino la existencia o no de normatividad que ordene la existencia de estos sistemas (por ejemplo: un país puede tener aplicativos web o un sistema de información para la GRD pero si éste no está legalmente creado -por norma- entonces la condición no se cumple; también puede darse el caso que en el país exista la norma que ordena la creación del sistema pero que todavía no se haya diseñado o implementado dicho sistema, <u>en este caso la condición sí se cumple</u>, puesto que no se pregunta por el Sistema como tal, sino por la norma que lo crea, evidentemente en la explicación de la verificación del indicador se debe explicar que la norma aún no se cumple).</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: La Ley N° 29664 que crea el SINAGERD, del 8 de febrero de 2011, en el Artículo 19, apartado "d", integra el Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNIGRD), como uno de los "instrumentos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres del Perú". Asimismo, en el Artículo 10, numeral "i", se establece que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tiene dentro de sus responsabilidades la de organizar, administrar y mantener actualizado el Sistema Nacional de Información referido.</p> <p>México: La Ley General de Protección Civil, del 6 de junio de 2012, en su artículo 19, fracción XXI, señala <i>"Promover la instrumentación de un Subsistema de Información de Riesgos, Peligros y Vulnerabilidades que permita mantener informada oportunamente a la población; XXII. Supervisar, a través del CENAPRED, que se realice y se mantenga actualizado el atlas nacional de riesgos, así como los correspondientes a las entidades federativas, municipios y delegaciones... El Atlas se integra con la información a nivel nacional, estatal, del Distrito Federal, municipal y delegacional. Consta de bases de datos, sistemas de información geográfica y herramientas para el análisis y la simulación de escenarios, así como la estimación de pérdidas por desastres. Por la naturaleza dinámica del riesgo, deberá mantenerse como un instrumento de actualización permanente..."</i>.</p>

Pregunta de respuesta cerrada
4. ¿Existe normatividad que establezca crear, sistematizar o actualizar bases de datos sobre los efectos de los desastres?
Descripción general del indicador
Una buena práctica en las políticas públicas en materia de gestión del riesgo es contar con bases de datos sobre los efectos de desastres ocurridos. Estas bases de datos permiten además complementar los estudios de riesgo con base en evidencia empírica. Los catálogos sobre los efectos de desastres deben incluir datos de los efectos de los desastres y no únicamente un registro de las emergencias o incidentes.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar las normativas de gestión del riesgo, procesos de preparación, respuesta o manejo de desastres (p.ej. normativa de Protección o Defensa Civil), y las que sustentan los sistemas de información para la GRD o para análisis o diagnóstico ambiental. 2. Comprobar la existencia de alguna disposición para crear bases de datos históricos sobre los efectos y consecuencias de los desastres. 3. Confirmar que se instruye igualmente para que esas bases de datos sean sistematizadas o actualizadas permanentemente, de manera que no sea el resultado de un esfuerzo único, sino una labor continuada.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
La disposición para la creación de bases de datos sobre los efectos de los desastres, ya sea dentro de la normativa nacional sobre GRD o, en su caso, la normativa sobre preparativos para desastres. Es posible que esta normatividad pueda estar incluida en el marco de los Sistemas de Información para la GRD (como un módulo o componente). En cualquier caso, la condición mínima es la existencia de normativa y no la implementación de dicha base de datos.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Colombia: La Ley 1523 de 2012, establece en el Artículo 45 que es responsabilidad de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, "... poner en marcha un sistema nacional de información para la gestión del riesgo de desastres"; asimismo, dispone en el numeral 6 que dicho sistema, entre otras cosas, permitirá "Responder a las necesidades de información sobre las estadísticas de afectación y de apoyos brindados por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en las situaciones de emergencia". NOTA: la creación, sistematización y actualización de bases de datos sobre los efectos de los desastres es una obligación implícita del Sistema de Información de acuerdo con el artículo 45 de la Ley 1523, numeral 6.</p> <p>Venezuela: En un amplio número de países se utiliza la base de datos <i>DesInventar</i>, que juega este papel directa o indirectamente y ha estado sirviendo como el equivalente a un estándar en la región; sin embargo en los países no se ha establecido formalmente que dicha base de datos se utilice en forma continua, lo que debería ser una práctica deseable. En Venezuela en la Ley 448 del 9 de enero del 2009 de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, en el artículo 12, numeral 6, establece la pertinencia de crear sistemas de información [...] para garantizar la disponibilidad de información histórica. Aparte del <i>DesInventar</i> que está implementado en la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, el Ministerio del Poder Popular de Ciencia y Tecnología, a través de FUNVISIS, ha implementado una base de datos más amplia de estudios y desastres a nivel nacional que cumple con estas características.</p> <p>México: La Ley General de Protección Civil, del 6 de junio de 2012, en su Artículo 34 establece: "<i>El Comité Nacional (de Emergencias) tendrá las siguientes atribuciones: I. Analizar la situación de emergencia o desastre que afecte al país, a fin de evaluar el alcance del impacto y formular las recomendaciones necesarias para proteger a la población, sus bienes y su entorno...</i>"; y se hace a través de un sistema de información multisectorial denominado SVRES, de acceso restringido que contiene un reporte EDAN, y de situación de cada sector. Adicionalmente, las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Desastres (RO-FONDEN) de diciembre de 2010, disponen para las acciones de reconstrucción, la conformación de un Comité de Evaluación de Daños (Artículo 11), que se ocupará exclusivamente de evaluar y cuantificar los daños en los sectores, y cuyos diagnósticos deberán ser capturados por los servidores públicos designados para tal fin en cada subcomité en la página Web establecida para tales efectos por la SEGOB..." (Artículo 12). El sistema establecido se denomina "FONDEN en línea" y es accesible para los servidores públicos autorizados.</p>

Código: IR 1B-1

Pregunta de respuesta cerrada
<i>1. ¿Existe normatividad que establezca que los estudios de amenaza por eventos geológicos deben considerar la frecuencia de ocurrencia asociada a los niveles de intensidad de los eventos?</i>
Descripción general del indicador
<p>Se trata de indagar por la existencia de normatividad que establezca el enfoque probabilista en los estudios de amenaza asociados a eventos de tipo geológico.</p> <p>El análisis probabilista de riesgo se representa por la curva de tasa o probabilidad anual de excedencia de los parámetros de intensidad de los fenómenos (cuyo inverso es el período de retorno) en cada punto del territorio de análisis. Esto significa que, espacialmente, en cada punto del territorio se debería contar con la frecuencia de ocurrencia (representada por una función de distribución de probabilidad) de un parámetro que caracterice la intensidad.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar las normativas en materias de gestión del riesgo; de seguros por parte del ente regulador; de protección financiera frente a desastres y de seguridad de edificios frente a fenómenos naturales. 2. Confirmar que alguna de las normativas consideradas establece el análisis probabilista del riesgo asociado a eventos de orden geológico. 3. Descartar aquellos casos que se realizan meros estudios de amenaza, sin que se considere la frecuencia de ocurrencia asociada a los niveles de intensidad de los eventos.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
El aspecto a evaluar es la inclusión en la normativa del enfoque probabilista. La condición se cumple si la norma establece de forma expresa que se debe considerar la frecuencia de ocurrencia asociada a los niveles de intensidad de los eventos o un enfoque probabilista.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>México: El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), estableció una "Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos: Conceptos Básicos sobre peligros, riesgos y su representación geográfica" (CENAPRED. 1a. Edición, Noviembre de 2006). Esta Guía, en virtud de las reformas legales del 2012, se ha traducido en el referente normativo más inmediato a seguir para la formulación de los Atlas de Riesgos a nivel local o sectorial, que son supervisados por el CENAPRED. La Guía hace referencia a que los estudios relacionados con amenazas geológicas deben considerar frecuencia de ocurrencia asociada a los niveles de intensidad de los eventos (sección 1.4.2). La gran fuente de financiación para la elaboración de estos Atlas es el FOPREDEN, que incluye en su ficha técnica para la solicitud de financiación de este tipo de estudios una sección especial (Sección V: requisitos adicionales para Atlas de Peligros y Riesgos) donde se solicita "una carta compromiso para apearse a los Términos de Referencia y Guías de Contenido Mínimo, así como a las Metodologías elaboradas por CENAPRED para la elaboración de los Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos".</p>

Código: IR 1B-2

Pregunta de respuesta cerrada
2. <i>¿Existe normatividad que establezca que los estudios de amenaza por eventos climáticos e hidrológicos deben considerar la frecuencia de ocurrencia asociada a los niveles de intensidad de los eventos?</i>
Descripción general del indicador
Se trata de indagar por la existencia de normatividad que establezca el enfoque probabilista en los estudios de amenaza asociados a eventos climáticos e hidrológicos.
El análisis probabilista de riesgo se representa por la curva de tasa o probabilidad anual de excedencia de los parámetros de intensidad de los fenómenos (cuyo inverso es el período de retorno) en cada punto del territorio de análisis. Esto significa que, espacialmente, en cada punto del territorio se debería contar con la frecuencia de ocurrencia (representada por una función de distribución de probabilidad) de un parámetro que caracterice la intensidad.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar las normativas en materias de gestión del riesgo, de seguros por parte del ente regulador; de protección financiera frente a desastres y de ordenamiento territorial. 2. Confirmar que alguna de las normativas consideradas establece el análisis probabilista del riesgo asociado a eventos de orden hidrológico y climático. 3. Descartar aquellos casos que se realizan meros estudios de amenaza, sin que se considere la frecuencia de ocurrencia asociada a los niveles de intensidad de los eventos.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
El aspecto a evaluar es la inclusión en la normativa del enfoque probabilista. La condición se cumple si la norma establece de forma expresa que se debe considerar la frecuencia de ocurrencia asociada a los niveles de intensidad de los eventos o un enfoque probabilista.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
México: El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), estableció una "Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos: Conceptos Básicos sobre peligros, riesgos y su representación geográfica" (CENAPRED. 1a. Edición, Noviembre de 2006). Esta Guía, en virtud de las reformas legales del 2012, se ha traducido en el referente normativo más inmediato a seguir para la formulación de los Atlas de Riesgos a nivel local o sectorial, que son supervisados por el CENAPRED. La Guía hace referencia a que los estudios relacionados con amenazas hidrometeorológicas deben considerar la frecuencia de ocurrencia asociada a los niveles de intensidad de los eventos (sección 1.4.4). La gran fuente de financiación para la elaboración de estos Atlas es el FOPREDEN, que incluye en su ficha técnica para la solicitud de financiación de este tipo de estudios una sección especial (Sección V: requisitos adicionales para Atlas de Peligros y Riesgos) donde se solicita "una carta compromiso para apegarse a los Términos de Referencia y Guías de Contenido Mínimo, así como a las Metodologías elaboradas por el CENAPRED para la elaboración de los Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos".

Código: IR 1B-3

Pregunta de respuesta cerrada
3. <i>¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que cada sector es responsable de realizar el análisis del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias sectoriales?</i>
Descripción general del indicador
Considerando que la GRD es una política pública que debe ser transversal a la administración pública nacional o federal, en el entendido que sus objetivos y visión es compartida por todos los sectores, es deseable que la normatividad de la GRD estipule que cada sector debe, en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones, realizar estudios para determinar su exposición, vulnerabilidad y riesgo, pues en la medida en que los sectores analicen su nivel de riesgo ante fenómenos naturales pueden iniciarse los procesos subsecuentes de reducción del riesgo.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Confirmar la vigencia de una normativa nacional específica de la GRD. 2. Revisar si esa normativa nacional de la GRD estipula de forma expresa que los diferentes sectores de la administración pública serán competentes para realizar acciones para la identificación de los riesgos de desastre en cada uno de sus ámbitos. Ese análisis del riesgo supone el estudio de la vulnerabilidad, amenaza y exposición. 3. Descartar que esas acciones se refieran a otra de las fases de la GRD como pueden ser labores de preparativos para desastres o la recuperación.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Al menos, la norma deberá hacer referencia al análisis del riesgo de desastres (que implica dimensionar las amenazas y la vulnerabilidad de los elementos expuestos ante las mismas). No debe confundirse con la normativa que estipule que los sectores son responsables de realizar acciones de preparativos para desastres. Tampoco se debe asumir que los sectores realizan el análisis de riesgo como parte de las acciones previas para los planes de GRD o de emergencia, es decir, lo que interesa es evaluar la existencia de normatividad que otorgue la responsabilidad expresa de que los sectores realicen sus propios estimativos del riesgo de desastres.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: La Ley N° 29664 que crea el SINAGERD, expedida el 8 de febrero de 2011, en su Título II, Artículo 5o. respecto de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, establece en su numeral 5.2. <i>"Las entidades públicas, en todos los niveles de gobierno, son responsables de implementar los lineamientos de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres dentro de sus procesos de planeamiento"</i>. Asimismo, entre los lineamientos de la Política Nacional citada, refiere en su numeral 5.3, inciso a, que <i>"... la GRD debe ser parte intrínseca de los procesos de planeamiento de todas las entidades públicas..."</i> y que <i>"... deben reducir el riesgo de su propia actividad y deben evitar la creación de nuevos riesgos"</i>. Por otra parte, en el Título III, Capítulo VII, Subcapítulo I, Entidades Públicas, establece en su numeral 16.1 que <i>"Los ministros son las máximas autoridades responsables de la implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres dentro de sus respectivos ámbitos de competencia"</i>. Finalmente, la misma Ley establece en su artículo 6o. numeral 6.1., inciso a, como componente de la Política Nacional de GRD a la Gestión Prospectiva, la que define como <i>"...el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el fin de evitar y prevenir la conformación del riesgo futuro..."</i> y el numeral 6.2, inciso a, que menciona a la "estimación del riesgo" definida como las <i>"... acciones y procedimientos que se realizan para generar el conocimiento de los peligros o amenazas..."</i>.</p> <p>Colombia: La Ley 1523 de 2012, establece en el Artículo 2 que: "La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres".</p>

Código: IR 1B-4

Pregunta de respuesta cerrada
4. <i>¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que las empresas prestadoras de servicios públicos son responsables de realizar el análisis del riesgo de desastres en el ámbito de sus operaciones?</i>
Descripción general del indicador
En la medida en que las empresas prestadoras de servicios públicos sean responsables de conocer el riesgo de sus operaciones ante fenómenos naturales (y también sean responsables de reducirlo), el Estado en general tendrá menor carga fiscal frente al riesgo de desastres. Por lo anterior, se considera una buena práctica el que exista normativa que establezca estas responsabilidades de forma expresa, incluso si las empresas se gobiernan por el derecho privado, toda vez que usualmente la infraestructura expuesta es de carácter público (y concesionado), una interrupción del servicio supone un costo social significativo.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Confirmar la vigencia de una normativa nacional específica de la GRD. 2. Revisar si esa normativa nacional de la GRD estipula de forma expresa que las empresas prestadoras de servicios públicos tienen la responsabilidad de la identificación del riesgo en el ámbito de sus operaciones. Ese análisis del riesgo supone el estudio de la vulnerabilidad, amenaza y exposición. 3. Descartar que esas acciones se refieran a otra de las fases de la GRD como pueden ser labores de preparativos para desastres o la recuperación.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Debe existir en la normatividad nacional sobre GRD (o equivalente), una determinación expresa sobre la responsabilidad de las empresas prestadoras de servicios públicos (o como se llame en el país a estas empresas) de realizar el análisis de riesgo en el ámbito de sus operaciones. Tiene que evidenciarse que la norma indique responsabilidades para el conocimiento del riesgo, es decir que no se considera cumplida la condición si la norma no especifica a las entidades de servicios públicos o si hace referencia sólo a un proceso de la GRD en particular y distinto del análisis del riesgo.</p> <p>Sí se considera cumplida la condición cuando la norma otorga responsabilidades en gestión del riesgo en general y se indica en la misma norma o su reglamento que el conocimiento o análisis del riesgo hace parte de la GRD como tal.</p> <p>Asimismo la condición también se considera cumplida si la normatividad de GRD establece esta responsabilidad a las entidades públicas en general, siempre y cuando las empresas que prestan los servicios públicos sean consideradas como entidades públicas en el país objeto del análisis.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Colombia: La Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, determina en su Artículo 2 que <i>"La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entendiéndose: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres"</i>. Más específicamente, el Artículo 42 de dicha ley establece que <i>"Todas las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, así como las que específicamente determine la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, deberán realizar un análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como los que se deriven de su operación. Con base en este análisis diseñarán e implementarán las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento"</i>.</p> <p>Costa Rica: La Ley N° 8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, del 27 de octubre de 2005, en su Capítulo IV, en el Artículo 25 señala que <i>"Es responsabilidad del estado costarricense prevenir los desastres; por ello, todas las instituciones estarán obligadas a considerar en sus programas</i></p>

los conceptos de riesgo y desastre e incluir las medidas de gestión ordinaria que les sean propias y oportunas para evitar su manifestación promoviendo una cultura que tienda a reducirlos". Asimismo, en el Artículo 26 dice que "... las Instituciones públicas deberán coordinar con la Comisión sus programas y actividades de prevención, considerándolos como un proceso de política pública que deberá operar en forma permanente y sostenida con el enfoque sistémico y del Plan Nacional de Gestión del Riesgo...". Debe precisarse que la propia Ley define en su Artículo 4 al Riesgo como la "Probabilidad de que se presenten pérdidas, daños o consecuencias económicas, sociales o ambientales, en un sitio particular y en un periodo definido. Se obtiene al relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los elementos expuestos". Y si bien no define explícitamente el análisis de riesgo, si se infiere.

México: La prestación de los servicios Públicos de Agua y Energía Eléctrica en México, se encuentran en manos del Estado, no así los servicios de telecomunicaciones, ni del transporte. No obstante, la Ley General de Protección Civil de junio de 2012, establece esta responsabilidad para las empresas prestadoras de servicios, sean públicas o privadas, a través de la implementación de sus programas internos y de continuidad de operaciones, que incluyen los análisis de riesgos a sus operaciones para sustentarlo (Artículos 2, 39 y 40). Adicionalmente, esta responsabilidad se ve reforzada por una política transversal contenida en el Artículo 4 que refiere: *"Las políticas públicas en materia de Protección civil, se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil, identificando para ello las siguientes prioridades: I. La identificación y análisis de riesgos como sustento para la implementación de medidas de prevención y mitigación..."*. Estas tareas están predefinidas en el Manual de Organización y Funcionamiento del SINAPROC, emitido por el Secretario de Gobernación en ejercicio de sus facultades de Coordinador Ejecutivo del Sistema, y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de octubre del 2006, donde establecen responsabilidades concretas en identificación de riesgos por tipo de fenómenos peligrosos, entre otros, a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (PEMEX). A manera de ejemplo se cita la página 24 *"...Subprograma de Prevención... Fenómenos Geológicos... PEMEX... Identifica las instalaciones petroleras ubicadas en zonas de riesgo geológico, determinando su nivel de riesgo y grado de vulnerabilidad y establece medidas y acciones específicas de prevención, tendientes a dar mayor seguridad a las mismas...CFE: Identifica las zonas de riesgo geológico en el país. Realiza estudios de selección de sitios para ubicar sus instalaciones y desarrolla estudios de mecánica de suelos... Identifica las instalaciones de los procesos de generación, transmisión, transformación, distribución, control, construcción y administración ubicadas en zonas de riesgo geológico, y su grado de vulnerabilidad, diagnosticando posibles afectaciones en caso de desastre."*

Código: IR 1B-5

Pregunta de respuesta cerrada
5. <i>¿La normatividad de ciencia, tecnología e innovación (o equivalente), incluye la promoción del conocimiento sobre el riesgo de desastres en el país?</i>
Descripción general del indicador
<p>Se considera una buena práctica que la normativa nacional que regula el ramo de la ciencia, la tecnología y la innovación (o sistema equivalente), establezca expresamente la promoción de la investigación o el desarrollo de conocimiento del riesgo de desastres en el país.</p> <p>Una normativa en este sentido podría facilitar la labor de institutos de investigación, universidades y de la comunidad de estudiantes para fomentar la financiación de tesis o proyectos de investigación en esta temática.</p> <p>Esta normativa permite además verificar de manera indirecta la importancia relativa que el país le asigna a la investigación y el conocimiento del riesgo de desastres.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ubicar la normatividad nacional que regula los temas sobre ciencia, tecnología e innovación (o su equivalente en el país). 2. Revisar esta normatividad y verificar si existe una mención expresa sobre el conocimiento del riesgo de desastres, bien sea como un tema en sí mismo o como un resultado, meta u objetivo de la investigación que se promueve en otros temas asociados.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>La normatividad sobre ciencia tecnología e innovación (o equivalente en el país), debe contener al menos una mención expresa sobre el conocimiento del riesgo de desastres, bien sea como un tema en sí mismo de investigación o bien como un resultado, meta u objetivo de la investigación que se promueve en otros temas asociados tales como gestión ambiental, ordenamiento territorial o desarrollo, entre otros.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: La Ley 28303 de 2004, "Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica": Esta norma establece como <i>rol del Estado</i> en las actividades de ciencia, tecnología e innovación tecnológica (Artículo 5), numeral "d": la <i>"prevención de desastres naturales mediante instrumentos científico tecnológicos para el uso racional, eficiente y sustentable de los recursos naturales"</i>.</p> <p>Argentina: La Resolución conjunta N° 841/12 de los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y de Interior y Transporte, del 18 de octubre de 2012, crea la Comisión de Trabajo de Gestión de Riesgo compuesta por especialistas en la materia en el ámbito de la Secretaría de Articulación Tecnológica del MINCYT. Su objetivo principal es organizar y coordinar la intervención del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, a fin de generar <i>"... una articulación adecuada entre los actores del Sistema a efectos de contribuir con la prevención de emergencias provocadas por catástrofes naturales..."</i>. En los considerandos de la Resolución se expresa que la iniciativa tenderá a la concreción de un Banco Nacional de Eventos Extremos y Desastres y a impulsar la formación de recursos humanos en la materia.</p>

Código: IR 1B-6

Pregunta de respuesta cerrada
6. <i>¿La normatividad de ciencia, tecnología e innovación (o equivalente), incluye la promoción del conocimiento sobre el cambio climático en el país?</i>
Descripción general del indicador
<p>Se considera una buena práctica que la normativa nacional que regula el ramo de la ciencia, la tecnología y la innovación (o sistema equivalente), establezca expresamente la promoción de la investigación o el desarrollo de conocimiento sobre el cambio climático en el país.</p> <p>Una normativa en este sentido podría facilitar la labor de institutos de investigación, universidades y de la comunidad de estudiantes para fomentar la financiación de tesis o proyectos de investigación en esta temática. Esta normativa permite además verificar de manera indirecta la importancia relativa que el país le asigna a la investigación y el conocimiento sobre los aspectos del clima en el país.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ubicar la normatividad nacional que regula los temas sobre ciencia, tecnología e innovación (o equivalente en el país). 2. Revisar esta normatividad y verificar si existe una mención expresa sobre la promoción del conocimiento en cambio climático, bien sea como un tema en sí mismo o como un resultado, meta u objetivo de la investigación que se promueve en otros temas asociados.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>La normatividad sobre ciencia tecnología e innovación (o equivalente en el país), debe contener al menos una mención expresa sobre la promoción del conocimiento en cambio climático, bien sea como un tema en sí mismo o como un resultado, meta u objetivo de la investigación que se promueve en otros temas asociados tales como gestión ambiental, ordenamiento territorial o desarrollo, entre otros.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>República Dominicana: El Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2018, SEESCyT, considera en lo relativo a la estructuración del segundo componente, sobre los “Programas de Investigación, Desarrollo e Innovación”, la inclusión de tres grandes áreas (ciencias básicas, investigación y desarrollo y tecnología e innovación), 19 programas y 68 subprogramas. Los programas de “Ciencias Básicas”, son los siguientes: física; matemática; química; biología y ecología; <u>cambio climático</u> y desertificación; geología y ciencias de la tierra; ordenamiento y estudios socioeconómicos del territorio. NOTA: la formulación del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2018, es un mandato de la Ley 139-01, relativo a la formulación de las políticas científicas y tecnológicas. Asimismo responde a la necesidad de articulación del “Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico”, (SENIDT), creado mediante el Decreto 190-07.</p> <p>Chile: El Fondo de Financiamiento de Centros en Investigación en Áreas Prioritarias (FONDAP), de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile del (CONICYT) en sus "Bases Quinto Concurso Nacional de Centros en Investigación en Áreas Prioritarias - FONDAP para el año 2013", considera entre sus áreas prioritarias la siguiente: "6. <i>Recursos Hídricos: El desarrollo futuro del país demanda una creciente cantidad y calidad de recursos hídricos, en particular, para la agricultura y la minería. Bajo este escenario de creciente demanda -y eventualmente disminución de la oferta debido al cambio climático- resulta imperioso realizar investigación científica y tecnológica que permita desarrollar y adoptar soluciones innovadoras...</i>".</p>

Código: IR 1B-7

Pregunta de respuesta cerrada
7. ¿Existe normatividad para un desarrollo continuo y mantenimiento de redes de observación y monitoreo de al menos dos fenómenos naturales peligrosos en el país?
Descripción general del indicador
Para el desarrollo del proceso de identificación del riesgo (análisis y representación), es indispensable contar con información sobre los procesos naturales en series de tiempo prolongadas. Esto se logra a través de la instalación y mantenimiento continuo de redes de observación y monitoreo. En ese sentido, este indicador valora que la normativa de que se trate disponga explícitamente el desarrollo continuo y mantenimiento de redes de monitoreo para el menos 2 fenómenos peligrosos.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar cuáles son las principales redes de observación y monitoreo de fenómenos peligrosos en el país. 2. Analizar para cada red, su marco normativo. 3. Analizar si para al menos dos redes (que deben corresponder a dos fenómenos naturales distintos) de observación y monitoreo existe o no normatividad que establezca su desarrollo continuo y mantenimiento.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
En la mayoría de los países generalmente existe una red de monitoreo hidrometeorológico, (usualmente un servicio hidrometeorológico o un instituto universitario) que para efectos de este indicador dicha red debe estar soportada en normatividad, y que en esta se disponga su desarrollo continuo y mantenimiento. Se deberá confirmar la existencia de al menos otra red de monitoreo de otro fenómeno natural, tal como: (i) la red sismológica (incluye acelerógrafos y sismógrafos) ó (ii) la red de monitoreo volcánico.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: En la Ley N° 24031, Ley Orgánica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, (SENAMHI), del 14 de Diciembre de 1984, se establece en su Artículo 4 las funciones de esta entidad y entre ellas en el inciso a, las de: <i>"Organizar, operar, controlar y mantener la Red Nacional de Estaciones Meteorológicas, Hidrológicas, Agro meteorológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)..."</i>. Por otro lado, la Ley del Instituto Geofísico del Perú (IGP) expedida mediante Decreto Legislativo N° 136, del 12 de junio de 1981, establece en el Artículo 5, inciso h, como parte de las funciones del referido instituto, entre otras las de <i>"Realizar la observación, recopilación y registro permanente de parámetros de fenómenos geofísicos y mantener actualizada la información que permita mejorar el conocimiento del ambiente físico"</i>.</p> <p>Argentina: La Ley N° 19.616, del 15 de mayo de 1972, crea el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), y su misión consiste en desarrollar la Política Nacional de Prevención Sísmica. El INPRES tiene a su cargo la instalación y el mantenimiento de las redes nacionales de estaciones sismológicas y de acelerógrafos. Adicionalmente, el Decreto 1432, del 10 de octubre de 2007, crea el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Este decreto establece en el Artículo 3 sobre las funciones y competencia del SMN, en el apartado (b): <i>"Planificar, mantener y operar las redes de observación convencionales y no convencionales sobre el territorio nacional y océanos adyacentes"</i>. Finalmente, el Decreto N° 148 de 2001, crea el Instituto Nacional del Agua - INA, entidad que emite informes sobre la situación hidrológica de los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay y Bermejo, pronósticos hidrológicos para el río Paraná e informes o alertas sobre los posibles escenarios hidrológicos en la cuenca del Plata.</p>

Pregunta de respuesta cerrada
8. ¿La normatividad del sector ambiental define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?
Descripción general del indicador
Este indicador busca determinar el grado de involucramiento del sector ambiental tanto en materia de conocimiento del riesgo de desastres, tanto como el riesgo asociado con posibles efectos adversos derivados de los cambios en los patrones del clima. Para ello, se deberá investigar si la normatividad del sector dispone estas competencias.
Debido a la naturaleza del sector ambiental, este indicador incluye tanto el análisis del riesgo de desastres como la identificación y análisis de efectos adversos del cambio climático.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar el cuerpo normativo que regula el sector ambiental en el país (leyes, decretos, etc.) 2. Analizar dentro del cuerpo normativo los aspectos que tienen que ver con el análisis de riesgo, incluyendo la normativa sobre cambio climático. 3. Dentro de ese cuerpo normativo, analizar si efectivamente se definen responsabilidades para mejorar el conocimiento del riesgo de desastres, incluyendo el riesgo derivado de cambios en los patrones del clima.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Se debe evidenciar normatividad vigente el sector ambiental que de forma expresa indique las competencias para realizar estudios o análisis de riesgo en el ámbito de las competencias sectoriales. Por ejemplo, en temas como incendios forestales se deberá analizar si la normativa del sector ambiental ordena realizar estudios sobre pérdidas probables asociadas con este riesgo. Otros casos que pueden verificarse como condición positiva se relacionan con aspectos de cambio climático, por ejemplo si la normatividad ambiental define responsabilidades frente a la identificación de impactos probables futuros.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: El Decreto Supremo N° 086-2003-PCM, del 27 de octubre de 2003, en su numeral VI Líneas Estratégicas, contiene once líneas de acción. La primera de ellas, incluye como objetivo estratégico marcado con el numeral 1.3 el siguiente: "<i>Fomento de investigaciones sobre riesgos asociados al cambio climático...</i>". Asimismo, el cumplimiento del indicador se complementa a través del Plan de Acción de Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático, aprobado por Resolución Ministerial N° 238-2010-MINAM, del 2 de diciembre de 2010, y que en el apartado de Introducción expresa como parte de los objetivos de este Plan el "<i>Fortalecimiento de los sistemas de vigilancia del clima e Investigación: actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico de los gobiernos regionales e instituciones de investigación del país, resaltando la caracterización de cuencas prioritarias y análisis de vulnerabilidad de los sectores económicos</i>". Asimismo, dispone en su Capítulo III, Plan de Acción por Líneas Temáticas, numeral 3.1, sobre los Objetivos Estratégicos del Plan, y refiere como Objetivo Específico IV, "<i>Fortalecer el sistema de vigilancia y predicción de fenómenos de origen natural (meteorológico, hidrológico y/u oceanográfico)</i>". De igual forma, establece prioridades tales como: análisis del impacto del cambio climático en los recursos hídricos, en los servicios ambientales, en la biodiversidad, y otros.</p>
<p>Colombia: La Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones, define en el Artículo 5, las funciones del Ministerio del Medio Ambiente entre las que se enfatiza la contenida en el numeral 35 "<i>Hacer evaluación, seguimiento y control de los factores de riesgo ecológico y de los que puedan incidir en la ocurrencia de desastres naturales y coordinar con las demás autoridades las acciones tendientes a prevenir la emergencia o a impedir la extensión de sus efectos</i>". Asimismo, en el Artículo 31, numeral 23, se establece como responsabilidad de las Corporaciones Autónomas Regionales, la de "<i>Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirles en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con las administraciones municipales o distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación</i>".</p>

Código: IR 1B-9

Pregunta de respuesta cerrada
9. <i>¿La normatividad del sector agricultura, define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?</i>
Descripción general del indicador
El indicador busca establecer si la normatividad del sector agricultura dispone competencias a propósito de las acciones de identificación del riesgo con cargo al propio sector. La base conceptual de este indicador radica en el reconocimiento que los procesos de la gestión del riesgo deben ser responsabilidad de cada ministerio o sector en el ámbito de sus competencias. No debe confundirse con el indicador que indaga por este mismo reconocimiento en la normatividad expresa de GRD, es decir, aquí se debe analizar el mismo caso pero <u>desde la normatividad sectorial</u> .
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normativa del sector relacionada con gestión del riesgo y con cambio climático. 2. Analizar si en dicha normatividad se establecen competencias para el sector agricultura, específicamente para realizar análisis del riesgo de desastre y de los efectos adversos del CC que puedan afectar su infraestructura o funcionamiento.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Es común que la normatividad del sector agricultura establezca competencias en materia de preparativos para respuesta, sin embargo, no debe confundirse esto ni la formulación de un plan sectorial de emergencia, con las actividades propias de un análisis del riesgo, lo que implica el estudio tanto de la amenaza, como de la exposición y la vulnerabilidad.</p> <p>Como mínimo, la condición se cumple al verificarse que en la normativa del sector agricultura, vigente al momento de aplicarse el iGOPP, efectivamente se establezcan competencias específicas para realizar actividades de análisis o conocimiento del riesgo de desastre, o bien, de los efectos adversos del CC.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: el sector agricultura cuenta con un instrumento estratégico: el "Plan de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático en el sector agrario 2012-2021" aprobado por RM N° 0265 - 2012-AG. Este Plan contiene el Eje Estratégico N°1 de Investigación, Tecnología e Información para la GRD y ACC que contiene cuatro lineamientos de política, entre ellos: <i>Promover y Desarrollar la investigación científica tecnológica sobre vulnerabilidad y riesgos climáticos actuales y futuros</i>. El sector agricultura cuenta con un instrumento estratégico denominado Plan Nacional de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrario período 2012-2021 (PLANGRACC-A), aprobado por Resolución Ministerial N° 0265-2012-AG, emitido el 6 de agosto del 2012. Este Plan contiene el Eje Estratégico N°1 de Investigación, Tecnología e Información para la GRD y ACC, objetivo específico 1.2. Información Agrohidrometeorológica (...), Acción estratégica 1.2.1, "Generar información hidroagrometeorológica a nivel regional para el análisis de riesgos climáticos", en los lineamientos de política del mismo Eje Estratégico 1, se prevé "<i>Promover y desarrollar la investigación científica tecnológica sobre vulnerabilidad y riesgos climáticos actuales y futuros para fortalecer la estrategias de adaptación al Cambio Climático, programa de transferencia de tecnología productiva (variedades de cultivo y ganado adaptados al Cambio Climático) y reducción del riesgo</i>".</p> <p>México: La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, del 7 de diciembre de 2001, prevé en su Artículo 131 que "<i>El Gobierno Federal formulará y mantendrá actualizada una Carta de Riesgo en cuencas hídricas, a fin de establecer los programas de prevención de desastres, que incluyan obras de conservación de suelo, agua y manejo de avenidas...</i>". Adicionalmente, el Artículo 183 establece que "<i>para cumplir con los requerimientos de la seguridad y soberanía alimentaria, el Gobierno Federal impulsará en las zonas productoras líneas de acción en los siguientes aspectos: ...II. La identificación de los factores de riesgo asociados con los alimentos, para la elaboración de diagnósticos que permitan establecer acciones en campo o comerciales para asegurar el abasto</i>".</p>

Pregunta de respuesta cerrada
<p>10. ¿La normatividad del sector salud, define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?</p>
Descripción general del indicador
<p>El indicador busca establecer si la normatividad del sector salud dispone competencias a propósito de las acciones de identificación del riesgo con cargo al propio sector. La base conceptual de este indicador radica en el reconocimiento que los procesos de la gestión del riesgo deben ser responsabilidad de cada ministerio o sector en el ámbito de sus competencias. No debe confundirse con el indicador que indaga por este mismo reconocimiento en la normatividad expresa de GRD, es decir, aquí se debe analizar el mismo caso pero <u>desde la normatividad sectorial</u>.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar dentro de la normativa del sector salud aquella que está relacionada con la GRD y con el CC. 2. Analizar si en dicha normatividad se establecen competencias para el sector salud, específicamente para realizar análisis del riesgo de desastre y de los efectos adversos del CC que puedan afectar su infraestructura o funcionamiento. 3. Descartar aquellos casos de riesgos de orden epidemiológico o de salud pública. Así como la mención de aquellas actividades ligadas a la preparación para la respuesta.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Es común que la normatividad del sector salud establezca competencias en materia de preparativos para respuesta, pero no debe confundirse esto ni la formulación de un plan sectorial de emergencia, con las actividades propias de un análisis del riesgo, lo que implica el estudio tanto de la amenaza, como de la exposición y la vulnerabilidad.</p> <p>Como mínimo, la condición se cumple al verificarse que en la normativa del sector salud, vigente al momento de aplicarse el IGOPP, efectivamente se establezcan competencias específicas para realizar actividades de análisis o conocimiento del riesgo de desastre, o bien, de los efectos adversos del CC.</p> <p>Esta condición se puede verificar de varias formas: una de ellas consiste en la existencia de una norma específica sobre estudios de riesgo de la infraestructura hospitalaria, que de forma expresa indique que se debe evaluar el riesgo de desastres y que sea de obligatorio cumplimiento para el sector.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: La responsabilidad de realizar análisis de riesgo de desastres en el sector se define a través de la Política Nacional de Hospitales Seguros Frente a los Desastres, aprobada por Decreto Supremo N° 009-2010-SA, del 23 de abril 2010. En dicho documento se incorpora en el numeral 4, propósitos objetivos y estrategias, y se define como Objetivo Específico 3 el "<i>Mejorar los niveles de seguridad ante desastres en los establecimientos de salud existentes</i>". Asimismo, dentro de este objetivo, se considera como la actividad 1, la "<i>Evaluación de las condiciones de seguridad de los establecimientos de salud</i>", esto mediante la aplicación de un índice de seguridad.</p> <p>Costa Rica: La Directriz N° DM-EC-1237-2010, del 11 de Junio de 2010, publicado en La Gaceta N° 141, del 21 de julio 2010, Oficialización del Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional en el Ministerio de Salud, refiere en el numeral 6 "<i>Que se hace necesario integrar los esfuerzos de todas las unidades organizativas del Ministerio de Salud, para implementar y ejecutar el Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional, que le permita en su conjunto administrar los riesgos relevantes que puedan afectar la consecución de los objetivos institucionales</i>". Asimismo, el Marco orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional del Ministerio de Salud, establece en el apartado 2.3 "<i>Objetivos específicos: 1- Realizar la valoración de riesgos que permita ubicar a la institución en niveles de riesgo aceptables por medio del establecimiento de acciones o medidas que minimicen las consecuencias en caso de que los riesgos se materialicen</i>". Además, por regulación general de la Contraloría, el SEVRI incluye criterios de continuidad de servicios, bajo un enfoque de riesgo total, que incluye el de desastres.</p>

Pregunta de respuesta cerrada
11. ¿La normatividad del sector vivienda define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?
Descripción general del indicador
El indicador busca establecer si la normatividad del sector de la vivienda dispone competencias a propósito de que se deban realizar acciones de identificación del riesgo con cargo al propio sector. La base conceptual de este indicador radica en el reconocimiento de que los procesos de la gestión del riesgo deben ser responsabilidad de cada ministerio o sector en el ámbito de sus competencias. No debe confundirse con el indicador que indaga por este mismo reconocimiento en la normatividad expresa de GRD, es decir, aquí se debe analizar el mismo caso pero <u>desde la normatividad sectorial</u> .
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar si en el país existe una normatividad vigente del sector de la vivienda. 2. Analizar si en esta normativa se establecen competencias específicas para el sector para llevar a cabo el análisis del riesgo de desastres.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Es probable que la normatividad del sector de la vivienda establezca competencias en materia de preparativos para respuesta, sin embargo, no debe confundirse esto ni la formulación de un plan sectorial de emergencia, con las actividades propias de un análisis del riesgo, lo que implica el estudio tanto de la amenaza, como de la exposición y la vulnerabilidad.</p> <p>Como mínimo, la condición se cumple al verificarse que en la norma del sector de la vivienda, vigente al momento de aplicarse el iGOPP, efectivamente se establezcan competencias específicas (de forma explícita) para realizar actividades de análisis de riesgo de desastre o análisis de CC de efecto adverso o actividades de sensibilización.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: La Norma que define la responsabilidad de realizar análisis de riesgo de desastres en el sector vivienda se encuentra en el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2011-VIVIENDA, el 16 de junio de 2011, en cuyo Capítulo X de la prevención y reducción de riesgos en el desarrollo urbano, Artículo 27, Incorporación del análisis de riesgos en la formulación del PDU (Plan de Desarrollo Urbano), establece: "<i>En los procesos de formulación de PDU, PDM y/o EU, en forma complementariamente a las normas vigentes en materia de Defensa Civil, se debe incorporar el análisis de riesgos con el objetivo de reducirlos, considerando los procesos siguientes: 27.1 Identificación, evaluación y localización de los peligros... 27.2 Análisis de Vulnerabilidad...27.3 Análisis de Riesgo...</i>", entre otros artículos relativos al análisis de riesgos.</p> <p>Costa Rica: La Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 2012 – 2030, del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, refiere entre los principales desafíos del sector: "<i>En el campo Ambiental: Afectación de viviendas por inundaciones, deslizamientos y sismos, cada año. Limitaciones en la aplicación de políticas eficaces para mitigar los efectos del cambio climático, lo cual prevé deterioro en la situación, en poblados ubicados en zonas de alto riesgo y vulnerabilidad. Algunos gobiernos locales otorgan permisos de construcción en sitios que tienen riesgos naturales o antrópicos. En muchas ocasiones no incorporan la variable riesgo en instrumentos de planificación territorial, por lo que no la consideran al momento del otorgamiento de permisos...</i>". Por ello considera dentro del Eje Ambiental - El derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, debe tener resonancia en el desarrollo de la vivienda sustentable. Esta finalidad superior se recoge en la Política, al proponer que la sociedad costarricense desarrollará asentamientos humanos establecidos en sitios que no presenten riesgo ni amenaza, que incrementen su sostenibilidad ambiental y que contribuyan con las estrategias sobre el cambio climático. Los subtemas que contempla el eje Ambiental son los siguientes: a) Prevención del riesgo, b) Viviendas afectadas por desastres naturales c) Cambio climático, d) Gestión residencial del recurso hídrico.</p>

Pregunta de respuesta cerrada
12. ¿La normatividad del sector educación define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?
Descripción general del indicador
El indicador busca establecer si la normatividad del sector de la educación dispone competencias a propósito de las acciones de identificación del riesgo con cargo al propio sector. La base conceptual de este indicador radica en el reconocimiento que los procesos de la gestión del riesgo deben ser responsabilidad de cada ministerio o sector en el ámbito de sus competencias. No debe confundirse con el indicador que indaga por este mismo reconocimiento en la normatividad expresa de GRD, es decir, aquí se debe analizar el mismo caso pero <u>desde la normatividad sectorial</u> .
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar dentro de la normativa del sector de la educación aquella que está relacionada con la GRD o CC. 2. Analizar si en dicha normatividad se establecen competencias para el sector de la educación, específicamente para realizar análisis de riesgo. 3. Descartar aquellos casos de actividades ligadas a la preparación para la respuesta u otras ajenas al análisis de riesgos.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Es común que la normatividad del sector de la educación establezca competencias en materia de preparativos para respuesta, sin embargo, no debe confundirse esto con las actividades propias de un análisis del riesgo que implican el estudio tanto de la amenaza, como de la exposición y vulnerabilidad.</p> <p>Como mínimo, la condición se cumple al verificarse que en la norma del sector de la educación, vigente al momento de aplicarse el iGOPP, efectivamente se establezcan competencias específicas (de forma explícita) para realizar actividades de análisis o conocimiento del riesgo.</p> <p>Aquí aplica el mismo principio del indicador sobre el sector salud, es decir que puede haber más de una forma de considerar positiva la condición: (i) si se establece una norma que de forma expresa establezca que se analice el grado de vulnerabilidad (o riesgo) del sector en general, o (ii) se establece como una responsabilidad expresa analizar el grado de riesgo de las escuelas o establecimientos educativos.</p> <p>NOTA: no debe confundirse con el indicador en reducción del riesgo que pregunta por temas curriculares, aquí se está hablando de conocimiento del riesgo en los establecimientos educativos.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>México: La Ley General de Infraestructura Física Educativa, del 1 de febrero de 2008, dispone en su Artículo 2 "El objeto de la ley es regular la infraestructura física educativa al servicio del sistema educativo nacional, estableciendo los lineamientos generales para: I. La construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio del sistema educativo nacional... IV. La creación de mecanismos que permitan prevenir y dar respuesta a las contingencias derivadas de desastres naturales en la infraestructura física educativa nacional...". Finalmente, el Artículo 11 señala que "En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE... se asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, y se tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población".</p> <p>Costa Rica: El Decreto Ejecutivo N° 36451-MEP de la Organización Administrativa de las Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública, del 7 de febrero de 2001, contiene: "Artículo 41. Funciones del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo... c) Planificar, coordinar y ejecutar el Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucional (SEVRI-MEP). d) Desarrollar, implementar y actualizar una base de datos relacionados al riesgo de desastre y riesgo social en las diversas dependencias del Ministerio de Educación Pública. e) Jerarquizar los centros educativos que se enfrentan a mayores condiciones de desastre y riesgo...".</p>

Pregunta de respuesta cerrada
13. ¿La normatividad del sector turismo, define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?
Descripción general del indicador
El indicador busca establecer si la normatividad del sector turismo dispone competencias a propósito de las acciones de identificación del riesgo con cargo al propio sector. La base conceptual de este indicador radica en el reconocimiento que los procesos de la gestión del riesgo deben ser responsabilidad de cada ministerio o sector en el ámbito de sus competencias. No debe confundirse con el indicador que indaga por este mismo reconocimiento en la normatividad expresa de GRD, es decir, aquí se debe analizar el mismo caso pero <u>desde la normatividad sectorial</u> .
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar dentro de la normativa del sector turismo aquella que está relacionada con GRD y el CC. 2. Analizar si en dicha normatividad se establecen competencias para el sector turismo, específicamente para realizar análisis del riesgo, considerando al menos un tipo de riesgo por fenómenos naturales (sismicidad, tsunamis, eventos hidrometeorológicos, etc.) 3. Descartar aquellos casos de actividades ligadas a la preparación para la respuesta u otras ajenas al análisis de riesgo.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Es común que la normatividad del sector turismo establezca competencias en materia de preparativos para respuesta, sin embargo no debe confundirse esto con las actividades propias de un análisis del riesgo, que implican el estudio tanto de la amenaza, como de la exposición y vulnerabilidad.</p> <p>Como mínimo, la condición se cumple al verificarse que en la normativa del sector turismo, vigente al momento de aplicarse el iGOPP, efectivamente se establezcan competencias específicas (de forma explícita) para realizar actividades de análisis o conocimiento del riesgo de desastre.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>México: La Ley General de Turismo, del 17 de junio de 2009, establece en su Capítulo VII denominado Del Ordenamiento Turístico del Territorio, en su Artículo 23 que en la formulación del ordenamiento turístico del territorio deberán considerarse los siguientes criterios: “I. La naturaleza y características de los recursos turísticos existentes en el territorio nacional, así como los <u>riesgos de desastre</u>; II. La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos turísticos, la distribución de la población y las actividades económicas predominantes... y V. El impacto turístico de nuevos desarrollos urbanos, asentamientos humanos, obras de infraestructura y demás actividades”. Adicionalmente, en el Artículo 28 dispone: “Los programas de ordenamiento turístico local serán expedidos por las autoridades de los Estados y del Distrito Federal con la participación de los Municipios y tendrán por objeto: I. Determinar el área a ordenar, describiendo sus recursos turísticos; incluyendo un análisis de riesgos de las mismas...”.</p> <p>Argentina: La Ley No. 25.997, Nacional de Turismo, del 7 de enero de 2005, establece en su Artículo 7 los deberes de la Secretaría de Turismo, distinguiéndose el "a) Fijar las políticas nacionales de la actividad turística con el fin de planificar, programar, promover, capacitar, preservar, proteger, generar inversión y fomentar el desarrollo en el marco de un plan federal estratégico a presentarse dentro de los doce (12) meses siguientes a la promulgación de la presente ley". El Decreto 1297/2006 de la Secretaría de Turismo, que aprueba la reglamentación de la Ley Nacional de Turismo N° 25.997, del 27 de septiembre de 2006, indica en su Artículo 4 sobre ese plan federal estratégico que "La elaboración y actualización del Plan Federal Estratégico... receptando criterios de participación sistemática de los actores del sector para la evaluación y actualización periódica trianual del marco estratégico de dicho plan". La Resolución 316/2012 del Ministerio de Turismo, que aprueba el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2020, del 14 de diciembre de 2012, señala en su Artículo 1 que "Dase por</p>

presentada la actualización del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2020 (PFETS 2020), en los términos de los artículos 7° inciso a) de la Ley Nacional de Turismo N° 25.997 y 4° de la Reglamentación de dicha ley aprobada por el Decreto N° 1.297 de fecha 27 de septiembre de 2006", y en el Artículo 2 presenta ese Plan como Anexo I. El Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable, actualización 2012-2020, Anexo I de la Resolución 316/2012, define 23 Programas Federales con sus indicadores y sus medios de verificación. En el Programa Federal 16, Mejora de la Competitividad, numeral 16.2, Desarrollo de Nuevos Corredores, se estableció como una de sus acciones principales la de "Realizar acciones para prevenir y mitigar los potenciales impactos ambientales directos, indirectos y acumulativos del Programa, además de estudios de capacidad de carga, integración de la variable cambio climático a través del análisis de la huella ecológica del visitante, establecimiento y monitoreo de indicadores de sostenibilidad, evaluaciones ambientales, fortalecimiento de planes de manejo y de uso público de Áreas Protegidas, planificación territorial y de sostenibilidad urbana".

Pregunta de respuesta cerrada
14. ¿La normatividad del sector transporte (o sector equivalente), define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?
Descripción general del indicador
El indicador busca establecer si la normatividad del sector transporte dispone competencias a propósito de las acciones de identificación del riesgo con cargo al propio sector. La base conceptual de este indicador radica en el reconocimiento que los procesos de la gestión del riesgo deben ser responsabilidad de cada ministerio o sector en el ámbito de sus competencias. No debe confundirse con el indicador que indaga por este mismo reconocimiento en la normatividad expresa de GRD, es decir, aquí se debe analizar el mismo caso pero <u>desde la normatividad sectorial</u> .
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar dentro de la normativa del sector del transporte aquella que está relacionada con la GRD y con el CC. 2. En el caso que el sector del transporte esté ligado con otros subsectores, como pudieran ser el de la energía, telecomunicaciones u otros diversos, se deberá tener especial cuidado que esa normativa relacionada con la GRD y CC, se encuentre sin lugar a dudas dentro de la materia del transporte como política pública del gobierno nacional o federal. 3. Analizar si en dicha normatividad se establecen competencias para el sector del transporte, específicamente para realizar análisis del riesgo de desastres que puedan afectar su infraestructura o funcionamiento. Esto, considerando al menos un tipo de riesgo por fenómenos naturales (deslizamientos, sismicidad, tsunamis, eventos hidrometeorológicos, etc.). 4. Descartar aquellos casos de actividades ligadas a la preparación para la respuesta u otras ajenas al análisis de riesgo.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Es probable que la normatividad del sector del transporte establezca competencias en materia de preparativos para respuesta, sin embargo, no debe confundirse esto con las actividades propias de un análisis del riesgo de desastre, que implica el estudio tanto de la amenaza, como de la exposición y vulnerabilidad.</p> <p>Como mínimo, la condición se cumple al verificarse que en la normativa del sector del transporte, vigente al momento de aplicarse el iGOPP, efectivamente se establezcan competencias específicas (de forma explícita) para realizar actividades de análisis o conocimiento del riesgo de desastre, o bien, de los efectos adversos del CC.</p> <p>Verificar si existe alguna normatividad que defina la realización de estudios de riesgo (análisis) específicamente sobre la infraestructura vial del país, esto incluye la determinación de puntos críticos en las rutas, la cuantificación de costos tanto por eventos pasados como proyecciones a futuro (escenarios).</p> <p>Es común que se hagan estudios de riesgo pero luego de ocurrido un evento que haya generado daños, sin embargo lo que privilegia este indicador es si normatividad del sector del transporte ha establecido la competencia para realizar los estudios de riesgo. Esto puede cumplimentarse por normas específicas y no necesariamente por la normativa general.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>República Dominicana: La Orden Departamental No. 76/01 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que crea el Departamento de Gestión Ambiental y de Riesgo, del 21 de agosto de 2001, dispone en el Artículo 1 que “<i>Se crea el Departamento de Gestión Ambiental y de Riesgo de la SEOPC el cual dependerá del Despacho del Secretario de Estado y tendrá los propósitos y funciones siguientes: ... c) Gestionar la contratación de la elaboración de los estudios de impacto ambiental y de riesgo de los proyectos que ejecute la SEOPC...</i>”.</p> <p>Argentina: La Resolución N° 1604/2007, de la Dirección Nacional de Viabilidad (DNV), que aprueba el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales del Año 2007 (MEGA II), del 2 de octubre del 2007, que bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas y del Ministerio de Planificación Federal,</p>

Inversión Pública y Servicios, ordena en el Artículo 2 la aplicación obligatoria del MEGA II, en el ámbito jurisdiccional de la DNV, "... para la planificación, proyecto, construcción, mantenimiento y operación de la Red Vial Nacional y en toda otra obra que fuera financiada a través de la DNV". El MEGA II/2007, en el Capítulo 3 con el título de Plan de Manejo Ambiental (PMA), y que describe como "... la herramienta operativa que contempla la ejecución de prácticas ambientales, prevención de riesgos, de contingencias y la implementación de sistemas de información ambiental para el desarrollo de las unidades operativas o proyectos, a fin de cumplir... en concordancia con las Resoluciones y/o Dictámenes de aceptación que emitan las Autoridades Ambientales competentes". El PMA contempla durante el ciclo de la obra vial 4 etapas: proyecto, obra, mantenimiento y operación, y en cada uno de estos corresponderá un tipo de PMA y distintos objetivos (ver Cuadro 15) el Manual establece la obligatoriedad de realizar un diagnóstico (evaluación) ambiental que considera el análisis de riesgos tanto de las obras sobre el medio como de éste sobre las obras.

Código: IR 1B-15

Pregunta de respuesta cerrada
<i>15. ¿La normatividad del sector agua y saneamiento (o equivalente), define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?</i>
Descripción general del indicador
El indicador busca establecer si la normatividad del sector que corresponde al agua y saneamiento dispone competencias a propósito de las acciones de identificación del riesgo con cargo al propio sector. La base conceptual de este indicador radica en el reconocimiento que los procesos de la gestión del riesgo deben ser responsabilidad de cada ministerio o sector en el ámbito de sus competencias. No debe confundirse con el indicador que indaga por este mismo reconocimiento en la normatividad expresa de GRD, es decir, aquí se debe analizar el mismo caso pero <u>desde la normatividad sectorial</u> .
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar dentro de la normativa del sector de agua y saneamiento aquella que está relacionada con la GRD y con el CC. 2. Analizar si en dicha normatividad se establecen competencias para el sector del agua y saneamiento, específicamente para realizar análisis del riesgo de desastre. 3. Descartar aquellos casos de actividades ligadas a la preparación para la respuesta u otras ajenas al análisis de riesgo.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>El sector agua y saneamiento es de vital importancia para el desarrollo de cualquier país. Se deberá identificar alguna normativa que establezca que deban realizarse estudios sobre el nivel de exposición y de vulnerabilidad del sector frente a eventos naturales potencialmente peligrosos (sismos, vulcanismo, deslizamientos, fenómenos hidrometeorológicos, etc.)</p> <p>Esta normativa puede involucrar a empresas prestadoras del servicio público de agua y saneamiento incluso en los casos que este servicio esté concesionado. Puede darse el caso que la normativa esté contenida dentro de las normas básicas que rigen los contratos de concesión, lo que debe quedar claro es si está definida la responsabilidad de identificar el riesgo, indistintamente de quién sea el actor (público o privado) que debe hacerlo. Puede ser una normativa contenida dentro de otras que rigen el actuar del sector.</p> <p>Es común que la normatividad del sector del agua y saneamiento establezca competencias en materia de preparativos para respuesta, sin embargo, no debe confundirse con las actividades propias de un análisis del riesgo que implica el estudio tanto de la amenaza, como de la exposición y vulnerabilidad.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Colombia: La Resolución N° 1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo Económico, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, establece en el Artículo 36 que “...para proyectos de municipios de nivel de complejidad alto, es necesario establecer de manera general las características de las principales ... con el fin de identificar las fallas geológicas activas que se localicen en el área circundante del proyecto y el grado de sismicidad a que puede estar sometido”; y en el 103 que “Entre los aspectos que deben tenerse en cuenta para el desarrollo de proyectos de potabilización de agua nuevos, se encuentra el de ubicación de la planta, concretamente “2) Investigación geotécnica previa para establecer las condiciones geológicas del sitio en función de riesgos de desplazamiento de masa, evitando las fallas geológicas y teniendo en cuenta además el riesgo de sismicidad de la región”. Por otro lado, en el Artículo 197 determina el análisis de la vulnerabilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento básico, el cual servirá de base para la realización del plan de contingencias: “Para estimar la vulnerabilidad de un sistema o componente se deben seguir los siguientes pasos: 1. Identificación y evaluación de amenazas. 2. Identificación de componentes del sistema. 3. Estimación del potencial de daños. 4. Categorización de la severidad de los daños potenciales estimados”. Por último, el Artículo 201 se refiere al plan de contingencia afirmando que, se “debe basar en los potenciales escenarios de riesgo del sistema, que deben obtenerse del análisis de vulnerabilidad realizado de acuerdo con las amenazas que pueden afectarlo gravemente durante su vida útil. El plan de contingencia debe incluir procedimientos generales de atención de emergencias y procedimientos específicos para cada escenario de riesgo identificado”.</p>

México: La Ley de Aguas Nacionales, del 1° de diciembre de 1992, asigna esta responsabilidad a la Comisión Nacional del Agua -órgano administrativo desconcentrado de la SEMARNAT que tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en materia hídrica y constituirse como el Órgano Superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico; y en su artículo 9, fracción XLIII, concede la facultad de “... *Realizar las declaratorias de clasificación de zonas de alto riesgo por inundación y elaborar los atlas de riesgos conducentes...*”.

Código: IR 1B-16

Pregunta de respuesta cerrada
<i>16. ¿La normatividad del sector telecomunicaciones (o equivalente), define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?</i>
Descripción general del indicador
El indicador busca establecer si la normatividad del sector de las telecomunicaciones dispone competencias a propósito de las acciones de identificación del riesgo con cargo al propio sector. La base conceptual de este indicador radica en el reconocimiento que los procesos de la gestión del riesgo deben ser responsabilidad de cada ministerio o sector en el ámbito de sus competencias. No debe confundirse con el indicador que indaga por este mismo reconocimiento en la normatividad expresa de GRD, es decir, aquí se debe analizar el mismo caso pero <u>desde la normatividad sectorial</u> .
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar dentro de la normativa del sector de las telecomunicaciones aquella que está relacionada con la GRD y el CC. 2. En el caso que el sector de las telecomunicaciones esté ligado con otros subsectores, como pudieran ser el de la energía, transportes u otros diversos, se deberá tener especial cuidado que esa normativa relacionada con la GRD y CC, se encuentre sin lugar a dudas dentro de la materia de las telecomunicaciones como política pública del gobierno nacional o federal. 3. Analizar si en dicha normatividad se establecen competencias para el sector de las telecomunicaciones, específicamente para realizar el análisis del riesgo de desastres y de los efectos adversos del CC que puedan afectar su infraestructura o funcionamiento. Esto, considerando al menos un tipo de riesgo por fenómenos naturales (deslizamientos, sismicidad, tsunamis, eventos hidrometeorológicos, etc.). 4. Descartar aquellos casos de actividades ligadas a la preparación para la respuesta u otras ajenas al análisis de riesgo.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Es probable que la normatividad del sector de las telecomunicaciones establezca competencias en materia de preparativos para respuesta, sin embargo, no debe confundirse esto con las actividades propias de un análisis del riesgo, lo que implica el estudio tanto de la amenaza, como de la exposición y vulnerabilidad.</p> <p>Como mínimo, la condición se cumple al verificarse que en la normativa del sector de las telecomunicaciones, vigente al momento de aplicarse el iGOPP, efectivamente se establezcan competencias específicas (de forma explícita) para realizar actividades de análisis o conocimiento del riesgo de desastre, o bien, de los efectos adversos de CC.</p> <p>Es común que se hagan estudios de riesgo pero luego de ocurrido un evento que haya generado daños, sin embargo lo que privilegia este indicador es si normatividad del sector telecomunicaciones ha establecido la competencia para realizar los estudios de riesgo. Esto puede cumplimentarse por normas específicas y no necesariamente por la normativa general.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
No se pudo encontrar un ejemplo en la región, por lo que sugiere indagar por la existencia de normatividad que defina responsabilidades para identificar riesgos en este sector. Puede darse el caso que la normativa esté contenida dentro de las normas básicas que rigen los contratos de concesión, lo que debe quedar claro es que esté definida la responsabilidad de identificar el riesgo, indistintamente de quién sea el actor (público o privado) que debe hacerlo. Puede ser una normativa contenida dentro de otras que rigen el actuar del sector.

Pregunta de respuesta cerrada
17. ¿La normatividad del sector energía (o equivalente), define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?
Descripción general del indicador
El indicador busca establecer si la normatividad del sector energía dispone competencias a propósito de las acciones de identificación del riesgo con cargo al propio sector. La base conceptual de este indicador radica en el reconocimiento de que los procesos de la gestión del riesgo deben ser responsabilidad de cada ministerio o sector en el ámbito de sus competencias. No debe confundirse con el indicador que indaga por este mismo reconocimiento en la normatividad expresa de GRD, es decir, aquí se debe analizar el mismo caso pero <u>desde la normatividad sectorial</u> .
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar dentro de la normativa del sector de la energía aquella que está relacionada con la GRD y con el CC. 2. En el caso que el sector de la energía esté ligado con otros subsectores, como pudieran ser el del transporte, telecomunicaciones u otros diversos, se deberá tener especial cuidado que esa normativa relacionada con la GRD y CC, se encuentre sin lugar a dudas dentro de la materia de la energía como política pública del gobierno nacional o federal. 3. Analizar si en dicha normatividad se establecen competencias para el sector de la energía, específicamente para realizar análisis del riesgo de desastres que puedan afectar su infraestructura o funcionamiento. Esto, considerando al menos un tipo de riesgo por fenómenos naturales (deslizamientos, sismicidad, tsunamis, eventos hidrometeorológicos, etc.). 4. Descartar aquellos casos de actividades ligadas a la preparación para la respuesta u otras ajenas al análisis de riesgo.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Es probable que la normatividad del sector de la energía establezca competencias en materia de preparativos para respuesta, sin embargo, no debe confundirse esto con las actividades propias de un análisis del riesgo que implica el estudio tanto de la amenaza, como de la exposición y vulnerabilidad.</p> <p>Como mínimo, la condición se cumple al verificarse que en la normativa del sector de la energía, vigente al momento de aplicarse el iGOPP, efectivamente se establezcan competencias específicas (de forma explícita) para realizar actividades de análisis o conocimiento del riesgo de desastre, o bien, de los efectos adversos del CC.</p> <p>A la hora de indagar por el cumplimiento de este indicador es importante tener en cuenta que el sector energía abarca no sólo a los operadores del servicio (que en muchos casos son privados), sino que además incluye la generación, transmisión y comercialización de la energía (incluyendo las distintas fuentes que pueden existir en cada país).</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>México: El Manual Institucional de Procedimientos Administrativos para la Atención de Desastres, del 2009, hace referencia a la responsabilidad de la Comisión Nacional de Electrificación (CFE) de realizar el análisis de riesgo de su infraestructura. Esta responsabilidad se hace explícita a través de la solicitud que realiza en forma anual el Director de Operaciones de la CFE a las subdirecciones de distribución, generación y transmisión para llevar adelante el análisis del riesgo que es parte de la política de aseguramiento de la institución.</p>

Código: IR 1B-18

Pregunta de respuesta cerrada
18. ¿Existe al menos una norma que defina cuales son edificaciones esenciales, indispensables o infraestructura crítica del país?
Descripción general del indicador
El propósito de este indicador es el reconocimiento como una buena práctica en los países, la inclusión en una norma que determinadas edificaciones e infraestructura crítica, por considerarlas indispensables o esenciales dada su importancia vital y estratégica en casos de emergencia o desastre -ya sea por los servicios que presta a la sociedad o la utilidad que representan en las tareas de gestión de desastres- deban de diseñarse, construirse y recibir mantenimiento aplicando parámetros de mayor exigencia que el resto de las edificaciones, de tal manera que aseguren su seguridad y funcionalidad en cualquier tiempo y circunstancia.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar las normativas sobre el diseño y la construcción de edificaciones e infraestructuras. 2. Analizar si en dichas normativas se han determinado cuáles edificaciones o infraestructura son consideradas críticas, indispensables o esenciales, y por lo tanto sujetas a parámetros de construcción más exigentes, a diferencia de otras edificaciones regulares.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Normalmente las edificaciones esenciales o indispensables son los hospitales, estaciones de bomberos, de policía, del ejército y escuelas. Como infraestructura crítica se suelen considerar las centrales de producción eléctrica, de hidrocarburos, los poliductos, las refinerías de petróleo, los puertos (aéreos, marítimos o fluviales), entre otros.</p> <p>Se debe analizar si en la normativa que establece los procesos constructivos (diseño y localización) se mencionan estas edificaciones para un tratamiento “especial”.</p> <p>NOTA: en algunos países lo más frecuente es que estas infraestructuras vengan definidas en el código de construcciones sismo-resistentes, pero también podrían ser definidas en normas de construcción relacionadas con otros fenómenos, por ejemplo los de tipo meteorológico (tales como los vientos).</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Guatemala: La Norma para la Reducción de Desastres N° 1-NRD-1 emitida por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional -CONRED en 2010, sobre "Requerimientos estructurales para obras críticas, esenciales e importantes", define explícitamente: a) Obra crítica: <i>"Aquellas que son indispensables para el desarrollo socioeconómico de grandes sectores de la población. Las que de fallar o colapsar pondrían en peligro directa o indirectamente a gran número de personas..."</i>; b) Obras esenciales: <i>"Éstas deben permanecer operantes durante y después de un desastre o evento adverso. Pertenecen a esta categoría las obras estatales o privadas..."</i>; c) Obra Importante: <i>"Son aquellas que albergan o pueden afectar a gran número de personas; donde los ocupantes estén restringidos a desplazarse, dónde se prestan servicios importantes (pero no esenciales después de un desastre) a gran número de personas o entidades, obras que albergan valores culturales reconocidos o equipo de alto costo. Pertenecen a esta categoría, entre otras..."</i>.</p> <p>Colombia: La Ley 400 de 1997, por la cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo Resistentes, en el Título I, Artículo 4, numeral 16 se definen las edificaciones indispensables, como <i>"... aquellas edificaciones de atención a la comunidad que deben funcionar durante y después de un sismo, cuya operación no puede ser trasladada rápidamente a un lugar alternativo, tales como hospitales de niveles de complejidad 2 y 3 y centrales de operación y control de líneas vitales"</i>. El Artículo 54, se refiere a que la condición de edificaciones indispensables localizadas en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia, será actualizada por lo que se deberá <i>"... evaluar su vulnerabilidad sísmica, de acuerdo con los procedimientos que habrá de incluir el Título A de la reglamentación, en un lapso no mayor de tres (3) años contados a partir de la vigencia de la presente ley"</i>. La última actualización de la Ley 400 de 1997, se formalizó a través del Decreto N° 926 de 2010, por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo resistentes NSR-10, introduciendo el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 actualizado en un Anexo de ese Decreto. Esta última actualización hizo énfasis en el concepto de edificaciones indispensables incluyendo escuelas y otras edificaciones en esa categoría especial.</p>

Panamá: El Reglamento para el Diseño Estructural en la República de Panamá aprobado a través de la resolución No. JTIA-639, el 29 de septiembre de 2004, en el numeral 1.10, dentro de la Tabla 1.1 denominada Clasificación de Edificios y otras Estructuras para Carga de Viento y Sismo, identifica en la Categoría III Edificios y otras estructuras que representan una amenaza significativa para la vida humana, en caso de falla; y la Categoría IV, Edificios y otras estructuras designadas como "facilidades esenciales".

Código: IR 1C-1

Pregunta de respuesta cerrada
<i>1. ¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que las unidades de gestión territorial son responsables de la evaluación del riesgo de desastres en sus respectivos territorios?</i>
Descripción general del indicador
<p>Este indicador se refiere a un criterio de calidad de la normatividad nacional de GRD, por el que se reconoce la importancia que la gestión del riesgo sea ejecutada no sólo desde el gobierno nacional, central o federal, sino que las Unidades de Gestión Territorial (UGT) tengan dentro de su jurisdicción competencia para el cumplimiento de determinadas funciones de gestión local del riesgo y que estas sean acordes con sus recursos y posibilidades.</p> <p>En ese sentido se valora que la normativa asigne igualmente competencia para que las UGT se puedan hacer cargo del proceso de análisis de los riesgos en el ámbito de sus jurisdicciones (ya sean regiones, estados, provincias, departamentos, municipios, cantones, etc.).</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Confirmar la existencia de una normatividad nacional específica en GRD. 2. Analizar si en dicha normatividad nacional se asignan de forma expresa competencias a los UGT frente a los procesos de la GRD. 3. Identificar si dentro de los procesos de la GRD que se asignan a las UGT se incluyen de forma específica la identificación, estimación o análisis del riesgo. 4. Descartar que la asignación de funciones de la normatividad nacional de GRD se refiera a los preparativos para desastres, respuesta o rehabilitación, y que sean ajenos al análisis de riesgo.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Debe existir una normatividad nacional en GRD que específicamente establezca competencias a las UGT sobre el proceso o actividades de análisis, identificación o estimación del riesgo.</p> <p>Ya que el régimen descentralizado en los países varía notablemente en la región, puede darse el caso que una Ley de GRD no pueda asignar responsabilidades a gobiernos autónomos cuando éstos son gobernados por normativa de más alto nivel que una Ley nacional (como sería el caso de estados que se rigen por una Constitución Federal y que gozan de plena autonomía para definir sus propias funciones y competencias). En este tipo de situaciones (estados federados), lo que debe analizarse es si la norma nacional o federal de GRD que existe reconoce como componente de la GRD el conocimiento del riesgo, y si ésta norma estipula que la GRD es una estrategia de desarrollo y por tanto relacionada o vinculada con los actores del desarrollo en los distintos niveles de gobierno (es decir el mismo espíritu de la norma pero evitando la asignación de “responsabilidades” pues sería improcedente).</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: La Ley N° 29664 que crea el SINAGERD, del 8 de febrero de 2011, en su Título III, Capítulo V, Artículo 14, Punto 14.1 establece que los gobiernos regionales y gobiernos locales, como integrantes del SINAGERD, formulan, aprueban normas y planes, evalúan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres en el ámbito de su competencia, en el marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre y los lineamientos del ente rector, en concordancia con lo establecido en la misma ley y en su reglamento. Y en virtud de que en esta ley se establecen siete procesos de la GRD, el primero de ellos lo es la "Estimación del riesgo de desastres" dentro de la cual se realiza la evaluación del riesgo de desastres.</p> <p>México: La Ley General de Protección Civil (LGPC) del 6 de junio de 2012, establece en el Artículo 19, fracción XXVIII: "<i>Promover que los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios o delegaciones, según corresponda, elaboren y mantengan actualizados sus respectivos programas de protección civil y formen parte de sus planes de desarrollo...</i>"; el Artículo 37 instruye que "<i>...en la elaboración de los programas de protección civil de las entidades federativas, municipios y delegaciones, deberán considerarse las líneas generales que establezca el Programa Nacional, así como las etapas consideradas en la Gestión Integral de Riesgos y conforme lo establezca la normatividad local en materia de planeación</i>". De acuerdo a la definición de la LGPC sobre las etapas de la Gestión Integral del Riesgo (GIR), los Programas deben incluir la identificación de los riesgos de desastre. Adicionalmente, la Ley General de Cambio Climático, del 6 de junio de 2012, dispone en su Artículo</p>

Tercero Transitorio: "... Las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, las Entidades Federativas y los Municipios deberán de implementar las acciones necesarias en Mitigación y Adaptación, de acuerdo a sus atribuciones y competencias para alcanzar las siguientes metas aspiracionales y plazos indicativos: I. Adaptación: a) En materia de protección civil, la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios deberán establecer un Programa a fin de que antes de que finalice el año 2013 se integren y publiquen el atlas nacional de riesgo, los atlas estatales y locales de riesgo de los asentamientos humanos más vulnerables ante el cambio climático...".

Código: IR 1C-2

Pregunta de respuesta cerrada
2. ¿Existe <i>normatividad que determine escalas de trabajo o niveles de resolución en que se deben zonificar las amenazas o riesgos en el territorio bien que designe un actor nacional responsable de definir la escala o resolución en que se debe realizar el análisis de riesgo para los diferentes niveles de gobierno?</i>
Descripción general del indicador
<p>Para que los resultados de análisis del riesgo sean viables y de utilidad para la siguiente fase, que son las actividades de reducción del riesgo, ese análisis del riesgo debe ser elaborado en una escala local apropiada, de manera que faciliten una toma de decisiones sobre temas tales como los de ordenamiento territorial o de inversión pública, que son los procesos fundamentales para la reducción del riesgo.</p> <p>En este caso se está valorando la importancia que se concede al tema de las escalas de trabajo. Aunque para efectos del presente indicador, no se busca en principio un valor de referencia de las escalas sino la determinación, puesta en la normativa, de dotar los mapas de amenazas o de riesgos de un valor adecuado. O bien, y en ausencia de la determinación de estas escalas de trabajo o niveles de resolución, se deberá indagar en la normatividad la disposición que determine un actor institucional que tenga la facultad, dentro de su nivel de competencias, de establecer dichas escalas en función de los diferentes niveles de gobierno.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar si la normativa de ordenamiento territorial (o proceso equivalente) aborda el tema de las escalas o la resolución en que se debe generar la información de base para el análisis de riesgo de desastre. 2. Analizar si la normativa nacional de GRD establece las escalas o niveles de resolución para el análisis del riesgo de desastres o proceso equivalente en el país. 3. Analizar si la normativa de GRD o alguna de las normativas que rigen a los institutos hidrometeorológicos o geofísicos, o la de infraestructura de datos espaciales, o la de estudios territoriales o ambientales, designa a un actor nacional como responsable de definir dichas escalas de trabajo o niveles de resolución considerando los diferentes niveles de gobierno.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Como mínimo, la normatividad debería establecer las escalas de trabajo o niveles de resolución con que se deben formular los planes de ordenamiento territorial, de manejo integrado de cuencas hidrográficas o de procesos de planificación ambiental o territorial equivalentes.</p> <p>Esto permitiría que los mapas y estudios que generen los institutos o servicios nacionales sean de utilidad práctica para los gobiernos regionales y locales que deberán formular los planes de ordenamiento territorial, de manejo integrado de cuencas o similares así como los planes o programas para la prevención o reducción de riesgos.</p> <p>Alternativamente, debería existir al menos normatividad que designe a un actor nacional como responsable de definir dichas escalas de trabajo o niveles de resolución.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>México: El Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación (RI-SEGOB) publicado en el DOF el día 2 de abril de 2013, establece en su Artículo 109 que "... <i>El Centro Nacional de Prevención de Desastres tiene las siguientes atribuciones: ... II. Integrar el Atlas Nacional de Riesgos y promover la instrumentación de un Subsistema de información sobre riesgos, peligros y vulnerabilidad, así como supervisar y, en su caso, asesorar a las Entidades Federativas para la integración de sus atlas de riesgos...</i>". El CENAPRED define los lineamientos metodológicos para formular los Atlas Estatales y Municipales de Riesgo a través de la Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos: Conceptos Básicos sobre peligros, riesgos y su representación geográfica. La Guía incluye una sección sobre las representaciones geográficas y las escalas a utilizar (sección 2.4.8.) donde establece que: "... <i>para la elaboración de atlas de riesgos se proponen dos escalas principales: para zonas urbanas (ciudades y áreas metropolitanas) 1:5,000 o mayor, y para una representación a nivel estatal, una escala menor de 1:20,000. Como parte de los parámetros que se deben de considerar para definir la escala, se encuentra la extensión territorial de la entidad federativa, la existencia de información temática y los sistemas con los que se integrará la misma.</i>"</p>

Código: IR 1C-3

Pregunta de respuesta cerrada
3. ¿Existe normatividad que establezca la obligatoriedad de la zonificación de amenazas en ciudades?
Descripción general del indicador
<p>La zonificación de las amenazas (o peligros) en las ciudades es clave para los procesos subsiguientes de reducción del riesgo.</p> <p>El indicador busca detectar si en el país se ha considerado el tema del riesgo urbano, por ejemplo en ciudades con una población superior a 100 mil habitantes (o un número <i>ad hoc</i> en función de cada país) donde se conoce que el riesgo puede estar muy concentrado.</p> <p>La zonificación de las amenazas en las ciudades puede ser considerada como una “microzonificación” cuando el proceso natural potencialmente peligroso cuenta previamente con una zonificación regional o nacional, por ejemplo en el caso de la sismicidad.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad vigente de GRD o sobre amenazas (o peligros) naturales en el país. 2. Identificar la normatividad existente sobre ordenamiento territorial, acondicionamiento territorial, desarrollo urbano o su equivalente. 3. Identificar la normatividad existente sobre diseño de edificaciones o desarrollo urbanístico. 4. Analizar en la normatividad identificada, si se ha designado la obligatoriedad de zonificar en las ciudades las áreas sujetas a amenazas (o peligros).
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Se deberá confirmar la vigencia de una normatividad que establezca la microzonificación sísmica para ciudades de determinadas características (por ejemplo población), u otra normatividad equivalente para otro tipo de amenazas que sean relevantes para el país en cuestión (por ejemplo deslizamientos o inundaciones).</p> <p>Al menos se debe identificar una norma para que el indicador sea considerado como cumplido.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Colombia: La Ley 388 de 1997, "Por la cual se modifica la Ley 9a. de 1989, y la Ley 3a. de 1991 y se dictan otras disposiciones", establece los procedimientos para la formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial a nivel municipal. De acuerdo con el Artículo 8 de esta Ley, son acciones urbanísticas, entre otras, "5. Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda". De igual manera el Artículo 12 que es parte del Contenido del componente general del plan de ordenamiento establece en el numeral 2.3 "La determinación y ubicación en planos de las zonas que presenten alto riesgo para la localización de asentamientos humanos, por amenazas o riesgos naturales o por condiciones de insalubridad". Por otro lado la Norma Sismo Resistente NSR-10, aprobada por el Decreto 926 de 2010, establece las condiciones que obligan a la implementación de zonificaciones sísmicas y los requisitos de las mismas.</p> <p>México: La Ley General de Protección Civil publicada el 6 de junio de 2012, dispone en su Artículo 83 que: "<i>El Gobierno Federal, con la participación de las entidades federativas y el Gobierno del Distrito Federal, promoverá la creación de las bases que permitan la identificación y registro en los Atlas Nacional, Estatales y Municipales de Riesgos de las zonas en el país con riesgo para la población, el patrimonio público y privado, que posibilite a las autoridades competentes regular la edificación de asentamientos</i>". Adicionalmente, establece en su Artículo 84 que: "<i>Se consideran como delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, definir las medidas para su reducción, tomando en consideración la normatividad aplicable y los Atlas municipales, estatales y el Nacional y no cuenten con la autorización de la autoridad correspondiente</i>".</p>

Código: IR 2-1

Pregunta de respuesta cerrada
<i>1. ¿Se integra la temática de riesgo de desastres en los programas curriculares de educación en al menos el nivel básico (primaria) o secundario?</i>
Descripción general del indicador
<p>Este indicador busca detectar la integración de la temática de riesgos en los programas curriculares de educación en el nivel básico (escuelas) o secundario (colegios), o niveles equivalentes en cada país.</p> <p>En algunos países la configuración de los programas curriculares del nivel básico (primaria) o secundaria (o equivalentes) son definidos nacional, central o federalmente, dependiendo del modelo político-administrativo. Sin embargo, en otros casos (por ejemplo, en los niveles territoriales descentralizados), hace falta la expedición de lineamientos generales propuestos por el sector educación nacional, central o federal. En cualquiera de los casos, se plantea verificar si los programas curriculares de educación en el nivel básico o secundario de las UGT incorporan la temática de la GRD. Bastaría que un solo territorio no cumpliera con esta integración para que se considere el indicador incumplido.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Buscar información en la página web institucional del sector educación, o en su caso realizar entrevista con funcionarios de las áreas relativas. 2. Analizar la normativa sectorial y verificar si el programa curricular del nivel básico o secundario incorpora la GRD (puede ser como un subcomponente de la educación ambiental o de ciencias sociales). 3. Confirmar, en el caso de que la competencia curricular esté trasladada a las UGT, si en los programas curriculares se ha incorporado a la GRD. No se considera cumplido el indicador, si se identifica al menos una UGT que no haya incorporado el tema en sus programas curriculares.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Debe verificarse la integración formal de la temática de la GRD en los programas curriculares de primaria o secundaria, bien a nivel nacional o a nivel de <u>todos</u> las UGT (si esta competencia ha sido transferida del nivel nacional al territorial). Si se identifica al menos una UGT que no ha incorporado el tema en sus programas curriculares entonces no se cumple el indicador.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: La Resolución Directoral N° 078-2007/ED, del 13 de febrero de 2007, aprueba la Directiva N° 015-2007-ME, titulada Directiva de Acciones de Gestión del Riesgo de Desastres en el Sistema Educativo, que reconoce la inclusión de la GRD en los programas curriculares de los diferentes niveles y modalidades de educación y señala la metodología de trabajo, incluyendo los plazos y responsables para la implementación y operativización de la institucionalización de la gestión del riesgo de desastres en el Sistema Educativo.</p> <p>Guatemala: Los contenidos del Curriculum Nacional Básico (CNB), publicados por el Ministerio de Educación en 2004, como parte de la Reforma Educativa, incluyen bajo el eje de reforma "Desarrollo Integral Sostenible", en el Eje del Curriculum 7 "Seguridad social y ambiental", los componentes: i) Riesgos naturales y sociales; ii) Prevención de desastres, y ii) Inseguridad y vulnerabilidad</p> <p>México: La Coordinación General de Protección Civil (hoy Coordinación Nacional de Protección Civil) trabajó durante 2010 con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para reformar el plan educativo y el producto es la incorporación en el plan de estudios de primero y sexto año de primaria de los conceptos iniciales de la gestión integral de los riesgos, protección civil e identificación de riesgos. Este plan se implementó a partir del ciclo escolar 2012 en toda la educación básica, por disposición presidencial, incorpora dichos conceptos en las materias de geografía, español, exploración de la naturaleza, educación cívica y ética, y está disponible en el Catálogo de la SEP.</p>

Código: IR 2-2

Pregunta de respuesta cerrada
2. <i>¿Se integra la temática de cambio climático en los programas curriculares de educación en al menos el nivel básico (primaria) o secundario?</i>
Descripción general del indicador
<p>Este indicador concede gran importancia a los procesos de conocimiento del CC y sus efectos adversos en la población en general, por ello busca detectar la integración de la temática de cambio climático en los programas curriculares de educación en el nivel básico o secundario, o niveles equivalentes en cada país.</p> <p>En algunos países la configuración de los programas curriculares del nivel básico de primaria o secundaria (o equivalentes) son definidos nacional, central o federalmente, dependiendo del modelo político-administrativo. Sin embargo, en otros casos (por ejemplo, en los niveles territoriales descentralizados), hace falta la expedición de lineamientos generales propuestos por el sector educación del nivel nacional, central o federal. En cualquiera de los casos, se plantea verificar si los programas curriculares de educación en el nivel básico o secundario de las UGT incorporan la temática del CC. Bastaría que un solo territorio no cumpliera con esta integración para que se considere el indicador incumplido.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Buscar información en la página web institucional del sector Educación, o en su caso realizar entrevista con funcionarios de las áreas relativas. 2. Analizar la normativa sectorial y verificar si el programa curricular del nivel básico o secundario incorpora el CC (puede ser como un subcomponente de la educación ambiental o de ciencias sociales). 3. Confirmar, en el caso de que la competencia curricular esté trasladada a las UGT, si en los programas curriculares se ha incorporado al CC. No se considera cumplido el indicador, si se identifica al menos una UGT que no haya incorporado el tema en sus programas curriculares.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Debe verificarse la integración formal de la temática del CC y sus efectos adversos en los programas curriculares de primaria o secundaria, bien a nivel nacional o a nivel de <u>todos</u> las UGT (si esta competencia ha sido transferida del nivel nacional al territorial). Si se identifica al menos una UGT que no ha incorporado el tema en sus programas curriculares entonces no se cumple el indicador.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: La Resolución Ministerial N° 440-2008-ED, del 15 de diciembre del 2008, que aprueba el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular cuyo documento dispone como tema transversal “Educación en gestión de riesgos y conciencia ambiental”. Se integra la educación en temas de cambio climático (ya presentes en la educación ambiental).</p> <p>México: El plan de revisión de la currícula educativa a nivel educación básica que comenzó en 2010 consistió en un abordaje integral, incorporando los conceptos de la Gestión Integral del Riesgo (GIR) y CC, tales como: Identificación de riesgos en mi comunidad, efectos del cambio climático, cuidado al medio ambiente, desastres y protección civil. Este plan educativo está disponible en el Catálogo de la SEP.</p>

Pregunta de respuesta cerrada
3. ¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de ambiente para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?
Descripción general del indicador
El análisis del riesgo de desastres es el primer eslabón en la cadena de acciones que comprende la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD). La disponibilidad de recursos es determinante para poder financiar actividades de análisis del riesgo de desastres. Este indicador da importancia a la existencia de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal, que permita verificar la efectiva asignación de recursos al análisis del riesgo de desastres en el sector ambiental.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un objeto de gasto o etiquetador presupuestal para el sector ambiental, que permita identificar de forma objetiva si en la última vigencia fiscal se le asignaron recursos para actividades de análisis del riesgo de desastres. 2. Examinar, en caso que no exista un objeto de gasto o etiquetador presupuestal, otros instrumentos equivalentes de clasificación presupuestal tales como los rubros en el presupuesto nacional o del presupuesto del sector ambiente. 3. Consultar, en su caso, a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal. 4. Consultar, en su caso, a la autoridad del sector ambiental (o entidad equivalente), concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal. 5. Revisar la página web de la autoridad ambiental (o entidad equivalente) acerca de los proyectos en curso.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Evidencia de asignación de recursos en la última vigencia fiscal al Ministerio de Ambiente (o entidad equivalente) para realizar análisis del riesgo de desastres a través de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: En el anexo 8 de la Ley N° 29951 del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, del 30 de noviembre 2012, se asignaron recursos al Ministerio del Ambiente para la identificación de escenarios de riesgo de desastres entre otros, contenidos en las páginas 1629-1630, y dentro del Programa Presupuestal 068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres. Adicionalmente, se asignaron recursos a dos entidades públicas responsables de identificar, estudiar y monitorear los peligros: al IGP, a efecto de generar información, estudios y mapas; así como al SENAMHI para generar información y estudios sobre meteorología, y clima.</p> <p>Costa Rica: En el Proyecto de Presupuesto Ministerio de Ambiente y Energía, 2013 se encontró evidencia de asignación de recursos en el Programa 888: Programa Hidrometeorología Aplicada del Ministerio de Ambiente y Energía, Dirección General, en el cual está definido el producto P.01, Servicios de información meteorológica, cuyos objetivos estratégicos son: "<i>Preparar a la población y al tráfico aéreo, ante el riesgo de los impactos provocados por los eventos hidrometeorológicos extremos y los efectos adversos del cambio climático, mediante la emisión oportuna de avisos sobre el desarrollo del estado del tiempo y su evolución en todo el país, con el fin de garantizar a los agricultores la obtención de cosechas más seguras y de mayor rendimiento, así como a las actividades productivas de otros sectores (transportes terrestres, marítimos y aéreo, turismo nacional e internacional).</i>"</p>

Código: IR 2-4

Pregunta de respuesta cerrada
4. <i>¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de agricultura para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?</i>
Descripción general del indicador
El análisis del riesgo de desastres es el primer eslabón en la cadena de acciones que comprende la GRD. La disponibilidad de recursos es determinante para poder financiar actividades de análisis del riesgo de desastres. Este indicador da importancia a la existencia de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal que permita verificar la efectiva asignación de recursos al análisis del riesgo de desastres en el sector agricultura.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un objeto de gasto o etiquetador presupuestal para el sector agricultura, que permita identificar de forma objetiva si en la última vigencia fiscal se le asignaron recursos para actividades de análisis del riesgo de desastres. 2. Examinar, en caso que no exista un objeto de gasto o etiquetador presupuestal, otros instrumentos equivalentes de clasificación presupuestal tales como los rubros en el presupuesto nacional o del presupuesto del sector agricultura. 3. Consultar, en su caso, a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal. 4. Consultar, en su caso, a la autoridad del sector agricultura (o entidad equivalente), concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal. 5. Revisar la página web de la autoridad del sector agricultura (o entidad equivalente) acerca de los proyectos en curso.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Evidencia de asignación de recursos en la última vigencia fiscal al sector agricultura (o entidad equivalente) para realizar análisis del riesgo de desastres a través de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>México: El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2013, prevé en el Ramo 8, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el rubro S232, recursos para financiar el programa presupuestario "Programa de Prevención y Manejo de Riesgos". Vale señalar que la SAGARPA dispone del "SIAP" administrado por un órgano desconcentrado que dispone de presupuesto propio (\$125.7 mdp PEF Pag. 52) para la administración y desarrollo del centro de información agropecuaria y pesquera, cuyo propósito es hacer inteligencia para la toma de decisiones en la producción nacional agropecuaria y pesquera frente a los riesgos, incluidos los de desastre y cambio climático.</p> <p>Guatemala: En el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, autorizado el 22 de octubre de 2012, se aprecia la asignación de recursos en la partida: 11130012 03 00 000 001 000 (SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN GEOGRÁFICA Y GESTIÓN DE RIESGO) por un monto de Q. 3,156,680.35.</p>

Pregunta de respuesta cerrada
5. <i>¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de salud para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?</i>
Descripción general del indicador
El análisis del riesgo de desastres es el primer eslabón en la cadena de acciones que comprende la GRD. La disponibilidad de recursos es determinante para poder financiar actividades de análisis del riesgo de desastres. Este indicador da importancia a la existencia de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal, que permita verificar la efectiva asignación de recursos al análisis del riesgo de desastres en el sector salud.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un objeto de gasto o etiquetador presupuestal para el sector salud, que permita identificar de forma objetiva si en la última vigencia fiscal se le asignaron recursos para actividades de análisis del riesgo de desastres. 2. Examinar, en caso que no exista un objeto de gasto o etiquetador presupuestal, otros instrumentos equivalentes de clasificación presupuestal tales como los rubros en el presupuesto nacional o del presupuesto del sector salud. 3. Consultar, en su caso, a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal. 4. Consultar, en su caso, a la autoridad del sector salud (o entidad equivalente), concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal. 5. Revisar la página web de la autoridad del sector salud (o entidad equivalente) acerca de los proyectos en curso. 6. Descartar la calidad de los estudios de riesgo, para efectos de calificar el cumplimiento del indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Evidencia de asignación de recursos en la última vigencia fiscal al sector salud (o entidad equivalente) para realizar análisis del riesgo de desastres a través de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: En el Anexo 8 de la Ley N° 29951 del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, del 30 de noviembre de 2012, se asignan recursos para realizar análisis de riesgo de desastres a través de actividades incluidas en el Programa Presupuestal 068 Reducción de Vulnerabilidades y Atención de Emergencias por Desastres. Concretamente la partida 3000439 para desarrollo de documentos técnicos y articulación de la GRD en salud, que incluye el diseño y actualización de planes de GRD en Salud, desarrollo de proyectos con enfoque de GRD en Salud, y la partida 5003299 destinada al análisis de vulnerabilidad de los establecimientos de salud.</p> <p>República Dominicana: La Ley No. 311-12, del Presupuesto General del Estado, promulgada el 19 de diciembre de 2012, incluye partidas presupuestarias para una actividad de análisis del riesgo de desastres: Capacitación a evaluadores sobre la estrategia de hospitales seguros frente a desastres (aplicación de un índice de seguridad, es decir, evaluación de riesgo para la infraestructura (páginas 218 y 388)).</p> <p>Perú: En el Anexo 8 de la Ley N° 29951 del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, del 30 de noviembre de 2012, se asignan recursos para realizar análisis de riesgo de desastres a través de actividades incluidas en el Programa Presupuestal 068 Reducción de Vulnerabilidades y Atención de Emergencias por Desastres. Concretamente la partida 3000439 para desarrollo de documentos técnicos y articulación de la GRD en salud, que incluye el diseño y actualización de planes de GRD en Salud, desarrollo de proyectos con enfoque de GRD en Salud, y la partida 5003299 destinada al análisis de vulnerabilidad de los establecimientos de salud.</p>

Código: IR 2-6

Pregunta de respuesta cerrada
6. <i>¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de vivienda para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?</i>
Descripción general del indicador
El análisis del riesgo de desastres es el primer eslabón en la cadena de acciones que comprende la GRD. La disponibilidad de recursos es determinante para poder financiar actividades de análisis del riesgo de desastres. Este indicador da importancia a la existencia de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal que permita verificar la efectiva asignación de recursos al análisis del riesgo de desastres en el sector vivienda.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un objeto de gasto o etiquetador presupuestal para el sector vivienda, que permita identificar de forma objetiva si en la última vigencia fiscal se le asignaron recursos para actividades de análisis del riesgo de desastres. 2. Examinar, en caso que no exista un objeto de gasto o etiquetador presupuestal, otros instrumentos equivalentes de clasificación presupuestal tales como los rubros en el presupuesto nacional o del presupuesto del sector vivienda. 3. Consultar, en su caso, a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal. 4. Consultar, en su caso, a la autoridad del sector vivienda (o entidad equivalente), concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal. 5. Revisar la página web de la autoridad del sector vivienda (o entidad equivalente) acerca de los proyectos en curso.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Evidencia de asignación de recursos en la última vigencia fiscal al sector vivienda (o entidad equivalente) para realizar análisis del riesgo de desastres a través de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: En el Anexo 5 de la Ley N° 29951 del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, del 30 de Noviembre de 2012, se evidencia que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento asigna recursos para la formulación y actualización de estudios territoriales para el análisis de riesgo a nivel urbano, contenido en el pliego 037, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, página 349. Por otra parte, el presupuesto incluye la partida 3000442 para que los gobiernos locales incorporen la GRD en el Acondicionamiento Territorial, en la cual se incluyen tres líneas de apoyo a municipios: (a) fortalecimiento de capacidades para la incorporación de la GRD; (b) formulación y actualización de estudios territoriales para el análisis de riesgo nivel urbano y (c) capacitación de funcionarios para la formulación de instrumentos técnico-normativos de gestión del territorio. Esto se encuentra considerado en dentro del Programa de Reducción de Vulnerabilidades y Atención de Emergencias por Desastres, en la página 1633.</p> <p>Chile: De conformidad con la consulta efectuada en la Ley N° 20641 de Presupuestos del Sector Público 2013, del 22 de diciembre de 2012, en su página 620 refiere: "Con cargo a estos recursos se destinarán M\$ 412.499 para la contratación de estudios de riesgo y de planificación urbana vinculados al Plan de Reconstrucción, y se podrán financiar los gastos asociados a licitación, contratación, difusión y publicación de estos estudios. El MINVU (Ministerio de Vivienda y Urbanismo) informará trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el estado de avance y ejecución de dichos estudios."</p>

Pregunta de respuesta cerrada
7. ¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de educación para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?
Descripción general del indicador
El análisis del riesgo de desastres es el primer eslabón en la cadena de acciones que comprende la GRD. La disponibilidad de recursos es determinante para poder financiar actividades de análisis del riesgo de desastres. Este indicador da importancia a la existencia de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal que permita verificar la efectiva asignación de recursos al análisis del riesgo de desastres en el sector educación.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un objeto de gasto o etiquetador presupuestal para el sector educación, que permita identificar de forma objetiva si en la última vigencia fiscal se le asignaron recursos para actividades de análisis del riesgo de desastres. 2. Examinar, en caso que no exista un objeto de gasto o etiquetador presupuestal, otros instrumentos equivalentes de clasificación presupuestal tales como los rubros en el presupuesto nacional o del presupuesto del sector educación. 3. Consultar, en su caso, a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal. 4. Consultar, en su caso, a la autoridad del sector educación (o entidad equivalente), concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal. 5. Revisar la página web de la autoridad del sector educación (o entidad equivalente) acerca de los proyectos en curso.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Evidencia de asignación de recursos en la última vigencia fiscal al sector Educación (o entidad equivalente) para realizar análisis del riesgo de desastres a través de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Chile: De conformidad con la consulta efectuada en la Ley N° 20641 de Presupuestos del Sector Público 2013, del 22 de diciembre de 2012, en su página 278 refiere que "... el Ministerio de Educación bajo concepto 05 ... b) Prevención de riesgos y mejoramiento de ambientes laborales". Igualmente en la página 313 se cita: "Estos recursos se destinarán a actividades de interés nacional que se determinen en uno o más convenios entre el Ministerio de Educación y la Universidad de Chile, los que deberán ser suscritos en el primer trimestre del año, como requisito para la entrega de los recursos, y aprobados mediante decreto de dicho Ministerio... A lo menos \$ 281.932 miles serán destinados a las actividades del programa de medición de riesgo sísmico..."</p> <p>México: La Ley General de Infraestructura Física Educativa, del 14 de marzo de 2013, en el artículo 16 se refiere al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y su objetivo de: "... fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del país y de construcción, en términos de esta Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables y desempeñarse como una instancia asesora en materia de prevención y atención de daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos en el sector educativo". En: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L509331 se evidencia que INIFED asigna recursos a la identificación del riesgo de desastres: a través del "programa E047 diseño, construcción, certificación y evaluación de la infraestructura" se desarrolla la actividad de "... la evaluación técnica así como la verificación física y/o documental de obras e infraestructura física educativa crítica y/o en riesgo".</p>

Pregunta de respuesta cerrada
8. <i>¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de turismo para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?</i>
Descripción general del indicador
El análisis del riesgo de desastres es el primer eslabón en la cadena de acciones que comprende la GRD. La disponibilidad de recursos es determinante para poder financiar actividades de análisis del riesgo de desastres. Este indicador da importancia a la existencia de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal que permita verificar la efectiva asignación de recursos al análisis del riesgo de desastres en el sector turismo.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un objeto de gasto o etiquetador presupuestal para el sector turismo, que permita identificar de forma objetiva si en la última vigencia fiscal se le asignaron recursos para actividades de análisis del riesgo de desastres. 2. Examinar, en caso que no exista un objeto de gasto o etiquetador presupuestal, otros instrumentos equivalentes de clasificación presupuestal tales como los rubros en el presupuesto nacional o del presupuesto del sector turismo. 3. Consultar, en su caso, a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal. 4. Consultar, en su caso, a la autoridad del sector turismo (o entidad equivalente), concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal. 5. Revisar la página web de la autoridad del sector turismo (o entidad equivalente) acerca de los proyectos en curso.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Evidencia de asignación de recursos en la última vigencia fiscal al sector Turismo (o entidad equivalente) para realizar análisis del riesgo de desastres a través de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
Debido a la ausencia de ejemplos en la región, se propone como ejemplo una situación hipotética: Un país de la región que en la última vigencia fiscal asignó recursos al Ministerio de Turismo (o entidad equivalente) a través de un rubro del presupuesto del Ministerio de Turismo para realizar un análisis de la vulnerabilidad de la infraestructura hotelera en la región de mayor afluencia turística del país.
<p>México: El Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica en Turismo (SECTUR-CONACYT), es un Fideicomiso público creado para brindar soluciones a las principales problemáticas que afectan al sector del turismo, a través de fomentar e impulsar la investigación en el sector académico y la investigación aplicada al turismo que sirva como insumo para generar conocimiento e información estratégica y mejorar la competitividad del turismo en México. Actualmente se encuentra en desarrollo el proyecto denominado “Estudio de la vulnerabilidad y programa de adaptación ante la variabilidad climática y el cambio climático en diez destinos turísticos estratégicos, así como propuesta de un sistema de alerta temprana a eventos hidrometeorológicos extremos” desarrollado por la Academia Nacional de Investigación y Desarrollo, A.C. (http://fondosectorial.sectur.gob.mx; http://ictur.sectur.gob.mx/index.php/publicaciones/estudios-e-investigaciones/estudios-del-fondo-sectorial-conacyt-sectur)</p>

Código: IR 2-9**Pregunta de respuesta cerrada**

9. ¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de transporte para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?

Descripción general del indicador

El análisis del riesgo de desastres es el primer eslabón en la cadena de acciones que comprende la GRD. La disponibilidad de recursos es determinante para poder financiar actividades de análisis del riesgo de desastres. Este indicador da importancia a la existencia de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal que permita verificar la efectiva asignación de recursos al análisis del riesgo de desastres en el sector transporte.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Verificar si existe un objeto de gasto o etiquetador presupuestal para el sector transporte, que permita identificar de forma objetiva si en la última vigencia fiscal se le asignaron recursos para actividades de análisis del riesgo de desastres.
2. Examinar, en caso que no exista un objeto de gasto o etiquetador presupuestal, otros instrumentos equivalentes de clasificación presupuestal tales como los rubros en el presupuesto nacional o del presupuesto del sector transporte.
3. Consultar, en su caso, a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal.
4. Consultar, en su caso, a la autoridad del sector transporte (o entidad equivalente), concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal.
5. Revisar la página web de la autoridad del sector transporte (o entidad equivalente) acerca de los proyectos en curso.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Evidencia de asignación de recursos en la última vigencia fiscal al sector transporte (o entidad equivalente) para realizar análisis del riesgo de desastres a través de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Colombia: En el Anexo del Decreto No. 2715, del 27 de diciembre de 2012, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2013, a través del rubro presupuestal 450 600 1 se asignaron recursos para estudios de preinversión para la *“implementación de un sistema de gestión integral del riesgo de las redes de transporte en Colombia vial, fluvial, férrea y puertos- previo concepto DNP”*. A ese mismo respecto, en el documento del 2012 Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia, Un aporte para la construcción de políticas públicas, del Banco Mundial en Colombia, que a solicitud del Departamento Nacional de Planeación (DNP) llevó a cabo una evaluación integral de las políticas de gestión del riesgo en Colombia, y en el que la tabla 2.7. Matriz de compromisos y responsabilidades para la gestión del riesgo de desastres según el ámbito normativo y de planificación, se anota en el renglón del Conocimiento del riesgo *“Avance de Inviás en el sistema de gestión integral del riesgo de las redes de transporte en Colombia”*.

Código: IR 2-10**Pregunta de respuesta cerrada**

10. *¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos a la entidad nacional responsable del agua y saneamiento para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?*

Descripción general del indicador

El análisis del riesgo de desastres es el primer eslabón en la cadena de acciones que comprende la GRD. La disponibilidad de recursos es determinante para poder financiar actividades de análisis del riesgo de desastres. Este indicador da importancia a la existencia de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal que permita verificar la efectiva asignación de recursos al análisis del riesgo de desastres a la entidad nacional responsable del agua y saneamiento.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Verificar si existe un objeto de gasto o etiquetador presupuestal para la entidad nacional responsable del agua y saneamiento, que permita identificar de forma objetiva si en la última vigencia fiscal se le asignaron recursos para actividades de análisis del riesgo de desastres.
2. Examinar, en caso que no exista un objeto de gasto o etiquetador presupuestal, otros instrumentos equivalentes de clasificación presupuestal tales como los rubros en el presupuesto nacional o del presupuesto de la entidad nacional responsable del agua y saneamiento.
3. Consultar, en su caso, a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal.
4. Consultar, en su caso, a la entidad nacional responsable del agua y saneamiento (o entidad equivalente), concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal.
5. Revisar la página web de la entidad nacional responsable del agua y saneamiento (o entidad equivalente) acerca de los proyectos en curso.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Evidencia de asignación de recursos en la última vigencia fiscal a la entidad nacional responsable del agua y saneamiento (o entidad equivalente) para realizar análisis del riesgo de desastres a través de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal que permita asignar recursos a dichas actividades.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Perú: En el Anexo 8 de la ley N° 29951 del Presupuesto del Sector Público para el año 2013 aprobado el 30 de noviembre 2012, Programas presupuestales, se asigna presupuesto para Formulación y Actualización de los análisis de vulnerabilidad de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. (Ver página 1633)

Código: IR 2-11

Pregunta de respuesta cerrada
<i>11. ¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos a la entidad nacional responsable de las telecomunicaciones para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?</i>
Descripción general del indicador
El análisis del riesgo de desastres es el primer eslabón en la cadena de acciones que comprende la GRD. La disponibilidad de recursos es determinante para poder financiar actividades de análisis del riesgo de desastres. Este indicador da importancia a la existencia de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal que permita verificar la efectiva asignación de recursos al análisis del riesgo de desastres a la entidad nacional responsable de las telecomunicaciones.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none">1. Verificar si existe un objeto de gasto o etiquetador presupuestal para la entidad nacional responsable de las telecomunicaciones, que permita identificar de forma objetiva si en la última vigencia fiscal se le asignaron recursos para actividades de análisis del riesgo de desastres.2. Examinar, en caso que no exista un objeto de gasto o etiquetador presupuestal, otros instrumentos equivalentes de clasificación presupuestal tales como los rubros en el presupuesto nacional o del presupuesto de la entidad nacional responsable de las telecomunicaciones.3. Consultar, en su caso, a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal.4. Consultar, en su caso, a la entidad nacional responsable de las telecomunicaciones (o entidad equivalente), concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal.5. Revisar la página web de la entidad nacional responsable de las telecomunicaciones (o entidad equivalente) acerca de los proyectos en curso.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Evidencia de asignación de recursos en la última vigencia fiscal a la entidad nacional responsable de las telecomunicaciones (o entidad equivalente) para realizar análisis del riesgo de desastres a través de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal que permita asignar recursos a dichas actividades.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
Debido a la dificultad para encontrar un buen ejemplo en la región, se propone como referencia una situación hipotética: un país de la región que en la última vigencia fiscal asignó recursos a la entidad nacional responsable de las telecomunicaciones (o entidad equivalente), a través de un rubro de su presupuesto, para realizar análisis de vulnerabilidad de la infraestructura del sector; por ejemplo para determinar el nivel de pérdida esperado ante la ocurrencia de sismos.

Pregunta de respuesta cerrada
12. ¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos a la entidad nacional responsable de la energía para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?
Descripción general del indicador
El análisis del riesgo de desastres es el primer eslabón en la cadena de acciones que comprende la GRD. La disponibilidad de recursos es determinante para poder financiar actividades de análisis del riesgo de desastres. Este indicador da importancia a la existencia de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal que permita verificar la efectiva asignación de recursos al análisis del riesgo de desastres a la entidad nacional responsable de la energía.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un objeto de gasto o etiquetador presupuestal para la entidad nacional responsable de la energía, que permita identificar de forma objetiva si en la última vigencia fiscal se le asignaron recursos para actividades de análisis del riesgo de desastres. 2. Examinar, en caso que no exista un objeto de gasto o etiquetador presupuestal, otros instrumentos equivalentes de clasificación presupuestal tales como los rubros en el presupuesto nacional o del presupuesto de la entidad nacional responsable de la energía. 3. Consultar, en su caso, a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal. 4. Consultar, en su caso, a la entidad nacional responsable de la energía (o entidad equivalente), concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal. 5. Revisar la página web de la entidad nacional responsable de la energía (o entidad equivalente) acerca de los proyectos en curso. 6. Descartar la calidad de los estudios de riesgo, para efectos de calificar el cumplimiento del indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Evidencia de asignación de recursos en la última vigencia fiscal a la entidad nacional responsable de la energía (o entidad equivalente) para realizar análisis del riesgo de desastres a través de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
Jamaica: En el presupuesto del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Energía y Minas se incluyen recursos para la realización de análisis de riesgos: Encabezado 5600A - Ministerio de Ciencia, Tecnología, Energía y Minas; Presupuesto 2 – Capital A; Función 15 – Programa de Minería 578 – Servicios Regulatorios Geológicos y Geotécnicos. Bajo dicho rubro se cuenta con el Proyecto 2309- Evaluaciones Geológicas y Geotécnicas, cuyo propósito es “....realizar un mapeo nacional de amenazas por sismo y deslizamiento en áreas volátiles de la isla, y proveer asesoría al plan nacional de gestión de desastres, así como también a otros planes nacionales de desarrollo relacionados con la construcción de carreteras y otros proyectos ingenieriles”.

Pregunta de respuesta cerrada
<i>13. ¿La empresa prestadora el servicio público de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país, ha realizado al menos un análisis del riesgo de desastres de su infraestructura en los últimos 5 años?</i>
Descripción general del indicador
<p>En el sector que comprende a las empresas prestadoras de servicios públicos se comparte el objetivo fundamental de prestar sus servicios de forma continuada, con la misma calidad y la misma cantidad de usuarios; y aún en el caso de que la ocurrencia de un desastre afecte parcial o totalmente su funcionamiento, el restablecimiento de los esos servicios para beneficio de la sociedad, se considera un factor clave para la recuperación en el proceso de la GRD.</p> <p>En ese contexto el análisis de los riesgos de desastre de las empresas prestadoras de servicios públicos resulta ser fundamental para identificar las vulnerabilidades de cada uno de los servicios públicos. La información que se obtiene después de la evaluación de sus riesgos, es la materia prima para el planteamiento de medidas <i>ex-ante</i> específicas para la reducción del riesgo con la meta de evitar cualquier daño a la infraestructura y la interrupción de dichos servicios durante una emergencia o desastre. En ese sentido, el presente indicador considera relevante que la empresa prestadora del servicio público de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país, haya asignado recursos para el análisis del riesgo de desastres al menos en una ocasión durante los últimos 5 años, empresa que usualmente corresponde a alguna asentada en la ciudad capital.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la empresa prestadora del servicio público de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país. 2. Establecer si dicha empresa es de naturaleza pública o privada. 3. Revisar la información publicada por esa empresa en la página web respecto su capítulo de inversiones. 4. Consultar, en su caso, directamente a la empresa sobre si ha realizado análisis del riesgo de desastres en los últimos 5 años. Se sugiere buscar los informes de gestión de la empresa. 5. Asistir, en su caso, con la entidad supervisora de la empresa o con la autoridad del sector a cargo del proceso de adjudicación del contrato de concesión correspondiente. 6. Localizar, en caso que corresponda a una concesión, la información disponible sobre el contrato en la página web, e indagar si incluye requerimientos respecto de análisis del riesgo de desastres.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Evidencia objetiva de que la empresa prestadora del servicio público de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país, sí se ha sujetado al menos a un estudio de análisis del riesgo de desastres en su ámbito, durante los últimos 5 años.</p> <p>En cualquier caso, en la sección correspondiente de la aplicación se debe mencionar el nombre de la empresa en la cual se efectuó dicha verificación.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) tiene el estudio denominado "Perú GRD en empresas de Agua y Saneamiento", publicado en noviembre 2012, que se realizó en el marco del Programa Agua y Saneamiento del Banco Mundial y fue financiado por la ACDI Canadá, en noviembre del 2012. El tomo sobre Lineamientos de Política, contiene el Anexo 1 donde se hace el Análisis de Riesgo del sector. SEDAPAL participó en la generación de la información requerida para realizar el estudio y acogió el documento.</p> <p>México: La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) instancia responsable de administrar los recursos hídricos del país, ha formulado múltiples análisis de riesgo de su infraestructura. Un ejemplo son los estudios para el emisor oriente de la ciudad de México, cuya obra dio inicio en el 2009. Los estudios incluyen análisis de riesgo del Río de la Compañía (que produce inundaciones relevantes en la zona metropolitana del DF) y estudios de riesgo del Río Lerma, entre otros relacionados a presas, ríos y escenarios de inundación que se han integrado en el "Manual sobre el control de inundaciones".</p>

República Dominicana: El Plan de Mitigación de Acueductos en la región nordeste de la República Dominicana, fue elaborado por INAPA en 2009, el principal prestador de los servicios de agua y saneamiento, que incluyó un estudio de la vulnerabilidad de las infraestructuras de los sistemas de agua potable del nordeste (incluyendo plantas de tratamiento, estaciones de bombeo, acueductos, alcantarillados y canales) que son vulnerables a daños por la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos y sísmicos. Este estudio se realizó en el marco del Proyecto de Prevención y Mitigación (PPD), con apoyo de PNUD, ECHO, CNE.

Pregunta de respuesta cerrada

14. ¿La empresa de generación, transmisión y distribución de energía con la mayor facturación en el país, ha realizado al menos un análisis del riesgo de desastres de su infraestructura en los últimos 5 años?

Descripción general del indicador

En el sector que comprende a las empresas prestadoras de servicios públicos se comparte el objetivo fundamental de prestar sus servicios de forma continuada, con la misma calidad y la misma cantidad de usuarios; y aún en el caso de que la ocurrencia de un desastre afecte parcial o totalmente su funcionamiento, el restablecimiento de los esos servicios para beneficio de la sociedad, se considera un factor clave para la recuperación en el proceso de la GRD.

En ese contexto el análisis de los riesgos de desastre de las empresas prestadoras de servicios públicos resulta ser fundamental para identificar las vulnerabilidades de cada uno de los servicios públicos. La información que se obtiene después de realizar la evaluación de sus riesgos, es la materia prima para el planteamiento de medidas *ex-ante* específicas para la reducción del riesgo con la meta de evitar cualquier daño a la infraestructura y la interrupción de dichos servicios durante una emergencia o desastre. En ese sentido, el presente indicador considera relevante que la empresa de generación, transmisión y distribución de energía con la mayor facturación en el país, haya asignado recursos para el análisis del riesgo de desastres al menos en una ocasión durante los últimos 5 años.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Identificar la empresa de generación, transmisión y distribución de energía con la mayor facturación del país.
2. Establecer si dicha empresa es de naturaleza pública o privada.
3. Revisar la información publicada por esa empresa en la página web respecto su capítulo de inversiones.
4. Consultar, en su caso, directamente a la empresa sobre si ha realizado análisis del riesgo de desastres en los últimos 5 años. Se sugiere buscar los informes de gestión de la empresa.
5. Asistir, en su caso, con la entidad supervisora de la empresa o con la autoridad del sector a cargo del proceso de adjudicación del contrato de concesión correspondiente.
6. Localizar, en caso que corresponda a una concesión, la información disponible sobre el contrato en la página web, e indagar si incluye requerimientos respecto de análisis del riesgo de desastres.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Evidencia objetiva de que la empresa de generación, transmisión y distribución de energía con la mayor facturación en el país, sí se ha sujetado al menos a un estudio de análisis del riesgo de desastres en su ámbito, durante los últimos 5 años.

En cualquier caso, en la sección correspondiente de la aplicación se debe mencionar el nombre de la empresa en la cual se efectuó dicha verificación.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

México: En México, la empresa proveedora de los servicios de energía eléctrica (generación, transmisión y distribución) es la Paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE). La CFE realiza el análisis de riesgos para todos sus procesos de manera anual, y se los proporciona a la Unidad de Administración de Riesgos para que se contemple en el aseguramiento integral de CFE. Se están brindando como verificables, oficios y evidencias relacionados con la remisión del análisis de riesgos realizado para la infraestructura de generación, junto con los oficios remitidos en 2013 sobre la actualización de estos estudios en la infraestructura de transmisión; y de distribución. Estos análisis están basados en la metodología global de evaluación de riesgos (EGNR), que incluye el cálculo de la pérdida máxima probable para todas las instalaciones.

Pregunta de respuesta cerrada

15. ¿La empresa de telecomunicaciones con la mayor cartera de usuarios en el país, ha realizado al menos un análisis del riesgo de desastres de su infraestructura en los últimos 5 años?

Descripción general del indicador

En el sector que comprende a las empresas prestadoras de servicios públicos se comparte el objetivo fundamental de prestar sus servicios de forma continuada, con la misma calidad y la misma cantidad de usuarios; y aún en el caso de que la ocurrencia de un desastre afecte parcial o totalmente su funcionamiento, el restablecimiento de los esos servicios para beneficio de la sociedad, se considera un factor clave para la recuperación en el proceso de la GRD.

En ese contexto el análisis de los riesgos de desastre de las empresas prestadoras de servicios públicos resulta ser fundamental para identificar las vulnerabilidades de cada uno de los servicios públicos. La información que se obtiene después de que estas empresas realicen la evaluación de sus riesgos, es la materia prima para el planteamiento de medidas *ex-ante* específicas para la reducción del riesgo con la meta de evitar cualquier daño a la infraestructura y la interrupción de dichos servicios durante una emergencia o desastre. En ese sentido, el presente indicador considera relevante que la empresa de telecomunicaciones con la mayor cartera de usuarios en el país, haya asignado recursos para el análisis del riesgo de desastres al menos en una ocasión durante los últimos 5 años.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Identificar la empresa de telecomunicaciones con la mayor cartera de usuarios del país.
2. Establecer si dicha empresa es de naturaleza pública o privada.
3. Revisar la información publicada por esa empresa en la página web respecto su capítulo de inversiones.
4. Consultar, en su caso, directamente a la empresa sobre si ha realizado análisis del riesgo de desastres en los últimos 5 años. Se sugiere buscar los informes de gestión de la empresa.
5. Asistir, en su caso, con la entidad supervisora de la empresa o con la autoridad del sector a cargo del proceso de adjudicación del contrato de concesión correspondiente.
6. Localizar, en caso que corresponda a una concesión, la información disponible sobre el contrato en la página web, e indagar si incluye requerimientos respecto de análisis del riesgo de desastres.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Evidencia objetiva de que la empresa de telecomunicaciones con la mayor cartera de usuarios en el país, sí se ha sujetado al menos a un estudio de análisis del riesgo de desastres en su ámbito, durante los últimos 5 años.

En cualquier caso, en la sección correspondiente de la aplicación se debe mencionar el nombre de la empresa en la cual se efectuó dicha verificación.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Costa Rica: La Dirección o Centro Coordinador de Operaciones de Emergencia, Subdepartamento de la Gerencia General del Instituto Costarricense de Electricidad, proveedor de servicios de electricidad y telecomunicaciones (ICE), manifestó que realiza análisis de riesgo de su infraestructura. Se efectuaron las gestiones para la obtención de los documentos necesarios para respaldar la verificación del indicador pero no fue posible obtenerlos. El argumento principal para no poder acceder a la información es su carácter confidencial, después de las reformas normativas de apertura del sector de telecomunicaciones (ICE opera en energía y telecomunicaciones). No obstante, en la publicación científica “Costa Rica en el tercer milenio: desafíos y propuestas para la reducción de la vulnerabilidad”, se indica que el ICE ha implementado el programa, Continuidad del Negocio en el Sector Telecomunicaciones, con base en la metodología de la norma británica BS 25999, donde se incentiva una Continuidad de negocio que se define como la “*capacidad estratégica y táctica de la organización de planificar y responder ante incidentes e interrupciones, para continuar con las operaciones del negocio en un nivel aceptable predefinido*” (p. 101). También se agrega que en este contexto que el sector Telecomunicaciones del ICE ha realizado al año 2010, entre otras cosas, análisis de riesgos del sistema de telecomunicaciones (p. 104).

Código: IR 3-1

Pregunta de respuesta cerrada
1. <i>¿Existe normatividad que haga obligatoria la disponibilidad de información para el análisis de riesgo y defina mecanismos o instrumentos para su intercambio?</i>
Descripción general del indicador
Este indicador valora positivamente que desde la normativa se establezca la obligación de las autoridades detentoras de información útil para la GRD, para que la misma sea dispuesta de manera no onerosa para el acceso de otras autoridades y el público en general, y bajo los mecanismos y restricciones que ordene la misma. Esto, contrario a la tendencia que se presenta en muchos países, donde no existe un marco normativo que posibilite el acceso a la información que las mismas entidades públicas producen, concretamente a la relativa al análisis de los riesgos.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normativa donde puede estar contenida esta condición: normas sobre la infraestructura de datos espaciales, normativa de GRD y normativa asociada al acceso y uso de la información pública (tipo <i>habeas data</i>). 2. Analizar si a través de dicho texto normativo se permite acceder a la información que producen las entidades para efectos de los procesos de identificación de los riesgos de desastres. 3. Analizar y determinar si en esta normativa se establecen mecanismos o instrumentos para el intercambio. <p>NOTA: Los mecanismos o instrumentos para el intercambio pueden ser de varios tipos: (i) sistema de información o plataforma informática, (ii) establecimiento de un grupo de trabajo interministerial o multisectorial, (iii) definición de protocolos de publicación con referencia a metadatos o estándares que permitan la inter operatividad; entre otros.</p>
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
La vigencia de alguna norma (incluso puede ser la normativa específica de GRD) que establezca que la información para la GRD es de “interés nacional” o de “interés colectivo” y que por tanto debe ser de libre acceso y uso. También puede ser una normativa que defina instrumentos o mecanismos para hacer posible el intercambio de información (la interoperatividad).
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: Existen dos normas que establecen la obligación de disponer de información en general: (i) la Ley N° 27806 de 2002, Ley de Transparencia y Acceso de la información; y (ii) la Ley N° 27444 de 2001, Ley de Procedimiento Administrativo General. Actualmente el proyecto Infraestructura de datos espaciales IDEP trabaja en el diseño de mecanismos para el intercambio a través de servicios web. Por otro lado, la Ley del SINAGERD, Artículo 16.6 ordena que <i>"las entidades públicas que generen información técnica y científica sobre peligros y amenazas, vulnerabilidad y riesgo están obligadas a integrar sus datos en el Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres. La información generada es de acceso gratuito para las entidades públicas"</i>. El mecanismo definido por la Ley es el Sistema de Información para la GRD. La condición se cumple en 2011 con la Ley del SINAGERD (ya que las normas anteriores si bien "propician" el intercambio, no son explícitas para el análisis de riesgo).</p> <p>Panamá: El Decreto Ejecutivo No. 177, del 30 de abril de 2008, que reglamenta la Ley 7 (Ley SINAPROC), establece en su Artículo 14 que: <i>"Los organismos públicos y privados cuya misión sea el estudio científico o tecnológico acerca de fenómenos sismológicos, hídricos, volcánicos, ambientales y meteorológicos, están en el deber de suministrar al Sistema toda la información que sea requerida o que revista importancia para la prevención, mitigación y manejo de situaciones de emergencia o desastre"</i>. Por otro lado, se cuenta con un Convenio de Cooperación e Intercambio Técnico y Científico entre la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., suscripto por las partes y refrendado el 1 de octubre de 2010, en el que PRIMERO, <i>"se comprometen a llevar a cabo acciones conjuntas que permitan promover la investigación y el intercambio de información, para la conservación de recursos hídricos y la aplicación de los resultados de dichas investigaciones para la definición de normas y procedimientos para la gestión integral de recursos hídricos y de cuencas hidrográficas"</i>.</p>

Código: IR 3-2

Pregunta de respuesta cerrada
2. <i>¿Existe normatividad que haga obligatorio la disponibilidad de información para estudios sobre cambio climático y defina mecanismos o instrumentos para su intercambio?</i>
Descripción general del indicador
Este indicador valora positivamente que desde la normativa se establezca la obligación de las autoridades detentoras de información útil para estudios sobre CC, para que la misma sea dispuesta de manera no onerosa para el acceso de otras autoridades y el público en general, y bajo los mecanismos y restricciones que ordene la misma. Esto, contrario a la tendencia que se presenta en muchos países, donde no existe un marco normativo que posibilite el acceso a la información que las mismas entidades públicas producen.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normativa donde puede estar contenida esta condición: normas sobre la infraestructura de datos espaciales, normativa de CC y normativa asociada al acceso y uso de la información pública (tipo habeas data) 2. Analizar si a través de dicho cuerpo normativo se permite acceder a la información que producen las entidades para efectos de determinar probables escenarios de afectación futura por cambios en el clima. 3. Analizar y determinar si en esta normativa se establecen mecanismos o instrumentos para el intercambio. <p>NOTA: los mecanismos o instrumentos para el intercambio pueden ser de varios tipos: (i) sistema de información o plataforma informática, (ii) establecimiento de un grupo de trabajo interministerial o multisectorial, (iii) definición de protocolos de publicación con referencia a metadatos o estándares que permitan la inter operatividad; entre otros.</p>
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Puede ser que la normativa que permita y facilite el intercambio de información para el análisis del riesgo de desastre también sea aplicable a los estudios sobre cambio climático. También puede ser que el desarrollo normativo se ha impulsado desde la preocupación por el acceso y uso de los datos climáticos y la norma aplique sólo a información de tipo hidrometeorológico. En este segundo caso el presente indicador también sería positivo (aunque al limitarse a información de tipo hidrometeorológico no permitiría cumplir el indicador IR 3-1).
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Argentina: La Ley 24.295, que aprueba la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (publicada en el Boletín Oficial el 11 de enero de 1994), define en el artículo 6 sobre Educación, Formación y Sensibilización del Público, la responsabilidad de llevar a la práctica los compromisos establecidos, en este caso <i>“El acceso del público a la información sobre el cambio climático y sus efectos”</i>.</p> <p>México: La Ley General de Cambio Climático, de junio de 2012, establece en su Artículo 7, fracción XIII, <i>“Integrar y actualizar el Sistema de Información sobre el Cambio Climático, así como ponerlo a disposición del público en los términos de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables”</i>; y adiciona en su Artículo 25 <i>“Las dependencias de la administración pública federal centralizada y paraestatal, de las entidades federativas y de los municipios ejecutoras de programas de mitigación o adaptación al cambio climático, deberán proporcionar la información que les requiera la Coordinación de Evaluación para el cumplimiento de sus responsabilidades, conforme a lo previsto por las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información”</i>. Los Artículos 26, 106 y 107 complementan la valoración positiva del indicador con algunas precisiones sobre transparencia, acceso a la información y medios para hacerla disponible en portales electrónicos.</p>

Código: IR 3-3

Pregunta de respuesta cerrada
3. <i>¿La entidad nacional responsable de generar información sobre fenómenos geológicos ha realizado al menos una evaluación de la calidad de sus procesos de investigación, monitoreo y divulgación de información en los últimos 3 años?</i>
Descripción general del indicador
Resulta fundamental la generación de información sobre fenómenos geológicos. La información que se obtiene por parte de la entidad de orden nacional competente es materia prima para la gestión de riesgos de orden geológico. En ese sentido, el presente indicador considera relevante que el servicio o instituto geológico nacional (o entidad equivalente), haya realizado al menos en los últimos 3 años, una evaluación interna sobre la calidad de sus procesos de investigación, monitoreo y divulgación de información.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar el servicio geológico nacional o la entidad que haga sus veces en el país. 2. Analizar si la entidad realiza de forma periódica evaluaciones internas sobre la calidad de sus procesos. 3. Identificar si la última evaluación se realizó antes de los últimos 3 años. 4. Identificar si dentro de la evaluación de calidad se analizaron los siguientes 3 procesos: investigación, monitoreo y divulgación de información. 5. Establecer el informe final de evaluación como un verificable de la condición cumplida. <p>NOTA: Las normas ISO de control de calidad no garantizan que la idoneidad, rigor científico y la actualización técnica sean las del <i>estado del arte</i> en la temática; este tipo de normas sólo establecen que se cumplen ciertos pasos o requisitos de carácter administrativo en los procesos. Sin embargo, contar con una certificación de control de calidad, es decir que se están siguiendo al menos las exigencias que implica una norma ISO o una nacional equivalente puede ser un buen indicio que en estos procesos se tratan de hacer de acuerdo con el estado del conocimiento.</p>
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
No debe confundirse con los “informes de gestión” que abordan de forma exclusiva el reporte del presupuesto y las metas logradas por la entidad en un periodo de tiempo determinado. Se trata en realidad de verificar si la entidad está preocupada por la “calidad” de los procesos, específicamente en lo que tiene que ver con investigación, monitoreo y divulgación de información (nótese que son tres procesos los que se deben verificar, no solamente uno de ellos).
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
México: Son varias las instituciones públicas nacionales que asumen responsabilidades en la generación de información sobre fenómenos geológicos, y todas son frecuentemente auditadas respecto de la calidad en sus procesos y del uso de los recursos asignados. Tomando como referente nacional al Centro Nacional de Prevención de Desastres CENAPRED, se hace referencia al "Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 del CENAPRED, publicado en el 2012".

Código: IR 3-4

Pregunta de respuesta cerrada
4. <i>¿La entidad nacional responsable de generar información sobre fenómenos hidrológicos y meteorológicos ha realizado al menos una evaluación de la calidad de sus procesos de investigación, monitoreo y divulgación de información en los últimos 3 años?</i>
Descripción general del indicador
<p>Resulta fundamental la generación de información sobre fenómenos hidrometeorológicos. La información que se obtiene por parte de la entidad de orden nacional competente es materia prima para la gestión de riesgos de orden hidrológicos y meteorológicos. En ese sentido, el presente indicador considera relevante que el servicio o instituto hidrometeorológico nacional (o entidad equivalente), haya realizado al menos en los últimos 3 años, una evaluación interna sobre la calidad de sus procesos de investigación, monitoreo y divulgación de la información.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar el servicio hidrometeorológico nacional o la entidad que haga sus veces en el país. 2. Analizar si la entidad realiza de forma periódica evaluaciones internas sobre la calidad de sus procesos 3. Identificar si la última evaluación se realizó antes de los últimos 3 años. 4. Identificar si dentro de la evaluación de calidad se analizaron los siguientes 3 procesos: investigación, monitoreo y divulgación de información. 5. Establecer el informe final de evaluación como un verificable de la condición cumplida. <p>NOTA: Las normas ISO de control de calidad no garantizan que la idoneidad, rigor científico y la actualización técnica sean las del <i>estado del arte</i> en la temática; este tipo de normas sólo establecen que se cumplen ciertos pasos o requisitos de carácter administrativo en los procesos. Sin embargo, contar con una certificación de control de calidad, es decir que se están siguiendo al menos las exigencias que implica una norma ISO o una nacional equivalente puede ser un buen indicio que en estos procesos se tratan de hacer de acuerdo con el estado del conocimiento.</p>
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>No debe confundirse con los “informes de gestión” que abordan de forma exclusiva el reporte del presupuesto y las metas logradas por la entidad en un periodo de tiempo determinado. Se trata en realidad de verificar si la entidad está preocupada por la “calidad” de los procesos, específicamente en lo que tiene que ver con investigación, monitoreo y divulgación de información (nótese que son tres procesos los que se deben verificar, no solamente uno de ellos)</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>México: La Auditoría Superior de la Secretaría de la Función Pública, junto con el Servicio Meteorológico Nacional (SMNM), dependiente de la Comisión Nacional de Agua, formuló en el 2010 el Diagnóstico Institucional y Propuesta de Plan Estratégico 2010-2019 con la Asistencia Técnica de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que incluyó un diagnóstico de la situación actual del SMNM, y en particular de sus capacidades en aspectos institucionales, infraestructura y equipamiento, infraestructura para estudios de clima y cambio climático, y productos y servicios meteorológicos (de interés general y específicos para distintos sectores de usuarios). Este Diagnóstico, elaborado de manera participativa con los usuarios y proveedores de información del SMN, fue publicado en 2011.</p>

Código: IR 3-5

Pregunta de respuesta cerrada
5. <i>¿El ente nacional de control ha realizado al menos una verificación o evaluación sobre la generación y disponibilidad de información sobre el riesgo de desastres en los últimos 5 años?</i>
Descripción general del indicador
<p>Al igual que el indicador MG 3-3, interesa determinar si la auditoría, contraloría, órgano fiscalizador nacional (o quien haga sus veces en el país) ha realizado alguna verificación o evaluación específica sobre la generación y disponibilidad de información sobre el riesgo de desastres al menos una vez en los últimos 5 años.</p> <p>Esta evaluación podría ser la misma que se presente como condición positiva en el indicador MG 3-3 siempre y cuando uno de los contenidos de la misma sea el tema específico del manejo de la información sobre riesgo (no sobre manejo de desastres).</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la entidad de control que corresponde en cada país (puede ser auditoría, contraloría o entidad equivalente). 2. Analizar los casos en que han realizado evaluaciones o verificaciones en temas de gestión del riesgo o de las entidades que generan información sobre riesgos en el país. 3. Analizar si en esos casos se ha abordado el tema de la información sobre los riesgos (NOTA: es información sobre amenazas y vulnerabilidades; no debe confundirse con información sobre daños y pérdidas tras la ocurrencia de un desastre pues esto se pregunta en otro indicador dentro del componente PR) 4. Determinar si la evaluación detectada se realizó dentro de los últimos 5 años.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Se debe verificar un documento de la auditoría o contraloría (o entidad equivalente en el país) que aborde una evaluación o verificación del desempeño de las entidades pertinentes en materia de generación y disponibilidad de información sobre riesgo en el país.</p> <p>NOTA: La evaluación podría ser sobre el desempeño de una sola entidad (como el caso de una evaluación al servicio geológico o hidrometeorológico nacional) o bien a un grupo de entidades.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Colombia: En el año 2007, la Contraloría General de la República de Colombia, realizó un informe al Congreso de la República titulado “Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente”; en el capítulo IV “Prevención y Atención de desastres. La gestión del riesgo: realidad y perspectivas”, la entidad realiza una evaluación detallada del cumplimiento de la política nacional en este tema. La evaluación se realiza en función de los componentes principales de la GRD, en las páginas 238 a 240 se analiza el papel del IDEAM (estudios y monitoreo de fenómenos de tipo hidrometeorológico) y del INGEOMINAS (estudios y monitoreo de fenómenos de tipo geológico).</p> <p>México: El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), señala entre sus atribuciones la difusión de la información que dispone a través de sus procesos de monitoreo e investigación de los diferentes fenómenos perturbadores, dispone de la Dirección de Difusión, la cual fue auditada por la Auditoría Superior de la Federación, en la “Evaluación del Desempeño 1089” cuyos trabajos de observación a sus recomendaciones y observaciones se llevaron a cabo durante los años 2010 y 2011. Asimismo, la Coordinación Nacional de Protección Civil por disposición legal) y de quién depende el CENAPRED, fue auditada el mismo año 2009, y bajo el nombre de “Evaluación del Desempeño 141”, auditoría que considera información relativa al proceso de difusión en su calidad e impacto.</p>

Código: IR 3-6

Pregunta de respuesta cerrada
6. ¿La normatividad nacional de GRD establece la responsabilidad de informar a la ciudadanía sobre el riesgo de desastre?
Descripción general del indicador
<p>Este indicador busca determinar un elemento de calidad en la normatividad nacional de GRD, relacionado con la responsabilidad de informar a la comunidad sobre el riesgo de desastres con el objeto de que tome conciencia sobre dicho riesgo y eventualmente pueda adoptar medidas para reducirlo.</p> <p>Interesa detectar si la normativa de GRD ha previsto que la comunidad debe ser informada sobre el riesgo de desastres. No debe confundirse con información en situaciones de desastres (por ésta se pregunta en otros componentes del iGOPP relacionados con la gestión reactiva). Se trata de información acerca de pérdidas y daños potenciales (riesgo).</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad de GRD en el país. 2. Analizar si dicha normatividad aborda los conceptos de información pública o información comunitaria. 3. Determinar si la norma establece la responsabilidad de informar sobre el riesgo de desastres a la ciudadanía.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
La normativa de GRD debe establecer algún nivel de responsabilidad frente a la información sobre riesgos a la comunidad o ciudadanía.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Colombia: La Ley 1523, del 24 de abril de 2012, por la cual se “adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”, establece en el Artículo 3, “principios generales”, numeral 15 el <u>principio de oportuna información</u>: “<i>Para todos los efectos de esta ley, es obligación de las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de desastres, mantener debidamente informadas a todas las personas naturales y jurídicas sobre: <u>posibilidades de riesgo</u>, gestión de desastres, acciones de rehabilitación y construcción así como también sobre las donaciones recibidas, las donaciones administradas y las donaciones entregadas</i>”.</p> <p>México: La Ley General de Protección Civil, del 6 de junio de 2012, dispone en su Artículo 5: “<i>Las autoridades de Protección civil...deberán actuar con base en los siguientes principios: IV. Publicidad y participación social en todas las fases de la Protección Civil, pero particularmente en la de prevención; V. Establecimiento y desarrollo de una cultura de la Protección Civil, con énfasis en la prevención en la población en general...</i>” Asimismo, el Artículo 29 asigna al Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional la responsabilidad de: “... <i>III. Proporcionar a la población en general la información pública que se genere en materia de Protección civil relacionada con la autoprotección y el autocuidado...</i>”.</p> <p>Guatemala: El Reglamento de la Ley N° 109-96, Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado (CONRED), adoptado por Acuerdo Gubernativo N° 49-2012, del 14 de marzo del 2012, en el Artículo 79, Manuales, inciso D, Manual de Organización Nacional, Anexo III de las Funciones de las comisiones de las coordinadoras en el nivel municipal y departamental, en el numeral 13 establece: “<i>Informar a la población en la jurisdicción sobre posibles riesgos, así como el estado de situación en caso de emergencias o desastres.</i>”</p>

Código: RR 1A-1

Pregunta de respuesta cerrada
1. <i>¿Existe normatividad que establece competencias de forma articulada entre reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático para las entidades territoriales y sectoriales?</i>
Descripción general del indicador
<p>Este indicador busca determinar si el marco legal vigente en el país, excluyendo la normativa nacional de la GRD, reconoce la necesidad de conciliar, por una parte, y compatibilizar en otra, los ámbitos y los valores tutelados entre la GRD, concretamente en su fase de Reducción del Riesgo (RR), y de la Adaptación al Cambio Climático (ACC); de manera que en sus ejecuciones se generen sinergias respecto de los temas y objetivos comunes o compartidos, destacando la reducción de riesgos y sus aportes al desarrollo sostenible; evitando además duplicidades de acciones en el medio sectorial y con los niveles territoriales.</p> <p>NOTA: En el indicador MG 1A-4 se inquiriere por la norma expresa de GRD, desde el punto de vista del atributo de calidad de dicha norma. En el presente indicador RR 1A-1 se pregunta por cualquier norma que facilite la articulación entre GRD y ACC.</p> <p>NOTA: La expresión “de forma articulada”, significa una designación de responsabilidades compartidas y diferenciadas entre RR y la ACC.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad de CC en el país u cualquier otra normatividad relacionada con el tema (excluyendo la norma expresa de GRD, dado que ya fue analizada en el indicador MG 1A-4). 2. Analizar si dicha normatividad aborda la articulación de competencias de la RR y la ACC, respecto de las acciones a realizar tanto con los sectores, como con los niveles territoriales.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
La vigencia de normatividad, ya sea la de CC o cualquier otra que no sea la norma expresa de GRD, en la que se establezca un enfoque sinérgico y complementario entre RR y ACC, y que por eso se eviten las duplicidades.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Colombia: El documento CONPES 3700 “Estrategia Institucional para la Articulación de Políticas y Acciones en Materia de Cambio Climático en Colombia”, aprobado el 14 de julio de 2011, define en su parte introductoria: “<i>La estrategia parte de la necesidad de una estructura institucional lo suficientemente fuerte para que el proceso de toma de decisiones a los más altos niveles integre la gestión del riesgo, la gestión del cambio climático y la gestión ambiental</i>”. En su parte programática, en el capítulo sobre el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el propósito número 7 establece: generar “<i>...una propuesta concreta para integrar la Gestión del Riesgo y la planificación ambiental, territorial y sectorial con la adaptación al cambio climático</i>”.</p>

Código: RR 1A-2

Pregunta de respuesta cerrada
2. <i>¿Existe normativa que defina referentes de riesgo aceptable para al menos 2 amenazas en el país?</i>
Descripción general del indicador
<p>El indicador busca determinar si la normativa incluye el concepto de riesgo aceptable, lo cual determina básicamente la agenda pendiente de reducción de riesgos.</p> <p>Por riesgo aceptable se entenderá: nivel de pérdida dentro de un período de tiempo, que se considera admisible para determinar las mínimas exigencias o requisitos de seguridad, con fines de protección y planificación, ante posibles fenómenos peligrosos. En general se refiere a consecuencias sociales, económicas y ambientales que una sociedad asume o tolera por considerar innecesaria, inviable, inoportuna o imposible una intervención para su reducción dado el contexto económico, social, político, cultural y técnico existente.</p> <p>En términos de ingeniería, el concepto de riesgo aceptable se usa para definir las intensidades y probabilidades de una amenaza que deben incorporarse como parámetros de diseño mínimo para una infraestructura determinada.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad vigente que trate sobre diferentes tipos de amenazas (sismicidad, vulcanismo, fenómenos de remoción en masa, inundaciones, etc.) 2. Identificar si dicha normatividad establece parámetros máximos para el diseño de edificaciones o para los procesos de ocupación del suelo.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Normatividad vigente que establezca niveles de seguridad que deben cumplirse teniendo en cuenta parámetros de intensidad de fenómenos asociados a períodos de retorno o la frecuencia anual de excedencia al menos para dos amenazas.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Colombia: Existe el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo-resistentes (Ley 400 de 1997, actualizado en 2010 a través del Decreto N° 926 de 2010 - NSR-10). Según esta normatividad, las edificaciones que se diseñen y construyan en Colombia deben soportar como máximo un evento sísmico cuya probabilidad de ocurrencia es lo suficientemente baja con el fin de que la obra pueda ser efectiva en la gran mayoría de los casos, (es decir para los eventos más frecuentes). Los referentes de riesgo aceptable están determinados por el tipo de edificaciones (si son indispensables o no) y por la zonificación sísmica. El Reglamento también establece parámetros de resistencia para "fuerzas de viento" (Título A.9.5.4). La última actualización de la Norma NSR-10, Decreto N° 926 de 2010, introduce por primera vez en Colombia los "requisitos de protección contra incendios en edificaciones" (Título J). Este título no existía en la primera y segunda versión del reglamento. Específicamente, la norma establece los requisitos generales para protección contra incendios en las edificaciones, determina los aspectos de seguridad en las redes eléctricas, de gas, y otros fluidos combustibles, inflamables o carburantes, así como los requisitos de resistencia contra incendios en las edificaciones. El concepto de riesgo aceptable contra incendios, se deriva de la "clasificación de edificaciones en función del riesgo de pérdida de vidas humanas o amenaza de combustión" (Capítulo J.3.3), "la determinación de la resistencia requerida contra fuego" (Capítulo J.3.4), y la "evaluación de la provisión de resistencia contra fuego en elementos de edificaciones" (Capítulo J.3.5). NOTA: se evalúa el riesgo de incendio tanto de forma relacionada como independientemente del riesgo sísmico, por lo tanto se cumple la condición de al menos dos amenazas requerida por el indicador.</p> <p>Panamá: Se cuenta con el Reglamento de Diseño Estructural en la República de Panamá del 2004, según Resolución JTIA No. 639 de 2004, publicado en la Gaceta Oficial No. 25,181, del 22 de noviembre de 2004. En este código se definen las normas y niveles de seguridad en el diseño de estructuras e infraestructuras y establece referencias para el uso o aplicación de otros códigos, especialmente para las amenazas de sismos y vientos.</p>

Pregunta de respuesta cerrada
3. ¿Existe al menos una norma nacional que obligue a las entidades públicas a reducir la vulnerabilidad de edificaciones esenciales, indispensables o infraestructura crítica a través de medidas de reforzamiento o sustitución?
Descripción general del indicador
<p>El indicador busca determinar si la normativa en el país contempla el concepto de edificaciones “esenciales”, “indispensables” o “infraestructura crítica” (que se analiza en el indicador “IR 1B-18”), y este es utilizado para fines de reforzamiento o sustitución.</p> <p>La idea es que en los países, con base en esta noción, determinen cuáles son las edificaciones e infraestructura que, por su carácter estratégico y la importancia que revisten por los servicios que prestan, no deben quedar inutilizadas o colapsar ante la ocurrencia de un desastre, y para ello realicen proyectos de reforzamiento o sustitución que paulatinamente vayan reduciendo los riesgos.</p> <p>El indicador no busca confirmar que se están realizando tales reforzamientos o sustituciones, sino comprobar la vigencia de una normatividad que establezca esa obligación.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad existente sobre edificaciones e infraestructura del país (puede ser a nivel de la autoridad en materia de obras o transportes o quien haga sus veces). 2. Identificar si el concepto de edificación “esencial”, “indispensable” o “infraestructura crítica” es contemplado en la normativa pertinente. 3. Analizar si esa normatividad establece la obligación de reforzar estas edificaciones o sustituirlas para garantizar su funcionalidad y normal operación en ocasión de un desastre.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>La vigencia de al menos una norma nacional que obligue a las entidades públicas al reforzamiento o sustitución de las edificaciones consideradas “esenciales”, “indispensables” o “infraestructura crítica”.</p> <p>En los países expuestos a la sismicidad es indispensable que edificaciones como hospitales y escuelas sean consideradas esenciales y sean objeto de reforzamiento estructural para garantizar su sismo-resistencia, al menos a niveles considerados aceptables para su normal funcionamiento.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Colombia: Existe el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo-resistentes: Ley 400 de 1997, actualizado en 2010 a través del Decreto N° 926 de 2010 - NSR-10. Esta norma integra en el Título A.10.9 el concepto de la "Rehabilitación Sísmica", y establece en el numeral A.10.9.2.1 los parámetros de resistencia y capacidad de funcionamiento requeridas según el uso y la edad de las edificaciones. Específicamente en el caso de "edificaciones indispensables y de atención a la comunidad (grupos de uso III y IV)", el reglamento establece que: <i>"independientemente de la época de construcción de la edificación, éstas deben cumplir los requisitos establecidos en A.10.4.2.1, con el fin de lograr un nivel de seguridad equivalente al de una edificación nueva, y de acuerdo con los criterios y requisitos del presente Reglamento, de tal manera que la edificación una vez intervenida quede con un índice de sobreesfuerzo y un índice de flexibilidad menores que la unidad"</i>.</p> <p>Guatemala: La Norma de Reducción de Desastres Número Uno (NRD1) "Requerimientos Estructurales para Obras Críticas, Esenciales e Importantes" aprobada por acuerdo N° 03-2010 del Consejo Nacional para la Reducción de Desastres, del 19 de marzo de 2010, es un conjunto de criterios técnicos mínimos, que deben implementarse en el diseño de obras nuevas, remodelación o reparación de obras existentes, y la evaluación de obras. La misma es aplicable a las obras críticas, esenciales e importantes, conforme la clasificación contenida en la Norma Recomendada AGIES NR-1-2000, Bases Generales de Diseño y Construcción, y sus posteriores reformas, y es de cumplimiento obligatorio para las</p>

obras existentes -las que se deben evaluar y re-adequar-, las obras en construcción, y las obras nuevas. En el caso de las obras existentes, establece explícitamente que *"Los inmuebles existentes que a la fecha no cumplan con la presente norma, deberán efectuar las obras de reparación y/o remodelación necesarias para su adecuación a la misma"*, para lo cual establece plazos de acuerdo de traten de obras críticas, esenciales o importantes.

Según la NRD-1, en el Artículo 5. Requerimientos estructurales, se validan y aprueban 9 normas las cuales pasan a formar los requerimientos estructurales de la NORMA PARA REDUCCIÓN DE DESASTRES NRD-1.

- a) Norma Recomendada AGIES NR-1-2000, Bases Generales de Diseño y Construcción;
- b) Norma Recomendada AGIES NR-2-2000, Demandas estructurales condiciones de sitio y niveles de protección;
- c) Norma Recomendada AGIES NR-3-2000, Diseño estructural de las edificaciones;
- d) Norma Recomendada AGIES NR-4-2001, Requisitos especiales para vivienda y otras construcciones menores;
- e) Norma Recomendada AGIES NR-5-2001, Requisitos para diseños de obras de infraestructura y obras especiales;
- f) Norma Recomendada AGIES NR-6-2001, Disminución de riesgos y rehabilitación;
- g) Norma Recomendada AGIES NR-7-2000, Concreto reforzado;
- h) Norma Recomendada AGIES NR-7-5, Acero estructural;
- I) Norma Recomendada AGIES NR-9-2002, Mampostería reforzada.

Adicionalmente, la **Norma de Reducción de Riesgos de Desastres Número 3, aprobada por Acuerdo N° SE-02-2012, sobre "Especificaciones Técnicas de Materiales para la Construcción" del 22 de enero de 2013**, contiene "Requisitos para diseños de obras de infraestructura y obras Especiales", los que deben observarse tanto en obras nuevas como en las obras de re-adequación o remodelación, con el objetivo que cumplan con requisitos mínimos de seguridad.

Código: RR 1A-4

Pregunta de respuesta cerrada
4. <i>¿Existe normatividad que estipule un régimen de sanciones específico sobre el incumplimiento de normativa relacionada con el diseño, construcción o localización de infraestructura o edificaciones de carácter público y privado?</i>
Descripción general del indicador
El indicador reconoce un factor de calidad en el marco legal aplicable a las acciones de reducción de los riesgos, en los casos que el incumplimiento de las normas de diseño, construcción o localización de edificaciones e infraestructura, sean pública o privadas, se consideran una contravención o un delito que puede ser objeto de una sanción administrativa o pena corporal, según el régimen que se haya establecido previamente.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad vigente en materia de edificaciones e infraestructura en el país (puede ser a nivel de la autoridad en materia de obras o transportes o quien haga sus veces). 2. Identificar si dicha normativa establece, para los diversos casos de incumplimiento, un régimen que señale sanciones administrativas, o bien, que tipifique algún delito e indique las penas correspondientes. 3. Descartar, en su caso, las leyes o códigos de orden penal o criminal, en busca de un tipo penal relativo a una conducta relacionada con el incumplimiento de normativa relacionada con el diseño, construcción o localización de infraestructura o edificaciones de carácter público y privado.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Una normativa, ya sea en materia de construcción y de urbanismo (o similares), o bien otra diversa, que contenga un régimen de sanciones por el incumplimiento de obligaciones en materia de diseño, construcción o localización de infraestructura o edificaciones.</p> <p>En algunos países esto no se integra porque está “sobrentendido”, sin embargo para el cumplimiento del indicador es necesario que en el país en cuestión esté explícito jurídicamente que el incumplimiento conllevaría a una sanción.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: El régimen de sanciones a las infracciones al Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), están amparadas por Decreto Supremo N° 011-2006-Vivienda, del 8 de mayo de 2006. Este D.S., establece en el título I, Generalidades, ítem G030 "Derechos y Responsabilidades", Capítulo VII establece en los artículos 47, 48, y 49, las Infracciones al reglamento y las consecuentes Sanciones que corresponden.</p> <p>Panamá: El Decreto Ejecutivo No. 775 de 1960 establece el procedimiento, trámite y sanción al incumplimiento de la Ley 15 de 1959, que crea la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA), y en virtud de la cual se aprueban las actualizaciones del Reglamento de Diseño de Construcción de Panamá.</p> <p>Costa Rica: El Código Sísmico de Costa Rica, 2010 formulado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, cuarta edición 2011, Editorial Tecnológica de Costa Rica, y que fue aprobado por Decreto N° 37070 del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos-Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Obras Públicas y Transporte publicado en la Gaceta Diario Oficial el 13 de julio de 2012. Considera en su página 47 y 50 la Sección 4.1. Clasificación de las edificaciones según importancia y definición de objetivos de desempeño. Toda edificación debe ser clasificada según la importancia de su ocupación o función conforme a la tabla 4.1. A cada grupo le corresponde un factor de importancia, el cual define la sacudida sísmica para la cual se debe diseñar. De la misma manera, se establecen los objetivos de desempeño de la infraestructura ante sismos fuertes.</p>

Pregunta de respuesta cerrada
5. ¿Existe normatividad que establezca la obligatoriedad de incorporar medidas de reducción del riesgo de desastre durante la fase de construcción en proyectos de infraestructura pública y privada?
Descripción general del indicador
<p>El indicador se refiere a las medidas para reducir el riesgo que se genera en la etapa de construcción por efectos de la propia obra y que pueden afectar sobre todo a terceros. Por ejemplo, cuando se está construyendo una presa hidroeléctrica puede producirse una avenida y deben haberse considerado medidas de reducción de riesgo no sólo para proteger la presa, sino también la población, actividades económicas e infraestructuras localizados aguas abajo. Otro ejemplo, puede ser la normatividad que se establece para proteger a terceros que podrían verse afectados durante la etapa de construcción de un carretera en una zona de alta pendiente, donde durante la fase de construcción puede ser alto el riesgo por fenómenos de remoción en masa.</p> <p>En este indicador lo que interesa es determinar si la normatividad del país ha considerado esta fase especial como un ámbito de aplicación de medidas de reducción de riesgos.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Esta información podría encontrarse en los términos de referencia estándar para la contratación de grandes proyectos como presas, aeropuertos, puertos, puentes de grandes luces, etc. 2. Las exigencias de seguridad en la fase de construcción pueden encontrarse en actos administrativos por sectores (energía, agua potable y saneamiento, aeronáutica civil, vías, etc.).
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Para proyectos de gran escala de líneas vitales debe encontrarse que al menos haya una norma, reglamento, norma administrativa, resolución o directiva sectorial que exprese requisitos de seguridad en la fase de construcción que se hayan establecido previamente o en los procesos de licitación o concesión.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>SE HA OBJETADO EL VERIFICABLE OFRECIDO Y EN EL FTP NO ESTÁ EL iGOPP DEFINITIVO</p> <p>México: La Norma Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011, sobre "Construcción-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo", del 4 de mayo de 2011, tiene como objetivo establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en las obras de construcción y aplica en todas las obras de construcción que se desarrollen en el territorio nacional, en cualquiera de sus diferentes actividades o fases. Análisis de riesgos potenciales, que es "el documento que contiene las características de la obra de construcción y los riesgos asociados a cada una de las actividades y fases que se desarrollan en ésta, así como las medidas preventivas para cada riesgo identificado". La Norma 031 establece en el "numeral 8" la determinación de los riesgos y su posible impacto, a partir de los peligros existentes, y las medidas de prevención, protección y control aplicables a los riesgos detectados, tanto para obras de construcción grandes como medianas. Por ejemplo, en el trabajo con excavaciones la NOM-031 establece que en las obras de construcción en las cuales se realicen trabajos de excavaciones, se deberá contar con un análisis de riesgos potenciales que considere...lo siguiente "...11.1: a) El estudio de mecánica de suelos, que se refiera al tipo de suelo por excavar, su composición física y propiedades mecánicas; c) Los cambios de clima; e) El método de estabilización de los taludes de la excavación, en su caso...11.2 Durante la realización de actividades de excavación, se deberán adoptar las medidas de seguridad siguientes: a) Inspeccionar el sitio de la excavación con el fin de detectar fallas, grietas o desprendimientos potenciales: 1) Al iniciar cada jornada y al terminar los trabajos, a fin de detectar cambios en el terreno; 2) Después de una lluvia intensa; 3) En forma posterior al paso de maquinaria pesada o tránsito vehicular intenso, y 4) Al concluir cualquier evento que pudiera aumentar el riesgo; b) Inspeccionar al inicio y al final de cada jornada los sistemas utilizados en la estabilización de las paredes de las zanjas; d) Eliminar árboles, arbustos y matorrales que obstaculicen la estabilidad de los cortes de terreno por efectuar, si se cuenta con las autorizaciones que correspondan; e) Asegurar los</p>

soportes o anclajes de los postes de energía eléctrica o, en su caso, solicitar su reubicación a la autoridad competente; f) Reforzar las paredes de la excavación con puntales, recubrimientos, mallas, tarimas, cimbra, travesaños o ademes (tabla estaca), cuando exista el riesgo de derrumbes. En excavaciones para pilas, prohibir el ingreso de trabajadores cuando no se cuente con la debida protección de las paredes de la excavación; g) Realizar excavaciones en frentes de trabajo con taludes estables, cuya inclinación deberá estar de acuerdo con el tipo de suelo y/o la Tabla 6 siguiente...".

Pregunta de respuesta cerrada

1. ¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que cada sector es responsable de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias sectoriales?

Descripción general del indicador

Considerando que la GRD es una política pública que debe correr de manera transversal por la administración pública nacional o federal, en el entendido que sus objetivos y visión es compartida por todos los sectores, es deseable que la normatividad de la GRD estipule que cada sector debe, en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones, realizar acciones para reducir su exposición y vulnerabilidad, y consecuentemente su riesgo (con base en el análisis de riesgo que cada uno debería realizar), de esa manera los países en su conjunto tendrían mejores opciones de desarrollo.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Indagar en la normativa nacional de GRD.
2. Analizar si se estipula de forma expresa que los sectores tienen la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus propias competencias sectoriales.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Este indicador se refiere a un atributo de calidad de la normatividad de GRD del país. Parte del reconocimiento que la GRD es un tema de desarrollo y por tanto compete a todos los niveles de gobierno y los sectores su implementación concreta.

No debe confundirse con normativa que estipule que los sectores son responsables de realizar acciones de preparativos para desastres. Tampoco se debe asumir que los sectores realizan la reducción del riesgo simplemente porque lo estipule un plan sectorial de GRD o de Prevención y Atención de Desastres; lo que interesa en este punto es verificar si la norma de GRD explícitamente asigna la responsabilidad a cada sector de reducir su propio riesgo.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Panamá: La Política Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres (PNGIRD), aprobada por Decreto N° 1101, del 30 de diciembre de 2010, estipula en el eje número V que “... la GIRD debe ser considerada parte intrínseca de los procesos de planificación del desarrollo. Siguiendo el principio del ámbito de competencias, cada entidad pública debe reducir el riesgo de su propia actividad social o productiva y debe evitar la creación de nuevos riesgos”.

México: La Ley General de Protección Civil publicada el 6 de junio de 2012, establece en su artículo 4: “Las políticas públicas en materia de protección civil, se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil, identificando para ello las siguientes prioridades: ... III. Obligación del Estado en sus tres órdenes de gobierno, para reducir los riesgos sobre los agentes afectables y llevar a cabo las acciones necesarias para la identificación y el reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas bajo su jurisdicción”.

Pregunta de respuesta cerrada
2. ¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que las empresas prestadoras de servicios públicos son responsables de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus operaciones?
Descripción general del indicador
<p>Tomando en cuenta que la GRD es una política pública que debe ejecutarse de manera transversal, involucrando a todas las entidades de la administración pública, a todos los niveles de gobierno e igualmente a los sectores social y privado, entonces es razonable que la normatividad nacional de la GRD incluya en esa integralidad a las empresas prestadoras de servicios públicos, ya sean de carácter público o concesionadas a un particular. En ese tenor, este indicador valora que la normativa nacional de GRD establezca responsabilidades para estas empresas, particularmente en materia de la reducción de los riesgos que son relativos al ámbito de los servicios que presta. Esto, como resultado de la valoración de los costos sociales y financieros que generan tanto la afectación, como la interrupción parcial o integral de esos servicios a consecuencia de un desastre. Al igual que el indicador RR1B-1, este indicador se centra en el análisis de los criterios de calidad de la normativa específica.</p> <p>Es posible que en algunos países se incluya dentro del ámbito sectorial a las empresas prestadoras de servicios públicos; esto dependerá de la organización institucional de cada país.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar en la normativa específica de GRD. 2. Analizar si se estipula de forma expresa que las empresas prestadoras de servicios públicos tienen la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus propias operaciones.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Este indicador se refiere a un atributo de calidad de la normatividad de GRD del país. Parte del reconocimiento que la GRD es un tema de desarrollo y por tanto compete a todos los niveles de gobierno y los sectores su implementación concreta.</p> <p>No debe confundirse con normativa que estipule que las empresas de servicios públicos son responsables de realizar acciones de preparativos para desastres, así como tampoco se debe asumir que dichas empresas realizan la reducción del riesgo simplemente porque lo estipule un plan sectorial de GRD o de Prevención y Atención de Desastres. Lo que interesa en este punto es verificar la norma de GRD, explícitamente si asigna la responsabilidad a las empresas prestadoras de servicios públicos de reducir su propio riesgo.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: El Reglamento de la Ley N° 29664, que crea el SINAGERD, aprobado mediante Decreto Supremo número 048-2011-PCM, del 25 de mayo 2011, establece en el artículo 13, numeral 13.2 que "... las entidades públicas identifican y priorizan el riesgo en la infraestructura y los procesos económicos, sociales y ambientales, en su ámbito de atribuciones, y establecen un plan de gestión correctiva, tomando en consideración los lineamientos establecidos por el CENEPRED". Adicionalmente, la Ley N° 29664 que crea el SINAGERD, del 8 de febrero 2011, en el artículo 2o. relativo al ámbito de aplicación de la Ley, instruye: "... la Ley es de aplicación y cumplimiento para todas las entidades y empresas públicas de todos los niveles de gobierno, así como el sector privado y la ciudadanía en general", y adiciona: "...toda referencia genérica a entidades públicas en la presente Ley, su reglamento y las disposiciones que a su amparo se emitan se entiende referida a... las entidades públicas a que se refiere la Ley Núm. 27444...". Esta última, correspondiente a la Ley del Procedimiento Administrativo General del 21 de marzo de 2001, el concepto de entidades públicas es extensivo a "Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia...". De esta forma se concluye que en el Perú, las empresas prestadoras de servicios públicos sí están obligadas a reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus operaciones.</p>

República Dominicana: El Decreto No. 874-09, que aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 147-02, sobre Gestión del Riesgos, del 30 Noviembre de 2009, establece responsabilidades para los principales prestadores de servicios públicos de agua, saneamiento y electricidad (hay otros proveedores en zonas rurales o menores que quedarían fuera del alcance del reglamento)"*Artículo 16.- De las funciones y los deberes de las dependencias y organismos del Gobierno Central. A parte de las responsabilidades y funciones específicas que se establezcan en el Plan Nacional de Emergencia, son funciones especiales de las siguientes dependencias y organismos del Gobierno Central:... 15) El Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados, la Corporación Dominicana de Electricidad, las Corporaciones de Acueductos y Alcantarillados promoverán estudios de vulnerabilidad de las líneas vitales de su competencia; formularán medidas de reducción del riesgo para las redes y obras de infraestructura de los servicios públicos de su competencia; coordinarán el apoyo para atender las necesidades de la población en materia de servicios públicos en caso de desastre y apoyarán las fases de recuperación y reconstrucción cuando éstos sean afectados*".

Código: RR 1B-3

Pregunta de respuesta cerrada
3. <i>¿Existe al menos una norma nacional de seguridad (código) para el diseño sismo resistente de edificaciones, o similar (por ejemplo: viento), que sea de obligatorio cumplimiento para proyectos públicos y privados?</i>
Descripción general del indicador
La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) supone un interés prácticamente en todos los aspectos de un país, luego entonces resulta lógico que conceda gran importancia a la actividad de la construcción y el urbanismo, sobre todo una vez que han realizado los análisis de riesgo correspondientes, y ha detectado una serie de amenazas naturales relacionadas directamente con esa actividad. De manera que este indicador valora la vigencia de normas y códigos nacionales para el diseño y construcción de edificaciones, que como instrumentos técnicos y normativos que son recojan esa información resultado del análisis de los riesgos y la traduzcan en reglas o preceptos obligatorios para proyectos públicos o privados.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normativa nacional para el diseño de edificaciones. 2. Analizar si dentro de dicha normatividad aplica el diseño sismo resistente o para otro tipo de amenazas naturales relevantes en el país (como el viento). 3. Determinar si el código (o instrumento equivalente) es de obligatorio cumplimiento.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
El código de construcciones deberá estar normado y deberá ser de obligatorio cumplimiento.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Panamá: El código de construcciones, publicado en la Gaceta Oficial No. 25,181, del 22 de noviembre de 2004 - Ministerio de Obras Públicas, Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (Ley 15 de 26 de enero de 1959), Resolución No. JTIA-639 (de 29 de septiembre de 2004) <i>“Por medio de la cual se adopta el Reglamento para el Diseño Estructura en la República de Panamá (2004) REP-04”</i>. En el REP el cómputo de las cargas contempla: Gravedad (Cap. 2), Viento (Cap. 3), Sismo (Cap. 4) y Suelo (Cap. 5); y es de obligatorio cumplimiento para proyectos públicos y privados.</p> <p>Perú: La Norma Técnica de Edificación E.30 "Diseño Sismorresistente", aprobada mediante Resolución Ministerial N° 079-2003-VIVIENDA, del 2 de abril de 2003, y actualizada constantemente (con última actualización disponible a través del Decreto Supremo N° 017-2012-VIVIENDA, de fecha 8 de noviembre del 2012). Esta norma es de obligatorio cumplimiento para proyectos públicos y privados.</p>

Código: RR 1B-4**Pregunta de respuesta cerrada**

4. *¿La normatividad que regula los aspectos técnicos de construcciones, define parámetros de diseño especiales para edificaciones esenciales, indispensables o infraestructura crítica en el país?*

Descripción general del indicador

Este indicador se relaciona con otros dos indicadores del iGOPP: el IR 1B-18 que trata sobre las “edificaciones esenciales, indispensables o infraestructura crítica” y el RR 1A-3 que trata sobre los códigos de construcción.

Interesa establecer si en el país, la determinación de edificaciones “esenciales, indispensables o infraestructura crítica” está asociada a un tratamiento especial para el diseño de las mismas. Esto se puede verificar a partir de la normatividad que regula los aspectos técnicos de construcciones.

Este indicador se refiere a un criterio de calidad de la normativa de construcciones del país.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Identificar la normativa nacional para el diseño de edificaciones.
2. Analizar si dentro de dicha normatividad se reconoce la calidad de edificaciones “esenciales, indispensables o infraestructura crítica”.
3. Determinar si se establecen criterios de diseño de mayor rigor para este tipo de edificaciones.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

En la normatividad para el diseño de edificaciones, debe establecerse un tratamiento o régimen especial en cuanto al diseño de aquellas consideradas “esenciales, indispensables o infraestructura crítica” y sobre las que se reconozca, dada su importancia estratégica o por la naturaleza y calidad de los servicios que debe prestar, una tutela especial (por ejemplo los hospitales y las escuelas).

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región**Colombia:**

El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, contenido en un Anexo del Decreto N° 926 de 2010 por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo resistentes - NSR-10, y que actualiza la Ley 400 de 1997, esta norma integra en la sección A.2.5 el "Coeficiente de importancia", donde se prescribe un mayor grado de conservatismo en el diseño sismo resistente de aquellas edificaciones que son indispensables para la atención de la emergencia y la recuperación de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia de un sismo fuerte. En esta norma, se indica que son edificaciones esenciales o indispensables las de los grupos III y IV, y se incluyó a las escuelas dentro del Grupo de Uso III de edificaciones de atención a la comunidad.

Guatemala: El Reglamento de la Ley N° 109-96, Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado (CONRED), adoptado por Acuerdo Gubernativo N° 49-2012, del 14 de marzo del 2012, establece en el Artículo 85: "*Normas Técnicas de Construcción. Con base en el Artículo 3 de la Ley de CONRED, literal a), la Secretaría Ejecutiva y/o el Consejo Científico solicitará la colaboración de instituciones públicas, instancias gremiales, profesionales, académicas, ciudadanas y del sector privado para la elaboración de propuestas de normas de construcción para la prevención y mitigación de desastres, que serán presentadas al Consejo Nacional para su aprobación; posteriormente se seguirá lo establecido en el Decreto Número 1523 del Congreso de la República, que norma la competencia legal de la COGUANOR (Comisión Guatemalteca de Normas). Dichas normas deberán aplicarse en todas las obras de construcción que se realicen.*" Actualmente se han formulado y aprobado tres Normas para la Reducción de Desastres (NRD), que establecen parámetros de diseño especiales para distintas tipologías de edificaciones y obras en el país. La Norma de Reducción de Desastres Número 1 establece requerimientos específicos para las obras críticas, esenciales e importantes: Norma de Reducción de Desastres Número 1 (NRD1), sobre "Requerimientos estructurales para obras

críticas, esenciales e importantes", aprobada el 19 de marzo de 2010, por Acuerdo N° 03-2010 de la CONRED. Establece un conjunto de criterios técnicos mínimos que deben aplicarse al diseño de obras nuevas o de remodelación o reparación de obras existentes, aplicable las denominadas obras críticas, esenciales e importantes, conforme la clasificación contenida en la Norma Recomendada AGIES NR-1-2000 (Asociación Guatemalteca de Ingenieros y Bases Generales de Diseño y Construcción, y sus posteriores reformas. Adicionalmente, las Normas de Reducción de Desastres Número 2 y 3 introducen especificaciones técnicas de seguridad para las instalaciones de uso público: Normas de Reducción de Desastres Número 2 (NRD2)_sobre Normas Mínimas de Seguridad en Edificaciones e Instalaciones de Uso Público, aprobada el 23 de marzo de 2011, por Acuerdo N° 04-2011. Establece, entre otros parámetros, especificaciones técnicas para el diseño de las salidas de emergencia y rampas de emergencia, que deben observar todas las instalaciones o edificaciones de uso público, para resguardar a las personas en caso de eventos de origen natural o provocado que puedan poner en riesgo su integridad física. Norma de Reducción de Desastres Número 3 (NRD3) sobre "Especificaciones Técnicas de Materiales para la Construcción", aprobada por Acuerdo Gubernativo N° SE-02-2013. Establece especificaciones técnicas para materiales de construcción que deben observarse en instalaciones y edificaciones nuevas de uso público, así como las que sufren remodelaciones o rehabilitaciones, de construcción gubernamental o privada, con la finalidad de que cumplan con los requisitos mínimos de construcciones seguras y permanentes, preservando la vida de los ciudadanos y su integridad física, ante eventos de origen natural o provocado.

Código: RR 1B-5

Pregunta de respuesta cerrada
5. ¿La norma sismo-resistente ha sido revisada al menos una vez en los últimos 10 años?
Descripción general del indicador
Este indicador mide un criterio de desempeño que se basa en la buena práctica que, en determinados lapsos, la normatividad sea actualizada o revisada. En este caso, se refiere al código de construcción sismo-resistente. De manera que un presupuesto para considerar este indicador satisfecho, sería la vigencia de esa norma.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none">1. Identificar la normativa nacional que contiene el código de construcciones sismo-resistentes.2. Determinar se ha sido actualizado o revisado al menos una vez en los últimos 10 años.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
El código de construcciones sismo resistente ha sido actualizado al menos una vez en los últimos 10 años (o aprobado por primera vez en los últimos 10 años).
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Colombia: Ley 400 de 1997, por la cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo Resistentes, en el Artículo 49 faculta el Gobierno Nacional para que <i>“previo el visto favorable de la Comisión Permanente creada a través de la presente ley, y por medio de decretos reglamentarios, proceda a efectuar las actualizaciones en los aspectos técnicos y científicos que demande el desarrollo de la presente ley y sus reglamentos”</i>. En esa virtud, el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, fue actualizado y contenido en un Anexo del Decreto N° 926 de 2010, por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo resistentes - NSR-10.</p> <p>Costa Rica: El Código Sísmico de Costa Rica fue formulado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, su tercera edición fue publicada en 2003 y su cuarta edición fue revisada en 2010, publicada en 2011, y aprobada oficialmente por Decreto N° 37070 del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos- Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Obras Públicas y Transporte, y publicado en la Gaceta Oficial el 13 de julio de 2012.</p>

Código: RR 1B-6

Pregunta de respuesta cerrada
6. <i>¿La normatividad que regula la gestión ambiental integra en sus objetivos, metas o resultados de forma explícita la reducción del riesgo de desastres?</i>
Descripción general del indicador
Este indicador busca premiar la vigencia de normatividad en materia ambiental que logre conciliar y compatibilizar sus ámbitos y valores tutelados, con los objetivos y metas de la GRD, concretamente en su fase de Reducción del Riesgo (RR). Esto, considerando que se trata de procesos que se refuerzan mutuamente, de manera que es posible generar sinergias respecto de los temas y objetivos comunes o compartidos.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad ambiental vigente en el país. 2. Determinar si en dicha normatividad se hace mención expresa a la reducción del riesgo de desastres (RR). 3. Determinar si en la normatividad ambiental se establece la RR de desastre como un objetivo, meta o resultado a lograr.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Idealmente, la política ambiental del país debería tener una serie de metas relacionadas con la gestión ambiental, y una de estas metas debería ser la reducción del riesgo de desastres, debido esencialmente a la estrecha relación que existe entre ambos procesos.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Colombia: La Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA; establece en el Título I “Fundamentos de la Política Ambiental Colombiana”, Artículo 1º.- Principios Generales Ambientales, establece lo siguiente: <i>la política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales:</i> numeral 9: “<i>La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento</i>”. También establece, como una función del Ministerio del Medio Ambiente, la siguiente: (Artículo 5, numeral 35): “<i>Hacer evaluación, seguimiento y control de los factores de riesgo ecológico y de los que puedan incidir en la ocurrencia de desastres naturales y coordinar con las demás autoridades las acciones tendientes a prevenir la emergencia o a impedir la extensión de sus efectos</i>”.</p> <p>República Dominicana: La Ley No. 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, promulgada el 18 de agosto de 2000, ordena en el Artículo 18 que le corresponde a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otras, la función de “... 23. <i>Promover, en coordinación con los organismos competentes, la realización de programas y proyectos para la prevención de desastres que puedan afectar el medio ambiente y los recursos naturales, así como la mitigación de los daños causados...</i>”.</p>

Código: RR 1B-7

Pregunta de respuesta cerrada
7. ¿La normatividad del sector ambiental define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?
Descripción general del indicador
En correspondencia con el indicador RR 1B-6, en este caso se valora que dentro del conjunto de responsabilidades del sector ambiental o de sus distintas instancias, se identifiquen aquellas en las que convergen con la reducción del riesgo.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad ambiental vigente en el país. 2. Determinar si en dicha normatividad se establece como responsabilidad del sector la reducción del riesgo de desastres (prevención de riesgos o prevención de desastres).
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Una normativa ambiental del país que considere en la determinación de las responsabilidades del sector, un número de estas que guarden relación con las acciones de reducción del riesgo de desastres; incluyendo responsabilidades de RR para el nivel nacional, central o federal; y para las autoridades ambientales de cada región, estado o provincia según corresponda al nivel de descentralización política y administrativa del país.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Colombia: La Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA; establece en el Artículo 5, numeral 35, funciones del Ministerio del Medio Ambiente, la siguiente: “Hacer evaluación, seguimiento y control de los factores de riesgo ecológico y de los que puedan incidir en la ocurrencia de desastres naturales y coordinar con las demás autoridades las acciones tendientes a prevenir la emergencia o a impedir la extensión de sus efectos” ; las Corporaciones Autónomas Regionales en el Artículo 31, numeral 23: “Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirles en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con las administraciones municipales o distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación”.</p> <p>México: La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, del 25 de febrero de 2003, establece en su Artículo 15 que “Corresponden a los Gobiernos de los Municipios, de conformidad con esta Ley y las Leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones: I... XI. Participar y coadyuvar en las acciones de prevención y combate de incendios forestales en coordinación con los gobiernos federal y estatal, y participar en la atención, en general, de las emergencias y contingencias forestales, de acuerdo con los programas de protección civil”.</p>

Código: RR 1B-8**Pregunta de respuesta cerrada**

8. *¿La normatividad del sector agricultura, define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?*

Descripción general del indicador

Partiendo del principio que la GRD es una política pública dirigida al desarrollo nacional, que además resulta ser transversal e incluyente, y que por esa razón involucra a todas las instancias de los sectores de la administración pública nacional, central o federal según el modelo jurídico-político de cada país (además de integrar a todos los órdenes de gobierno y los sectores social y privado). Entonces, siguiendo esa lógica, se puede afirmar como indispensable que la normatividad de cada uno de los sectores establezca obligaciones para la realización de actividades de GRD, concretamente aquellas de Reducción del Riesgo (RR) ejecutadas en el ámbito de sus competencias. En ese contexto, este indicador valora que la normativa del sector agricultura incorpore funciones enfocadas a localizar y reducir los riesgos que se relacionan con las actividades propias del sector.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Identificar la normativa del sector agricultura.
2. Determinar si se establecen responsabilidades en materia de RR y en el ámbito de su competencia.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Deben disponerse en la normatividad del sector agricultura (que rige a su cabeza de sector y sus diversas instancias) una serie de responsabilidades vinculadas con la realización de acciones, proyectos o programas que reduzcan el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias sectoriales.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Perú: Inicialmente, la condición se cumple parcialmente en 2008, cuando el Ministerio de Agricultura (MINAG) crea el Grupo de Trabajo Técnico de Seguridad Alimentaria y Cambio Climático (GTTSACC), mediante Resolución Ministerial N° 0647-2008-AG, del 31 de julio de 2008 encargado de "...proponer la visión sectorial del cambio climático en los sistemas productivos agrarios del país y recomendar medidas que orienten procesos y acciones institucionales, así como la articulación intersectorial para la adaptación al cambio climático mediante la reducción de la vulnerabilidad del agro, teniendo como finalidad la contribución a la seguridad agroalimentaria del Perú...". Asimismo, en su artículo 4o. como parte de sus actividades, se le asigna la de "4.4. Elaborar y proponer lineamientos de política sectorial, estrategia, planes y proyectos, para la reducción de la vulnerabilidad del agro y su adaptación al cambio climático." Posteriormente, la condición se ve complementada mediante la Resolución Ministerial N° 265-2012-AG, del 6 de agosto 2012, por la cual se aprueba el Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático en el sector Agrario PLANGRACC-A. Este plan tiene el Eje Estratégico N° 3 Prevención y Reducción de Riesgos considerando eventos climáticos. Además, considera el numeral 7.2 Modalidades de Implementación del PLANGRACC-A, en el cual se distribuyen expresamente las responsabilidades para la ejecución de los 159 proyectos identificados a nivel nacional.

México: La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, del 7 de diciembre de 2001, prevé en el Artículo 131 que "El Gobierno Federal formulará y mantendrá actualizada una Carta de Riesgo en cuencas hídricas, a fin de establecer los programas de prevención de desastres, que incluyan obras de conservación de suelo, agua y manejo de avenidas...".

Código: RR 1B-9

Pregunta de respuesta cerrada
9. ¿La normatividad del sector salud, define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?
Descripción general del indicador
Partiendo del principio que la GRD es una política pública dirigida al desarrollo nacional, que además resulta ser transversal e incluyente, y que por esa razón involucra a todas las instancias de los sectores de la administración pública nacional, central o federal según el modelo jurídico-político de cada país (además de integrar a todos los órdenes de gobierno y los sectores social y privado). Entonces, siguiendo esa lógica, se puede afirmar como indispensable que la normatividad de cada uno de los sectores establezca obligaciones para la realización de actividades de GRD, concretamente aquellas de Reducción del Riesgo (RR) ejecutadas en el ámbito de sus competencias. En ese tenor, este indicador valora que la normativa del sector salud incorpore funciones enfocadas a localizar y reducir los riesgos que se relacionan con las actividades propias del sector.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normativa del sector salud. 2. Determinar si se establecen responsabilidades en materia de RR y en el ámbito de su competencia (puede ser prevención de riesgos o prevención de desastres).
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Deben disponerse en la normatividad del sector salud (que rige a su cabeza de sector y sus diversas instancias) una serie de responsabilidades vinculadas con la realización de acciones, proyectos o programas que reduzcan el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias sectoriales.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: La responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el sector se define a través de la Política Nacional Hospitales Seguros ante Desastres, aprobada por Decreto Supremo N° 009-2010-SA, del 23 de abril 2010. Allí se incorporan los objetivos específicos 2 "<i>Incorporar los criterios de hospitales seguros frente a los desastres en los procesos de pre inversión, ejecución de la inversión, post inversión, aseguramiento y gestión de la calidad en salud</i>"; y 3 "<i>Mejorar los niveles de seguridad frente a los desastres en los establecimientos de salud existentes</i>". En estos objetivos se establece la gestión prospectiva y correctiva de responsabilidad del sector.</p> <p>República Dominicana: La Ley No. 42-01, General de Salud, de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, aprobada el 8 de Marzo 2001, en su Libro Segundo "De las Acciones de Salud", en su Título I "De la promoción", Capítulo V "De la Salud Ambiental", en su Sección IX sobre la Prevención y Reducción de los Efectos de los Desastres Sobre la Salud, plantea "<i>Artículo 58. La SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria), en coordinación con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana, el Cuerpo de Bomberos, las autoridades municipales, y cualquier otra entidad encargada por el Estado para la prevención y enfrentamiento de desastres, llevarán a cabo actividades sobre la prevención o mitigación y preparativos de tratamientos de desastres a fin de enfrentarlos adecuadamente</i>". Adicionalmente, el Decreto No. 213-09, que establece el Reglamento de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, para la Prevención, Mitigación y Respuesta ante Emergencias y Desastres, de 10 de Marzo de 2009, que establece en el Artículo 8 que las "<i>Funciones Generales de la Dirección Nacional de Emergencias y Desastres (DNED) son: ... g) Apoyar a la dirección de ingeniería de la SESPAS, en sus funciones, para que las edificaciones e instalaciones de los servicios de salud se construyan con las medidas de seguridad necesarias para prevenir desastres</i>".</p>

Pregunta de respuesta cerrada
10. ¿La normatividad del sector vivienda, define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?
Descripción general del indicador
Partiendo del principio que la GRD es una política pública dirigida al desarrollo nacional, que además resulta ser transversal e incluyente, y que por esa razón involucra a todas las instancias de los sectores de la administración pública nacional, central o federal según el modelo jurídico-político de cada país (además de integrar a todos los órdenes de gobierno y los sectores social y privado). Entonces, siguiendo esa lógica, se puede afirmar como indispensable que la normatividad de cada uno de los sectores establezca obligaciones para la realización de actividades de GRD, concretamente aquellas de Reducción del Riesgo (RR) ejecutadas en el ámbito de sus competencias. En ese tenor, este indicador valora que la normativa del sector vivienda (si es que existe como tal, o en su defecto simplemente su marco legal) incorpore funciones enfocadas a localizar y reducir los riesgos que se relacionan con las actividades propias del sector.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normativa del sector vivienda (si es que existe como tal). 2. Determinar si se establecen responsabilidades en materia de RR y en el ámbito de su competencia (puede ser prevención de riesgos o prevención de desastres).
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Deben disponerse en la normatividad del sector vivienda (que rige a su cabeza de sector y sus diversas instancias) una serie de responsabilidades vinculadas con la realización de acciones, proyectos o programas que reduzcan el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias sectoriales.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Panamá: La ley 61 de 2009 "Que reorganiza el Ministerio de Vivienda y establece el Viceministerio de Ordenamiento Territorial de 23 de octubre de 2009. Adicionalmente, el Ministerio aprobó la resolución N° 372A- de 29 de julio de 2011, por la cual se "establece la complementariedad de funciones entre los Viceministerios de Vivienda y Ordenamiento Territorial en materia de Gestión de Riesgos: <i>"a fin de que se incluyan las variables de riesgo, vulnerabilidad y sostenibilidad en los siguientes niveles: planificación, estudios, planes, programas, proyectos, toma de decisiones y/o aprobaciones en los cuales colaboren conjuntamente en acciones relativas a la gestión del riesgo"</i>. Esta resolución además establece en su ARTÍCULO CUARTO, apartado b, <i>"Incluir dentro de los planes, programas, y proyectos las especificaciones relacionadas con la gestión de riesgos"</i>, y en el ARTÍCULO QUINTO, apartado b, <i>"Asegurar que en los esquemas de ordenamiento territorial se desarrolle el tema de la gestión de riesgo de desastres y cambio climático"</i>. Por su parte, la Resolución No. 458 de 27 de diciembre de 2007 "Por la cual se asignan funciones a las unidades administrativas de varias direcciones del Ministerio de Vivienda", dispone en el Artículo 23 que: <i>"el Departamento de Prevención y Mitigación de Riesgos Sociales en la Vivienda, tendrá entre sus funciones las siguientes "1. Atender las comunidades vulnerables y en situaciones de riesgos habitacionales; 2. Mantener actualizada la información de las familias que habitan en casas condenadas, casas abandonadas, albergues, pensiones, barracas y villas comunitarias; 3. Identificar viviendas ubicadas en áreas de riesgo o vulnerabilidad; 4. Cuantificar las necesidades habitacionales en áreas de riesgo;... 6. Coordinar las acciones de reubicación de las familias que requieren los servicios, de acuerdo a la situación presentada..."</i>. NOTA: se considera que las tres normas en su conjunto definen las responsabilidades del sector en materia de reducción del riesgo, sin embargo es la resolución 458 (2007) la que de forma más clara define esta competencia al estipular la necesidad de la reubicación de viviendas en riesgo.</p> <p>México: Ley de Vivienda, del 27 de junio de 2006, establece en el Título Sexto (Calidad y Sustentabilidad de la Vivienda), Capítulo Único, Artículo 71: <i>"Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la Comisión promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con... así como garantizar la seguridad estructural y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados..."</i>.</p>

Pregunta de respuesta cerrada

11. ¿La normatividad del sector educación, define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?

Descripción general del indicador

Partiendo del principio que la GRD es una política pública dirigida al desarrollo nacional, que además resulta ser transversal e incluyente, y que por esa razón involucra a todas las instancias de los sectores de la administración pública nacional, central o federal según el modelo jurídico-político de cada país (además de integrar a todos los órdenes de gobierno y los sectores social y privado). Entonces, siguiendo esa lógica, se puede afirmar como indispensable que la normatividad de cada uno de los sectores establezca obligaciones para la realización de actividades de GRD, concretamente aquellas de Reducción del Riesgo (RR) ejecutadas en el ámbito de sus competencias. En ese tenor, este indicador valora que la normativa del sector educación incorpore funciones enfocadas a localizar y reducir los riesgos que se relacionan con las actividades propias del sector. (NOTA: no debe confundirse con el tema curricular que ya se está considerando en el indicador IR 2-1).

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Identificar la normativa del sector educación.
2. Determinar si se establecen responsabilidades en materia de RR y en el ámbito de su competencia (puede ser prevención de riesgos o prevención de desastres).

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Deben disponerse en la normatividad del sector educación (que rige a su cabeza de sector y sus diversas instancias) una serie de responsabilidades vinculadas con la realización de acciones, proyectos o programas que reduzcan el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias sectoriales.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

México: La Ley General de Infraestructura Física Educativa, del 1 de febrero del 2008, dispone en sus lineamientos generales, Artículo 2, que "... IV. La creación de mecanismos que permitan prevenir y dar respuesta a las contingencias derivadas de desastres naturales en la infraestructura física educativa nacional...". Adicionalmente, el Artículo 11 señala: "En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE... se asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, y se tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos..."

Costa Rica: El Decreto Ejecutivo N° 36451, del Ministerio de Educación Pública, del 7 de febrero de 2001, establece en su Artículo 41 "Son funciones del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo... c) Planificar, coordinar y ejecutar el Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucional (SEVRI-MEP). d) Desarrollar, implementar y actualizar una base de datos relacionados al riesgo de desastre y riesgo social en las diversas dependencias del Ministerio de Educación Pública. e) Jerarquizar los centros educativos que se enfrentan a mayores condiciones de desastre y riesgo. f). Coordinar con las Direcciones Regionales de Educación y centros educativos la elaboración de programas y planes de acción para prevenir los riesgos de desastre y riesgo social o para disminuir su probabilidad e impacto", y adiciona el mismo artículo los siguientes incisos: "... c) Brindar a las Autoridades del Ministerio de Educación Pública información relevante para la toma de decisiones en programas sociales directamente relacionados con la reducción del riesgo y la seguridad humana. d) Coordinar el Plan Nacional de Educación para la Reducción del Riesgo y los Desastres, su desarrollo y ejecución, tanto en el nivel ministerial como interinstitucional."

Pregunta de respuesta cerrada
<i>12. ¿La normatividad del sector turismo, define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?</i>
Descripción general del indicador
Partiendo del principio que la GRD es una política pública dirigida al desarrollo nacional, que además resulta ser transversal e incluyente, y que por esa razón involucra a todas las instancias de los sectores de la administración pública nacional, central o federal según el modelo jurídico-político de cada país (además de integrar a todos los órdenes de gobierno y los sectores social y privado). Entonces, siguiendo esa lógica, se puede afirmar como indispensable que la normatividad de cada uno de los sectores establezca obligaciones para la realización de actividades de GRD, concretamente aquellas de Reducción del Riesgo (RR) ejecutadas en el ámbito de sus competencias. En ese tenor, este indicador valora que la normativa del sector turismo incorpore funciones enfocadas a localizar y reducir los riesgos que se relacionan con las actividades propias del sector.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normativa del sector turismo. 2. Determinar si se establecen responsabilidades en materia de RR y en el ámbito de su competencia (puede ser prevención de riesgos o prevención de desastres).
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Deben disponerse en la normatividad del sector turismo (que rige a su cabeza de sector y sus diversas instancias) una serie de responsabilidades vinculadas con la realización de acciones, proyectos o programas que reduzcan el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias sectoriales.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
México: La Ley General de Turismo, publicada el 17 de junio de 2009, dispone en el Capítulo I, Artículo 4 atribuciones del Poder Ejecutivo Federal en la materia, que se ejercerán a través de la Secretaría, entre las que encontramos la de: "... X. Participar en programas de prevención y atención de emergencias y desastres, así como en acciones para la gestión integral de los riesgos conforme a las políticas y programas de Protección Civil que al efecto se establezcan;..."

Pregunta de respuesta cerrada

13. ¿La normatividad del sector transporte (o sector equivalente), define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?

Descripción general del indicador

Partiendo del principio que la GRD es una política pública dirigida al desarrollo nacional, que además resulta ser transversal e incluyente, y que por esa razón involucra a todas las instancias de los sectores de la administración pública nacional, central o federal según el modelo jurídico-político de cada país (además de integrar a todos los órdenes de gobierno y los sectores social y privado). Entonces, siguiendo esa lógica, se puede afirmar como indispensable que la normatividad de cada uno de los sectores establezca obligaciones para la realización de actividades de GRD, concretamente aquellas de Reducción del Riesgo (RR) ejecutadas en el ámbito de sus competencias. En ese tenor, este indicador valora que la normativa del sector transporte incorpore funciones enfocadas a localizar y reducir los riesgos que se relacionan con las actividades propias del sector.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Identificar la normativa del sector transporte.
2. Determinar si se establecen responsabilidades en materia de RR y en el ámbito de su competencia (puede ser prevención de riesgos o prevención de desastres).

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Deben disponerse en la normatividad del sector transporte (que rige a su cabeza de sector y sus diversas instancias) una serie de responsabilidades vinculadas con la realización de acciones, proyectos o programas que reduzcan el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias sectoriales.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Colombia: El Decreto 2056 de 2003, por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías, Invías, y se dictan otras disposiciones, establece en el Artículo 2, Funciones del Instituto Nacional de Vías, numeral 2.2, la de "*Elaborar conjuntamente con el Ministerio de Transporte los planes, programas y proyectos tendientes a la construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación, conservación, atención de emergencias, y demás obras que requiera la infraestructura de su competencia*"; y en el numeral 2.5 "*Asesorar y prestar apoyo técnico a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados encargados de la construcción, mantenimiento y atención de emergencias en las infraestructuras a su cargo, cuando ellas lo soliciten*". Finalmente, el artículo 11, Oficina de Prevención y Atención de Emergencias, numeral 11.5, define una serie de responsabilidades derivadas del SNPAD (ahora SNGRD), entre ellas la de "*Administrar integralmente los procesos de atención y prevención de emergencias*".

República Dominicana: La Orden Departamental No. 76/01 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que crea el Departamento de Gestión Ambiental y de Riesgo, del 21 de agosto de 2001, incluye en su Artículo 4, que la Sección de Riesgo es la encargada de: "*a) Identificar los peligros a los está expuesta el sistema de red vial a nivel nacional, regional y provincial, y proponer soluciones que tiendan a reducir el riesgo...*".

Pregunta de respuesta cerrada

14. ¿La normatividad del sector agua y saneamiento (o equivalente), define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?

Descripción general del indicador

Partiendo del principio que la GRD es una política pública dirigida al desarrollo nacional, que además resulta ser transversal e incluyente, y que por esa razón involucra a todas las instancias de los sectores de la administración pública nacional, central o federal según el modelo jurídico-político de cada país (además de integrar a todos los órdenes de gobierno y los sectores social y privado). Entonces, siguiendo esa lógica, se puede afirmar como indispensable que la normatividad de cada uno de los sectores establezca obligaciones para la realización de actividades de GRD, concretamente aquellas de Reducción del Riesgo (RR) ejecutadas en el ámbito de sus competencias. En ese tenor, este indicador valora que la normativa del sector agua y saneamiento (o equivalente) incorpore funciones enfocadas a localizar y reducir los riesgos que se relacionan con las actividades propias del sector.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Identificar la normativa del sector agua y saneamiento (o equivalente).
2. Determinar si se establecen responsabilidades en materia de RR y en el ámbito de su competencia (puede ser prevención de riesgos o prevención de desastres).

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Deben disponerse en la normatividad del sector agua y saneamiento -o equivalente- (que rige a su cabeza de sector y sus diversas instancias) una serie de responsabilidades vinculadas con la realización de acciones, proyectos o programas que reduzcan el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias sectoriales.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

México: Las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, a cargo de la CONAGUA, publicadas en el Diario Oficial (Decimotercera Sección-Vespertina), y aplicables a partir de 2013, describen en el Anexo IV las "acciones tipo" para Agua Potable, Acueductos y Alcantarillado Urbano (APAZU), y hacen referencia a: "...obras de infraestructura para minimizar riesgos y daños, considerando los escenarios actuales y futuros del cambio climático...", y "obras de infraestructura que reduzcan la vulnerabilidad de la sociedad frente a los efectos del cambio climático para una efectiva adaptación". (Pag. 74)

Perú: El sector tiene el Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 007-2006-VIVIENDA, del 17 de marzo de 2006. Este Plan estipula en su Objetivo Específico 2, Incrementar la sostenibilidad de los servicios, lo siguiente: "*Promover programas de prevención de riesgos, la disminución de la vulnerabilidad y la optimización de la atención en casos de emergencia en el ámbito sectorial...*". La condición se cumple plenamente en 2007 a través del Reglamento de la Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento, aprobado según Resolución del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, N° 11-2007-SUNASS.CD, del 2 de febrero de 2007, que establece en el Anexo 5, Medidas que deben Adoptar las EPS (Empresas Prestadoras del Servicio) en Emergencia, y en su numeral 2.3 refiere "... *elaboración de plan de medidas de mitigación*", el que es desarrollado en su numeral 5, Etapa 3, Medidas de Mitigación para reducir la vulnerabilidad.

Pregunta de respuesta cerrada
15. ¿La normatividad del sector telecomunicaciones (o equivalente), define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?
Descripción general del indicador
Partiendo del principio que la GRD es una política pública dirigida al desarrollo nacional, que además resulta ser transversal e incluyente, y que por esa razón involucra a todas las instancias de los sectores de la administración pública nacional, central o federal según el modelo jurídico-político de cada país (además de integrar a todos los órdenes de gobierno y los sectores social y privado). Entonces, siguiendo esa lógica, se puede afirmar como indispensable que la normatividad de cada uno de los sectores establezca obligaciones para la realización de actividades de GRD, concretamente aquellas de Reducción del Riesgo (RR) ejecutadas en el ámbito de sus competencias. En ese tenor, este indicador valora que la normativa del sector telecomunicaciones (o equivalente) incorpore funciones enfocadas a localizar y reducir los riesgos que se relacionan con las actividades propias del sector.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normativa del sector telecomunicaciones (o equivalente). 2. Determinar si se establecen responsabilidades en materia de RR y en el ámbito de su competencia (puede ser prevención de riesgos o prevención de desastres).
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Deben disponerse en la normatividad del sector telecomunicaciones -o equivalente- (que rige a su cabeza de sector y sus diversas instancias) una serie de responsabilidades vinculadas con la realización de acciones, proyectos o programas que reduzcan el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias sectoriales.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Costa Rica: El Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009-2014, del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, del 13 de mayo de 2009, en el numeral 3.4, Institucionalidad actual del sector Telecomunicaciones, establece en el 3.4.1 la rectoría del Estado como un componente esencial de la gobernabilidad del Sector Telecomunicaciones: <i>"El Ministro Rector será el responsable de alinear el desarrollo del sector, de acuerdo con las prioridades nacionales en cuanto a competitividad, universalidad, solidaridad, cobertura, derecho de los consumidores, reducción de los riesgos de desabastecimiento, sostenibilidad ambiental, social y económica"</i>. Asimismo, establece en el numeral 4.4.3 los ejes del PNDT: <i>"a. Telecomunicaciones... a.7 Asegurar una plataforma de telecomunicaciones con calidad ambiental, cuyo impacto sobre el ambiente sea el menor posible, contribuya a la conservación del ambiente, así como a la prevención y mitigación de efectos por desastres naturales"</i>, y <i>"5.1.3 Eje Ambiental... a. Línea estratégica: Protección Ambiental... Objetivo Específico No. 3: Garantizar las posibilidades que ofrecen las TIC para mejorar la calidad ambiental del país, lo cual incluye medidas sobre la prevención, mitigación y adaptación de los desastres naturales. ... Acciones y medidas: ... b. Desarrollar, en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias, planes y proyectos de fortalecimiento de las redes de comunicación en áreas de mayor vulnerabilidad socio ambiental y económica, que incluye sistemas de alerta temprana. c. Identificar la condición del país en cuanto a la interconexión regional e internacional de las redes digitales de información para prevención de catástrofes..."</i>.</p> <p>Jamaica: El Plan sectorial de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC) 2009-2030 se refiere a la infraestructura de telecomunicaciones de la isla, que requiere adaptarse continuamente para hacer frente a las vulnerabilidades y crear niveles crecientes de resiliencia tales como el establecimiento de un programa de gestión de desastres a través de las TIC. La Sección 2.4.2 del Plan aborda medidas para mejorar la infraestructura de las TIC y así garantizar soporte y seguridad de los acervos de información nacional y reducir al mínimo las vulnerabilidades de las redes de TIC. Esto se logrará con un esfuerzo conjunto entre el sector privado de las telecomunicaciones, la Oficina del Primer Ministro (ODPEM) y la Oficina de Regulación de Servicios Públicos. Hay 4 acciones articuladas en la Sección 2.4.2, estas son: 1. Garantizar</p>

una gran capacidad en la diversidad geográfica de cuatro cuadrantes de la conectividad internacional de fibra óptica submarina para aumentar la redundancia y mitigar las amenazas de desastre; 2. Incluir los riesgos de las TIC a la consideración de la agenda de la ODPEM e incorporar en sus planes el apoyo a la recuperación de las TIC en casos de desastres naturales; 3. Invertir en la fuente de alimentación eléctrica fiable y consistente a partir de fuentes renovables y no renovables; 4. Promover la conciencia nacional de las amenazas a la seguridad de la información por software malicioso, delitos cibernéticos, y los desastres y su impacto en la continuidad del negocio.

Pregunta de respuesta cerrada

16. ¿La normatividad del sector energía (o equivalente), define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?

Descripción general del indicador

Partiendo del principio que la GRD es una política pública dirigida al desarrollo nacional, que además resulta ser transversal e incluyente, y que por esa razón involucra a todas las instancias de los sectores de la administración pública nacional, central o federal según el modelo jurídico-político de cada país (además de integrar a todos los órdenes de gobierno y los sectores social y privado). Entonces, siguiendo esa lógica, se puede afirmar como indispensable que la normatividad de cada uno de los sectores establezca obligaciones para la realización de actividades de GRD, concretamente aquellas de Reducción del Riesgo (RR) ejecutadas en el ámbito de sus competencias. En ese tenor, este indicador valora que la normativa del sector energía (o equivalente) incorpore funciones enfocadas a localizar y reducir los riesgos que se relacionan con las actividades propias del sector.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Identificar la normativa del sector energía (o equivalente).
2. Determinar si se establecen responsabilidades en materia de RR y en el ámbito de su competencia (puede ser prevención de riesgos o prevención de desastres).

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Deben disponerse en la normatividad del sector energía -o equivalente- (que rige a su cabeza de sector y sus diversas instancias) una serie de responsabilidades vinculadas con la realización de acciones, proyectos o programas que reduzcan el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias sectoriales.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

México: La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene un Modelo de Administración de Riesgos Institucionales, que contempla entre otros, los siguientes objetivos: "*Identificar, analizar, controlar, evaluar y monitorear los posibles riesgos que enfrenta la entidad y que, de materializarse, pueden limitar o impedir el cumplimiento de los objetivos institucionales*". Adicionalmente "*Establecer mecanismos para la adecuada administración de los riesgos de la CFE y para la definición de las estrategias de control que reduzcan a su mínima expresión, la posibilidad de que se materialicen los riesgos*." Por otro lado, la CFE proporcionó evidencia de la obligatoriedad de incluir junto con los análisis de riesgos de su infraestructura que se realiza en forma anual "*un programa de las medidas preventivas y correctivas que se realizarán con el fin de eliminar los riesgos detectados*".

Jamaica: No hay una regulación del sector energía que define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres. Sin embargo, una de las acciones clave para el sector se describe en la Política Energética de Jamaica 2006-2020, que es tomar medidas en caso de contingencias para disminuir los riesgos de interrupción de los servicios públicos esenciales en caso de catástrofes y otras situaciones de emergencia. Esta política ha sido aprobada, y para hacer realidad la visión del sector energético, esta política apunta a la realización de la evaluación y gestión de los riesgos para aportar elementos de conocimiento en la construcción de una nueva infraestructura para la transmisión y distribución, y el financiamiento de una nueva capacidad de generación y diversificación de las opciones de fuentes de energía.

Pregunta de respuesta cerrada
17. ¿Existe normatividad que ordene realizar un análisis de riesgo de desastres en la fase de pre-inversión del ciclo del proyecto?
Descripción general del indicador
<p>Los Proyectos de Inversión Pública (PIP), son intervenciones limitadas en el tiempo con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de una entidad.</p> <p>En la mayoría de los países los PIP se formulan siguiendo el <i>ciclo del proyecto</i>, cuya primera fase es la “pre-inversión”. Esta fase tiene como objetivo evaluar la conveniencia de realizar un PIP en particular, y exige contar con los estudios que sustenten que es socialmente rentable, sostenible y concordante con los lineamientos de política establecidos por las autoridades correspondientes.</p> <p>Este indicador busca determinar si en el país se ha tenido en consideración la realización del análisis de riesgo en la fase de pre-inversión, con el fin de integrar el riesgo de desastres como un elemento de decisión sobre la factibilidad del proyecto.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Es necesario indagar en la normativa de inversión pública si se ordena realizar de manera explícita un análisis de riesgo de desastres en la fase de pre-inversión del ciclo del proyecto. 2. Si no se encuentra en la normativa respectiva, se sugiere hablar con las áreas de inversión de la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas (o entidad equivalente), o bien, con la autoridad en planificación o programación (o entidad equivalente) para indagar al respecto.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Evidencia de una norma que ordene de manera explícita realizar un análisis de riesgo de desastres en la fase de pre-inversión del ciclo del proyecto, como requisito para la aprobación de proyectos de inversión pública. De manera que si hace falta hacer una interpretación respecto de la norma, no se considera una condición positiva.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Colombia: El CONPES 3714 (documento técnico del Consejo Nacional de Política Económica y social) de diciembre de 2011, Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública, establece que “... los diferentes actores del proceso contractual, deben, bajo la propuesta y dirección de las Entidades Estatales, tipificar, estimar y asignar aquellas circunstancias, que siendo potenciales alteraciones del equilibrio económico, puedan preverse por su acaecimiento en contratos similares; por la probabilidad de su ocurrencia en relación con el objeto contractual o por otras circunstancias que permitan su previsión. Dicha previsibilidad va ligada a la posibilidad de la identificación y cuantificación del riesgo en condiciones normales”. Dentro de los riesgos preVISIBLES se consideran los “6. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser preVISIBLES por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes. Para la determinación de su existencia y/o previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.)”. Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse”. De otra parte, en la Ley 1508 de enero de 2012, Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, en el artículo 11, Relacionado con los “Requisitos para abrir procesos de selección de contratistas para la ejecución de proyectos de asociación público privada, de iniciativa pública” se exige “Análisis de amenaza y vulnerabilidad con el fin de garantizar la no generación o reproducción de condiciones de riesgo de desastre”.</p>

Perú: el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Directiva General N° 001-2011-EF/68.01, aprobada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, publicada el 9 de abril de 2011, actualizó la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que incluye el análisis de riesgos de desastres para la formulación de expedientes técnicos de inversión.

Chile: El Decreto Supremo, Ministerio Obras Públicas (MOP) N° 75 de 2004 - Reglamento para Contratos de Obras Públicas, establece en el Artículo 2 *"Para contratar cualquier obra deberá existir previamente autorización de fondos y deberá disponerse de bases administrativas, bases de prevención de riesgo y medioambientales, especificaciones técnicas, planos y presupuesto, con el visto bueno de la misma autoridad que adjudicará el contrato. Todos los documentos señalados forman parte del respectivo contrato, debiéndose fijar en las bases administrativas el orden de precedencia para su aplicación..."*.

Pregunta de respuesta cerrada
18. <i>¿Existe normatividad que ordene integrar en la fase de pre-inversión la realización de estudios de cambio climático?</i>
Descripción general del indicador
<p>Los Proyectos de Inversión Pública (PIP), son intervenciones limitadas en el tiempo con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de una entidad.</p> <p>En la mayoría de los países los PIP se formulan siguiendo el <i>ciclo del proyecto</i>, cuya primera fase es la “pre-inversión”. Esta fase tiene como objetivo evaluar la conveniencia de realizar un PIP en particular, exige contar con los estudios que sustenten que es socialmente rentable, sostenible y concordante con los lineamientos de política establecidos por las autoridades correspondientes.</p> <p>Este indicador busca determinar si en el país se ha tenido en consideración la realización del análisis del riesgo específicamente relacionado con efectos adversos potenciales del Cambio Climático (CC) en la fase de pre-inversión, esto con el fin de integrar aspectos de Adaptación al Cambio Climático como un elemento de decisión sobre la factibilidad del proyecto.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar el marco normativo del sistema nacional de inversión pública o el banco de proyectos (o el sistema equivalente en el país). 2. Determinar si se establece como uno de los requisitos para la factibilidad de los PIP el que se haya realizado un “análisis del riesgo climático”.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Evidencia de una norma que ordene de manera explícita realizar estudios de cambio climático en la fase de pre-inversión del ciclo del proyecto. De manera que si hace falta hacer una interpretación respecto de la norma, no se considera una condición positiva.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
Debido a la dificultad para encontrar un buen ejemplo en la región, se propone como referencia una situación hipotética: En proyectos que sean muy sensibles a variaciones en los regímenes climáticos, especialmente temperatura y precipitación, puede darse el caso que exista una normatividad específica que establezca la obligatoriedad de estudios sobre efectos potenciales de los cambios esperados en los patrones del clima dentro de la fase de pre-inversión, y que esta normativa sea específica para el CC (es decir que vaya más allá de la norma estándar que integra dentro del diagnóstico las consideraciones de la variabilidad climática estacional, que ya son parte integrante del análisis de riesgo regular).

Pregunta de respuesta cerrada
19. ¿Existe normatividad que ordene realizar análisis de riesgo de desastres en otras fases del ciclo del proyecto diferente de la fase de pre-inversión?
Descripción general del indicador
<p>Los Proyectos de Inversión Pública (PIP), son intervenciones limitadas en el tiempo con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de una entidad.</p> <p>En la mayoría de los países los PIP se formulan siguiendo el <i>ciclo del proyecto</i>, cuya primera fase es la “<i>pre-inversión</i>”. Esta fase tiene como objetivo evaluar la conveniencia de realizar un PIP en particular, exige contar con los estudios que sustenten que es socialmente rentable, sostenible y concordante con los lineamientos de política establecidos por las autoridades correspondientes. La segunda fase es la de “<i>inversión</i>” en el que el PIP alcanza la categoría de “viable” o “realizable, que comprende la elaboración del expediente técnico ya detallado y se procede con la ejecución del proyecto, y culmina precisamente con su terminación y liquidación. La tercera fase es la de Post-inversión, que comprende los procesos mantenimiento, control y evaluación ex post, en la que se analiza si se cumplieron los objetivos planteados inicialmente en el PIP.</p> <p>Este indicador busca determinar si en el país alguna normativa ha dispuesto la realización del análisis de riesgo en las fases de Inversión y de Post-inversión del ciclo del proyecto.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar el marco normativo del sistema nacional de inversión pública o el banco de proyectos (o el sistema equivalente en el país). 2. Determinar si se establece en esa normativa como uno de los requisitos de las fases de Inversión y Post-inversión de los PIP, que se sujeten a un análisis de riesgo.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Se encuentra vigente una normativa que dispone la realización de análisis de riesgo de desastres en las fases de Inversión y Post-inversión del ciclo del proyecto o PIP, diferente de la fase de pre-inversión.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cuenta con las Pautas para el Seguimiento de la Inversión Pública, de junio de 2011, documento que establece un sistema operativo para el seguimiento de los proyectos en cuanto a los avances en la ejecución. Asimismo, el cumplimiento pleno de los indicadores se complementa a través de las Pautas Generales para la Evaluación <i>Ex-Post</i> de Proyectos de Inversión Pública, publicadas en marzo de 2012, en cuyo capítulo 5.4.7 Evaluación de la Sostenibilidad, en el numeral d) Gestión de Riesgos, señala que: "<i>Se evaluará si los riesgos importantes han sido identificados en la preinversión, se incluyeron las medidas para reducirlos y éstas han sido aplicadas. Se identificarán los riesgos que pudiesen haber surgido en las fases de inversión y post inversión y la manera en que estos han sido enfrentados. Se evaluará la capacidad del operador del servicio o los beneficiarios para asimilar y recuperarse de un desastre o conflicto social, entre otros</i>". Debe precisarse que estas pautas son de obligatorio cumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3.1.3 “<i>Competencia. La evaluación de culminación, estará cargo de la Unidad Ejecutora - UE, por constituir la instancia institucional sobre la cual recae la responsabilidad de la ejecución del proyecto. Los demás involucrados en el proceso de ejecución apoyaran a esta; es el caso del Órgano Técnico que se encargó de los aspectos técnicos de los componentes del PIP</i>”, y “3.1.4 <i>Ámbito de Aplicación. La evaluación de culminación es obligatoria para todos los Proyectos de Inversión Pública, se efectuará de acuerdo con los Contenidos Mínimos para la Evaluación de Culminación (anexo 1), según la línea de corte establecida por monto de inversión; estas pautas constituyen las orientaciones para tal fin.</i>"</p>

Guatemala: La Guía Análisis de Gestión del Riesgo en Proyectos de Inversión Pública (AGRIP), de Enero del 2013, emitida por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), describe como Objetivo General el incorporar la gestión del riesgo en los procesos y fases de formulación de proyectos de inversión pública -preinversión, ejecución y operación- a fin de que las inversiones elegibles sean seguras en el territorio nacional. Esta Guía establece en el apartado, Enfoque de la Gestión del Riesgo en Proyectos de Inversión Pública, lo siguiente: *"En los proyectos de inversión pública la gestión del riesgo tiene un enfoque integral que se aplica a lo largo de todas las fases y etapas del ciclo del proyecto: preinversión, inversión y operación..."*. Haciendo contener una gráfica descriptiva con las etapas y acciones conforme a las fases descritas. Vale señalar que conforme al Instructivo General: Directrices para la Formulación Plan-Presupuesto anual 2014 y Multianual 2014-2016, Marco de la Gestión por Resultados y de las Normas SNIP para Proyectos de Inversión Pública Ejercicio Fiscal 2014, la guía citada es obligatoria conforme lo estipula el numeral 1.20 *"Las entidades públicas de inversión deben incluir dentro del documento de proyecto el análisis de riesgo (amenazas y vulnerabilidades) Atendiendo lo que estipula la "Guía de Análisis de Riesgo en Proyectos de Inversión Pública" elaborada por SEGEPLAN, y registrarla en el SINIP en el campo correspondiente"*.

Código: RR 1C-1**Pregunta de respuesta cerrada**

1. ¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que las unidades de gestión territorial son responsables de la reducción del riesgo de desastres en sus respectivos territorios?

Descripción general del indicador

Este indicador se refiere a un criterio de calidad de la normatividad nacional de GRD. A pesar de las diferencias notables entre los modelos político-administrativos de los países de Latinoamérica y el Caribe, en lo referente a las Unidades de Gestión Territorial (UGT) existen básicamente dos modelos: centralizados y federales. Los primeros, con origen en una declaración constitucional o porque las características y dimensiones del territorio nacional así lo facilitó, como es el caso de las islas y países pequeños. En estos países que han iniciado en las últimas décadas a un profundo proceso de descentralización, mediante la transferencia de competencias y recursos desde un gobierno central hacia órdenes inferiores de gobierno. En el caso de las repúblicas federales, a los niveles inferiores de gobierno se les han adjudicado diferentes grados de autonomía, lo que incluye algunas competencias que se les han concedido constitucionalmente, a diferencia de otras temas donde hay una competencia “compartida”, y finalmente aquellos temas que han quedado como exclusivos de los gobiernos federales.

Este indicador pretende reconocer a aquellos países que promueven una gestión local de la Reducción de Riesgos (RR) o también denominado mitigación de riesgos o prevención de desastres o de riesgos. Países, ya sean aquellos centralistas cuya normativa nacional de GRD dispone la descentralización de competencias, particularmente la de RR en su territorio; y en el caso de las repúblicas federales, valorando que la normativa nacional de GRD reconozca la jurisdicción de las UGT, dentro de la cual les corresponde realizar acciones de RR.

Nota: No debe confundirse con el indicador RR 1C-2, que pregunta si la normativa que regula las responsabilidades de los entes territoriales reconoce como una responsabilidad de los mismos la reducción del riesgo (o la prevención de desastres o de riesgos), es decir, este indicador pregunta a la normativa expresa de GRD, mientras que el otro pregunta a la normativa de los gobiernos locales o regionales (o equivalente).

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Identificar la normatividad nacional vigente en GRD.
2. Analizar si en dicha normativa se asigna responsabilidades de forma expresa a las UGT frente a los procesos de la GRD.
3. Identificar si dentro de los procesos de la GRD se asignan de forma específica como responsabilidad o competencia de las UGT la de reducción del riesgo, mitigación de riesgos o prevención de desastres o de riesgos.
4. Descartar que se trate de responsabilidades y competencias distintas a la de RR, como son por ejemplo las de preparativos para desastres, respuesta o rehabilitación.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Debe encontrarse vigente una normatividad nacional en GRD que específicamente designe responsabilidades a las UGT sobre el proceso o actividades de reducción del riesgo (o mitigación de riesgos, prevención de desastres o prevención de riesgos).

El régimen descentralizado en los países varía notablemente en la región. Puede darse el caso que una Ley de GRD no pueda asignar responsabilidades a gobiernos autónomos cuando éstos son gobernados por normativa de más alto nivel que una Ley nacional (como sería el caso de Estados que se rigen por una Constitución Federal y que gozan de plena autonomía para definir sus propias funciones y competencias). En este tipo de situaciones (estados federados), lo que debe analizarse es si la norma nacional o federal de GRD que exista reconoce como componente de la GRD la reducción del riesgo, y si ésta norma estipula que la GRD es una estrategia de desarrollo y por tanto relacionada o vinculada con los actores del desarrollo en los distintos niveles de gobierno (es decir el mismo espíritu de la norma pero evitando la asignación de “responsabilidades” pues sería improcedente).

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Países Federales

México: La Ley General de Protección Civil publicada el 6 de junio de 2012, define en su Artículo 2, fracción XXVII, a la Gestión Integral de Riesgos como *“El conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad”*.

Países Centralizados

República Dominicana: La Ley No. 147-02, Sobre Gestión de Riesgos, del 22 de Septiembre del 2002, en el Artículo 1 se enlistan los llamados Principios Generales que orientan la política nacional de gestión de riesgos, destacando entre esos : "... 3. *El ámbito de competencias: En las actividades de prevención, mitigación, preparación y respuesta ante desastres se tendrán en cuenta, para efectos del ejercicio de las respectivas competencias, la observancia de los criterios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiaridad institucional...* 6. *La descentralización: ... las entidades regionales, provinciales y municipales ejercerán libremente y autónomamente sus funciones en materia de prevención, mitigación y respuesta ante desastres, con estricta sujeción a las atribuciones que a cada una de ellas se les haya asignado específicamente en la Constitución y las leyes y... los reglamentos y decretos dictados al efecto...*". Complementariamente, el Decreto No. 874-09, que aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley No.147-02, sobre Gestión del Riesgos, del 30 Noviembre de 2009, establece en su Artículo 14, Comités Regionales, Provinciales y Municipales de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres que *"La regionalización administrativa es el instrumento de coordinación de acciones de Prevención, Mitigación y Respuesta que permite y garantiza la mayor eficiencia en la respuesta y en la implementación de los planes sostenibles en gestión de riesgos, establecidos en este reglamento... Será competencia de los Comités Regionales, Provinciales y Municipales, la organización de las labores de PMR en sus respectivas demarcaciones, tales como:...* 4) *Apoyar técnicamente la identificación de riesgos, evaluación de su magnitud y formulación de alternativas de solución. Para ello deberá contar con la asesoría del Comité Técnico Nacional en Prevención y Mitigación de Riesgos.* 5) *Apoyar e impulsar la identificación de asentamientos humanos en zonas de riesgo y promover la consecución de recursos para el mejoramiento de sus condiciones o su reubicación...* 6. *Promover la inclusión de la gestión de riesgos dentro de los planes de desarrollo de la región, provincia o municipio, proporcionando las informaciones necesarias...*".

Perú: La Ley N° 29664 que crea el SINAGERD, aprobada el 8 de febrero de 2011, en su Capítulo V, Artículo 14, punto 14.1 establece que *"los gobiernos regionales y gobiernos locales, como integrantes del SINAGERD, formulan, aprueban normas y planes, evalúan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres en el ámbito de su competencia"*. La misma Ley establece que la "reducción del riesgo" es uno de los procesos de la GRD.

Código: RR 1C-2

Pregunta de respuesta cerrada
2. <i>¿La normatividad sobre funciones y competencias de las unidades de gestión territorial en el país, establece la reducción del riesgo de desastres como una de sus competencias?</i>
Descripción general del indicador
<p>Este indicador se plantea una situación que corresponde en primera instancia al régimen o modelo centralista, y se refiere a si en la normativa que establece las competencias de las Unidades de Gestión Territorial (UGT) se reconoce el concepto de la GRD y concretamente el de la Reducción del Riesgo (RR), así como las funciones que sobre este último les corresponden a las UGT.</p> <p>En el caso de los países federales, debe entenderse este indicador en el sentido que se está valorando que las UGT tengan competencia para realizar acciones de RR en su jurisdicción, en virtud de que así lo ha dispuesto la constitución, o bien, una ley general o federal así se lo ha reconocido.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad que regula las funciones de las UGT del país, o en el caso de países federales, el artículo constitucional o la ley federal o general que así lo dispone. 2. Determinar las competencias de las UGT del país. 3. Identificar si dentro de las competencias analizadas, de forma expresa se encuentra la RR o proceso equivalente.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>La mención debe ser sobre la reducción del riesgo, la mitigación del riesgo, la prevención de desastres, o la prevención de riesgos (todos procesos ex ante).</p> <p>No debe confundirse con procesos esencialmente ex post, tales como responsabilidades en materia de preparativos para desastres, en respuesta a emergencias o calamidades.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Países Centralizados</p> <p>Perú: De conformidad con la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, del 26 de mayo 2003, las municipalidades deben ejercer la función de aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial Urbano que debe identificar las áreas de protección o seguridad por riesgos naturales (Artículo 79. Punto 1,1). Adicionalmente, en el artículo 82, puntos 10 y 13, se establecen competencias municipales en prevención del riesgo de desastres. Por otro lado, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, del 16 de noviembre del 2002, en su artículo 61 establece funciones en materia de "Defensa Civil".</p> <p>Chile: La Ley N° 19175, Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, establece: "Artículo 16. Funciones generales del gobierno regional... f) Adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe, en conformidad a la ley, y desarrollar programas de prevención y protección ante situaciones de desastre..."</p> <p>Países Federales</p> <p>México: El Título V Constitucional establece en los artículos 115-122, las responsabilidades para los Estados de la Federación y del Distrito Federal, así como de los Municipios. No obstante, en el caso de la Protección Civil, el Artículo 73, fracción XXIX-I, establece que es facultad del Congreso "...expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, coordinarán sus acciones en materia de protección civil...". De esta manera el Gobierno Federal reconoce como propia la responsabilidad de todo el universo de la protección civil, al mismo tiempo que entiende que alguna parte corresponde igualmente a los estados o entidades federativas. De allí deriva la expedición de una Ley con carácter GENERAL sobre la Protección Civil (y no una federal), que establece BASES para que cada nivel regule sus acciones con base en ella. Asimismo, reformas constitucionales recientes en el 2013, estableció en su Transitorio Segundo que "Se derogan todas las disposiciones legales en lo que se opongan al contenido del presente Decreto. Lo anterior será sin perjuicio de las disposiciones normativas que para tal efecto expidan las entidades federativas como complemento para la prevención de accidentes, la seguridad pública y la protección civil, siempre y cuando se sujeten a lo que establezca la ley de la materia". La Ley General de Protección Civil, del 6 de junio de 2012, define en el Glosario del Artículo 2, en la fracción XXVII, a la Gestión Integral de Riesgos como "...la responsabilidad de la reducción de riesgos e involucra a los tres niveles de gobierno".</p>

Código: RR 1C-3

Pregunta de respuesta cerrada
3. <i>¿La normatividad sobre ordenamiento o planificación territorial (o proceso equivalente), establece la zonificación de áreas en riesgo como determinante en la definición del uso y ocupación del suelo?</i>
Descripción general del indicador
<p>El ordenamiento territorial es el instrumento de planificación más importante para la gestión prospectiva del riesgo, es decir para la prevención de riesgos.</p> <p>La toma de decisiones sobre el uso y la ocupación del suelo es clave para la efectiva prevención de riesgos y desastres, y por tanto, es una buena práctica que dentro de la normatividad sobre ordenamiento o planificación territorial (o proceso equivalente) se establezca a la zonificación de áreas en riesgo como determinante en la definición del uso y ocupación del suelo.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad que regula el ordenamiento territorial (o proceso equivalente) en el país. 2. Determinar si dentro del proceso de planificación se considera el riesgo de desastres como un elemento en la zonificación del suelo. 3. En caso que el riesgo sea parte de la zonificación, identificar si la norma establece una reglamentación del uso del suelo consecuente con la determinación del riesgo zonificado (es decir si la norma establece un tratamiento especial a las zonas en riesgo para evitar su uso u ocupación insegura).
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Debe verificarse dentro de la normatividad sobre ordenamiento o planificación territorial (o proceso equivalente) que la zonificación de áreas en riesgo constituye un determinante en la definición del uso y ocupación del suelo (es decir para la reglamentación).
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Colombia: La Ley 388 de 1997 sobre Ordenamiento Territorial, por la cual se modifica la Ley 9a. de 1989, y la Ley 3a. de 1991 y se dictan otras disposiciones, establece los procedimientos para la formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial a nivel municipal. De acuerdo con el Artículo 8 de esta ley, son acciones urbanísticas, entre otras, "<i>5. Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda</i>". De igual manera el Artículo 12 que es parte del Contenido del componente general del plan de ordenamiento, establece en el numeral 2.3 la obligación de la "<i>... determinación y ubicación en planos de las zonas que presenten alto riesgo para la localización de asentamientos humanos, por amenazas o riesgos naturales o por condiciones de insalubridad</i>". Adicionalmente, la Norma Sismo Resistente Ley 400 de 1997, actualizada en 2010 a través del Decreto N° 926 de 2010 - NSR-10, establece las condiciones que obligan a la implementación de "zonificaciones sísmicas" y los requisitos de las mismas.</p> <p>Perú: El Decreto Supremo N° 087-2004-PCM, del 23 de diciembre de 2004, establece el Reglamento de la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) que en su Artículo 1 la establece como un "<i>...proceso dinámico y flexible para la identificación de diferentes alternativas de uso sostenible de un territorio determinado, basado en la evaluación de sus potencialidades y limitaciones con criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales</i>". Por otro lado, a nivel urbano, se cuenta con el Decreto Supremo N° 004-2011-VIVIENDA, del 16 de junio 2012, que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano. En su Capítulo X, De la Prevención y Reducción de Riesgos en el Desarrollo Urbano, el Artículo 27 ordena la integración del análisis de riesgo en los procesos del Plan de Desarrollo Urbano y otros planes, con el objetivo de reducir los riesgos; además en el Capítulo XI regula los aspectos de la "Zonificación"; complementario del Capítulo IX, en el Artículo 26, que determina que en distintas zonas de clasificación del suelo debe considerarse el atributo de riesgo para la definición de planes específicos. Finalmente, a través de la Resolución Ministerial N° 026-2010-MINAM, del 23 de febrero de 2010, se establecen los Lineamientos de Política para el Ordenamiento Territorial (OT), y en su objetivo número 3 se integra la reducción del riesgo de desastres. De lo anterior se desprende que, no obstante que las tres normas contribuyen al cumplimiento del indicador, se considera que es el Decreto Supremo N° 004-2011-VIVIENDA el que permite su cumplimiento pleno.</p>

Código: RR 1C-4

Pregunta de respuesta cerrada
4. ¿Existe normatividad para el mejoramiento integral de asentamientos humanos?
Descripción general del indicador
<p>La reducción del riesgo de desastres se implementa a través de procesos que tienen como objetivo la transformación del espacio geográfico en búsqueda de mejores condiciones de vida y de desarrollo social y económico. Uno de los procesos claves para la reducción del riesgo, especialmente a nivel urbano, es el mejoramiento integral de asentamientos humanos, también conocido en algunos países como mejoramiento de barrios.</p> <p>Este indicador pregunta específicamente si en el país existe normatividad que regule el mejoramiento integral de asentamientos humanos.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad relacionada con desarrollo urbano o equivalente. 2. Identificar si existe normatividad para el mejoramiento integral de asentamientos humanos.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Debe identificarse normatividad para el mejoramiento integral de asentamientos humanos.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Panamá: La Ley No. 22 de 29 de julio de 1991 por la cual se establecen las Bases de la Política Nacional de Vivienda, se crea el Fondo de Ahorro Habitacional y el organismo regulador del mismo, establece en el Artículo 25 que: <i>"Los recursos presupuestarios del sector vivienda deben destinarse preferentemente al desarrollo de programas de vivienda de Interés Social Prioritario. Estos programas contemplarán las modalidad y tipos de soluciones previstas en el artículo 9 de esta Ley, incluyendo las siguientes: 1. Financiamiento para la adquisición de tierras, materiales de construcción, obras de infraestructura y urbanismo, para el desarrollo de asistencias habitacionales en el sector de interés social prioritario I.;... 3. Financiamiento para los programas de mensura, legalización y consolidación de los asentamientos espontáneos.; 4. Financiamiento de estudios o investigaciones de interés para este sector y de los servicios de asesoría técnica y legal en el área habitacional"</i>.</p> <p>México: La Ley General de Asentamientos Humanos, del 21 de julio de 1993, establece en su Artículo 1, Apartado II: <i>"Fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, <u>mejoramiento</u> y crecimiento de los centros de población..."</i>. Y en el Artículo 2, fracción XIII, define: <i>"Mejoramiento: la acción tendente a reordenar o renovar las zonas de un centro de población de incipiente desarrollo o deterioradas física o funcionalmente"</i>, y desglosa a lo largo de la ley una serie de acciones y previsiones encaminadas al mejoramiento de los centros de población y los asentamientos humanos.</p>

Código: RR 1C-5

Pregunta de respuesta cerrada
5. ¿Existe normatividad para la relocalización de asentamientos humanos ubicados en zonas de riesgo?
Descripción general del indicador
<p>Este indicador supone la existencia de varios procesos previos: (i) la determinación de asentamientos humanos localizados en zonas de riesgo y (ii) la decisión política que estos asentamientos deban relocalizarse o reubicarse en áreas de mayor seguridad.</p> <p>La relocalización o reubicación por riesgo es un proceso complejo y políticamente muy costoso. No obstante se considera una buena práctica que exista un marco legal que lo posibilite.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad relacionada con asentamientos humanos. 2. Identificar si existe normatividad para la relocalización o reubicación de asentamientos humanos. 3. Determinar la motivación para que proceda la relocalización es el riesgo de desastres.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Una normatividad en materia de asentamientos humanos que contemple la relocalización o reubicación de personas en razón de estar asentados en zonas de riesgo.</p> <p>En algunos países puede existir bajo la figura de “zonas de alto riesgo” o de “riesgo no mitigable”, esto con el fin de limitar la responsabilidad fiscal del estado (no sería factible ordenar la reubicación de <i>todos</i> los asentamientos humanos en riesgo, por lo tanto se suele priorizar o hacer énfasis en las áreas más problemáticas).</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: La Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de muy Alto Riesgo No Mitigable, del 29 de mayo del 2012. Esta Ley dispone en su Artículo 1. Objeto de la Ley, que es de "<i>...necesidad pública e interés nacional el reasentamiento poblacional de las personas ubicadas en zonas de muy alto riesgo no mitigable dentro del territorio nacional</i>" y establece responsabilidades e instrumentos de gestión para la reducción del riesgo en estas áreas.</p> <p>México: La Ley General de Protección Civil, del 22 de junio de 2012, dispone en su Artículo 87 que "<i>En el caso de asentamientos humanos ya establecidos en Zonas de Alto Riesgo, las autoridades competentes con base en estudios de riesgos específicos, determinará la realización de las obras de infraestructura que sean necesarias para mitigar el riesgo a que están expuestas o, de ser el caso, deberán formular un plan a fin de determinar cuáles de ellos deben ser reubicados, proponiendo mecanismos financieros que permitan esta acción</i>".</p>

Código: RR 2-1

Pregunta de respuesta cerrada
<i>1. ¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de ambiente para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?</i>
Descripción general del indicador
La Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) es una política pública transversal de la administración pública nacional, central o federal, con objetivos que comparten todos los sectores. Ahora, una de las contribuciones más importantes de los sectores hacia la GRD, cuando la normativa nacional dispone competencias para estos desde el ámbito de sus competencias, tiene que ver con la realización de acciones enfocadas en la Reducción de los Riesgos (RR) concretamente de aquellos riesgos que se relacionan con las actividades propias del sector. En ese tenor, la disponibilidad de recursos es determinante para poder financiar y ejecutar esas actividades de RR. Razón por la que el presente indicador pone especial interés no solamente en el hecho objetivo de la asignación de recursos públicos al sector ambiente, sino que esa asignación corresponda a la última vigencia fiscal o al presupuesto nacional en ejercicio, y que pueda ser verificada a través de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal, u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un objeto de gasto o etiquetador presupuestal. 2. Comprobar que el instrumento permite identificar de forma objetiva, en la última vigencia fiscal, que se asignaron recursos a las actividades de RR en el sector ambiente. 3. Investigar, en caso que no exista el objeto de gasto o etiquetador presupuestal, en otros instrumentos equivalentes de clasificación presupuestal, tales como los rubros del presupuesto nacional o del presupuesto del sector ambiente. 4. Consultar, en su caso, a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas (o entidad equivalente), concretamente en las áreas encargadas del tema presupuestal. 5. Acudir, en su caso, con la autoridad o cabeza del sector ambiental (o entidad equivalente), concretamente con las áreas encargadas del tema presupuestal. 6. Revisar en la página web institucional de la autoridad o cabeza del sector ambiental (o entidad equivalente), los proyectos en curso.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Evidencia objetiva de la asignación de recursos al sector ambiente, hecho en la última vigencia fiscal, con el fin de realizar actividades de RR en el ámbito de su competencia, comprobable y rastreable a través de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: En el Anexo 5 de la Ley N° 29951 del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013 de Perú se evidencia que el Ministerio de Ambiente asigna recursos para: (i) la generación de instrumentos técnicos a nivel regional y local sobre susceptibilidad física a peligros múltiples; (ii) fortalecimiento de capacidades de gobiernos subnacionales para uso adecuado del territorio con enfoque de gestión de riesgo de desastres (pg. 98, producto 3000452)</p> <p>República Dominicana: La Ley No. 311-12, del Presupuesto General del Estado, promulgada el 19 de diciembre de 2012 (ver Pág. 287-288), incluye partidas presupuestarias para actividades de reducción del riesgo de desastres, tales como: Manejo sostenible de cuencas y adaptación al Cambio Climático.</p> <p>Colombia: El Anexo del Decreto "por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2012, se detallan apropiaciones y se clasifican y definen los gastos", a través del rubro presupuestal 520 904 2 se asignaron recursos para la <i>“recuperación de ecosistemas forestales en áreas prioritarias por vulnerabilidad hídrica y/o degradadas del país”</i>. A través del rubro presupuestal 520 904 1 se asignaron recursos a la <i>“formulación e implementación de planes de ordenamiento de cuencas hidrográficas priorizadas en la jurisdicción de Corpouraba, departamento de Antioquia”</i> y a través del rubro presupuestal 113 900 1 se asignaron recursos para <i>“conservación y manejo de las zonas vulnerables de alto riesgo en el departamento del Meta”</i>.</p>

Código: RR 2-2

Pregunta de respuesta cerrada
2. <i>¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de agricultura para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?</i>
Descripción general del indicador
La Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) es una política pública transversal de la administración pública nacional, central o federal, con objetivos que comparten todos los sectores. Ahora, una de las contribuciones más importantes de los sectores hacia la GRD, cuando la normativa nacional dispone competencias para estos desde el ámbito de sus competencias, tiene que ver con la realización de acciones enfocadas en la Reducción de los Riesgos (RR), concretamente aquellos riesgos que se relacionan con las actividades propias del sector. En ese tenor, la disponibilidad de recursos es determinante para poder financiar y ejecutar esas actividades de RR. Razón por la que el presente indicador pone especial interés no solamente en el hecho objetivo de la asignación de recursos públicos al sector agricultura, sino que esa asignación corresponda a la última vigencia fiscal o al presupuesto nacional en ejercicio, y que pueda ser verificada a través de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal, u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un objeto de gasto o etiquetador presupuestal. 2. Comprobar que el instrumento permite identificar de forma objetiva, en la última vigencia fiscal, que se asignaron recursos a las actividades de RR en el sector agricultura. 3. Investigar, en caso que no exista el objeto de gasto o etiquetador presupuestal, en otros instrumentos equivalentes de clasificación presupuestal, tales como los rubros del presupuesto nacional o del presupuesto del sector agricultura. 4. Consultar, en su caso, a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas (o entidad equivalente), concretamente en las áreas encargadas del tema presupuestal. 5. Acudir, en su caso, con la autoridad o cabeza del sector agricultura (o entidad equivalente), concretamente con las áreas encargadas del tema presupuestal. 6. Revisar en la página web institucional de la autoridad o cabeza del sector agricultura (o entidad equivalente), los proyectos en curso.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Evidencia objetiva de la asignación de recursos al sector agricultura, hecho en la última vigencia fiscal, con el fin de realizar actividades de RR en el ámbito de su competencia, comprobable y rastreable a través de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: En el Anexo 5 de la Ley N° 29951 del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013, del 30 de noviembre de 2012, se evidencia que el Ministerio de Agricultura asigna recursos para: (i) asistencia técnica a productores agrarios para la reducción de la degradación del suelo; (ii) población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante inundaciones, incluye como componente forestación y reforestación de la cuenca alta para minimizar los sedimentos (pgs. 266 y 267).</p> <p>México: El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2013, prevé en el Ramo 8, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el rubro S232, recursos para financiar el "Programa de Prevención y Manejo de Riesgos".</p> <p>Jamaica: En el Presupuesto Nacional 2013-2014, hay recursos para actividades de reducción de riesgos: Título 5100B – Ministerio de Agricultura y Pesca, Presupuesto 3 - Capital B, Función 14 - Agricultura, Programa 102 - Forestal y Fauna Silvestre, 20 9327 Adaptación al Cambio Climático y Reducción de Riesgo de Desastres.</p>

Código: RR 2-3

Pregunta de respuesta cerrada
3. <i>¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de salud para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?</i>
Descripción general del indicador
La Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) es una política pública transversal de la administración pública nacional, central o federal, con objetivos que comparten todos los sectores. Ahora, una de las contribuciones más importantes de los sectores hacia la GRD, cuando la normativa nacional dispone competencias para estos desde el ámbito de sus competencias, tiene que ver con la realización de acciones enfocadas en la Reducción de los Riesgos (RR), concretamente aquellos riesgos que se relacionan con las actividades propias del sector. En ese tenor, la disponibilidad de recursos es determinante para poder financiar y ejecutar esas actividades de RR. Razón por la que el presente indicador pone especial interés no solamente en el hecho objetivo de la asignación de recursos públicos al sector salud, sino que esa asignación corresponda a la última vigencia fiscal o al presupuesto nacional en ejercicio, y que pueda ser verificada a través de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal, u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un objeto de gasto o etiquetador presupuestal. 2. Comprobar que el instrumento permite identificar de forma objetiva, en la última vigencia fiscal, que se asignaron recursos a las actividades de RR en el sector salud. 3. Investigar, en caso que no exista el objeto de gasto o etiquetador presupuestal, en otros instrumentos equivalentes de clasificación presupuestal, tales como los rubros del presupuesto nacional o del presupuesto del sector salud. 4. Consultar, en su caso, a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas (o entidad equivalente), concretamente en las áreas encargadas del tema presupuestal. 5. Acudir, en su caso, con la autoridad o cabeza del sector salud (o entidad equivalente), concretamente con las áreas encargadas del tema presupuestal. 6. Revisar en la página web institucional de la autoridad o cabeza del sector salud (o entidad equivalente), los proyectos en curso.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Evidencia objetiva de la asignación de recursos al sector salud, hecho en la última vigencia fiscal, con el fin de realizar actividades de RR en el ámbito de su competencia, comprobable y rastreable a través de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: En el Anexo 5 de la Ley N° 29951 del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013, del 30 de noviembre de 2012, se evidencia que el Ministerio de Salud asigna recursos para: (i) establecimientos de salud seguros, incluye como componente seguridad estructural de establecimientos de salud; (ii) población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales (pg. 236, productos 3000167, y 3000169).</p> <p>Colombia: El Anexo del Decreto "por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2012, se detallan apropiaciones y se clasifican y definen los gastos", a través del rubro presupuestal 410 306 1 se asignaron recursos para “<i>estudio y elaboración de programa de vulnerabilidad sísmica estructural en instituciones hospitalarias a nivel nacional</i>”.</p>

Código: RR 2-4

Pregunta de respuesta cerrada
4. <i>¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de vivienda para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?</i>
Descripción general del indicador
La Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) es una política pública transversal de la administración pública nacional, central o federal, con objetivos que comparten todos los sectores. Ahora, una de las contribuciones más importantes de los sectores hacia la GRD, cuando la normativa nacional dispone competencias para estos desde el ámbito de sus competencias, tiene que ver con la realización de acciones enfocadas en la Reducción de los Riesgos (RR), concretamente aquellos riesgos que se relacionan con las actividades propias del sector. En ese tenor, la disponibilidad de recursos es determinante para poder financiar y ejecutar esas actividades de RR. Razón por la que el presente indicador pone especial interés no solamente en el hecho objetivo de la asignación de recursos públicos al sector vivienda, sino que esa asignación corresponda a la última vigencia fiscal o al presupuesto nacional en ejercicio, y que pueda ser verificada a través de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal, u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un objeto de gasto o etiquetador presupuestal. 2. Comprobar que el instrumento permite identificar de forma objetiva, en la última vigencia fiscal, que se asignaron recursos a las actividades de RR en el sector vivienda. 3. Investigar, en caso que no exista el objeto de gasto o etiquetador presupuestal, en otros instrumentos equivalentes de clasificación presupuestal, tales como los rubros del presupuesto nacional o del presupuesto del sector vivienda. 4. Consultar, en su caso, a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas (o entidad equivalente), concretamente en las áreas encargadas del tema presupuestal. 5. Acudir, en su caso, con la autoridad o cabeza del sector vivienda (o entidad equivalente), concretamente con las áreas encargadas del tema presupuestal. 6. Revisar en la página web institucional de la autoridad o cabeza del sector vivienda (o entidad equivalente), los proyectos en curso.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Evidencia objetiva de la asignación de recursos al sector vivienda, hecho en la última vigencia fiscal, con el fin de realizar actividades de RR en el ámbito de su competencia, comprobable y rastreable a través de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: En el Anexo 5 de la Ley N° 29951 del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, del 30 de noviembre de 2012, se evidencia que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento asigna recursos para: “(i) <i>promoción de la construcción de viviendas y edificaciones seguras</i>; y (ii) <i>gobiernos locales incorporan la gestión de riesgo de desastres en el acondicionamiento territorial...</i>” (págs. 348). Adicionalmente en la misma ley en su apartado de Disposiciones Complementarias refiere: “<i>CUADRAGÉSIMA QUINTA. Autorícese al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para realizar acciones de prevención y mitigación de riesgos frente a fenómenos naturales o situaciones que puedan afectar o afecten la infraestructura y la prestación de los servicios de saneamiento y vivienda, quedando facultado para la adquisición de bienes y equipos, así como la contratación de servicios y obras que correspondan, en el marco de las acciones antes mencionadas</i>”.</p> <p>Guatemala: Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, se localizó asignación presupuestaria en las siguientes partidas: 11130013 20 00 001 000 001 (CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN) Q.36,022,128.94 y 11130013 20 00 001 000 006 (CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE TALUD) Q.774,413.14.</p> <p>Chile: La Ley N° 20641 Presupuestos del Sector Público año 2013, del 22 de Diciembre 2012, en la glosa 10 del presupuesto asignado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo considera para dicha glosa lo siguiente “<i>Con cargo a estos recursos se destinarán M\$ 412.499 para la contratación de estudios de riesgo y de planificación urbana vinculados al Plan de Reconstrucción, y se podrán financiar los gastos asociados a licitación, contratación, difusión y publicación de estos estudios...</i>”.</p>

Código: RR 2-5

Pregunta de respuesta cerrada
5. <i>¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de educación para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?</i>
Descripción general del indicador
La Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) es una política pública transversal de la administración pública nacional, central o federal, con objetivos que comparten todos los sectores. Ahora, una de las contribuciones más importantes de los sectores hacia la GRD, cuando la normativa nacional dispone competencias para estos desde el ámbito de sus competencias, tiene que ver con la realización de acciones enfocadas en la Reducción de los Riesgos (RR), concretamente aquellos riesgos que se relacionan con las actividades propias del sector. En ese tenor, la disponibilidad de recursos es determinante para poder financiar y ejecutar esas actividades de RR. Razón por la que el presente indicador pone especial interés no solamente en el hecho objetivo de la asignación de recursos públicos al sector educación, sino que esa asignación corresponda a la última vigencia fiscal o al presupuesto nacional en ejercicio, y que pueda ser verificada a través de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal, u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un objeto de gasto o etiquetador presupuestal. 2. Comprobar que el instrumento permite identificar de forma objetiva, en la última vigencia fiscal, que se asignaron recursos a las actividades de RR en el sector educación. 3. Investigar, en caso que no exista el objeto de gasto o etiquetador presupuestal, en otros instrumentos equivalentes de clasificación presupuestal, tales como los rubros del presupuesto nacional o del presupuesto del sector educación. 4. Consultar, en su caso, a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas (o entidad equivalente), concretamente en las áreas encargadas del tema presupuestal. 5. Acudir, en su caso, con la autoridad o cabeza del sector educación (o entidad equivalente), concretamente con las áreas encargadas del tema presupuestal. 6. Revisar en la página web institucional de la autoridad o cabeza del sector educación (o entidad equivalente), los proyectos en curso.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Evidencia objetiva de la asignación de recursos al sector educación, hecho en la última vigencia fiscal, con el fin de realizar actividades de RR en el ámbito de su competencia, comprobable y rastreable a través de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: En el Anexo 5 de la Ley n° 29951 del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013 del 30 de noviembre de 2012, se evidencia que el Ministerio de Educación asigna recursos para: (i) instancias de gestión educativa descentralizada implementan una cultura de gestión del riesgo de desastres; (ii) institución educativa segura, incluye como componente desarrollo de capacidades en instituciones educativas para una cultura de gestión del riesgo de desastres (pg. 137). El sector educación recibe presupuesto para la GRD a través del PPR 068 desde el año 2012. A través de estos recursos está desarrollando el Programa "Escuela Segura".</p> <p>México: La Ley General de Infraestructura Física Educativa, del 14 de marzo de 2013, señala en el Artículo 16 que el objetivo del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) es "...<i>fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del país y de construcción, en términos de esta Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables y desempeñarse como una instancia asesora en materia de prevención y atención de daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos en el sector educativo</i>". En http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L509331 se evidencia que INIFED asigna recursos a actividades de reducción del riesgo de desastres: a través del "programa E047 diseño, construcción, certificación y evaluación de la infraestructura" se desarrollan dos actividades en el componente 2 que corresponden a infraestructura física regulada e infraestructura física fortalecida.</p>

Pregunta de respuesta cerrada
6. <i>¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de turismo para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?</i>
Descripción general del indicador
La Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) es una política pública transversal de la administración pública nacional, central o federal, con objetivos que comparten todos los sectores. Ahora, una de las contribuciones más importantes de los sectores hacia la GRD, cuando la normativa nacional dispone competencias para estos desde el ámbito de sus competencias, tiene que ver con la realización de acciones enfocadas en la Reducción de los Riesgos (RR), concretamente aquellos riesgos que se relacionan con las actividades propias del sector. En ese tenor, la disponibilidad de recursos es determinante para poder financiar y ejecutar esas actividades de RR. Razón por la que el presente indicador pone especial interés no solamente en el hecho objetivo de la asignación de recursos públicos al sector turismo, sino que esa asignación corresponda a la última vigencia fiscal o al presupuesto nacional en ejercicio, y que pueda ser verificada a través de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal, u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un objeto de gasto o etiquetador presupuestal. 2. Comprobar que el instrumento permite identificar de forma objetiva, en la última vigencia fiscal, que se asignaron recursos a las actividades de RR en el sector turismo. 3. Investigar, en caso que no exista el objeto de gasto o etiquetador presupuestal, en otros instrumentos equivalentes de clasificación presupuestal, tales como los rubros del presupuesto nacional o del presupuesto del sector turismo. 4. Consultar, en su caso, a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas (o entidad equivalente), concretamente en las áreas encargadas del tema presupuestal. 5. Acudir, en su caso, con la autoridad o cabeza del sector turismo (o entidad equivalente), concretamente con las áreas encargadas del tema presupuestal. 6. Revisar en la página web institucional de la autoridad o cabeza del sector turismo (o entidad equivalente), los proyectos en curso.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Evidencia objetiva de la asignación de recursos al sector turismo, hecho en la última vigencia fiscal, con el fin de realizar actividades de RR en el ámbito de su competencia, comprobable y rastreable a través de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Jamaica: En el Presupuesto de 2013-2014 para el Ministerio de Turismo y Entretenimiento existen recursos para: “Aumento de la resiliencia del sector agrícola y las zonas costeras, que tiene por objeto: A fin de proteger los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria en las comunidades vulnerables mediante la mejora la gestión de la tierra y del agua para el sector agrícola, fortaleciendo la protección costera y la construcción de capacidad institucional y local para la adaptación al cambio climático”. Este proyecto es ejecutado por la Oficina de Preparación para Desastres y Gestión de Emergencias.</p>

Pregunta de respuesta cerrada

7. ¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de transporte para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?

Descripción general del indicador

La Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) es una política pública transversal de la administración pública nacional, central o federal, con objetivos que comparten todos los sectores. Ahora, una de las contribuciones más importantes de los sectores hacia la GRD, cuando la normativa nacional dispone competencias para los estos desde el ámbito de sus competencias, tiene que ver con la realización de acciones enfocadas en la Reducción de los Riesgos (RR), concretamente aquellos riesgos que se relacionan con las actividades propias del sector. En ese tenor, la disponibilidad de recursos es determinante para poder financiar y ejecutar esas actividades de RR. Razón por la que el presente indicador pone especial interés no solamente en el hecho objetivo de la asignación de recursos públicos al sector transporte, sino que esa asignación corresponda a la última vigencia fiscal o al presupuesto nacional en ejercicio, y que pueda ser verificada a través de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal, u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Verificar si existe un objeto de gasto o etiquetador presupuestal.
2. Comprobar que el instrumento permite identificar de forma objetiva, en la última vigencia fiscal, que se asignaron recursos a las actividades de RR en el sector transporte.
3. Investigar, en caso que no exista el objeto de gasto o etiquetador presupuestal, en otros instrumentos equivalentes de clasificación presupuestal, tales como los rubros del presupuesto nacional o del presupuesto del sector transporte.
4. Consultar, en su caso, a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas (o entidad equivalente), concretamente en las áreas encargadas del tema presupuestal.
5. Acudir, en su caso, con la autoridad o cabeza del sector transporte (o entidad equivalente), concretamente con las áreas encargadas del tema presupuestal.
6. Revisar en la página web institucional de la autoridad o cabeza del sector transporte (o entidad equivalente), los proyectos en curso.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Evidencia objetiva de la asignación de recursos al sector transporte, hecho en la última vigencia fiscal, con el fin de realizar actividades de RR en el ámbito de su competencia, comprobable y rastreable a través de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Perú: En el Anexo 5 de la Ley N° 29951 del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013 del 30 de noviembre de 2012, se evidencia que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones asigna recursos para: (i) camino nacional con mantenimiento vial – prevención y atención de emergencias viales; (ii) camino departamental con mantenimiento vial – prevención y atención de emergencias viales (pg. 336).

Costa Rica: El Presupuesto 2013 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, publicado en 2012, dispone en el objetivo estratégico 0.03 a través del programa 327, Suprograma 1, Atención de infraestructura vial y fluvial, producto P.02, de recursos para "Obras para protección de caminos y puentes, en cauces de ríos de alto riesgo".

Colombia: En el formulario del Presupuesto Oficial del Fondo Adaptación se evidencia asignación de recursos para la "construcción de obras de estabilización y protección de la banca de la margen izquierda en el pr138 al pr139 de la carretera Ansermanuevo – La Virginia".

Código: RR 2-8

Pregunta de respuesta cerrada
8. <i>¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos a la entidad nacional responsable del agua y saneamiento para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?</i>
Descripción general del indicador
La Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) es una política pública transversal de la administración pública nacional, central o federal, con objetivos que comparten todos los sectores. Ahora, una de las contribuciones más importantes de los sectores hacia la GRD, cuando la normativa nacional dispone competencias para estos desde el ámbito de sus competencias, tiene que ver con la realización de acciones enfocadas en la Reducción de los Riesgos (RR), concretamente aquellos riesgos que se relacionan con las actividades propias del sector. En ese tenor, la disponibilidad de recursos es determinante para poder financiar y ejecutar esas actividades de RR. Razón por la que el presente indicador pone especial interés no solamente en el hecho objetivo de la asignación de recursos públicos a la entidad nacional responsable del agua y saneamiento, sino que esa asignación corresponda a la última vigencia fiscal o al presupuesto nacional en ejercicio, y que pueda ser verificada a través de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal, u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un objeto de gasto o etiquetador presupuestal. 2. Comprobar que el instrumento permite identificar de forma objetiva, en la última vigencia fiscal, que se asignaron recursos a las actividades de RR a la entidad nacional responsable del agua y saneamiento. 3. Investigar, en caso que no exista el objeto de gasto o etiquetador presupuestal, en otros instrumentos equivalentes de clasificación presupuestal, tales como los rubros del presupuesto nacional o del presupuesto de la entidad nacional responsable del agua y saneamiento. 4. Consultar, en su caso, a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas (o entidad equivalente), concretamente en las áreas encargadas del tema presupuestal. 5. Acudir, en su caso, con la entidad nacional responsable del agua y saneamiento (o entidad equivalente), concretamente con las áreas encargadas del tema presupuestal. 6. Revisar en la página web institucional de la entidad nacional responsable del agua y saneamiento (o entidad equivalente), los proyectos en curso.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Evidencia objetiva de la asignación de recursos a la entidad nacional responsable del agua y saneamiento (o entidad equivalente), hecho en la última vigencia fiscal, con el fin de realizar actividades de RR en el ámbito de su competencia, comprobable y rastreable a través de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>México: En los PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (con fecha de corte de la información: Viernes, 31 de Mayo de 2013) CONAGUA desarrolla diversos proyectos de infraestructura para la protección y estudios de factibilidad para protección de centros de población y áreas productivas, estudios de impacto de subsidencia del suelo, estudios geo hidrológicos, obras de protección para la reducción de riesgos por inundaciones. "como parte de la Estrategia programática para la CONAGUA: <i>“Se continuará con la delimitación de zonas federales en aquellos cauces, ríos, barrancas y demás cuerpos receptores de agua que han generado situaciones de emergencia, evitando la instalación de asentamientos humanos...”</i>. http://www.conagua.gob.mx/PPi.aspx?n1=1&n2=56&n3=263&n4=181&n5=170.</p>

Código: RR 2-9

Pregunta de respuesta cerrada
9. <i>¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos a la entidad nacional responsable de las telecomunicaciones para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?</i>
Descripción general del indicador
La Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) es una política pública transversal de la administración pública nacional, central o federal, con objetivos que comparten todos los sectores. Ahora, una de las contribuciones más importantes de los sectores hacia la GRD, cuando la normativa nacional dispone competencias para estos desde el ámbito de sus competencias, tiene que ver con la realización de acciones enfocadas en la Reducción de los Riesgos (RR), concretamente aquellos riesgos que se relacionan con las actividades propias del sector. En ese tenor, la disponibilidad de recursos es determinante para poder financiar y ejecutar esas actividades de RR. Razón por la que el presente indicador pone especial interés no solamente en el hecho objetivo de la asignación de recursos públicos a la entidad nacional responsable de las telecomunicaciones, sino que esa asignación corresponda a la última vigencia fiscal o al presupuesto nacional en ejercicio, y que pueda ser verificada a través de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal, u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un objeto de gasto o etiquetador presupuestal. 2. Comprobar que el instrumento permite identificar de forma objetiva, en la última vigencia fiscal, que se asignaron recursos a las actividades de RR de la entidad nacional responsable de las telecomunicaciones. 3. Investigar, en caso que no exista el objeto de gasto o etiquetador presupuestal, en otros instrumentos equivalentes de clasificación presupuestal, tales como los rubros del presupuesto nacional o del presupuesto de la entidad nacional responsable de las telecomunicaciones. 4. Consultar, en su caso, a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas (o entidad equivalente), concretamente en las áreas encargadas del tema presupuestal. 5. Acudir, en su caso, con la entidad nacional responsable de las telecomunicaciones (o entidad equivalente), concretamente con las áreas encargadas del tema presupuestal. 6. Revisar en la página web institucional de la entidad nacional responsable de las telecomunicaciones (o entidad equivalente), los proyectos en curso.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Evidencia objetiva de la asignación de recursos a la entidad nacional responsable de las telecomunicaciones, hecho en la última vigencia fiscal, con el fin de realizar actividades de RR en el ámbito de su competencia, comprobable y rastreable a través de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
Debido a la dificultad para encontrar un buen ejemplo en la región, se propone como referencia una situación hipotética: un país que en la última vigencia fiscal asignó recursos a la entidad nacional responsable de las telecomunicaciones (o entidad equivalente) a través de un rubro del presupuesto de esa entidad para realizar reforzamiento de la infraestructura de torres de telefonía celular (u otros elementos expuestos que sean de propiedad del Estado), ubicada en zonas de amenaza sísmica alta y que cubren principalmente áreas rurales.

Pregunta de respuesta cerrada
<i>10 ¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos a la entidad nacional responsable de la energía para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?</i>
Descripción general del indicador
La Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) es una política pública transversal de la administración pública nacional, central o federal, con objetivos que comparten todos los sectores. Ahora, una de las contribuciones más importantes de los sectores hacia la GRD, cuando la normativa nacional dispone competencias para estos desde el ámbito de sus competencias, tiene que ver con la realización de acciones enfocadas en la Reducción de los Riesgos (RR), concretamente aquellos riesgos que se relacionan con las actividades propias del sector. En ese tenor, la disponibilidad de recursos es determinante para poder financiar y ejecutar esas actividades de RR. Razón por la que el presente indicador pone especial interés no solamente en el hecho objetivo de la asignación de recursos públicos a la entidad nacional responsable de la energía, sino que esa asignación corresponda a la última vigencia fiscal o al presupuesto nacional en ejercicio, y que pueda ser verificada a través de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal, u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un objeto de gasto o etiquetador presupuestal. 2. Comprobar que el instrumento permite identificar de forma objetiva, en la última vigencia fiscal, que se asignaron recursos a las actividades de RR a la entidad nacional responsable de la energía. 3. Investigar, en caso que no exista el objeto de gasto o etiquetador presupuestal, en otros instrumentos equivalentes de clasificación presupuestal, tales como los rubros del presupuesto nacional o del presupuesto de la entidad nacional responsable de la energía. 4. Consultar, en su caso, a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas (o entidad equivalente), concretamente en las áreas encargadas del tema presupuestal. 5. Acudir, en su caso, con la entidad nacional responsable de la energía (o entidad equivalente), concretamente con las áreas encargadas del tema presupuestal. 6. Revisar en la página web institucional de la entidad nacional responsable de la energía (o entidad equivalente), los proyectos en curso.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Evidencia objetiva de la asignación de recursos a la entidad nacional responsable de la energía, hecho en la última vigencia fiscal, con el fin de realizar actividades de RR en el ámbito de su competencia, comprobable y rastreable a través de un objeto de gasto o etiquetador presupuestal u otro instrumento equivalente de clasificación presupuestal.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
Debido a la dificultad para encontrar un buen ejemplo en la región, se propone como referencia una situación hipotética: Un país que en la última vigencia fiscal asignó recursos a la entidad nacional responsable de la energía (o entidad equivalente) a través de un rubro del presupuesto de esa entidad para realizar el reforzamiento de la infraestructura de las represas empleadas para generar energía eléctrica, ubicadas en zonas de amenaza sísmica alta y en cuyos alrededores se ubica población vulnerable.

Pregunta de respuesta cerrada
11. <i>¿La empresa prestadora el servicio público de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país, ha implementado al menos un proyecto o programa que incluya actividades de reducción del riesgo de desastres de su infraestructura en los últimos 5 años?</i>
Descripción general del indicador
<p>La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) es una política pública transversal, que involucra a todas las entidades de la administración pública nacional, central o federal, a los distintos niveles de gobierno y a los sectores privado y social. Lo que incluye en su integralidad a las empresas prestadoras de servicios públicos, ya sean de carácter público u objeto de concesión a un particular. En ese tenor, este indicador valora que la empresa prestadora el servicio público de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país, implemente proyectos o programas que incluyan algunas medidas o acciones en materia de la Reducción de los Riesgos (RR), que conciernan al ámbito de los servicios que presta. Esto, en consideración de los costos sociales y financieros que generan tanto la afectación, como la interrupción parcial o integral de esos servicios a consecuencia de un desastre.</p> <p>Puede ser posible que en algunos países se incluya dentro del ámbito sectorial a las empresas prestadoras de servicios públicos; esto dependerá de la organización institucional de cada país.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la empresa prestadora del servicio público de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país. 2. Establecer si dicha empresa es carácter público u objeto de concesión a un particular. 3. Revisar la información publicada en la página web de esa empresa prestadora respecto de las inversiones que realiza. Se sugiere buscar concretamente los informes de gestión de la empresa. 4. Consultar directamente, en su caso, a la empresa respecto si ha realizado actividades de RR en los últimos 5 años. 5. Entrevistar, en su caso a funcionarios del ente supervisor o de la autoridad a cargo del proceso de adjudicación de la concesión del sector. 6. Revisar, en caso que corresponda a una concesión, el contrato respectivo e indagar si incluye requerimientos respecto de actividades de RR.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Evidencia de que la empresa prestadora del servicio público de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país; haya puesto en marcha en los últimos 5 años un proyecto o programa que incluya al menos una actividad de RR.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (SEDAPAL), es la empresa prestadora del servicio de agua y saneamiento en Lima, la cual tiene la mayor cartera de usuarios en el país. El SEDAPAL ha realizado inversiones en reducción del riesgo de desastres, tales como el “Mejoramiento de las áreas de drenaje del distrito de Chorrillos” (http://www.sedapal.com.pe:94/chorrillos.pdf). Por otra parte, en la página del SEDAPAL, se localizaron evidencias adicionales sobre otras inversiones en drenajes. Asimismo, y de acuerdo a la Resolución del Concejo Directivo N° 011-2007, Reglamento de Prestación del Servicio se establece en el Anexo 5 que las empresas deben adoptar medidas y mecanismos ante la ocurrencia del desastre y planes contingentes, lo cual demanda acciones de conocimiento del riesgo y de reducción del riesgo de desastres.</p> <p>México: El Programa Nacional Hídrico 2007-2012, de Febrero de 2008, considera como parte de sus objetivos específicos el marcado con el número 6: “Prevenir los riesgos derivados de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos y atender sus efectos”. El programa citado, considera en sus diversos objetivos a través de líneas de acción, tareas encaminadas a reducir, mitigar, y administrar riesgos dentro de su sector. Así, en los últimos años se realizaron obras de gran envergadura para la reducción de riesgos de desastre; por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) redujo sustancialmente los riesgos graves de inundación en el Valle de México, con la construcción de obras magnas, entre las que destacan el primer tramo del Túnel Emisor Oriente y la Planta de Bombeo El Caracol.</p> <p>http://www.conagua.gob.mx/sustentabilidadhidricadelValledeMexico/Index.aspx?id_publicacion=27&id_pa</p>

Chile: El Reporte Sostenibilidad Aguas Andinas 2012, presenta que *"El Grupo Aguas ha implementado un mapa de riesgos asociados a cada gerencia corporativa, con el objetivo de identificar y enfrentar los potenciales riesgos, las principales amenazas (incluso las asociadas a desastres naturales), además de generar planes para evitar o mitigar estos problemas, garantizando la continuidad del negocio"*. Según su Reporte Sostenibilidad Aguas Andinas 2012. Para garantizar el normal funcionamiento del servicio, Aguas Andinas ha dispuesto de un Plan General de Emergencias, el cual entrega un marco respecto a cómo la empresa va a *"... enfrentar, reportar, mitigar y comunicar situaciones adversas de carácter natural o provocadas por terceros"*. A través de un Comité de Sequía se generaron "planes de vigilancia, obras de mitigación, planes de reducción de pérdidas". Por otra parte, Aguas Andinas manifestó que los siguientes proyectos incluyen actividades de reducción del riesgo de desastres de su infraestructura: (i) Interconexión embalse del Yeso acueducto Laguna Negra (CAYA); (ii) Estanques de Seguridad (225 mil m3 adicionales); (iii) Pozos Cerro Negro.

Código: RR 2-12

Pregunta de respuesta cerrada
<i>12. ¿La empresa de generación, transmisión y distribución de energía con la mayor facturación en el país, ha implementado al menos un proyecto o programa que incluya actividades de reducción del riesgo de desastres de su infraestructura en los últimos 5 años?</i>
Descripción general del indicador
<p>La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) es una política pública transversal, que involucra a todas las entidades de la administración pública nacional, central o federal, a los distintos niveles de gobierno y a los sectores privado y social. Lo que incluye en su integralidad a las empresas prestadoras de servicios públicos, ya sean de carácter público u objeto de concesión a un particular. En ese tenor, este indicador valora que la empresa de generación, transmisión y distribución de energía con la mayor facturación en el país, implemente proyectos o programas que incluyan algunas medidas o acciones en materia de la Reducción de los Riesgos (RR), que conciernan al ámbito de los servicios que presta. Esto, en consideración de los costos sociales y financieros que generan tanto la afectación, como la interrupción parcial o integral de esos servicios a consecuencia de un desastre.</p> <p>Puede ser posible que en algunos países se incluya dentro del ámbito sectorial a las empresas prestadoras de servicios públicos; esto dependerá de la organización institucional de cada país.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la empresa de generación, transmisión y distribución de energía con la mayor facturación en el país. 2. Establecer si dicha empresa es carácter público u objeto de concesión a un particular. 3. Revisar la información publicada en la página web de esa empresa respecto de las inversiones que realiza. Se sugiere buscar concretamente los informes de gestión de la empresa. 4. Consultar directamente, en su caso, a la empresa respecto si ha realizado actividades de RR en los últimos 5 años. 5. Entrevistar, en su caso, a funcionarios del ente supervisor o de la autoridad a cargo del proceso de adjudicación de la concesión del sector. 6. Revisar, en caso que corresponda a una concesión, el contrato respectivo e indagar si incluye requerimientos respecto de actividades de RR.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Evidencia de que la empresa de generación, transmisión y distribución de energía con la mayor facturación en el país; haya puesto en marcha en los últimos 5 años un proyecto o programa que incluya al menos una actividad de RR.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>México: De acuerdo a la consulta realizada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que es la empresa paraestatal de generación, transmisión y distribución de energía en el país, la institución realiza un amplio espectro de acciones de reducción de riesgo en todos sus procesos, entre ellos: a) Operación dispositivo DPCE (Dispositivo para Prevenir Colapsos en Estructuras de Alta Tensión trifásico, b) Operación dispositivo DATH (Dispositivo Antitortmenta Trifásico Horizontal para Media Tensión); c) Postes de Fibra de Vidrio para alta tensión; d).- Maniobra de Bajado y subido de conductores en alta tensión; d) Sustitución de aceite mineral por vegetal en transformadores de potencia, así como instalación de equipos contra incendio; e) Obras civiles para evitar inundaciones en subestaciones eléctricas de potencia.; f) Instalación de estructuras rompe tramos; g) Obras civiles de reforzamiento en estructuras de alto riesgo en zonas como ríos, barrancos, lagos, etc.; h) Instalación de sistemas contra incendio en las centrales generadoras para la protección pasiva, detección, alarma y extinción.</p>

Código: RR 2-13

Pregunta de respuesta cerrada
13. ¿La empresa de telecomunicaciones con la mayor cartera de usuarios en el país, ha implementado al menos un proyecto o programa que incluya actividades de reducción del riesgo de desastres de su infraestructura en los últimos 5 años?
Descripción general del indicador
<p>La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) es una política pública transversal, que involucra a todas las entidades de la administración pública nacional, central o federal, a los distintos niveles de gobierno y a los sectores privado y social. Lo que incluye en su integralidad a las empresas prestadoras de servicios públicos, ya sean de carácter público u objeto de concesión a un particular. En ese tenor, este indicador valora que la empresa de telecomunicaciones con la mayor cartera de usuarios en el país, implemente proyectos o programas que incluyan algunas medidas o acciones en materia de la Reducción de los Riesgos (RR), que conciernen al ámbito de los servicios que presta. Esto, en consideración de los costos sociales y financieros que generan tanto la afectación, como la interrupción parcial o integral de esos servicios a consecuencia de un desastre.</p> <p>Puede ser posible que en algunos países se incluya dentro del ámbito sectorial a las empresas prestadoras de servicios públicos; esto dependerá de la organización institucional de cada país. Los sectores prestadores de servicios públicos tienen un rol fundamental en caso de ocurrencia de un desastre, pues es fundamental su rápida restauración para que la población pueda volver a tener acceso a los servicios básicos.</p> <p>La reducción del riesgo de desastres es fundamental para la gestión del riesgo de desastres. En ese sentido, se considera relevante que los sectores prestadores de servicios públicos asignen recursos para reducir el riesgo de afectación parcial o interrupción de la provisión de dichos servicios como consecuencia del desastre, particularmente las empresas con la mayor cartera de usuarios en el país, las cuales usualmente atienden a la población de la ciudad capital.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la empresa de telecomunicaciones con la mayor cartera de usuarios en el país. 2. Establecer si dicha empresa es carácter público u objeto de concesión a un particular. 3. Revisar la información publicada en la página web de esa empresa respecto de las inversiones que realiza. Se sugiere buscar concretamente los informes de gestión de la empresa. 4. Consultar directamente, en su caso, a la empresa respecto si ha realizado actividades de RR en los últimos 5 años. 5. Entrevistar, en su caso, a funcionarios del ente supervisor o de la autoridad a cargo del proceso de adjudicación de la concesión del sector. 6. Revisar, en caso que corresponda a una concesión, el contrato respectivo e indagar si incluye requerimientos respecto de actividades de RR.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Evidencia de que la empresa de telecomunicaciones con la mayor cartera de usuarios en el país; haya puesto en marcha en los últimos 5 años un proyecto o programa que incluya al menos una actividad de RR.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Chile: El Decreto 60, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de 2012, Reglamento para la interoperación y difusión de la mensajería de alerta, declaración y resguardo de la infraestructura crítica de telecomunicaciones e información sobre fallas significativas en los sistemas de telecomunicaciones., establece en su Artículo 18 que <i>"Este Título tiene por objeto asegurar la continuidad de las comunicaciones en situaciones de emergencia, resultantes de fenómenos de la naturaleza, fallas eléctricas generalizadas u otras situaciones de catástrofe, mediante el adecuado resguardo de la infraestructura crítica de telecomunicaciones así declarada, y el diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de un Plan de Resguardo de dicha infraestructura a nivel nacional, en coordinación con los diversos organismos e instituciones de gobierno y agentes privados"</i>. En el Reporte de Sustentabilidad Bienal 2011-2012 Entel, bajo la sección "Continuidad del Servicio en Situaciones de Emergencia", se indica entre otras cosas "se han establecido 188 puntos críticos en los que se garantiza la transmisión de señal durante un mínimo 48 horas, aunque exista corte en el abastecimiento eléctrico".</p>

Pregunta de respuesta cerrada
1. <i>¿Existe normatividad que establezca un régimen de sanciones por daños al medio ambiente para los infractores de naturaleza pública y privada?</i>
Descripción general del indicador
El indicador reconoce un factor de calidad en el marco legal aplicable al sector ambiental, cuando en el mismo se establece un régimen de sanciones para aquellos casos que personas físicas o entes públicos o privados, incurran en determinadas conductas que provoquen daños al medio ambiente. Este régimen, puede contemplar infracciones administrativas y/o la configuración de delitos, que a su vez traigan consigo una sanción administrativa o una pena corporal. Esta medida puede ser una forma indirecta para restar ciertas condiciones de riesgo.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar el marco normativo ambiental del país. 2. Identificar si dicha normativa establece, para los casos de daños al medio ambiente (degradación ambiental), un régimen que señale sanciones administrativas, o bien, que tipifique algún delito e indique las penas correspondientes. 3. Descartar, en su caso, las leyes o códigos de orden penal o criminal, en busca de un tipo penal relativo a una conducta relacionada con daños al medio ambiente (degradación ambiental).
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
La vigencia de una norma que contemple un régimen de sanciones por la realización de conductas relacionadas con daños al medio ambiente o degradación ambiental, para infractores que sean personas físicas o entes públicos o privados.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Panamá: La Ley No. 41, de 1 de julio de 1998, por la cual se dicta la Ley General de Ambiente de la República de Panamá y se crea la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), en su Título VIII, De la <i>Responsabilidad Ambiental</i> establece el régimen de sanciones por daños ambientales: "Artículo 106: Toda persona natural o jurídica está en la obligación de prevenir el daño y controlar la contaminación ambiental. Artículo 107. La contaminación producida con infracción de los límites permisibles, o de las normas, procesos y mecanismos de prevención, control, seguimiento, evaluación, mitigación y restauración, establecidos en la presente Ley y demás normas legales vigentes, acarrea responsabilidad civil, administrativa o penal, según sea el caso. Artículo 108. El que, mediante el uso o aprovechamiento de un recurso o por el ejercicio de una actividad, produzca daño al ambiente o a la salud humana, estará obligado a reparar el daño causado, aplicar las medidas de prevención y mitigación, y asumir los costos correspondientes. Artículo 109. Toda persona natural o jurídica que emita, vierta, disponga o descargue sustancias o desechos que afecten o puedan afectar la salud humana, pongan en riesgo o causen daño al ambiente, afecten o puedan afectar los procesos ecológicos esenciales o la calidad de vida de la población, tendrá responsabilidad objetiva por los daños que puedan ocasionar graves perjuicios, de conformidad con lo que dispongan las leyes especiales relacionadas con el ambiente".</p> <p>República Dominicana: La Ley No. 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, promulgada el 18 de agosto de 2000, incorpora en su texto el Título V, de las Competencias, Responsabilidad y Sanciones en Materia Administrativa y Judicial, que incluye 6 capítulos entre los que sobresalen: Capítulo II, De las Competencias y Sanciones Administrativas; Capítulo II, De la Responsabilidad Civil, y el Capítulo VI, De las Sanciones Penales.</p> <p>México: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, del 28 de enero de 1988, determina la responsabilidad civil y penal por daños al medio ambiente en México. La Ley contiene en su Capítulo IV de las Sanciones Administrativas, en los artículos del 171 al 175, diversas disposiciones y procedimientos relativos a las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen, y que constituyen infracción y son sancionadas administrativamente por la Secretaría en asuntos de competencia de la Federación, que van desde multas, arrestos administrativos, y clausuras. Asimismo, regula la reincidencia, y la gravedad de la infracción, entre otros.</p>

Código: RR 3-2

Pregunta de respuesta cerrada
2. <i>¿El ente nacional de control ha realizado al menos una verificación o evaluación sobre el cumplimiento de acciones en reducción del riesgo de desastres en los últimos 5 años?</i>
Descripción general del indicador
<p>Al igual que el indicador MG 3-3, y en materia de identificación de riesgos el IR 3-5, interesa determinar si la entidad fiscalizadora, de control, auditoría superior o contraloría (o quien haga sus veces en el país) ha realizado alguna verificación o evaluación específica sobre el cumplimiento de acciones para la Reducción del Riesgo de Desastres (RR), al menos una vez en los últimos 5 años.</p> <p>Esta evaluación podría ser la misma que se presente como condición positiva en el indicador MG 3-3 y en IR 3-5, siempre y cuando uno de los contenidos de la misma sea el tema específico de la RR (no sobre manejo de desastres).</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la entidad a la que corresponden las funciones de fiscalización superior o externa en cada país (puede ser órgano de control, auditoría superior, contraloría o entidad equivalente) 2. Analizar los casos en que han realizado evaluaciones o verificaciones en temas relacionados con la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) o, en su caso, sobre las entidades que realizan acciones de reducción del riesgo en el país. 3. Analizar si en esos casos se ha abordado el tema de la RR. 4. Determinar si la evaluación detectada se realizó dentro de los últimos 5 años.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Se debe comprobar la existencia de un documento del órgano de control, auditoría superior, contraloría o entidad equivalente; que comprenda una evaluación o verificación del desempeño de las entidades pertinentes en materia de RR en el país.</p> <p>NOTA: la evaluación podría ser sobre el desempeño de una sola entidad o bien a un grupo de entidades.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Colombia: En 2012 la Contraloría General de la República publicó el Informe sobre el estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2011– 2012, en el que se hace una evaluación del desempeño tanto de las entidades nacionales como de los entes territoriales en materia de Gestión del Riesgo de Desastres, y concretamente sobre la reducción de riesgos, como lo es en el apartado de Estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático en transporte e infraestructura, el reporte del Ministerio de Transporte en la infraestructura vial primaria (página 64). Este informe incluye un análisis de la integración de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial (gestión prospectiva del riesgo que contribuye a la reducción del riesgo de desastres). Ver páginas 411 a 414 sobre "Planes de ordenamiento territorial y gestión del riesgo". Adicionalmente, se tiene que la CGR profirió "función de advertencia en 2011" dirigida a las corporaciones autónomas regionales frente a la "ola invernal" (Fenómeno La Niña), señalando que dentro de las actividades que deberían implementar estaba "... la reparación de jarillones y demás obras que permitan la evacuación de las aguas y precaver inundaciones futuras", advirtiendo que "... la demora en la ejecución de las obras anteriormente señaladas podría causar perjuicios graves en pocos días, cuando retornen las lluvias e incluso poner en riesgo la vida de las personas" (Informe de la GRD sobre el Estado de los RRNN, página 106). Adicionalmente, el especial seguimiento a la reconstrucción y la adaptación en el contexto de la llamada "Ola Invernal" (2011 y 2012), se tiene que la CGR hizo verificación y evaluación de acciones de reducción de riesgos de desastres de responsabilidad de Colombia Humanitaria y del Fondo Adaptación, por cuanto la normativa "... obliga a que se deje capacidad física y de planeamiento del desarrollo espacial que prevenga situaciones futuras de emergencia, desastre o calamidad"; es decir que las áreas deben quedar mejor preparadas.</p> <p>México: Se encontraron varias auditorías pertinentes para la valoración del Indicador, pero se incluye como verificable la Auditoría 1091, realizada en 2009 por la Auditoría Superior de la Federación (organismo</p>

coadyuvante de la Cámara de Diputados para la revisión de la Cuenta Pública que cuenta con autonomía técnica y de gestión) a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), responsable de prevenir los riesgos derivados de los fenómenos hidrometeorológicos y atender sus efectos.

Costa Rica: El Informe N° DFOE-PGAA-IF-15-2009, Informe sobre la Gestión de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, en materia de prevención, del 3 de setiembre de 2009; y el Informe N° DFOE-PGAA-IF-17-2010, Informe relativo a las limitaciones que presenta la gestión de la CNE en la coordinación, supervisión y control de la atención de las emergencias en las fases de rehabilitación y reconstrucción, del 15 de julio de 2010.

Código: RR 3-3

Pregunta de respuesta cerrada
3. <i>¿La normatividad que regula la formulación de Planes de Ordenamiento Territorial (o similares), asigna responsabilidades para su monitoreo, evaluación y actualización?</i>
Descripción general del indicador
<p>Este indicador se relaciona con el indicador RR 1C-3 y busca establecer si la normativa en materia de Ordenamiento Territorial (OT), dispone que los planes de ordenamiento territorial (o instrumento equivalente) deben ser objeto de monitoreo, evaluación y actualización.</p> <p>Se indaga por la normatividad que determine estas tres responsabilidades, es decir, no se está preguntando si se cumplen en la práctica sino si están normadas en el país.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar el marco normativo vigente en materia de OT. 2. Determinar si en dicho marco normativo se establecen procedimientos de monitoreo, evaluación y actualización. 3. Determinar si se asignan responsabilidades frente a dichos procedimientos.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
En la misma normatividad nacional de OT (o similar) deberían establecerse las responsabilidades en materia de monitoreo, evaluación y actualización.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: El Decreto Supremo N° 087-2004-PCM, Reglamento de la Zonificación Ecológica Económica (ZEE), del 23 de diciembre de 2004, establece en su Artículo 24, De la Etapa de monitoreo, evaluación y actualización que: <i>"Una vez aplicada la Zonificación Ecológica y Económica-ZEE, corresponde hacer el monitoreo, evaluación, actualización de la ZEE en el uso y ocupación del territorio: en el ámbito nacional, al Consejo Nacional del Ambiente - CONAM, en el ámbito regional a los Gobiernos Regionales, en el ámbito local, a los Gobiernos Locales Provinciales"</i>. Además la condición se complementa con el Decreto Supremo N° 004-2011-VIVIENDA, que aprueba el "Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano", del 17 de junio de 2011, en su Artículo 47, De las Acciones de Promoción y Control, establece que corresponde a las Municipalidades Distritales ejecutar las acciones de promoción y control dirigidas al cumplimiento del Plan Urbano Distrital.</p> <p>Panamá: La Ley No. 6 de 2006, de 1 de febrero de 2006, que reglamenta el Ordenamiento Territorial para el desarrollo urbano y dicta otras disposiciones, establece las responsabilidades de monitoreo (artículo 8, numerales 2 y 3) evaluación (artículo 8, numeral 4) y actualización (artículo 10, párrafos segundo y tercero) . Adicionalmente, la Ley No. 61, de 23 de octubre de 2009, que reorganiza el Ministerio de Vivienda y establece el Viceministerio de Ordenamiento Territorial, establece los mecanismos por los que las Juntas de Planificación Municipal y el MIVIOT dan seguimiento y cumplimiento a los Planes de Ordenamiento Territorial. NOTA: no se establece un mecanismo por el cual se integre el riesgo de desastre como un determinante en la reglamentación del uso del suelo.</p> <p>Costa Rica: La Ley N° 4240, Ley de Planificación Urbana, del 15 de noviembre de 1968, reformada por Ley No. 7015, de 22 de julio de 1985, define en su Capítulo Preliminar a la Planificación Urbana, como <i>"... el proceso continuo e integral de análisis y formulación de planes y reglamentos sobre desarrollo urbano, tendiente a procurar la seguridad, salud, comodidad y bienestar de la comunidad."</i> Asimismo, establece en el Artículo 3 que <i>"Conforme a los objetivos antes indicados, el Instituto preparará, revisará y mantendrá al día un Plan Nacional de Desarrollo Urbano, en que estén representados los elementos necesarios..."</i>. Finalmente, establece en el Capítulo 2, Dirección de urbanismo, en el Artículo 7 <i>"Créase la Dirección de Urbanismo, adscrita al Departamento de Urbanismo del Instituto, encargada de: 1) Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, revisarlo para mantenerlo al día e informar sobre su estado de aplicación..."</i>.</p>

Pregunta de respuesta cerrada
<p>4. <i>¿La normatividad que regula la planificación o manejo de cuencas hidrográficas (o instrumento de planificación equivalente), asigna responsabilidades para su monitoreo, evaluación y actualización?</i></p>
Descripción general del indicador
<p>Al igual que en el caso del ordenamiento territorial, el manejo (integrado) de cuencas hidrográficas (o instrumento de planificación equivalente) es un elemento clave para la gestión prospectiva del riesgo de desastres, especialmente en ámbitos rurales o peri-urbanos.</p> <p>Es una buena práctica que estos instrumentos estén normados con parámetros que permitan su monitoreo, evaluación y actualización</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar el marco normativo vigente en materia de planificación de cuencas hidrográficas o gestión de recursos hídricos (o similares). 2. Determinar si en dicho marco normativo se establecen procedimientos de monitoreo, evaluación y actualización. 3. Determinar si se asignan responsabilidades frente a dichos procedimientos.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>En la misma normatividad nacional de cuencas (o similar) deberían establecerse las responsabilidades en materia de monitoreo, evaluación y actualización.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: La Ley N° 29228, "Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos", de enero de 2010, en su capítulo IV, sobre "Los Consejos de Recursos Hídricos de la Cuenca", establece en el artículo 31, las funciones de los Consejos de recursos Hídricos de la Cuenca, la de "Promover la participación de los gobiernos regionales, gobiernos locales, sociedad civil y de los usuarios de agua de la cuenca en la formulación, aprobación, implementación, seguimiento, actualización y evaluación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca"; además en el mismo artículo, numeral "f", este mismo comité debe velar por el "cumplimiento del plan".</p> <p>Panamá: En el Decreto Ejecutivo N° 479 de 23 de abril de 2013, que reglamenta la Ley 44 de 5 de agosto de 2002 que establece el Régimen Administrativo Especial para el manejo, protección y conservación de las cuencas hidrográficas de la República de Panamá sobre Cuencas Hidrográficas, en su artículo 12 sobre la elaboración de los Planes de Manejo, se estipulan fases de las que se desprenden responsabilidades para el monitoreo, evaluación y actualización de las cuencas hidrográficas: "1. <i>Formulación: con base al diagnóstico y los escenarios de uso coordinado de los recursos de la cuenca hidrográfica definidos en el Plan de Ordenamiento Ambiental Territorial (POAT) se establecerán los objetivos, indicadores, metas, programas, proyectos y estrategias para el manejo integrado de las cuencas hidrográficas.</i> 2. <i>Ejecución: Para la ejecución del plan de manejo se elaborará un plan operativo en el cual se definirán los requerimientos de infraestructura, recursos humanos, técnicos y financieros para alcanzar las metas propuestas; y</i> 3. <i>Seguimiento y evaluación, incluyendo indicadores ambientales y de gestión.</i></p>

Código: RR 3-5

Pregunta de respuesta cerrada
5. <i>¿El ente nacional de control o ente regulador del sector, ha realizado al menos una evaluación de la aplicación de medidas de reducción de riesgo durante la fase de construcción de proyectos de infraestructura en los últimos 5 años?</i>
Descripción general del indicador
<p>Este es un indicador de desempeño que se relaciona con la realización de evaluaciones sobre la aplicación de medidas de Reducción de Riesgo (RR), durante la fase de construcción de proyectos de infraestructura.</p> <p>Este indicador se deriva del indicador RR 1A-5 que pregunta si formalmente se deben identificar medidas de RR en la fase de construcción de proyectos de infraestructura pública; aquí se complementa ese análisis preguntando si, en su caso, se ha realizado al menos en una ocasión una evaluación sobre el cumplimiento de esta normativa en los últimos 5 años (en caso que la norma efectivamente exista).</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Establecer la autoridad nacional competente del control en la aplicación de las normas de RR en proyectos de infraestructura. 2. Indagar por los proyectos principales (mega proyectos) durante los últimos 5 años. 3. Determinar si al menos en uno de esos proyectos, la entidad competente realizó una evaluación de la aplicación de medidas de RR durante la fase de construcción.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Se deberá verificar la existencia de un informe de evaluación por parte de la entidad competente sobre la aplicación de medidas de RR durante la fase de construcción de proyectos de infraestructura en los últimos 5 años
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
Debido a la dificultad para encontrar un buen ejemplo en la región, se propone como referencia una situación hipotética: En caso de proyectos grandes, la entidad competente (Ministerio de Obras Públicas o similar o el ente nacional de control), deberá haber evaluado al menos en una oportunidad durante los últimos 5 años, la aplicación de medidas de reducción de riesgo durante la fase de construcción de proyectos de infraestructura estratégicos o de vital importancia para el país (normalmente son este tipo de proyectos los que competen al nivel nacional).

Código: PR 1A-1

Pregunta de respuesta cerrada
<i>1. ¿Existe normatividad que establece una organización interinstitucional en el nivel nacional para los procesos de preparativos y respuesta?</i>
Descripción general del indicador
El indicador pregunta por el establecimiento de una entidad o estructura institucional, a escala nacional o federal, con responsabilidad sobre los procesos de preparación y respuesta. Este indicador concede importancia a que en los países se disponga normativamente la creación de una organización nacional de carácter interinstitucional, con el fin de concentrar todos los recursos disponibles y coordinar los esfuerzos institucionales para atender las actividades de Preparación y Respuesta (PR), frente a una emergencia o desastre. Esa normativa puede ser la nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (GRD), o bien, la norma de defensa o protección civil nacional o cualquier otra en la que regule un órgano con esas características. Por Preparación y Respuesta se entiende la suma de los preparativos: la planificación, organización y prueba de los procedimientos y protocolos de respuesta de la sociedad en caso de desastre; y de la respuesta misma: la etapa de ejecución de los procedimientos y protocolos y de la atención oportuna de la sociedad.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar por la existencia de una normativa específica de carácter nacional que regule todos los procesos de la GRD. 2. Investigar, si no existe una normativa nacional de GRD, sobre la vigencia de leyes nacionales de emergencia, normas nacionales sobre PR o normas que crean instituciones o sistemas de defensa o protección civil. En muchos casos, los países cuentan con un marco normativo no actualizado, por lo que la norma existente suele cubrir únicamente los aspectos de PR, lo que para efectos de esta pregunta es relevante. 3. Verificar si dicha normativa específica establece una organización nacional e interinstitucional para la coordinación de los procesos de PR. La existencia de una institución sólo para la respuesta no es suficiente para cumplir la condición.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Para que se cumpla la condición en esta pregunta, la normativa debe establecer explícitamente la creación de una organización cuyo funcionamiento y resoluciones estén igualmente normados, y que se conforme con la participación de instituciones nacionales o federales, y que obedezca a la necesidad de contar con un mecanismo para la responsabilidad de coordinar los procesos de PR.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
Guatemala: La Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado (CONRED), aprobada por Decreto N° 109-96, del 9 de diciembre de 1996 , en su Capítulo I, Artículo 3, Finalidades, establece que: " <i>La Coordinadora Nacional tendrá como finalidades las siguientes: a) Establecer los mecanismos, procedimientos y normas que propicien la reducción de desastres, a través de la coordinación interinstitucional en todo el territorio Nacional...</i> ". Esta misma Ley establece en su Artículo 38, Subsecretaría de Gestión de la Reducción del Riesgo, " <i>b) Fortalecer y articular el sistema interno de la Secretaría Ejecutiva de CONRED de reducción de riesgo a desastres integrado por las Direcciones de Gestión Integral del Riesgo, Preparación, Respuesta, Mitigación, Recuperación y del Sistema de Comando de Incidentes</i> ". El Reglamento de la Ley de la CONRED, aprobado por Acuerdo N° 49-2012 , describe en detalle las atribuciones de las Direcciones de Preparación y Respuesta. En su Artículo 41 se refiere a los objetivos y el alcance de la Dirección de Preparación, estableciendo diversas facultades de generación de cultura y formación y asignándole las siguientes atribuciones específicas: " <i>f) Integrar, formar, capacitar, entrenar, equipar y darle mantenimiento a los equipos comunitarios de reducción de desastres –ECORED-, acreditándolos oportunamente, dándoles el seguimiento respectivo</i> ", y " <i>g) Asistir técnicamente, organizar, capacitar, entrenar y mantener periódicamente a las Coordinadoras Regionales para la Reducción de Desastres, Coordinadoras Departamentales para la Reducción de Desastres, Coordinadoras Municipales para la Reducción de Desastres y Coordinadoras Locales para la Reducción de Desastres...</i> ". De la misma manera, el Reglamento de la Ley de la CONRED establece en su Artículo 42 " <i>La Dirección de Respuesta es la encargada de garantizar el adecuado manejo de las emergencias a través de la promoción y aplicación de protocolos y metodologías que faciliten la coordinación, interacción y el ordenado accionar de un sistema establecido...</i> ".

Perú: La Ley N. 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), del 8 de febrero de 2011, en su Artículo 1 crea el Sistema como un sistema interinstitucional descentralizado y participativo entre otros atributos. El mismo artículo establece la preparación y la atención ante situaciones de desastre como parte de la definición del sistema.

Costa Rica: La Ley N° 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, del 27 de octubre de 2005, establece en el Capítulo III, Artículo 13, la creación de "*la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias como órgano de desconcentración máxima*". El Artículo 14 indica que dicha institución es rectora en materia de prevención de riesgos y preparativos para atender situaciones de emergencia en su inciso a; y en su artículo 17 define la Integración de la Junta Directiva, en donde se considera la participación de los diversos sectores a través de sus ministros definiendo además en el artículo 15 las atribuciones de la referida junta, entre las que considera "*dictar las políticas generales para la articulación del Sistema Nacional...*" y "*aprobar los planes generales de emergencia*", incisos b y g respectivamente.

Código: PR 1A-2

Pregunta de respuesta cerrada
2. <i>¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, establece un mecanismo, instancia o instrumento de manejo de crisis por desastre al más alto nivel político nacional?</i>
Descripción general del indicador
Las situaciones de desastre, cuando por su severidad y rigor extremo, provocan niveles de crisis dentro del gobierno o en la sociedad, pueden desembocar en la adopción de entes <i>ad hoc</i> para el manejo de la situación existente. Esto genera conflictos con figuras similares instituidas por la normativa de Preparación y Respuesta (PR), tales como los centros de operaciones de emergencia. Un criterio de valor agregado de la norma sería regular una instancia de manejo de crisis, cuya conformación corresponda al nivel ministerial o de secretaría, y que sería convocado de acuerdo a ciertos plazos y formas.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Trabajar con la normativa identificada en PR1A-1. 2. Verificar si esta normativa específica establece un mecanismo de manejo de crisis por desastre al más alto nivel político nacional. Esto puede ser a nivel de la presidencia de la República o Presidencia del Consejo de Ministros, o estructura multi-institucional presidida por actores de ese nivel político.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Para que se cumpla la condición en esta pregunta, la normativa debe establecer el mecanismo de manejo de crisis por desastre al más alto nivel político nacional .
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: La Ley N. 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), del 8 de febrero de 2011, en su Artículo 11 establece las funciones del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, entre las cuales se encuentra la "...<i>coordinación en situación de impacto o riesgo inminente</i>...". El Consejo Nacional está integrado al más alto nivel político del país incluyendo la Presidencia de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros.</p> <p>Guatemala: El Reglamento de la Ley N° 109-96, Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado, adoptado por (Acuerdo Gubernativo N° 49-2012), del 14 de marzo del 2012, en el Artículo 102 establece: "Decisiones de alto nivel. En casos de extrema gravedad, que requieran decisiones de alto nivel, presidirá el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el Presidente de la República y en su ausencia o por designación, lo hará el Vicepresidente de la República."</p>

Código: PR 1A-3

Pregunta de respuesta cerrada
3. <i>¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, establece la formulación de protocolos oficiales para la coordinación de las operaciones o comando de incidentes?</i>
Descripción general del indicador
El indicador busca que la normativa de Preparación y Respuesta (PR), disponga la conformación de protocolos oficiales con la finalidad de coordinar los trabajos de respuesta, lo que implica la precisión del formato de funcionamiento, procedimientos, estructura, responsabilidades, liderazgo, etc.; lo que es una forma de regular y estandarizar las acciones y operaciones en materia de respuesta, contribuyendo así para reducir la improvisación en las tareas de la respuesta. Estos protocolos pueden incluir además las modalidades de Centro de Operaciones de Emergencia (COE) o el Sistema de Comando de Incidentes (SCI). El COE funciona permanentemente, en un área determinada, para coordinar esfuerzos, monitorear, analizar información y actuar antes, durante y después de una emergencia o desastre. El SCI no funciona permanentemente y representa la combinación de recursos humanos y técnicos de diferentes jurisdicciones, bajo un procedimiento unificado.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Utilizar la normativa identificada en el indicador PR1A-1. 2. Verificar si dicha normativa establece la formulación de protocolos de coordinación o las modalidades de COE o SCI. 3. Buscar, en su caso, en instrumentos normativos de menor jerarquía, reglamentos, normas administrativas o decretos específicos.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Para que se cumpla la condición en esta pregunta, deberá existir algún instrumento normativo que establezca la responsabilidad de desarrollar protocolos de coordinación para los procesos de PR.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Jamaica: La Ley de Preparación para Desastres y Manejo de Emergencias de 1993, dispone el desarrollo del Plan Nacional de Desastres que funciona desde 1997, y en el que se consideran los protocolos de comando de incidentes para la coordinación de las operaciones de respuesta. En la parte 3 del Plan se describen los procedimientos estándar de operación para todas las partes responsables. En el Capítulo 9, Concepto de operaciones, se establecen igualmente diferentes procedimientos. El Centro de Operaciones de Emergencia se establece en la Oficina del Primer Ministro ODPEM.</p> <p>Costa Rica: La Ley N° 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, del 27 de octubre de 2005, establece en el Capítulo II, Política de Gestión del Riesgo, en el Artículo 10 establece las instancias de coordinación entre las que señala en el inciso b a las Técnico-operativas que incluye al "<i>Centro de Operaciones de Emergencia</i>", que define como "... la instancia permanente de coordinación, adscrita a la Comisión, reúne en el nivel nacional todas las instituciones públicas y organismos gubernamentales que trabajen en la fase de primera respuesta a la emergencia. Su responsabilidad es preparar y ejecutar mediante procedimientos preestablecidos labores coordinadas de respuesta ante situaciones de emergencia...". Asimismo, establece en el artículo 12 se refiere a los Preparativos para la Emergencias en centros de trabajo y sitios de afluencia masiva, obligándoles a establecer un plan de prevención y atención a emergencias que considere procedimientos y estructura. Por otra parte, el Plan Nacional para la Gestión del Riesgo 2010-2015, Marco Estratégico para la Aplicación de Política de Gestión del Riesgo, elaborado al amparo del Artículo 7 de la Ley N° 8488 y por el que instruye su formulación a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), señala: "4.6.6.2. <i>Objetivo Estratégico. Crear y promover el mejoramiento constante de los protocolos, procedimientos y lineamientos para la respuesta de país ante las emergencias y los desastres, con el objeto de fortalecer la capacidad de las instituciones y de la población mediante la organización, capacitación, la información y el uso eficaz y oportuno de los mecanismos e instrumentos de alerta, alarma y activación</i>".</p>

Código: PR 1A-4

Pregunta de respuesta cerrada
4. <i>¿Existe normatividad que permite activar un régimen temporal de medidas de excepción en caso de desastres, emergencia o calamidad pública?</i>
Descripción general del indicador
Las situaciones extraordinarias por su gravedad o urgencia, en los casos en que median declaraciones ya sea de estado de emergencia, desastre o calamidad pública; pueden ser, según lo disponga así la norma una condición para activar un régimen temporal de medidas de excepción. Este régimen de excepción, constituye una solución jurídica para circunstancias catastróficas que por sus características extremas, hacen imperiosa una toma de decisiones expedita y sin obstáculos, de tal manera que esa gestión garantice, respecto del régimen ordinario, una diferencia notable en los resultados de la gestión, en términos de pérdida de vidas y daños materiales. Su activación o aplicación, conforme a los procedimientos y formalidades establecidas, permitiría por ejemplo, allanar restricciones y dificultades para la adquisición de insumos para la atención de la población, resoluciones emergentes en materia del uso del suelo, la simplificación de los procesos para hacer uso de reservas de recursos financieros, la agilización en general de la contratación de servicios, etc.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar si la facultad o capacidad para emitir o decretar una declaratoria de emergencia, desastre o calamidad pública está establecida en la Constitución, y si trae aparejado medidas de excepción. O por lo contrario, si existe esa facultad o capacidad independientemente de esas declaratorias. 2. Verificar, en su caso, si la normativa identificada en el indicador PR 1A-1 incluye la declaratoria de situaciones de desastre, emergencia o calamidad pública. 3. Confirmar que la normativa permita activar un régimen temporal de medidas de excepción para el manejo de situaciones de desastre.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Para que se cumpla la condición en esta pregunta la normativa debe establecer algún mecanismo que permita la activación de un régimen temporal de medidas de excepción aplicables al manejo de la situación de desastre.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>República Dominicana: La Ley No. 147-02, Sobre Gestión de Riesgos, del 22 de Septiembre del 2002, comprende al Capítulo IV, Del Régimen de las situaciones de desastre, en el que plantea en el Artículo 23 la Declaración de Situación de Desastre: "<i>... Con la previa recomendación de la Comisión Nacional de Emergencia, el Presidente de la República declarará mediante decreto la existencia de una situación de desastre, y en el mismo acto la clasificará según su magnitud y efectos, como de carácter nacional, provincial o municipal y ordenará las normas pertinentes propias del régimen especial para situaciones de desastre</i>". Ese régimen especial que dispone el Artículo 27 faculta al Presidente de la República a "<i>aprobar y emitir las normas administrativas y reglamentarias sobre...</i> 3. <i>Régimen legal especial para las situaciones de desastre declaradas en los términos de la presente ley y durante las fases de rehabilitación y reconstrucción en los siguientes aspectos...</i>".</p> <p>México: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en 1917, instruye en su Artículo 29 que en los casos que se ponga a la sociedad "<i>...en grave peligro o conflicto... solamente el Presidente... de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión... podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación...</i>". Esto con las salvedades que será por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y que sea proporcional al peligro que se presenta, "<i>... observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación...</i>". En el Artículo 42, numerales II, IV, y V de la Ley de Obra Pública y de la Ley de Adquisiciones, se establecen las medidas de excepción correspondientes al caso que plantea el artículo 29 de la Constitución.</p>

Código: PR 1A-5

Pregunta de respuesta cerrada
5. <i>¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, establece la formulación de planes de emergencia o contingencia en el nivel nacional?</i>
Descripción general del indicador
Generalmente la normativa sobre gestión del riesgo en cuanto a preparación y respuesta establece que a nivel nacional se debe ordenar la formulación de los planes de emergencia o contingencia.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normativa señalada en el indicador PR 1A-1. 2. Verificar si dicha normativa específica establece la formulación de planes de emergencia o contingencia en el nivel nacional. 3. Investigar si el desarrollo de planes de emergencia o contingencia se contempla como parte integrante de la formulación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Para que se cumpla la condición en esta pregunta, la normativa debe establecer explícitamente la responsabilidad o función de formular planes de emergencia o contingencia en el nivel nacional.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Guatemala: El Reglamento de la Ley N° 109-96, Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado (CONRED), adoptado por Acuerdo Gubernativo N° 49-2012, del 14 de marzo del 2012, establece en el Artículo 42 que la Dirección de Respuesta: "...es la encargada de garantizar el adecuado manejo de las emergencias...", y en sus atribuciones refiere la de: "...f) <i>Elaborar, complementar, actualizar e implementar el Plan Nacional de Respuesta conjuntamente con la Dirección de Gestión Integral de Reducción del Riesgo a Desastres y la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional...</i>".</p> <p>República Dominicana: La Ley No. 147-02, Sobre Gestión de Riesgos, del 22 de Septiembre del 2002, comprende al Plan Nacional de Emergencia dentro de los instrumentos de la política de gestión (Artículo 3, numeral 3) Le corresponde, según el Artículo 7, al Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastre, la función de "... 11. <i>Desarrollar y actualizar planes de emergencia y contingencia para la preparación, respuesta y rehabilitación de la población en caso de desastre</i>".</p> <p>Perú: Ley N. 29664 del 8 de febrero de 2011, que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD), en su Artículo 19 establece el Plan Nacional de GRD como un instrumento del SINAGERD que integra los procesos de estimación, prevención y reducción de desastres, preparación, respuesta y rehabilitación y reconstrucción. El Reglamento de la Ley del SINAGERD, aprobado mediante Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, del 25 de mayo de 2011 (PR 1A-5a). En su Artículo 39, establece la obligatoriedad de desarrollar planes específicos por proceso de la GDR. Entre ellos, b) planes de preparación y c) planes de operaciones de emergencia.</p>

Pregunta de respuesta cerrada

6. *¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, establece que las acciones de respuesta y asistencia humanitaria deban basarse en evaluaciones de daños y análisis de necesidades?*

Descripción general del indicador

La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en los países, además de procurar un orden lógico de sus procesos, busca imperativamente un uso racional de la suma de los recursos disponibles y los esfuerzos y sinergias institucionales y sectoriales, para un cumplimiento más eficiente de sus objetivos. En ese contexto, este indicador busca determinar si el marco normativo que regula la Preparación y Respuesta (PR), establece que las actividades de respuesta y de asistencia humanitaria deben planificarse y desarrollarse en base a la evaluación de los daños y el análisis de las necesidades posterior al desastre.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Trabajar con la normativa identificada en el indicador PR1 A-1.
2. Verificar si en la normativa de PR se establecen obligaciones respecto de sus actividades, concretamente la aplicación de criterios de evaluación de daños y análisis de necesidades.
3. Buscar, en su caso, en protocolos y procedimientos de las instancias de coordinación de la respuesta.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Para que se cumpla la condición en esta pregunta, la normativa **debe establecer** que las acciones de respuesta y asistencia humanitaria **se basen** en evaluaciones sobre evaluación de daños y análisis de necesidades.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Costa Rica: La Ley N° 8488, Ley Nacional de Emergencias y prevención del riesgo, del 27 de octubre de 2005, se refiere en el Artículo 39 al Plan General de la Emergencia como “... *el instrumento de planificación que establece el efecto de causalidad entre el evento ocurrido, las acciones y la inversión que se realiza para enfrentar la emergencia. Consta de una descripción del evento causal, la evaluación de los daños y la estimación de las pérdidas generadas, desglosados por cantón y sector; igualmente, incluye la delimitación de las acciones que debe realizar cada institución, incluso las propias de la Comisión; así como un detalle del monto de la inversión que se requiere hacer en cada una de las fases de la atención de la emergencia, desde la fase de respuesta, hasta la reconstrucción de la zona afectada.* Asimismo, establece en su Artículo 15, Competencias extraordinarias de la Comisión, que declarado el estado de emergencia deberá planear, coordinar, dirigir y controlar las acciones orientadas a resolver necesidades urgentes, ejecutar programas y actividades de protección, salvamento y rehabilitación y define diversas acciones mínimas, entre ellas, coordinar la emergencia y coordinar la evaluación de daños.

Jamaica: El **Plan Nacional para Desastres (1997)** establece en su Anexo A, Sección 16.1 que la ayuda debe ser distribuida con base en los informes de evaluación de daños y análisis de necesidades remitidos por el personal o por los comités de evaluación de daños.

Colombia: La Ley 1523 de 2012, Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones; establece en el Parágrafo único del Artículo 35 que “... *la estrategia nacional para la respuesta a emergencias, como una acción de preparación para la respuesta que busca la efectividad de la actuación interinstitucional, en los tres niveles de gobierno, se centrará principalmente en la optimización de la prestación de servicios básicos durante la respuesta como accesibilidad y transporte, comunicaciones, evaluación de daños y análisis de necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales, información pública, información geográfica, el manejo general de la respuesta y definición de estados de alerta, entre otros.*”

Código: PR 1A-7

Pregunta de respuesta cerrada
7. <i>¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, establece la realización de simulacros y simulaciones?</i>
Descripción general del indicador
La Preparación y Respuesta (PR) encuentra un gran beneficio en la realización sistemática de simulaciones, simulacros y ejercicios que pongan a prueba diversos procedimientos y protocolos, además de los planes de emergencia y contingencia vigentes, dando así oportunidad a una mejora continua y al desarrollo de nuevas y mejores estrategias y medidas. Este indicador reconoce la importancia de que la norma lo establezca como obligación.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Trabajar con la normativa identificada en el indicador PR 1A-1. 2. Verificar si en dicha normativa se establece la obligación de realizar las simulaciones y simulacros como parte de los instrumentos o mecanismos a desarrollar. 3. Buscar, en su caso, en los protocolos y procedimientos de las instancias de coordinación de la respuesta.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Para que se cumpla la condición en esta pregunta, la normativa debe establecer responsabilidades o funciones sobre la realización de simulacros y simulaciones nacionales.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: El Reglamento de la Ley N. 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD), del 25 de mayo de 2011, establece en su Artículo 9, numeral 9.4, “... <i>que el INDECI debe promover la estandarización y articulación de los protocolos de operación de todas las entidades que participan en el proceso de respuesta, así como la ejecución de simulacros y simulaciones, efectuando el seguimiento correspondiente y proponer al ente rector las medidas correctivas</i>”.</p> <p>Guatemala: El Reglamento de la Ley N° 109-96, de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado (CONRED), adoptado por Acuerdo Gubernativo N° 49-2012, del 14 de marzo del 2012, establece en el Artículo 42, Dirección de Respuesta, que “...<i>la promoción de ejercicios de mesa y simulacros y el establecimiento de los planes de respuesta para la reducción de riesgos a desastres...</i>”. Adicionalmente, el Artículo 67, Funciones y Responsabilidades, dispone: “<i>Las Coordinadoras de los Niveles Regional, Departamental, Municipal y Local, tendrán las funciones y responsabilidades siguientes: Inciso i): Realizar orientaciones, ejercicios, simulaciones y simulacros...</i>”.</p>

Código: PR 1A-8

Pregunta de respuesta cerrada
8. <i>¿Existe normatividad para la coordinación de la asistencia internacional y ayuda mutua en caso de desastre?</i>
Descripción general del indicador
<p>La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y el sistema nacional o la estructura que detenta su aplicación en los países, parten de la premisa de que se requiere permanentemente la confluencia y contribución de todos los niveles de gobierno y los sectores social y privado para hacerle frente a las consecuencias de los futuros desastres. No obstante los países deberán tener especial cuidado de que sus normativas contemplen probables escenarios en los que, por el rigor o severidad de los eventos, sea ineludible plantear solicitudes de ayuda y asistencia a los gobiernos de otros países o a organizaciones internacionales, o bien, que sin mediar tales formalidades se reciba esa ayuda o asistencia provista <i>motu proprio</i> por los gobiernos extranjeros, sin perder de vista que esas hipótesis se deben considerar tanto como gobierno solicitante o como receptor.</p> <p>Este indicador considera importante que ya sea la normativa nacional de la GRD o la que regule las actividades de Preparación y Respuesta (PR) o la normatividad diversa que disponga las facultades y las competencias para realizar las acciones de coordinación y seguimiento de la asistencia internacional y ayuda mutua en caso de desastre.</p> <p>Ahora, es usual como ocurre con otros tópicos, que esta materia sea objeto de tratados, acuerdos multilaterales o bilaterales, etc., en los que se plantee el desarrollo de acciones coordinadas en respuesta internacional o regional, y en los que se participe como país signatario; sin embargo, no se deberán considerar como satisfechas las condiciones de este indicador si dicho instrumento de orden internacional no ha sido primero ratificado, aprobado o confirmado de acuerdo a las formalidades previstas por la constitución o la normatividad que corresponda, y si además no se establece de manera explícita que esa ratificación, aprobación o confirmación significa que se le adjudica al contenido del instrumento, un estatus igual al de la constitución, o bien, superior o igual que la normativa nacional de la GRD o la que regule las actividades de PR.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar por la vigencia de una normatividad nacional que establezca la coordinación de la asistencia internacional y ayuda mutua en caso de desastre, puede ser la nacional de GRD o la que regule las actividades de PR o una normatividad diversa. 2. Verificar, en caso que no se encuentre una normativa nacional vigente con ese fin, si el país ha participado como signatario de algún instrumento bilateral o multilateral de derecho internacional con ese mismo contenido. 3. Comprobar, en su caso, que dicho instrumento internacional haya sido ratificado, aprobado o confirmado según la formalidad establecida por la normativa correspondiente; y que por lo tanto, ese instrumento reciba un estatus igual a la constitución, o superior o igual a la normativa nacional de GRD o la que regule las actividades de PR.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Para que se cumpla la condición en esta pregunta debe existir una normativa específica que establezca la coordinación entre países para la coordinación de la asistencia internacional y ayuda mutua en caso de desastre; o bien, un instrumento de derecho internacional haya sido ratificado, aprobado o confirmado; y que por lo tanto, ese instrumento internacional reciba un estatus igual a la constitución, o superior o igual a la normativa nacional de la GRD o la que regule las actividades de PR.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: El Reglamento de la Ley N° 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado mediante Decreto Supremo N° 048-2011-PCM menciona en el Artículo 9 las funciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), y en su numeral 9.6 destaca la de “<i>Coordinar la participación de entidades y agencias de cooperación nacional e internacional para los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación</i>”. En el Capítulo IX: Mecanismos de coordinación internacional y participación en instancias y acuerdos regionales de asistencia humanitaria, que desarrolla el concepto y los mecanismos de cooperación internacional y regional. Adicionalmente, la Estrategia Andina para la</p>

Prevención y Atención de Desastres (EAPAD), aprobada originalmente por decisión N° 591 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores del 10 de julio 2004, y posteriormente refrendada y armonizada con el Marco de Acción de Hyogo con vigencia al 2015, mediante Decisión N° 713 del 19 de agosto de 2009, contiene el programa 5.2, Armonización de Protocolos y Procedimientos de Asistencia Mutua en la Subregión Andina. EN ESTE CASO LA PRIMERA PARTE DE ESTA EXPLICACIÓN NO COINCIDE CON LA DE LA VERSIÓN DEFINITIVA DEL iGOPP DEL FTP, SIN EMBARGO SE CONCILIAN SIN PROBLEMA, SE SUGIERE DEJARLA ASÍ

Guatemala: Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado (CONRED), aprobada por Decreto N° 109-96, del 09 de diciembre de 1996, establece en su Artículo 19, Colaboración con otros países, que *“La Coordinadora Nacional, queda facultada para prestar su colaboración en caso de desastres, a otros países, de conformidad sus posibilidades, de manera especial con los que el Estado de Guatemala tenga suscritos, aprobados y ratificados Convenios o Tratados sobre la materia”*. El **Reglamento de la Ley N° 109-96, Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado (CONRED), adoptado por Acuerdo Gubernativo N° 49-2012, del 14 de marzo del 2012,** dispone en su Artículo 45: *“... K. Integrar, en el momento que se declare el Estado de Calamidad o de Emergencia, el Centro de Coordinación de Ayuda Humanitaria (CAAH), de acuerdo al Manual del CCAH respectivo para coordinar eficiente, eficaz y oportunamente la ayuda y la asistencia humanitaria internacional de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos a nivel internacional”*.

Código: PR 1B-1

Pregunta de respuesta cerrada
<i>1. ¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta establece la formulación de planes de emergencia o contingencia en los diferentes sectores o ministerios?</i>
Descripción general del indicador
La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) es un conjunto concatenado de procesos previos y posteriores a la ocurrencia de las emergencias y desastres. Dentro de estos procesos se encuentra la elaboración de planes de emergencia o contingencia. Este indicador valora que la normatividad contemple que la elaboración de dichos planes sea responsabilidad de los distintos sectores, ministerios o secretarías en el ámbito de sus competencias.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Trabajar con la normativa identificada en el indicador PR 1A-1. 2. Verificar si establece la formulación de planes de emergencia o contingencia en el nivel sectorial, ministerial o de las secretarías. 3. Revisar, en su caso, en la formulación de los planes nacionales de GRD o similares.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Para que se cumpla la condición en esta pregunta, la normativa nacional de la GRD o aquella que regula las acciones de PR, debe establecer responsabilidades o funciones sobre la formulación de planes de emergencia o contingencia en los diversos sectores, secretarías o ministerios del país.</p> <p>Coyunturalmente, puede suceder que algunos sectores hayan formulado sus planes de emergencia. Sin embargo, lo que busca el indicador es la existencia de normativa que establezca la formulación de dichos planes.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Jamaica: La Ley de Preparación ante Desastres y Gestión de Emergencias (1993), en la Sección 5 requiere el desarrollo y puesta a prueba de los planes de respuesta a emergencias por parte de las agencias públicas competentes, incluyendo servicios de emergencia, fuerzas de seguridad, sector privado y agencias de voluntarios. La entidad rectora del sistema nacional de emergencias la Office of Disaster Preparedness and Emergency Management (ODPEM), está mandatada para identificar cualquier contingencia que pueda presentarse en el área de responsabilidad de cada ministerio o entidad pública y preparar conjuntamente con dicha entidad un plan para mitigar o responder ante las contingencias identificadas.</p> <p>Perú: El Reglamento de la Ley del SINAGERD, aprobado mediante Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, del 25 de mayo de 2011, establece en su Artículo 39 la obligatoriedad de las entidades públicas de formular planes de operaciones de emergencia y planes de contingencia.</p> <p>Panamá: La Ley N°7, que reorganiza el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), del 11 febrero de 2005, en el Capítulo II enlista las funciones del SINAPROC, encontrando que en el Artículo 5, numeral 3, establece la de "<i>Formular y poner en marcha estrategias y planes de reducción de vulnerabilidades y de gestión de riesgo, en cada uno de los sectores sociales y económicos para proteger a la población, la producción, la infraestructura y el ambiente</i>". Por otro lado, el Decreto Ejecutivo N° 177, del 30 abril de 2008, por el cual se reglamenta la Ley 7, del 11 de febrero del 2005, establece en el artículo 17 que "<i>Las instituciones, sean públicas o privadas, deberán formular los planes que sean necesarios a fin de prevenir y mitigar los riesgos e intervenir en caso de emergencias o desastres de acuerdo con la actividad a que se dediquen</i>".</p>

Código: PR 1B-2

Pregunta de respuesta cerrada
2. <i>¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, prevé la creación y operación de sistemas de vigilancia o alerta sobre fenómenos naturales peligrosos?</i>
Descripción general del indicador
Los sistemas de vigilancia y alerta temprana sobre fenómenos naturales peligrosos han mostrado un gran impacto en la reducción de pérdidas de vidas y bienes en los países o zonas que los implementan. De tal manera, se considera un criterio de calidad que en la normativa nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) o aquella que regula las acciones de Preparación y Respuesta (PR), esté contemplada la creación y operación de estos instrumentos.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Trabajar con la normativa identificada en el indicador PR 1A-1. 2. Verificar si dicha normatividad estipula la creación y operación de sistemas de vigilancia o alerta temprana de fenómenos peligrosos.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Para que se cumpla la condición en esta pregunta, la normativa debe establecer explícitamente la creación y operación de los sistemas de vigilancia o alerta temprana sobre fenómenos naturales peligrosos.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>México: La Ley General de Protección Civil, del 6 de junio de 2012, establece que la coordinación ejecutiva del SINAPROC, que corresponde a la Secretaría de la Gobernación, por medio de la Coordinación Nacional, tendrá como atribución, según el Artículo 19, fracción IX, la de “... <i>Instrumentar y en su caso, operar redes de detección, monitoreo, pronóstico y sistemas de alertamiento, en coordinación con las dependencias responsables e incorporando los esfuerzos de otras redes de monitoreo públicas o privadas...</i>”. Si bien el Artículo 24 identifica responsabilidades concretas en el ámbito del CENAPRED, el Artículo 25 establece que no es una tarea exclusiva de la Coordinación Nacional de Protección y del CENAPRED, sino que las distintas autoridades podrán llevar a cabo “... <i>proyectos, estudios e inversiones para ampliar y modernizar la cobertura de los sistemas de medición de los distintos fenómenos perturbadores naturales y antropogénicos...</i>”.</p> <p>Perú: El Reglamento de la Ley N. 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD), del 25 de mayo de 2011, instruye en el Artículo 9, numeral 9.5, que el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) “... <i>debe promover la instalación y actualización de los sistemas de alerta temprana y los medios de difusión y comunicación sobre emergencias y desastres a la población</i>”.</p> <p>Guatemala: El Reglamento de la Ley N° 109-96, Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado (CONRED), adoptado por Acuerdo Gubernativo N° 49-2012, del 14 de marzo del 2012, determina en su Artículo 90, Sistemas de Alerta Temprana, que: “ <i>Las Coordinadoras impulsarán, implementarán, operarán y darán mantenimiento al sistema de alerta temprana con la participación de las comunidades con el objeto de establecer los mecanismos de aviso y alerta tendientes a reducir el impacto de los desastres...</i>”.</p>

Pregunta de respuesta cerrada
3. <i>¿La normatividad del sector ambiental define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?</i>
Descripción general del indicador
<p>La Gestión de Riesgos de Desastre (GRD) requiere permanentemente la confluencia y contribución de los distintos sectores de la administración pública nacional, central o federal; de todos los otros niveles de gobierno, además de los sectores social y privado. Este indicador valora que los distintos marcos normativos de los sectores dispongan competencias y funciones para que desde cada ámbito se realicen actividades de PR ante desastres. Este es un reconocimiento explícito de que las responsabilidades en este proceso de PR no apuntan únicamente a la instancia nacional responsable de la GRD o a de la PR.</p> <p>Se justifica este indicador, por la conveniencia de que el sector ambiental, ante las exigencias que le plantean en su ámbito la ocurrencia futura de emergencias o desastres, sea facultado por su marco legal para realizar actividades de PR.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar el marco normativo del sector ambiental del país. 2. Verificar si ese marco normativo establece competencias para que el sector ambiental realice acciones de PR en su ámbito. 3. De forma complementaria verificar si existe algún plan sectorial del sector ambiental sobre preparación y respuesta, aprobado formalmente, y que esté vigente
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Para que se cumpla la condición en esta pregunta, el marco normativo del sector ambiente debe establecer competencia y funciones para realizar actividades de PR en su ámbito.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>El Salvador: Reglamento General de la Ley del Ambiente. Decreto 17 del 23 de marzo de 2000. Título V. De los riesgos y desastres ambientales. Art. 76. Indica que el Ministerio del Ambiente deberá establecer un plan de prevención y contingencia ambiental.</p> <p>República Dominicana: La Ley No. 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, del 18 de agosto de 2000, instruye en el Artículo 18, entre las funciones de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las siguientes: "... 20. <i>Evaluar, dar seguimiento y supervisar el control de los factores de riesgo ambiental y de los que puedan incidir en la ocurrencia de desastres naturales y ejecutar directamente, o en coordinación con otras instituciones pertinentes, las acciones tendientes a prevenir la emergencia o a impedir la extensión de sus efectos...</i> Art. 77.- <i>Todos los organismos del Estado y las instituciones privadas desarrollarán acciones de capacitación para su personal acerca de los planes de contingencia que se adoptarán en caso de desastre ambiental, para lo cual se establecerá la debida coordinación institucional, especialmente con la Defensa Civil...</i>".</p> <p>México: La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, del 28 de enero de 1988, ordena en su Artículo 5, fracción VII, que será facultad de la Federación participar "... <i>en la prevención y el control de emergencias y contingencias ambientales, conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan...</i>". Los artículos 7 y 8, repiten esas facultades del 5, pero con respecto a los estados y municipios. Adicionalmente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, del 25 de febrero de 2003, dispone en su Artículo 15, fracción XI, que los municipios participen y coadyuven en "... <i>las acciones de prevención y combate de incendios forestales en coordinación con los gobiernos federal y estatal, y participar en la atención, en general, de las emergencias y contingencias forestales, de acuerdo con los programas de protección civil...</i>".</p>

Pregunta de respuesta cerrada

4. ¿La normatividad del sector agricultura, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?

Descripción general del indicador

La Gestión de Riesgos de Desastre (GRD) requiere permanentemente la confluencia y contribución de los distintos sectores de la administración pública nacional, central o federal; de todos los otros niveles de gobierno, además de los sectores social y privado. Este indicador valora que los distintos marcos normativos de los sectores dispongan competencias y funciones para que desde cada ámbito se realicen actividades de PR ante desastres. Este es un reconocimiento explícito de que las responsabilidades en este proceso de PR no apuntan únicamente a la instancia nacional responsable de la GRD o a de la PR.

Se justifica este indicador, por la conveniencia de que el sector agricultura, ante las exigencias que le plantean en su ámbito la ocurrencia futura de emergencias o desastres, sea facultado por su marco legal para realizar actividades de PR.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Identificar el marco normativo del sector agricultura del país.
2. Verificar si ese marco normativo establece competencias para que el sector agricultura realice acciones de PR en su ámbito.
3. De forma complementaria verificar si existe algún plan sectorial del sector agricultura sobre preparación y respuesta, aprobado formalmente, y que esté vigente

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Para que se cumpla la condición en esta pregunta, el marco normativo del sector agricultura debe establecer competencia y funciones para realizar actividades de PR en su ámbito.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

República Dominicana: La Resolución No. 34-11 del Ministerio de Agricultura, del 13 de junio de 2011, establece en su Artículo 5 *"La misión del departamento será orientar la gestión y coordinar con la entidad del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, para aplicar la prevención y reducción de los riesgos y facilitar la organización de los preparativos para la atención de emergencias, la rehabilitación y reconstrucción en caso de desastre, incorporando la Gestión de Riesgo a desastre en la planificación del sector agropecuario dominicano..."*. En el Art. 6 se definen en funciones específicas del Departamento, incluyendo la de "... d) Elaborar y ejecutar planes nacionales de contingencias para proteger a los productores agropecuarios y sus activos económicos y sociales".

Perú: El sector agricultura tiene el Plan Sectorial de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Sector Agricultura, aprobado por Resolución Suprema N° 059-2008-AG, del 10 de noviembre de 2008, En el referido Plan se definen las actividades de Preparación para Desastres.

Guatemala: El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) publicó en agosto de 2001 el Plan de Emergencia para la Prevención y Mitigación de Daños Causados por Desastres Naturales, que actualiza el primer Plan Nacional de Emergencia elaborado en el 2000 que fuera presentado formalmente a la CONRED ese mismo año. El Plan de Emergencia del MAGA 2001 se diseña con base al Decreto 109-96 del Congreso de la República, para la creación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, que requiere que el MAGA, además de sus funciones principales y de soporte dentro del Sistema Multisectorial de Gestión para la Prevención y Mitigación de Riesgos y Desastres, elabore, coordine y accione en forma interna, mediante un Plan de Emergencia que atienda especialmente en sus ámbitos de competencia. El Plan tiene como misión coordinar la movilización de los recursos del MAGA para la preparación, prevención y mitigación de daños causados por fenómenos naturales o inducidos que afecten a la población en el ámbito

rural y/o a la base productiva agropecuaria y forestal competencia del ministerio. Dentro de los objetivos objetivos específicos del Plan (pag.18) se incluyen responsabilidades para actividades de preparación y respuesta dentro del ámbito de competencia del MAGA. Adicionalmente, el MAGA generó los Protocolos de Acción del Plan de Emergencia por Desastres Naturales, de la Unidad de Planificación Geográfica y Gestión de Riesgo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) de septiembre de 2003 (PR-1B-4a) establece los siguientes protocolos para atención a desastres:

Protocolo No. 1: Protocolo de acción por sequía

Protocolo No. 2: Protocolo de acción por helada

Protocolo No. 3: Protocolo de acción por huracán

Protocolo No. 4: Protocolo de acción por

Protocolo No. 5: Protocolo de acción por deslizamiento

Protocolo No. 6: Protocolo de acción por erupción volcánica

Protocolo No. 7: Protocolo de acción por incendio forestal

Protocolo No. 8: Protocolo de acción por enfermedades y plagas fitozoosanitarias

Protocolo No. 9: Protocolo de acción por marea roja

Protocolo No. 10: Protocolo de acción del funcionario de enlace del MAGA ante CONRED

Código: PR 1B-5

Pregunta de respuesta cerrada
5. <i>¿La normatividad del sector salud, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?</i>
Descripción general del indicador
<p>La Gestión de Riesgos de Desastre (GRD) requiere permanentemente la confluencia y contribución de los distintos sectores de la administración pública nacional, central o federal; de todos los otros niveles de gobierno, además de los sectores social y privado. Este indicador valora que los distintos marcos normativos de los sectores dispongan competencias y funciones para que desde cada ámbito se realicen actividades de PR ante desastres. Este es un reconocimiento explícito de que las responsabilidades en este proceso de PR no apuntan únicamente a la instancia nacional responsable de la GRD o a de la PR.</p> <p>Se justifica este indicador, por la conveniencia de que el sector salud, ante las exigencias que le plantean en su ámbito la ocurrencia futura de emergencias o desastres, sea facultado por su marco legal para realizar actividades de PR.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar el marco normativo del sector salud del país. 2. Verificar si ese marco normativo establece competencias para que el sector salud realice acciones de PR en su ámbito. 3. De forma complementaria verificar si existe algún plan sectorial del sector salud sobre preparación y respuesta, aprobado formalmente, y que esté vigente.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Para que se cumpla la condición en esta pregunta, el marco normativo del sector salud debe establecer competencia y funciones para realizar actividades de PR en su ámbito.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: La Política Nacional de Salud Ambiental 2011 - 2020 - Ministerio de Salud, aprobada por Resolución Ministerial N° 258-2011-MINSA, del 04 de abril del 2011, dispone en su sexta política, contenida en la página 31, que <i>"...se deberá establecer un conjunto de dispositivos y planes que articulen la respuesta ante eventuales emergencias y desastres de las intervenciones de salud ambiental, definiendo mecanismos de Gestión Ambiental oportuna y que tenga impacto ante este tipo de situaciones..."</i>.</p> <p>Panamá: El Decreto Ejecutivo No. 1302, de 22 de noviembre de 2011, que desarrolla las Políticas Nacionales de Salud y sus Lineamientos Estratégicos y dicta otras disposiciones, establece en el artículo 4 que las Políticas de Salud serán implementadas para periodos quinquenales. De tal manera, que el Ministerio de Salud emitió en el 2010 la Política Nacional de Salud y Lineamientos Estratégicos 2010-2015, que incluyen dentro del Objetivo Estratégico 3.4: <i>"Reducir la vulnerabilidad ante los desastres naturales, las emergencias antrópicas y los efectos del cambio climático, con planificación, prevención, mitigación, preparación, respuesta y rehabilitación temprana para reducir el impacto de los efectos adversos sobre la salud pública, promoviendo la colaboración interinstitucional a nivel nacional"</i>, precisando en la Línea de acción 3.4.1: <i>"Elaboración de planes de contingencia en las instalaciones de salud, de acuerdo a los factores de riesgos identificados, a nivel local, regional y nacional"</i>.</p> <p>Colombia: El Decreto 205 de 2003, por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica y las funciones del Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y Protección Social) y se dictan otras disposiciones, establece en el Artículo 1, los Objetivos del Ministerio: "... que las políticas públicas del Sistema de la Protección Social se concretan mediante la identificación e implementación, de ser necesario, de estrategias de reducción, mitigación y superación de los riesgos que puedan provenir de fuentes naturales y ambientales, sociales, económicas y relacionadas con el mercado de trabajo, ciclo vital y la salud, en el marco de las competencias asignadas al Ministerio". Posteriormente, en el Artículo 16, sobre las funciones del Viceministerio de Salud y Bienestar, la número 13 dice: <i>"Coordinar con los departamentos, distritos y/o</i></p>

*municipios, según el caso, la prevención y atención de emergencias y desastres". En cumplimiento de esta normativa, el Ministerio de Salud formula Planes de Contingencia ante emergencias o desastres declarados por el SNGRD, el más reciente que está publicado por el sector, es el "*Plan de Contingencia del Sector Salud ante la Temporada Invernal de Colombia de 2011*".*

Código: PR 1B-6

Pregunta de respuesta cerrada
6. <i>¿La normatividad del sector vivienda, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?</i>
Descripción general del indicador
<p>La Gestión de Riesgos de Desastre (GRD) requiere permanentemente la confluencia y contribución de los distintos sectores de la administración pública nacional, central o federal; de todos los otros niveles de gobierno, además de los sectores social y privado. Este indicador valora que los distintos marcos normativos de los sectores dispongan competencias y funciones para que desde cada ámbito se realicen actividades de PR ante desastres. Este es un reconocimiento explícito de que las responsabilidades en este proceso de PR no apuntan únicamente a la instancia nacional responsable de la GRD o a de la PR.</p> <p>Se justifica este indicador, por la conveniencia de que el sector vivienda, ante las exigencias que le plantean en su ámbito la ocurrencia futura de emergencias o desastres, sea facultado por su marco legal para realizar actividades de PR.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar el marco normativo del sector vivienda del país. 2. Verificar si ese marco normativo establece competencias para que el sector vivienda realice acciones de PR en su ámbito. 3. De forma complementaria verificar si existe algún plan sectorial del sector vivienda sobre preparación y respuesta, aprobado formalmente, y que esté vigente.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Para que se cumpla la condición en esta pregunta, el marco normativo del sector vivienda debe establecer competencia y funciones para realizar actividades de PR en su ámbito.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: El sector vivienda dispone de un Plan de Operaciones de Emergencia, aprobado por Resolución Ministerial N° 026- 2010 VIVIENDA del 11 de febrero de 2010. El Plan establece las actividades de preparación y respuesta que se deben ejecutar.</p> <p>Costa Rica: Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 2012-2030, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos tiene el Objetivo General de: <i>"Impulsar el desarrollo de asentamientos humanos en sitios seguros y en función de su sostenibilidad, incrementando la capacidad para atender eficazmente las emergencias"</i>. Se considera que la mención explícita a "incrementar la capacidad de atender emergencias" es un mandato para la preparación.</p>

Pregunta de respuesta cerrada
7. ¿La normatividad del sector educación, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?
Descripción general del indicador
<p>La Gestión de Riesgos de Desastre (GRD) requiere permanentemente la confluencia y contribución de los distintos sectores de la administración pública nacional, central o federal; de todos los otros niveles de gobierno, además de los sectores social y privado. Este indicador valora que los distintos marcos normativos de los sectores dispongan competencias y funciones para que desde cada ámbito se realicen actividades de PR ante desastres. Este es un reconocimiento explícito de que las responsabilidades en este proceso de PR no apuntan únicamente a la instancia nacional responsable de la GRD o a de la PR.</p> <p>Se justifica este indicador, por la conveniencia de que el sector educación, ante las exigencias que le plantean en su ámbito la ocurrencia futura de emergencias o desastres, sea facultado por su marco legal para realizar actividades de PR.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar el marco normativo del sector educación del país. 2. Verificar si ese marco normativo establece competencias para que el sector educación realice acciones de PR en su ámbito. 3. De forma complementaria verificar si existe algún plan sectorial del sector educación sobre preparación y respuesta, aprobado formalmente, y que esté vigente.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Para que se cumpla la condición en esta pregunta, el marco normativo del sector educación debe establecer competencia y funciones para realizar actividades de PR en su ámbito.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Colombia: La Ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación, enumera en el Artículo 5 los fines de la educación, incluyendo en el numeral 10 que <i>"La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la Nación"</i>. Específicamente, en relación con la preparación para la respuesta, la Directiva Ministerial N° 12 de 2009 Secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, sobre la continuidad de la prestación del servicio educativo en situaciones de emergencia (PR-1B-7b), ordena en su proemio que esas secretarías <i>"...deben participar en los comités regionales y locales para la prevención y atención de desastres"</i> (hoy día Comités Territoriales de Gestión del Riesgo), para <i>"...desarrollar planes locales de emergencia y contingencias"</i>.</p> <p>Perú: El sector educación dispone de un Plan de Educación Preventiva Ante Sismos - 2010, aprobado por Resolución Directorial N° 0463 2010 ED, del 2 de junio de 2010, el cual establece un conjunto de actividades preparatorias que deben realizarse en cada institución educativa de todo el país a efecto de estar en posibilidades de enfrentar los efectos de un sismo.</p> <p>México: La Secretaria de Educación Pública, dispone del Programa Escuela Segura, y entre sus acciones dispone de un Manual de Seguridad Escolar, publicado en 2011, que contiene directrices para que el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar del Consejo Escolar de Participación Social, defina las acciones de prevención, preparación y respuesta en los momentos de crisis, y cita: <i>"El Proyecto de Seguridad Escolar es una herramienta mediante la cual se establecen las bases, lineamientos, procedimientos, acciones y estrategias para actuar en situaciones de emergencia y vulnerabilidad, por lo que debe basarse en un diagnóstico de problemas, riesgos y fortalezas que cada escuela de educación básica lleva a cabo para"</i></p>

elaborar su Agenda de Seguridad Escolar, en el caso de las escuelas que participan en el Programa Escuela Segura, como un componente de su Planeación Anual de Trabajo." El mismo Manual refiere en materia de preparación: "i) integrar un equipo para la elaboración del Mapa de Riesgos en el que participen miembros de la comunidad escolar, autoridades educativas y especialistas; ii) establecer un compromiso de los involucrados en la detección, comprensión y prevención de riesgos, así como en la realización de las actividades para enfrentar las emergencias y manejar las crisis; iii) establecer un marco de referencia común: qué entendemos por riesgo, amenaza, factor de protección, vulnerabilidad, daños, etc.; iv) definir el área sobre la que se desea determinar los riesgos (por ejemplo, la escuela y tres cuadras a la redonda incluyendo las principales vías de acceso, entre otros". El Acuerdo No. 535 publicado el 8 de junio de 2010 por el que se emiten los Lineamientos generales para la operación de los Consejos Escolares de Participación Social, le da sustento legal a la conformación de estos Comités dentro de la estructura de los Consejos Escolares de Participación Social (Capítulo III, Artículo 6).

Costa Rica: El Decreto Ejecutivo N° 36451- Organización Administrativa de las Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública del 7 de febrero de 2001, establece en su Artículo 41, entre las funciones del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo, la de "... f) *Coordinar con las Direcciones Regionales de Educación y centros educativos la elaboración de programas y planes de acción para prevenir los riesgos de desastre y riesgo social o para disminuir su probabilidad e impacto. ... h) Coordinar con las oficinas del Ministerio de Educación Pública que corresponda, la creación y operación de los comités de emergencia y equipos de trabajo que promuevan la observancia de las políticas, objetivos, metas y planes de acción definidas a los interno del Ministerio de Educación y coordinadas con entidades externas responsables de la atención y prevención de emergencias.*"

Código: PR 1B-8**Pregunta de respuesta cerrada**

8. *¿La normatividad del sector turismo, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?*

Descripción general del indicador

La Gestión de Riesgos de Desastre (GRD) requiere permanentemente la confluencia y contribución de los distintos sectores de la administración pública nacional, central o federal; de todos los otros niveles de gobierno, además de los sectores social y privado. Este indicador valora que los distintos marcos normativos de los sectores dispongan competencias y funciones para que desde cada ámbito se realicen actividades de PR ante desastres. Este es un reconocimiento explícito de que las responsabilidades en este proceso de PR no apuntan únicamente a la instancia nacional responsable de la GRD o a de la PR.

Se justifica este indicador, por la conveniencia de que el sector turismo, ante las exigencias que le plantean en su ámbito la ocurrencia futura de emergencias o desastres, sea facultado por su marco legal para realizar actividades de PR.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Identificar el marco normativo del sector turismo del país.
2. Verificar si ese marco normativo establece competencias para que el sector turismo realice acciones de PR en su ámbito.
3. De forma complementaria verificar si existe algún plan sectorial del sector turismo sobre preparación y respuesta, aprobado formalmente, y que esté vigente.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Para que se cumpla la condición en esta pregunta, el marco normativo del sector turismo debe establecer competencia y funciones para realizar actividades de PR en su ámbito.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Perú: El Plan de Operaciones de Emergencia del Sector Turismo y Comercio Exterior, aprobado por Resolución Ministerial N° 054-2008 MINCETUR-DM del 31 de marzo 2008, con el Objetivo General de “... *definir acciones y actividades tendientes a organizar los recursos humanos y materiales del MINCETUR para la atención de las emergencias en el ámbito institucional sectorial*”.

Código: PR 1B-9

Pregunta de respuesta cerrada
9. <i>¿La normatividad del sector transporte (o sector equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?</i>
Descripción general del indicador
<p>La Gestión de Riesgos de Desastre (GRD) requiere permanentemente la confluencia y contribución de los distintos sectores de la administración pública nacional, central o federal; de todos los otros niveles de gobierno, además de los sectores social y privado. Este indicador valora que los distintos marcos normativos de los sectores dispongan competencias y funciones para que desde cada ámbito se realicen actividades de PR ante desastres. Este es un reconocimiento explícito de que las responsabilidades en este proceso de PR no apuntan únicamente a la instancia nacional responsable de la GRD o a de la PR.</p> <p>Se justifica este indicador, por la conveniencia de que el sector transporte, ante las exigencias que le plantean en su ámbito la ocurrencia futura de emergencias o desastres, sea facultado por su marco legal para realizar actividades de PR.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar el marco normativo del sector transporte del país. 2. Verificar si ese marco normativo establece competencias para que el sector transporte realice acciones de PR en su ámbito. 3. De forma complementaria verificar si existe algún plan sectorial del sector transporte sobre preparación y respuesta, aprobado formalmente, y que esté vigente.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Para que se cumpla la condición en esta pregunta, el marco normativo del sector transporte debe establecer competencia y funciones para realizar actividades de PR en su ámbito.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>El Salvador: Acuerdo Ejecutivo N° 331, de 2010. Crea la Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo (DACGER), con responsabilidades directas en la preparación y respuesta dentro del Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano.</p> <p>Perú: El Plan Sectorial de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del 12 de diciembre del 2008, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 900-2008-MTC 01, define las actividades y responsabilidades del sector en materia de preparación para desastres. Su vigencia es indefinida. (NOTA: en la resolución se integra el texto del Plan).</p> <p>República Dominicana: La Orden Departamental No. 76/01 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que crea el Departamento de Gestión Ambiental y de Riesgo, del 21 de agosto de 2001, incluye en su Artículo 4, que la Sección de Riesgo es la encargada de: "d) <i>Velar por la implantación del manual operativo para casos de desastres, especialmente en las acciones de PMR</i>"; e) "Dirigir las tareas de actualización del Manual operativo de emergencias para casos de desastres de esta SEOPC".</p> <p>México: El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012, del 18 de enero de 2008, establece para el sector transporte, concretamente en infraestructura carretera y autotransporte, responsabilidades en el ámbito de preparaciones para respuesta, dentro de lo que denominan programas de emergencias. Concretamente, las líneas de acción bajo el Objetivo 1.1.2, de la Estrategia I "Intensificar los trabajos de reconstrucción, conservación periódica y rutinaria de la red federal libre de peaje, con el apoyo de sistemas de gestión de conservación a fin de optimizar los recursos y mejorar la calidad de los trabajos", para Infraestructura Carretera, y las líneas de acción bajo la Estrategia 2: "Desarrollar capacidades en el autotransporte federal para ajustarse espontánea y ordenadamente a los impactos climáticos adversos".</p>

Código: PR 1B-10

Pregunta de respuesta cerrada
<i>10. ¿La normatividad del sector agua y saneamiento (o equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación en caso de desastres en el ámbito de sus competencias?</i>
Descripción general del indicador
<p>La Gestión de Riesgos de Desastre (GRD) requiere permanentemente la confluencia y contribución de los distintos sectores de la administración pública nacional, central o federal; de todos los otros niveles de gobierno, además de los sectores social y privado. Este indicador valora que los distintos marcos normativos de los sectores dispongan competencias y funciones para que desde cada ámbito se realicen actividades de PR ante desastres. Este es un reconocimiento explícito de que las responsabilidades en este proceso de PR no apuntan únicamente a la instancia nacional responsable de la GRD o a de la PR.</p> <p>Se justifica este indicador, por la conveniencia de que el sector agua y saneamiento (o equivalente), ante las exigencias que le plantean en su ámbito la ocurrencia futura de emergencias o desastres, sea facultado por su marco legal para realizar actividades de PR.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar el marco normativo del sector agua y saneamiento (o equivalente) del país. 2. Verificar si ese marco normativo establece competencias para que el sector agua y saneamiento (o equivalente) realice acciones de PR en su ámbito. 3. De forma complementaria verificar si existe algún plan sectorial del sector transporte sobre preparación y respuesta, aprobado formalmente, y que esté vigente.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Para que se cumpla la condición en esta pregunta, el marco normativo del sector agua y saneamiento (o equivalente) debe establecer competencia y funciones para realizar actividades de PR en su ámbito.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: La resolución del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento N° 011-2007-SUNASS-CD, del 02 de febrero 2007, establece el "Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento" en cuyo anexo 5 detalla las medidas que las Empresas Prestadoras del Servicio deben adoptar tanto en situaciones de riesgo como de desastres al instruir que las empresas deben tener un plan de contingencia, el mismo que debe partir de una evaluación previa, además de acciones de prevención. Por otro lado, el Decreto Supremo 004-2013-VIVIENDA donde se crea una red de apoyo de entidades prestadoras del servicio de agua y saneamiento, con el propósito de permitir la cooperación entre éstas entidades en situaciones de desastre o contingencias; asimismo esta red sería el medio para canalizar el apoyo que en estos temas brinda el Ministerio.</p> <p>Jamaica: La National Water Commission NWC ha desarrollado un Plan de Preparación de Desastre por Huracán para la empresa que describe los procedimientos de preparación y respuesta que deben adoptarse para reducir el riesgo de desastres. También los roles y responsabilidades de los distintos individuos y departamentos se describen en el Plan.</p> <p>Colombia: El Decreto 3571 de 2011, por el cual se establecen los objetivos, estructura, funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y se integra el Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio, establece en el Artículo 19, sobre las funciones del Viceministerio de Agua y Saneamiento, la número 16: "Apoyar la gestión del riesgo asociado al servicio público de agua potable y saneamiento básico, en el marco del Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres (hoy SNGRD)"; posteriormente, define una serie de acciones específicas en las que se desarrolla esta responsabilidad. Por otro lado, se cuenta con el Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS - 2000, aprobado mediante la Resolución N° 1096 de 17, de Noviembre de 2000, y es de obligatorio cumplimiento para el sector; define el análisis de vulnerabilidad y el concepto de escenario de riesgo como base de la formulación de los "planes de contingencia" de los sistemas de agua potable y saneamiento básico (los planes de contingencia son exigidos en el Artículo 201).</p>

Código: PR 1B-11**Pregunta de respuesta cerrada**

11. ¿La normatividad del sector telecomunicaciones (o equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?

Descripción general del indicador

La Gestión de Riesgos de Desastre (GRD) requiere permanentemente la confluencia y contribución de los distintos sectores de la administración pública nacional, central o federal; de todos los otros niveles de gobierno, además de los sectores social y privado. Este indicador valora que los distintos marcos normativos de los sectores dispongan competencias y funciones para que desde cada ámbito se realicen actividades de PR ante desastres. Este es un reconocimiento explícito de que las responsabilidades en este proceso de PR no apuntan únicamente a la instancia nacional responsable de la GRD o a de la PR.

Se justifica este indicador, por la conveniencia de que el sector telecomunicaciones (o equivalente), ante las exigencias que le plantean en su ámbito la ocurrencia futura de emergencias o desastres, sea facultado por su marco legal para realizar actividades de PR.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Identificar el marco normativo del sector telecomunicaciones (o equivalente) del país.
2. Verificar si ese marco normativo establece competencias para que el sector telecomunicaciones (o equivalente) realice acciones de PR en su ámbito.
3. De forma complementaria verificar si existe algún plan sectorial del sector telecomunicaciones sobre preparación y respuesta, aprobado formalmente, y que esté vigente.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Para que se cumpla la condición en esta pregunta, el marco normativo del sector telecomunicaciones (o equivalente) debe establecer competencia y funciones para realizar actividades de PR en su ámbito.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Panamá: El Decreto Ejecutivo No. 73, de 9 de abril de 1997, por el cual se reglamenta la Ley No. 31 de 8 de febrero de 1996, por la cual se dictan normas para la regulación de las telecomunicaciones en la República de Panamá establece que se deben formular estos planes de continuidad de operaciones o negocios ante desastres.

Costa Rica: El Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009-2014, del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, contempla en su Apartado 4.4.3 Ejes del PNDT, el siguiente: "Lineamiento a.7 - Asegurar una plataforma de telecomunicaciones con calidad ambiental, cuyo impacto sobre el ambiente sea el menor posible, contribuya a la conservación del ambiente, así como a la prevención y mitigación de efectos por desastres naturales.". Asimismo, el "Eje Ambiental 5.1.3. Objetivo 3. Garantizar las posibilidades que ofrecen las TIC para mejorar la calidad ambiental del país, lo cual incluye medidas sobre la prevención, mitigación y adaptación de los desastres naturales". Objetivos para el desarrollo de una sociedad de la información: "Desarrollar plataformas para la gestión electrónica de procesos sobre catástrofes y desarrollar sistemas de respuesta a emergencias, para proporcionar asistencia médica y humanitaria". Línea estratégica: Seguridad de las Telecomunicaciones: "a. Crear el Plan Rector de Continuidad de las Operaciones, que dicte las medidas de seguridad física y lógica de las redes y servicios. Objetivo Específico No.2: Garantizar la continuidad del servicio. Acciones y medidas "a. Disponer de servicios de telecomunicaciones alternos a las redes en operación, para atender casos de emergencia nacional. b. Garantizar la disponibilidad del servicio de emergencia 9-1-1. c. Establecer los procedimientos por los cuales el Gobierno podrá dictaminar medidas para el uso, o asumir, temporalmente, servicios de telecomunicaciones o la explotación de redes, en casos de emergencia".

Chile: Ley N° 20478, Ministerio de Transporte y telecomunicaciones (2010) sobre recuperación y continuidad en condiciones críticas y de emergencia del sistema público de telecomunicaciones, considera en el Título VIII, De las Infraestructuras Críticas de Telecomunicaciones, en el Artículo 39 “A. *El Ministerio, por medio de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, desarrollará un plan de resguardo de la infraestructura crítica de telecomunicaciones del país, con el objeto de asegurar la continuidad de las comunicaciones en situaciones de emergencia resultantes de fenómenos de la naturaleza, fallas eléctricas generalizadas u otras situaciones de catástrofe...*”.

Código: PR 1B-12

Pregunta de respuesta cerrada
12. <i>¿La normatividad del sector energía (o equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?</i>
Descripción general del indicador
<p>La Gestión de Riesgos de Desastre (GRD) requiere permanentemente la confluencia y contribución de los distintos sectores de la administración pública nacional, central o federal; de todos los otros niveles de gobierno, además de los sectores social y privado. Este indicador valora que los distintos marcos normativos de los sectores dispongan competencias y funciones para que desde cada ámbito se realicen actividades de PR ante desastres. Este es un reconocimiento explícito de que las responsabilidades en este proceso de PR no apuntan únicamente a la instancia nacional responsable de la GRD o a de la PR.</p> <p>Se justifica este indicador, por la conveniencia de que el sector energía (o equivalente), ante las exigencias que le plantean en su ámbito la ocurrencia futura de emergencias o desastres, sea facultado por su marco legal para realizar actividades de PR.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar el marco normativo del sector energía (o equivalente) del país. 2. Verificar si ese marco normativo establece competencias para que el sector energía (o equivalente) realice acciones de PR en su ámbito. 3. De forma complementaria verificar si existe algún plan sectorial del sector energía sobre preparación y respuesta, aprobado formalmente, y que esté vigente.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Para que se cumpla la condición en esta pregunta, el marco normativo del sector energía (o equivalente) debe establecer competencia y funciones para realizar actividades de PR en su ámbito.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Colombia: La Resolución 180398, del 7 de abril de 2004, por medio de la cual el Ministerio de Minas y Energía adopta el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas para la República de Colombia (RETIE), cuya última actualización es del 30 de agosto de 2013 (Resolución 90708). El RETIE establece en el artículo 7 que toda empresa del sector eléctrico colombiano debe cumplir con una serie de preceptos de seguridad, entre los cuales se establece <i>"organizar y desarrollar un Plan de Emergencia teniendo en cuenta las siguientes ramas: (i) preventiva, (ii) pasiva o estructural y (iii) activa o de control de emergencias"</i>.</p> <p>República Dominicana: La Ley No. 125-01, Ley General de Electricidad, del 26 de julio de 2001 y modificada por la Ley No.186-07, del 6 de agosto de 2007, dispone en su Artículo 102 que en caso de <i>"... calamidad pública y/o emergencia nacional el Estado podrá tomar a su cargo la administración de las empresas eléctricas, de manera provisional hasta tanto dure la causa que provocó dicha intervención, pagando al concesionario una indemnización o compensación, que se determinará tomando por base el promedio de las utilidades que hubiere tenido la empresa"</i>. El Decreto No. 555-02, Reglamento para la Aplicación de la Ley No. 125-01, General de Electricidad, del 19 de julio del 2002, y modificado por el Decreto No. 494-07, del 30 de agosto de 2007, considera en su Artículo 106 que <i>"Las Empresas Eléctricas se encuentran obligadas a suministrar a la SIE y al OC, a más tardar el treinta (30) de marzo de cada año, los planes de contingencia estipulados por éstas para enfrentar las eventualidades de caso de ocurrencia de un fenómeno atmosférico durante el período de temporada ciclónica, que abarca los meses comprendidos entre el primero (1ro.) de junio hasta el treinta (30) de noviembre de cada año"...</i> "PÁRRAFO. El OC elaborará el procedimiento de operación de emergencia del sistema durante el período de la temporada ciclónica tomando en consideración los planes de contingencia antes indicados. Dicho procedimiento, luego de ser consensuado entre todos los Agentes del MEM, deberá ser remitido a la SIE a más tardar el treinta (30) de abril de cada año, para fines de aprobación".</p> <p>Perú: El Decreto Supremo N° 29-94-EM, Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, del 08 de junio de 1994, en su Artículo 23 punto F, indica los elementos que debe contener un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), entre ellos el inciso <i>"f) un plan de contingencia para prevenir o controlar riesgos ambientales, posibles accidentes y desastres que se puedan ocasionar en las instalaciones eléctricas"</i>.</p>

Pregunta de respuesta cerrada

13. ¿La normatividad que regula las entidades prestadoras del servicio público de agua y saneamiento, obliga la formulación e implementación de planes de continuidad de operaciones o negocios ante desastres?

Descripción general del indicador

Es un objetivo fundamental de la Gestión de Riesgos de Desastre (GRD), concretamente de la Preparación y Respuesta (PR), que una vez ocurrido determinado desastre se detecten con absoluta rapidez aquellas de funciones y servicios que se hayan suspendido parcial o totalmente, y que por su naturaleza e importancia resulte crítica su restauración. Este indicador valora, que en los marcos normativos de los sectores y entes se disponga la formulación de Planes de Continuidad de Operaciones o de Negocios (PCO), que son el resultado de un análisis de su vulnerabilidad que da lugar a un protocolo con el propósito de lograr, en caso de desastre, una recuperación diligente de sus funciones priorizando aquellas consideradas críticas para su continuidad y el cumplimiento de sus objetivos.

Este indicador valora que la normatividad que regula a las entidades prestadoras del servicio público de agua y saneamiento, dada su importancia estratégica para la recuperación de la normalidad de la sociedad en general en caso de un desastre, establezca la obligación para que esas entidades formulen e implementen un PCO, dotando así a la organización de la debida resiliencia.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Identificar la norma que regula a las entidades prestadoras del servicio público de agua y saneamiento en el país.
2. Verificar si la norma obliga a la formulación e implementación de planes de continuidad de operaciones o negocios en caso de desastre.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Para que se cumpla la condición en esta pregunta, la norma que regula al sector de las entidades prestadoras del servicio público de agua y saneamiento, debe **establecer la responsabilidad** de elaborar un PCO.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Perú: El Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento aprobado por Decreto Supremo N° 09-1995-PRES, del 28 de agosto de 1995 (PR 1B-13a), en su Artículo 23 considera: *“En previsión de la ocurrencia de situaciones fortuitas o de fuerza mayor tales como desastres que causen interrupciones, restricciones o racionamientos, la EPS debe contar con planes para superar o por lo menos mitigar sus efectos sobre la población”*.

Chile: El Decreto N° 1199 del Ministerio de Obras Públicas (2005) que aprueba el Reglamento de las concesiones sanitarias de producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas y de las normas sobre calidad de atención a los usuarios de estos servicios; considera en el apartado 7, De la Atención de Emergencias, Artículo 122 que *"Las concesionarias deberán contar con un procedimiento especial que permita con prontitud y en forma permanente atender las emergencias, de acuerdo a los estándares definidos en los respectivos procesos tarifarios. Dichos estándares deben ser de conocimiento público y estar a disposición de los usuarios en los paneles de información de las oficinas de atención de público del prestador"*.

Pregunta de respuesta cerrada

14. *¿La normatividad que regula las entidades prestadoras del servicio público de telecomunicaciones, obliga la formulación de planes de continuidad de operaciones o negocios ante desastres?*

Descripción general del indicador

Es un objetivo fundamental de la Gestión de Riesgos de Desastre (GRD), concretamente de la Preparación y Respuesta (PR), que una vez ocurrido determinado desastre se detecten con absoluta rapidez aquellas de funciones y servicios que se hayan suspendido parcial o totalmente, y que por su naturaleza e importancia resulte crítica su restauración. Este indicador valora, que en los marcos normativos de los sectores y entes se disponga la formulación de Planes de Continuidad de Operaciones o de Negocios (PCO), que son el resultado de un análisis de su vulnerabilidad que da lugar a un protocolo con el propósito de lograr, en caso de desastre, una recuperación diligente de sus funciones priorizando aquellas consideradas críticas para su continuidad y el cumplimiento de sus objetivos.

Este indicador valora que la normatividad que regula a las entidades prestadoras del servicio público de telecomunicaciones, dada su importancia estratégica para la recuperación de la normalidad de la sociedad en general en caso de un desastre, establezca la obligación para que esas entidades formulen e implementen un PCO, dotando así a la organización de la debida resiliencia.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Identificar la norma que regula a las entidades prestadoras del servicio público de telecomunicaciones en el país.
2. Verificar si la norma obliga la formulación e implementación de PCO en caso de desastre.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Para que se cumpla la condición en esta pregunta, la norma que regula al sector de las entidades prestadoras del servicio público de telecomunicaciones, debe **establecer la responsabilidad** de elaborar un PCO.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Chile: La Ley 18168, Ley General de telecomunicaciones, del Ministerio de Transporte y telecomunicaciones(1982), considera en su Título VIII, De las Infraestructuras Críticas de Telecomunicaciones, en el Artículo 39 A, que *“El Ministerio, por medio de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, desarrollará un plan de resguardo de la infraestructura crítica de telecomunicaciones del país, con el objeto de asegurar la continuidad de las comunicaciones en situaciones de emergencia resultantes de fenómenos de la naturaleza, fallas eléctricas generalizadas u otras situaciones de catástrofe”*.

Perú: El Ministerio de Transportes y Comunicaciones dispone a través de la Resolución Ministerial N° 568-2007-MTC, del 4 octubre de 2007, del Contrato Tipo para el Régimen de Concesión Única para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, el que en la cláusula 6, numeral 12 establece que *“... las obligaciones de las empresas prestadoras del servicio de telecomunicaciones en caso de emergencia o crisis”* y detalla actividades para garantizar la continuidad del servicio.

Pregunta de respuesta cerrada

15. *¿La normatividad que regula las entidades prestadoras del servicio público de energía, obliga la formulación de planes de continuidad de operaciones o negocios ante desastres?*

Descripción general del indicador

Es un objetivo fundamental de la Gestión de Riesgos de Desastre (GRD), concretamente de la Preparación y Respuesta (PR), que una vez ocurrido determinado desastre se detecten con absoluta rapidez aquellas de funciones y servicios que se hayan suspendido parcial o totalmente, y que por su naturaleza e importancia resulte crítica su restauración. Este indicador valora, que en los marcos normativos de los sectores y entes se disponga la formulación de Planes de Continuidad de Operaciones o de Negocios (PCO), que son el resultado de un análisis de su vulnerabilidad que da lugar a un protocolo con el propósito de lograr, en caso de desastre, una recuperación diligente de sus funciones priorizando aquellas consideradas críticas para su continuidad y el cumplimiento de sus objetivos.

Este indicador valora que la normatividad que regula a las entidades prestadoras del servicio público de energía, dada su importancia estratégica para la recuperación de la normalidad de la sociedad en general en caso de un desastre, establezca la obligación para que esas entidades formulen e implementen un PCO, dotando así a la organización de la debida resiliencia.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Identificar la norma que regula a las entidades prestadoras del servicio público de energía en el país.
2. Verificar si la norma obliga la formulación e implementación de PCO en caso de desastre.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Para que se cumpla la condición en esta pregunta, la norma que regula al sector de las entidades prestadoras del servicio público de energía, **debe tener la responsabilidad** de elaborar PCO.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

México: El Manual Institucional de Procedimientos Administrativos para la Atención de Desastres, y/o Casos Fortuitos y/o de Fuerza Mayor. (Formalizado el 11-oct-2009) establece esas responsabilidades para todas las subdirecciones (generación, transmisión y distribución). Por ejemplo, en cumplimiento de esta normatividad, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), dispone de planes de restablecimiento del sistema eléctrico con el fin de priorizar los servicios a usuarios y cargas predefinidas por su importancia humana, social, estratégica y pública. Por otra parte, ante un desastre en las instalaciones el Centro Nacional de Control de Energía, automáticamente se transfiere la coordinación del despacho y operación del Sistema Interconectado Nacional al Centro Nacional de Control Alterno ubicado en otra ciudad del país.

Pregunta de respuesta cerrada

16. ¿Existe normatividad que establece la obligatoriedad de formular e implementar planes de emergencia o contingencia asociados con el transporte, manipulación o procesamiento de sustancias peligrosas?

Descripción general del indicador

Entre los hechos más recurrentes en la atención de emergencias y contingencias en la región se encuentran los relacionados con derrames, contaminación o explosiones de sustancias peligrosas. La falta de regulación tanto para su transporte, manipulación y procesamiento se encuentra entre las causas principales de esa recurrencia. Esta amenaza antrópica interactúa además con amenazas naturales, incrementando los niveles de riesgo. Dado que los actores de la respuesta a este tipo de fenómeno son usualmente los mismos que responden a las emergencias y desastres, se considera como un atributo de calidad, la existencia de normativa que regule estos procesos.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Indagar por la vigencia de una normativa específica que regula el transporte, manipulación o procesamiento de sustancias peligrosas.
2. Identificar si dicha normatividad señala la obligatoriedad de elaborar planes de emergencia o contingencia específicos para los casos de accidentes o desastres antrópicos relacionados con el transporte, manipulación o procesamiento de estas sustancias peligrosas.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Para que se cumpla la condición en esta pregunta debe existir una normativa específica que **establezca la obligatoriedad** de formular e implementar planes de emergencia o contingencia asociados al transporte, manipulación y procesamiento de sustancias peligrosas.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Perú: La Ley N° 28256, Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, del 18 de junio de 2004, contiene en su Artículo 9, De los Planes de Contingencia, que "*Los titulares de la actividad que usan materiales peligrosos están obligados a elaborar o exigir a las empresas contratistas que intervengan en la producción, almacenamiento, embalaje, transporte, manipulación, utilización, reutilización, tratamiento, reciclaje y disposición final de materiales y residuos peligrosos, un plan de contingencia que será aprobado por el Sector correspondiente, para los fines de control y fiscalización ambiental*".

México: La Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, aprobada el 2 de marzo de 1999, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, en su numeral 5.12 establece la obligación de "*Elaborar un Programa Específico de Seguridad e Higiene para el Manejo, Transporte y Almacenamiento de Sustancias Químicas Peligrosas*". Este programa debe contener el plan de emergencia en el centro de trabajo, que debe incluir los siguientes contenidos (Capítulo 8):

- 1) los procedimientos de seguridad en caso de fuga, derrame, emanaciones o incendio;
- 2) el manual de primeros auxilios conforme a lo establecido en el apartado 5.6;
- 3) el procedimiento para evacuación;
- 4) los procedimientos para volver a condiciones normales,
- 5) los procedimientos para rescate en espacios confinados.

Adicionalmente, el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, publicado el 7 de abril de 1993, menciona todas las medidas preventivas que se deben tomar para disminuir el riesgo durante la transportación de estos productos.

Costa Rica: El Reglamento para el manejo de los desechos peligrosos industriales, aprobado según Decreto ejecutivo N° 27001 del Ministerio de Ambiente, Energía y Mares de Costa Rica (MINAE), del 29 de abril de 1998, considera en su Apartado 14, numeral 14.6, que "*En las etapas de tratamiento y disposición final igual que en el resto de las etapas de manejo se deberá contar con planes de contingencia en casos de emergencia*".

así como en el caso de desastres naturales". Asimismo, la Guía de Seguridad en el Transporte Terrestre de Carga 2013, del MINAE, contiene diversos elementos de procedimiento relacionados con la atención de emergencias de diversa índole.

Colombia: El Decreto 1609 de 2002, por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera, instruye en el Artículo 1 como objetivo: *"establecer los requisitos técnicos y de seguridad para el manejo y transporte de mercancías peligrosas por carretera en vehículos automotores en todo el territorio nacional, con el fin de minimizar los riesgos, garantizar la seguridad y proteger la vida y el medio ambiente, de acuerdo con las definiciones y clasificaciones establecidas en la Norma Técnica Colombiana NTC 1692, Transporte de mercancías peligrosa.. Clasificación, etiquetado y rotulado, segunda actualización -anexo N° 1".* Adicionalmente, establece en el Artículo 11, sobre obligaciones de los actores de la cadena de transporte, en el numeral "J" la siguiente: *"Diseñar el Plan de Contingencia para la atención de accidentes durante las operaciones de transporte de mercancías peligrosas, cuando se realice en vehículos propios, teniendo en cuenta lo estipulado en la Tarjeta de Emergencia NTC 4532. –Anexo No. 3– y los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Contingencias contra derrames de hidrocarburos, sus derivados y sustancias nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres establecidos mediante Decreto 321 del 17 de febrero de 1999 o las demás disposiciones que se expidan sobre el tema. Estos planes pueden ser parte del plan de contingencia general o integral de la empresa".*

Pregunta de respuesta cerrada
17. ¿Existe normatividad que establece la obligatoriedad de formular e implementar planes de emergencia o contingencia ante derrame, combustión o contaminación por hidrocarburos?
Descripción general del indicador
Una larga cadena de efectos y la prolongación en el tiempo de los efectos negativos causados por los accidentes relacionados con el derramamiento, combustión o contaminación de hidrocarburos; sin dejar de considerar el oneroso proceso de recuperación que implica, y una recurrencia comparable a la de los accidentes por sustancias peligrosas, exige necesariamente la formulación de planes de emergencia y contingencia por parte de los gobiernos de los países, a través quizá, dada su naturaleza, de la conjunción de varios sectores, pues no sólo conciernen estos accidentes o desastre antrópicos a la entidad nacional petrolera, sino a los sectores ambiental, energía, salud, transporte, además de los servicios de bomberos; entre otros. Este indicador entonces otorga valor, en el proceso de Preparación y Emergencia (PR), a la emisión de planes de emergencia relacionados con este tipo de accidentes, principalmente por el ejercicio de coordinación que exige.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar por la existencia de normativa específica que regula el derramamiento, combustión o contaminación de hidrocarburos. 2. Identificar la normatividad de los sectores que pudieran ser involucrados en relación al derramamiento, combustión o contaminación de hidrocarburos: entidad nacional petrolera, ambiental, energía, salud, transporte, servicio de bomberos, etc., para buscar la obligatoriedad de elaborar planes de emergencia o contingencia relacionados con ese accidente. 3. Revisar, en su caso, la normativa nacional de GRD, o bien, de PR, por si existe esa obligación.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Para que se cumpla la condición en esta pregunta debe existir una normativa específica que establezca la obligatoriedad de formular e implementar planes de emergencia o contingencia asociados al derramamiento, combustión o contaminación de hidrocarburos.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: El Reglamento para la Protección Ambiental en Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 015 - 2006 - EM, en su Artículo 86o instruye: <i>"Las unidades de transporte por vías terrestre de productos líquidos derivados de Hidrocarburos deberán contar con equipos y materiales para enfrentar emergencias por derrames, fugas, volcaduras e incendios, que incluirá equipos y medios para su comunicación con los propietarios de la carga y los servicios de respuesta a emergencias y una cartilla de instrucciones sobre su uso. Los propietarios de la carga están obligados a colaborar, bajo responsabilidad, durante la respuesta a las emergencias. El personal a cargo de estas unidades deberá haber recibido entrenamiento en el uso de tales equipos y materiales. El Organismo Supervisor OSINERG verificará la disponibilidad de los equipos y materiales para la respuesta a emergencias y la capacitación del personal antes de otorgar la autorización de funcionamiento".</i> Y agrega <i>"La Policía Nacional del Perú en caso de requerírselo OSINERG, podrá verificar en las vías terrestres, la disponibilidad de los equipos y materiales de respuesta de emergencia. La unidad de transporte por vía terrestre deberá contar con una copia del Plan de Contingencia"</i> y en el Anexo 2 considera los <i>"Términos de Referencia para formular planes de contingencia"</i>.</p> <p>Panamá: El Decreto Ejecutivo No. 75, de 4 de junio de 2008, por el cual se dicta la norma primaria de calidad ambiental y niveles de calidad para las aguas continentales de uso recreativo con y sin contacto directo, en el Capítulo VIII, establece en el Artículo 33 que <i>"El procedimiento de atención a las situaciones de emergencias será aquel establecido en el Plan de Descontaminación elaborado por la Autoridad Nacional del Ambiente de acuerdo a la naturaleza de la situación de emergencia"</i>. Dicho Decreto Ejecutivo aplica a todas las aguas continentales, según dispone su artículo 4. Adicionalmente, en el Acuerdo No. 65 de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, del 22 de abril de 2003, por el cual se modifica el Reglamento para la Navegación en Aguas del Canal de Panamá, introduce la normativa y los procedimientos que establecen la obligación, responsabilidad y las acciones que corresponden a los buques que ingresen a las aguas del Canal, a través de la exigencia de Planes de Contingencia, con el propósito de prevenir y dar</p>

respuesta a los derrames de hidrocarburos ocurridos en o desde el buque, con sujeción a la verificación de estos planes por parte de la Autoridad. También se cuenta con la Ley N° 36, de 17 de mayo de 1996 por la cual se establecen los controles para evitar la Contaminación Ambiental ocasionada por combustibles y plomo.

México: El Plan Nacional de Contingencia para Combatir y Controlar Derrames de Hidrocarburos y otras Substancias Nocivas en el Mar, publicado el 8 de febrero de 1999, establece responsabilidades e integra una organización de respuesta para contar con una reacción oportuna y adecuada ante casos de incidentes contaminantes provocados por derrames de hidrocarburos, en coordinación con las dependencias que la integran.

Código: PR 1C-1

Pregunta de respuesta cerrada
1. ¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta estipula instancias de coordinación en el territorio?
Descripción general del indicador
<p>Este indicador busca que la normativa de Preparación y Respuesta (PR), disponga la existencia de instancias de coordinación de la preparación y respuesta en un plano local, contribuyendo a que los territorios regulen y estandaricen las acciones y operaciones en materia de preparación lo que contribuye a reducir las demoras y la improvisación en las tareas de la respuesta.</p> <p>Como criterio de calidad de la norma expresa de PR, la existencia de instancias concretas en el territorio es un valor agregado puesto que implica una mayor cercanía de la coordinación a las escalas locales de GRD.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Trabajar con la normativa identificada en el indicador PR 1A-1. 2. Verificar si dicha normativa establece instancias de coordinación en el territorio para llevar a cabo los procesos de PR.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Para que se cumpla la condición en esta pregunta, la normativa debe establecer de forma explícita las instancias de coordinación que llevarán adelante los procesos de PR en el territorio.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Países centralistas</p> <p>Costa Rica. La Ley N. 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, del 27 de octubre de 2005, dispone en el Capítulo II, Artículo 10, que "<i>Se establecen las siguientes instancias de coordinación: sectoriales - institucionales, técnicos - operativos, regional - municipal, redes temáticas territoriales, Foro nacional sobre el riesgo, Comités de seguimiento de subsistemas.</i>"</p> <p>Perú: El Reglamento de la Ley del SINAGERD, aprobado mediante Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, del 25 de mayo de 2011, establece en el artículo 43 los "<i>niveles de las emergencias y las instancias de coordinación en el territorio según el nivel de la emergencia</i>".</p> <p>País federal</p> <p>México: La Ley General de Protección Civil, del 6 de junio del 2012, establece en el Artículo 33 que "<i>El Comité Nacional estará constituido por los titulares o por un representante de las dependencias y entidades de la administración pública federal, con rango no inferior al de director general o equivalente, que de acuerdo a su especialidad asume la responsabilidad de asesorar, apoyar y aportar, dentro de sus funciones, programas, planes de emergencia y sus recursos humanos y materiales, al Sistema Nacional, así como <u>por</u> el representante que al efecto designe el o los gobernadores de los estados afectados o por el jefe del gobierno del Distrito Federal, en su caso</i>".</p>

Código: PR 1C-2

Pregunta de respuesta cerrada
2. <i>¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, establece criterios de asistencia subsidiaria entre diferentes niveles de gobierno?</i>
Descripción general del indicador
Este indicador reconoce un criterio de calidad si la normativa nacional de Preparación y Respuesta (PR) en un determinado país, establece criterios de asistencia subsidiaria entre los diferentes niveles de gobierno en las tareas relativas a la respuesta de desastre. Esto significa que regirá una suerte de principio de gradualidad, por el que esa norma dispone que el nivel territorial inferior, en el caso de una emergencia o desastre tendrá inicialmente la responsabilidad de ejecutar las tareas de respuesta que correspondan a sus capacidades, y el criterio de subsidiariedad se aplicará en el caso de que esas capacidades territoriales se vean rebasadas por la situación, de manera que el nivel territorial superior deberá retomar esas tareas y así subsecuentemente, hasta que se hayan agotado los niveles territoriales (según el modelo político administrativo del país que se trate) se activará la acción del gobierno central, nacional o federal.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Trabajar con la normativa identificada en el indicador PR 1A.1. 2. Verificar si dicha normativa adopta el criterio de subsidiariedad entre los diferentes niveles de gobierno. 3. Verificar si la normativa que regula el proceso de PR establece acciones o mecanismos de asistencia entre los niveles de gobierno.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Para que se cumpla la condición en esta pregunta, la normativa de PR debe establecer criterios de asistencia subsidiaria entre los diferentes niveles de gobierno.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Países centralistas</p> <p>Uruguay: Ley 18.621 del 25 de octubre de 2009 que crea el Sistema Nacional de Emergencias. Artículo 3, apéndice D, donde se establece el principio de descentralización de la gestión y subsidiariedad en las acciones.</p> <p>Costa Rica: La Ley No. 147-02, Sobre Gestión de Riesgos, del 22 de Septiembre del 2002, señala en su Artículo 1 los que se deberán considerar como los principios generales que orientan la política de gestión de riesgos, y es la marcada con el numeral 3, ámbito de competencias, la que sustenta la valoración positiva del presente indicador, al decir "<i>En las actividades de prevención, mitigación, preparación y respuesta ante desastres se tendrán en cuenta, para efectos del ejercicio de las respectivas competencias, la observancia de los criterios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiaridad institucional...</i>". En esa misma lógica, el Artículo 14, señala que los "<i>Comités Regionales, Provinciales y Municipales de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres en cada una de sus demarcaciones geográficas, en el Distrito Nacional, y en cada uno de los Municipios del país, los cuales estarán presididos por la Gobernación, la Defensa Civil y el Presidente de la Cruz Roja local, y en el nivel provincial, en el Distrito Nacional y en el nivel municipal...</i>", aclarando en el Párrafo IV que "<i>Aplicando los principios de subsidiaridad y complementariedad los niveles superiores en la organización del Estado serán facilitadores y apoyo de los niveles inferiores</i>".</p> <p>Perú: Ley N. 29664 del 8 de febrero de 2011, que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD) artículo 4, numeral 3, establece el principio de subsidiariedad.</p> <p>País federal</p> <p>México: El Artículo 21 de la Ley General de Protección Civil, publicada el 6 de junio de 2012 establece los criterios de asistencia subsidiaria entre los diferentes niveles de gobierno en caso de emergencias, partiendo de la primera autoridad que tome conocimiento, pasando por las distintas instancias especializadas de Protección Civil, hasta llegar al nivel estatal y federal, en los casos en que se vean rebasadas las capacidades de respuesta.</p>

Código: PR 1C-3

Pregunta de respuesta cerrada
3. <i>¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta establece la formulación de planes de emergencia o contingencia al nivel territorial?</i>
Descripción general del indicador
Este indicador reconoce la importancia que los planes de emergencia sean formulados desde el nivel territorial, en el entendido que la gestión de riesgos desde lo local siempre será más certera y más eficiente, además de aportar mejores elementos para la coordinación con la instancia nacional o central. En ese tenor, este indicador requiere que la normatividad de PR instruya la elaboración de tales planes de emergencia o contingencia y a nivel territorial.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Trabajar con la normativa identificada en el indicador PR 1A-1. 2. Verificar si dicha normativa específica ordena la formulación de planes de emergencia o contingencia en el nivel territorial, o bien, si lo hace respecto de planes para todos los procesos de la GDR.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Para que se cumpla la condición en esta pregunta, la normativa debe establecer la obligatoriedad o la responsabilidad de la formulación de planes de emergencia o contingencia a nivel territorial. También aplica si la normativa establece la formulación de planes para todos los procesos de la GDR.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Países federales</p> <p>Brasil: Ley n° 12.608, de 10 de Abril de 2012. Art. 7. Establece como competencia de los Estados apoyar a los Municipios en la elaboración de Planes de Contingencia y Protección Civil.</p> <p>México: La Ley General de Protección Civil, del 6 de junio de 2012, dispone en su Artículo 37 que <i>“En la elaboración de los programas de protección civil de las entidades federativas, municipios y delegaciones, deberán considerarse las líneas generales que establezca el Programa Nacional, así como las etapas consideradas en la Gestión Integral de Riesgos y conforme lo establezca la normatividad local en materia de planeación”</i>.</p> <p>Países centralistas</p> <p>Uruguay: Ley 18.621 del 25 de octubre de 2009 que crea el Sistema Nacional de Emergencias. Artículo 15, apéndice (a), donde establece a los centros coordinadores de emergencias departamentales incentivar la formulación participativa de los planes de emergencia y contingencia frente a cada tipo de amenaza.</p> <p>Panamá: El Decreto Ejecutivo No.177, del 30 de abril de 2008, por el cual se reglamenta la Ley 7 de 11 de febrero de 2005, en su artículo 3 define que el Sistema Nacional de Protección Civil tendrá bajo su responsabilidad <i>“...la ejecución de las políticas y planes de prevención, mitigación, preparación, intervención y recuperación para desastres”</i>. Por otro lado, en el mismo Decreto Ejecutivo, en el artículo 6, se establece que las direcciones Provinciales, Regionales y Comarcales <i>“...desarrollarán las acciones necesarias a fin de llevar a la población las tareas de Gestión de Riesgos de acuerdo con la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión de Riesgos”</i>.</p>

Código: PR 1C-4

Pregunta de respuesta cerrada
4. <i>¿Existe normatividad, distinta de la de GRD o preparativos, que define competencias para las unidades de gestión territorial en preparación y respuesta?</i>
Descripción general del indicador
El ámbito de la Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) debe de armonizarse con los distintos modelos de organización política-administrativa, sobre todo cuando se trata de diferenciar entre lo nacional o central, y lo que corresponde a las Unidades de Gestión Territorial (UGT). En este caso, este indicador le concede un valor importante a la existencia de una definición de competencias para las UGT en materia de PR dentro de la normatividad que regula las competencias generales de las UGT, pues coadyuva con la normatividad expresa de la GRD o de Preparación y Respuesta (PR).
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar, en el caso de gobiernos centralistas, por la existencia de una normativa específica de carácter nacional, de materia distinta a la GRD y PR, que regula las competencias de las UGT. 2. Verificar si dicha normativa específica establece competencias para las UGT en PR. Posibles verificables pueden ser: códigos municipales, leyes de municipalidades, de descentralización, nacionales territoriales o normas de planificación regional, etc. 3. Investigar, si se trata de gobierno federales, por la existencia de una normativa específica de carácter local que norme las funciones de las UGT. O bien, una federal de materia distinta a la GRD y PR, que le señale competencias en PR.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Para que se cumpla la condición en esta pregunta, debe encontrarse vigente una normativa, de materia distinta a la GRD y PR, que establezca competencias para las UGT en PR.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Países centralistas</p> <p>Perú: La Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, del 26 de mayo 2003, instruye en el Artículo 20, Atribuciones del Alcalde, numeral 30, la de "<i>Presidir el comité de defensa civil de su jurisdicción</i>"; y en el artículo 85, numeral 3, Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales, sección 3.2, la de "<i>Coordinar con el Comité de Defensa Civil del distrito las acciones necesarias para la atención de las poblaciones damnificadas por desastres naturales o de otra índole</i>". Adicionalmente, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, del 16 de noviembre del 2002, en su artículo 61 establece funciones en materia de "Defensa Civil" que soportan los procesos de preparativos y desastres para los gobiernos regionales. Se considera que la condición se cumple plenamente en 2003 cuando la responsabilidad se asigna además a las municipalidades.</p> <p>Bolivia: Ley marco de autonomías y descentralización "Andrés Báñez" del 17 de julio de 2010. Artículo 100 sobre la gestión del riesgo y atención de desastres naturales. III. Los gobiernos municipales tienen las siguientes competencias exclusivas: 1. Ser parte del Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias (SISRADE) que en el nivel municipal constituye el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos entre entidades municipales, públicas, privadas y las organizaciones ciudadanas, así como los recursos físicos, técnicos, científicos, financieros y humanos que se requieran para la reducción de riesgo y atención de desastres y/o emergencias. 2. Normar, conformar y liderar comités municipales de reducción de riesgo y atención de desastres. (Son 13 funciones).</p>

Pregunta de respuesta cerrada
5. ¿Existe normatividad que habilita a los municipios a utilizar sus recursos propios fuera de su jurisdicción en situaciones de emergencia?
Descripción general del indicador
En países de modelo centralista, la legislación limita en muchos casos que los municipios utilicen recursos bajo su jurisdicción en el territorio de otro municipio. Se trata de verificar la existencia de normativa que permita que un municipio determinado pueda apoyar con recursos a otros municipios en caso de ser requerido. Los recursos no son solamente financieros, también lo son en especie. Ahora, en el caso de países de orden federal se habrá que comprobar que el manejo de su hacienda tiene o no restricciones para utilizar recursos bajo su jurisdicción en territorio de otro municipio.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normativa que establece las atribuciones de los municipios, o normativa que regule los procesos de inversión territorial. 2. Indagar por la existencia de normativa específica que habilita el uso de recursos económicos o en especie para la respuesta en caso de desastre entre municipios.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Para que se cumpla la condición en esta pregunta debe existir normativa que permita el uso de recursos económicos o en especie entre municipios para la respuesta en caso de desastre.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Colombia: La Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, establece en su Artículo 42, De la urgencia manifiesta, que esta existe “... <i>cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro, cuando se presenten situaciones relacionadas con los Estados de Excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concursos públicos</i>”. Este Artículo 42 habilita a los municipios para que puedan brindar apoyo a otros municipios en situaciones de emergencia declaradas. Adicionalmente, la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, establece en el Artículo 60, Solidaridad, que “<i>Los departamentos, corporaciones autónomas, distritos y municipios podrán colaborar con otras entidades territoriales de su mismo rango o de rango inferior o superior cuando tales entidades se encuentren en situaciones declaradas de desastre o de calamidad pública. La colaboración puede extenderse al envío de equipos humanos y materiales, recursos físicos a través de redes esenciales, elaboración conjunta de obras, manejo complementario del orden público, intercambio de información sobre el desastre o su inminente aparición y, en general, todo aquello que haga efectivos los principios de concurrencia y subsidiariedad positiva en situaciones de interés público acentuado</i>”.</p> <p>Costa Rica: La Ley N° 7794, Código Municipal, del 27 de abril de 1998, considera en su Artículo 3* que “<i>La municipalidad podrá ejercer las competencias municipales e invertir fondos públicos con otras municipalidades e instituciones de la Administración Pública para el cumplimiento de fines locales, regionales o nacionales, o para la construcción de obras públicas de beneficio común, de conformidad con los convenios que al efecto suscriba</i>. Artículo 62.- La municipalidad podrá usar o disponer de su patrimonio mediante toda clase de actos o contratos permitidos por este Código y la Ley de contratación administrativa, que sean idóneos para el cumplimiento de sus fines. Las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la extensión de garantías a favor de otras personas, solo serán posibles cuando las autorice, expresamente, una ley especial. Sin embargo, las municipalidades, mediante el voto favorable de las dos terceras partes del total de los miembros que integran su concejo, podrán donar directamente bienes muebles e inmuebles, siempre que estas donaciones vayan dirigidas a los órganos del Estado e instituciones autónomas o semiautónomas, que a su vez quedan autorizadas para donar directamente a las municipalidades. (*) Reformado el artículo 3 por la Ley N° 8801, Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, del 28 de abril de 2010.</p>

Código: PR 2-1

Pregunta de respuesta cerrada
1. <i>¿El ente nacional responsable de la coordinación de la preparación de la respuesta, ha recibido recursos para estas funciones en la última vigencia fiscal?</i>
Descripción general del indicador
Debe de existir certeza que las acciones relativas a la Preparación y Respuesta (PR) se van a ejecutar. Y este contexto la asignación de recursos al ente nacional responsable de la coordinación de acciones para la Preparación y Respuesta (PR) es un buen indicio. Sin embargo no basta con esa asignación de presupuesto de funcionamiento, se deberá también de verificar si el ente nacional ha recibido recursos para este propósito.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar a la entidad nacional encargada de la coordinación de la PR. 2. Verificar que se han asignados recursos para la entidad nacional encargada de la coordinación de la PR, en el presupuesto nacional o en los informes de ejecución presupuestal y de gasto, y de gestión de la entidad. 3. Consultar a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, y específicamente con sus áreas encargadas de los temas presupuestales. 4. Consultar con la entidad nacional a cargo de coordinar la PR particularmente con el área responsable del presupuesto. 5. Verificar, en su caso, la página web de la entidad a cargo de la coordinación de la PR. 6. Investigar en el último informe del país presentado ante el Marco de Acción de Hyogo por las actividades llevadas a cabo por el país en temas de preparación de la respuesta.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Evidencia de la asignación de recursos a la entidad nacional encargada de la coordinación de la PR, ya sean recursos provenientes del presupuesto nacional o del presupuesto de esa misma entidad. También, se considera evidencia la realización de dichas actividades, tales como simulacros, siempre y cuando hayan sido realizados con recursos provenientes del presupuesto de dichas entidades.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Colombia: En el informe de Gestión 2012 de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres de Colombia (UNGRD), se evidencia que la UNGRD asignó recursos de su presupuesto a la realización de simulacros de evacuación por huracán: (i) Huracán “SARA”, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Julio 22 - 28 del 2012 y (ii) Huracán “WAWAY”, Manaure, La Guajira, Agosto 17 del 2012. Así mismo, asigno recursos al simulacro nacional de evacuación por sismo (21 Departamento y 117 municipios). De otra parte, realizó el Simulacro Nacional de evacuación por Riesgo Volcánico – Volcán Nevado del Ruiz (2 Departamentos, 17 municipios). Adicionalmente, a través del rubro presupuestal 3 2 1 5 se asignaron recursos para “<i>atención de desastres y emergencias en el territorio nacional -Fondo Nacional de Calamidades – SNPAD</i>”. Lo anterior se evidencia en el Anexo del Decreto “<i>Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia Fiscal 2013, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos</i>”</p> <p>Perú: La Ley N° 29951, del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, del 30 de noviembre de 2012, en el Anexo 5, páginas 70 y 72, se evidencia que hay asignación de recursos al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).</p> <p>México: La Ley General de Protección Civil, del 6 de junio de 2012, dispone que la coordinación de la preparación y respuesta de desastres, recae en primera instancia en el SINAPROC, en su brazo operativo que es la Secretaría de Gobernación SEGOB, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), para lo cual se sirve de mecanismos como el Comité Nacional de Emergencias. A la CNPC, así como a su órgano desconcentrado el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), y sus instrumentos financieros de gestión del riesgo, se les asignaron recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2013), tal y como se desprende del ANEXO 15.</p>

Código: PR 2-2

Pregunta de respuesta cerrada
2. ¿Al menos un servicio nacional de bomberos, ha recibido recursos para la financiación de actividades de preparación para desastres en la última vigencia fiscal?
Descripción general del indicador
Debe de existir certeza que las acciones relativas a la Preparación y Respuesta (PR) se van a ejecutar. En este contexto la asignación de recursos al menos a un servicio nacional de bomberos es un buen indicio. Sin embargo no basta con esa asignación de presupuesto de funcionamiento, se deberá también de verificar si las actividades de PR de ese servicio de bomberos se han financiado.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar los diferentes servicios nacionales de bomberos. 2. Determinar si al menos un servicio nacional de bomberos tienen asignados recursos para las actividades de PR, ya sea en el presupuesto nacional o en los informes de ejecución presupuestal y de gasto, y de gestión de la entidad. 3. Consultar directamente con los diferentes servicios nacionales de bomberos, particularmente, con las áreas de presupuesto respectivas. 4. Verificar, en su caso, la página web de los diferentes servicios nacionales de bomberos. 5. Investigar en el último informe del país presentado ante el Marco de Acción de Hyogo por las actividades llevadas a cabo por el país en temas de preparación de la respuesta.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Evidencia de recursos asignados al menos un servicio nacional de bomberos para la financiación de actividades de PR en la última vigencia fiscal. También se considera evidencia la realización de dichas actividades, siempre que sean realizadas con recursos provenientes del presupuesto de dichas entidades.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: En el Anexo 5 de la Ley n° 29951 del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013, del 30 de noviembre de 2012, se evidencia la asignación de recursos para Bomberos para: “(i) cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio; (ii) capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil (pg. 85) y para Defensa Civil para atención de desastres y apoyo a la rehabilitación y a la reconstrucción” (pg. 70).</p> <p>Jamaica: En el Presupuesto 2013-2014, Head 6400 of Ministry of Housing, Environment, Water and Local Government, Budget 1 - Recurrent, Function 10 - Community Amenity Services, SubFunction 01 - Community Development Programme 475 - Fire Protection Services. Sub Programme, 20 Jamaica Fire Brigade.</p> <p>Panamá: De acuerdo al Informe de Ejecución del Programa de Inversiones Públicas no Financieras para el primer semestre de 2012, en el Capítulo IV, Ejecución Presupuestaria de las Inversiones no Financieras a nivel sector, apartado M, Sector Protección Ciudadana, el Ministerio de Gobierno ejecuta proyectos de inversión orientados a la protección ciudadana, entre los cuales están: Equipamiento de Transporte del Cuerpo de Bomberos de Panamá, Innovación Tecnológica del Cuerpo de Bomberos y Equipamiento para Apoyo Cuerpo de Bomberos de la República.</p> <p>Chile: La Ley N° 20641, Presupuestos del Sector Público año 2013, del 22 de Diciembre 2012, asigna recursos a Bomberos de Chile, dentro del presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.</p>

Código: PR 2-3**Pregunta de respuesta cerrada**

3. *¿La entidad nacional responsable de la prevención y extinción de incendios forestales, ha recibido recursos para la financiación de actividades de preparación para desastres en la última vigencia fiscal?*

Descripción general del indicador

Debe de existir certeza que las acciones relativas a la Preparación y Respuesta (PR) programadas para el ejercicio fiscal presente se habrán de ejecutar. En este contexto la asignación de recursos es un primer indicio. Sin embargo, los rubros y los conceptos del presupuesto nacional suelen ser modificados y ajustados durante el ejercicio fiscal. Entonces no basta esa asignación, se deberán también de verificar si las actividades de PR se han financiado y realizado. Este indicador cuestiona si la entidad nacional responsable de la prevención y extinción de incendios forestales en el país, no solamente le han asignado recursos del presupuesto de funcionamiento, si no que las actividades específicas de PR se han financiado y ejecutado.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Identificar a la entidad nacional responsable de la prevención y extinción de incendios forestales.
2. Verificar si la entidad nacional le han sido asignados recursos para la realización de actividades de PR, tanto en el presupuesto nacional, como en los informes de ejecución presupuestal y de gasto.
3. Consultar, en su caso, con la entidad nacional concretamente con su área responsable del tema presupuestal.
4. Consultar, en su caso, con el área de presupuesto de la autoridad superior o supervisora de entidad nacional.
5. Revisar la información disponible en la página web de la entidad nacional.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Evidencia de recursos asignados a la entidad nacional responsable de la prevención y extinción de incendios forestales, para la financiación de actividades de PR en la última vigencia fiscal. Se considera evidencia la realización de dichas actividades, siempre que sean realizadas con recursos provenientes del presupuesto.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Costa Rica: El SINAC. Programa Nacional de Manejo del Fuego. En el reporte semanal al 5 de mayo de 2013 se evidencian acciones de preparación para la extinción de incendios forestales.

Chile: La Ley 20641, Presupuestos del Sector Público año 2013, del 22 de Diciembre 2012, asigna recursos a la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Dicha institución tiene asignadas competencias en el combate a incendios, a través del Decreto 733 del 11 de Junio de 1982, que deroga los Decretos Supremos N°. 1.027, de 1976, Y 1.040, de 1979, y aprueba normas, establece "*Artículo 1°.- La prevención y combate de incendios forestales constituirá normal y fundamental tarea y responsabilidad del Ministerio de Agricultura, quien la ejercerá por intermedio de la Corporación Nacional Forestal...*". Por lo tanto sus presupuestos de operación van implícitamente dirigidos a la prevención de desastres, y las capacitaciones, adquisición de suministros, monitoreos, nominas, comunicaciones, equipamientos, etc., son acciones de preparación.

Pregunta de respuesta cerrada

4. *¿Cuenta el sector ambiental con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?*

Descripción general del indicador

De las actividades propias del proceso de Preparación y Respuesta (PR) la planificación es una de las que más importancia tienen, pues además de ofrecer una guía respecto de un evento futuro probable, es un ejercicio reflexivo que permite alcanzar cierto grado de anticipación y el descubrimiento de debilidades y deficiencias que pueden ser resueltas *ex-ante*. La planificación se sirve de insumos valiosos: la información generada durante la evaluación de los riesgos, tanto el conocimiento sobre la vulnerabilidad como el de las amenazas; la información histórica de desastres pasados; los resultados de las acciones dirigidas a reducir los riesgos, etc. Por esa razón se considera como un factor de calidad de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en los países, que los distintos sectores de la administración pública ya sea nacional, central o federal –según el país de que se trate- recojan esta responsabilidad de planear en su ámbito. Este indicador tiene interés particular en el sector ambiente, valorando que al menos en los últimos 5 años, haya producido y sometido a la aprobación formal que corresponda, un Plan Nacional de Emergencia o contingencia (PNE), o bien, un Plan de Continuidad de Operaciones (PCO). En el entendido que un PNE es el marco de acción institucional sobre la GRD, que precisa entre otras cosas sus procedimientos, funciones y responsabilidades; y el Plan de Continuidad de Operaciones (PCO), que es protocolo resultado del análisis de la vulnerabilidad del sector, con el fin de que, en su caso, facilite una recuperación diligente de las funciones, priorizando aquellas consideradas críticas para su continuidad y el cumplimiento de sus objetivos.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Consultar a la cabeza del sector ambiental (o entidad equivalente) respecto a si se ha elaborado y aprobado formalmente en los últimos 5 años un PNE o un PCO (o equivalentes).
2. Consultar con el área rectora de la GRD a ese mismo respecto.
3. Revisar la información disponible en la página web de las instancias consultadas sobre la existencia de dichos planes.
4. Verificar la existencia material de esos planes sectoriales.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Evidencia de un PNE o un PCO aprobados para el sector ambiental en los últimos 5 años (o que aún se encuentren dentro del periodo de vigencia). Si dicho plan fue aprobado hace más de 5 años, pero en su momento no fue establecido un periodo de vigencia, no se considerará cumplido el indicador.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

No se ha podido encontrar un ejemplo en la región, por lo que se plantea una situación hipotética: En un país de la región, existe un plan de emergencias para gestionar cuencas que son compartidas por varios municipios, en situaciones de inundaciones.

Pregunta de respuesta cerrada

5. ¿Cuenta el sector agricultura con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años, y su entidad coordinadora o rectora ha recibido recursos para la preparación en caso de desastres en la última vigencia fiscal?

Descripción general del indicador

De las actividades propias del proceso de Preparación y Respuesta (PR) la planificación es una de las que más importancia tienen, pues además de ofrecer una guía respecto de un evento futuro probable, es un ejercicio reflexivo que permite alcanzar cierto grado de anticipación y el descubrimiento de debilidades y deficiencias que pueden ser resueltas *ex-ante*. La planificación se sirve de insumos valiosos: la información generada durante la evaluación de los riesgos, tanto el conocimiento sobre la vulnerabilidad como el de las amenazas; la información histórica de desastres pasados; los resultados de las acciones dirigidas a reducir los riesgos, etc. Por esa razón se considera como un factor de calidad de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en los países, que los distintos sectores de la administración pública ya sea nacional, central o federal –según el país de que se trate– recojan esta responsabilidad de planear en su ámbito. Este indicador tiene interés particular en el sector agricultura, valorando que al menos en los últimos 5 años, haya producido y sometido a la aprobación formal que corresponda, un Plan Nacional de Emergencia o contingencia (PNE), o bien, un Plan de Continuidad de Operaciones (PCO). En el entendido que un PNE es el marco de acción institucional sobre la GRD, que precisa entre otras cosas sus procedimientos, funciones y responsabilidades; y el Plan de Continuidad de Operaciones (PCO), que es protocolo resultado del análisis de la vulnerabilidad del sector, con el fin de que, en su caso, facilite una recuperación diligente de las funciones, priorizando aquellas consideradas críticas para su continuidad y el cumplimiento de sus objetivos. Adicionalmente, este indicador reconoce la importancia que la entidad coordinadora o rectora del sector agricultura haya recibido recursos para acciones de preparación en caso de desastres durante el último ejercicio o vigencia fiscal.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

Respecto de los planes de emergencia o contingencia o continuidad de negocio (o equivalente):

1. Consultar a la cabeza del sector agricultura (o entidad equivalente) respecto a si se ha elaborado y aprobado formalmente en los últimos 5 años un PNE o un PCO (o equivalentes).
2. Consultar con el área rectora de la GRD a ese mismo respecto.
3. Revisar la información disponible en la página web de las instancias consultadas sobre la existencia de dichos planes.
4. Verificar la existencia material de esos planes sectoriales.

Respecto de la asignación de recursos:

1. Identificar los recursos asignados, en la última vigencia fiscal, a la entidad rectora del sector agricultura para actividades de PR.
2. Revisar el presupuesto nacional, los informes presupuestales, informes de ejecución de gastos o documentos relacionados de carácter oficial.
3. Consultar, en su caso, a la entidad rectora del sector agricultura con el área de presupuesto.
4. Consultar, en su caso, con el área de presupuesto de la autoridad hacendaria, de economía, o de finanzas (o entidad equivalente).

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Para que se cumpla la condición en esta pregunta, el sector agricultura debe contar con un PNE o un PCO, aprobados formalmente al menos en los últimos 5 años (o que aún se encuentren dentro del periodo de vigencia del plan), y evidencia de al menos un proyecto de PR del sector, que constate la asignación de recursos a la entidad rectora del sector durante la última vigencia o ejercicio fiscal.

Con relación al plan, si el mismo fue aprobado hace más de 5 años pero en su momento no fue establecido un periodo de vigencia, no se considerará cumplido el indicador.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: El Plan de Operaciones de Emergencia del sector Agricultura, aprobado por Resolución Suprema N° 059-2008-AG el 10 de noviembre del 2008. Asimismo, como segunda condición, se tiene que el Ministerio de Agricultura ha recibido recursos presupuestales para la preparación en caso de desastres como se aprecia en el Anexo 5 de la Ley N° 29951 del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, del 30 de noviembre del 2012, donde se asignan recursos para: (i) población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante inundaciones; (ii) población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante flujos en quebradas y laderas, a través de los productos del 3000444 al 3000448.</p>

Pregunta de respuesta cerrada
6. <i>¿Cuenta el sector salud con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años, y su entidad coordinadora o rectora ha recibido recursos para la preparación en caso de desastres en la última vigencia fiscal?</i>
Descripción general del indicador
De las actividades propias del proceso de Preparación y Respuesta (PR) la planificación es una de las que más importancia tienen, pues además de ofrecer una guía respecto de un evento futuro probable, es un ejercicio reflexivo que permite alcanzar cierto grado de anticipación y el descubrimiento de debilidades y deficiencias que pueden ser resueltas <i>ex-ante</i> . La planificación se sirve de insumos valiosos: la información generada durante la evaluación de los riesgos, tanto el conocimiento sobre la vulnerabilidad como el de las amenazas; la información histórica de desastres pasados; los resultados de las acciones dirigidas a reducir los riesgos, etc. Por esa razón se considera como un factor de calidad de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en los países, que los distintos sectores de la administración pública ya sea nacional, central o federal –según el país de que se trate– recojan esta responsabilidad de planear en su ámbito. Este indicador tiene interés particular en el sector salud, valorando que al menos en los últimos 5 años, haya producido y sometido a la aprobación formal que corresponda, un Plan Nacional de Emergencia o contingencia (PNE), o bien, un Plan de Continuidad de Operaciones (PCO). En el entendido que un PNE es el marco de acción institucional sobre la GRD, que precisa entre otras cosas sus procedimientos, funciones y responsabilidades; y el Plan de Continuidad de Operaciones (PCO), que es protocolo resultado del análisis de la vulnerabilidad del sector, con el fin de que, en su caso, facilite una recuperación diligente de las funciones, priorizando aquellas consideradas críticas para su continuidad y el cumplimiento de sus objetivos. Adicionalmente, este indicador reconoce la importancia que la entidad coordinadora o rectora del sector salud haya recibido recursos para acciones de preparación en caso de desastres durante el último ejercicio o vigencia fiscal
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<p><i>Respecto de los planes de emergencia o contingencia o continuidad de negocio (o equivalente):</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Consultar a la cabeza del sector salud (o entidad equivalente) respecto a si se ha elaborado y aprobado formalmente en los últimos 5 años un PNE o un PCO (o equivalentes). 2. Consultar con el área rectora de la GRD a ese mismo respecto. 3. Revisar la información disponible en la página web de las instancias consultadas sobre la existencia de dichos planes. 4. Verificar la existencia material de esos planes sectoriales. <p><i>Respecto de la asignación de recursos:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar los recursos asignados, en la última vigencia fiscal, a la entidad rectora del sector salud para actividades de PR. 2. Revisar el presupuesto nacional, los informes presupuestales, informes de ejecución de gastos o documentos relacionados de carácter oficial. 3. Consultar, en su caso, a la entidad rectora del sector salud con el área de presupuesto. 4. Consultar, en su caso, con el área de presupuesto de la autoridad hacendaria, de economía, o de finanzas (o entidad equivalente).
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Para que se cumpla la condición en esta pregunta, el sector salud debe contar con un PNE o un PCO, aprobados formalmente al menos en los últimos 5 años (o que aún se encuentren dentro del periodo de vigencia del plan), y evidencia de al menos un proyecto de PR del sector, que constate la asignación de recursos a la entidad rectora del sector durante la última vigencia o ejercicio fiscal.</p> <p>Con relación al plan, si el mismo fue aprobado hace más de 5 años pero en su momento no fue establecido un periodo de vigencia, no se considerará cumplido el indicador.</p>

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Perú:

El sector cuenta con el Plan Sectorial de Operaciones de Emergencia del Sector Salud 2010-2011, aprobado con Resolución Ministerial N° 247-2010-MINSA, del 6 de abril del 2010. El plan establece actividades de preparación para el sector. Adicionalmente, el sector tiene el "Plan Sectorial de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres en el Sector Salud", aprobado por la Resolución Suprema N°. 009-2004-SA, de 16 de junio 2004, el cual tiene vigencia hasta el 2014. En cuyo Capítulo 7, se establece: "*Estrategia 1: Incorporación de acciones de gestión del riesgo y atención de emergencias y desastres en los planes estratégicos y operativos a nivel sectorial en sus diferentes niveles...*" y "*Estrategia 2: Fortalecimiento de los procesos para prevenir y atender las emergencias y desastres generadas por eventos adversos emergentes y reemergentes...*" Finalmente, la condición se cumple ya que el Ministerio de Salud recibió recursos presupuestales para la preparación en caso de desastre de conformidad con el Anexo 5 de la Ley N° 29951 del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, del 30 de noviembre del 2012, que contiene el pliego 011 Ministerio de Salud, en la página 236, producto 3000169, por el cual se asignan los recursos referidos.

Código: PR 2-7

Pregunta de respuesta cerrada
7. <i>¿Cuenta el sector vivienda con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?</i>
Descripción general del indicador
De las actividades propias del proceso de Preparación y Respuesta (PR) la planificación es una de las que más importancia tienen, pues además de ofrecer una guía respecto de un evento futuro probable, es un ejercicio reflexivo que permite alcanzar cierto grado de anticipación y el descubrimiento de debilidades y deficiencias que pueden ser resueltas <i>ex-ante</i> . La planificación se sirve de insumos valiosos: la información generada durante la evaluación de los riesgos, tanto el conocimiento sobre la vulnerabilidad como el de las amenazas; la información histórica de desastres pasados; los resultados de las acciones dirigidas a reducir los riesgos, etc. Por esa razón se considera como un factor de calidad de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en los países, que los distintos sectores de la administración pública ya sea nacional, central o federal –según el país de que se trate- recojan esta responsabilidad de planear en su ámbito. Este indicador tiene interés particular en el sector vivienda, valorando que al menos en los últimos 5 años, haya producido y sometido a la aprobación formal que corresponda, un Plan Nacional de Emergencia o contingencia (PNE), o bien, un Plan de Continuidad de Operaciones (PCO). En el entendido que un PNE es el marco de acción institucional sobre la GRD, que precisa entre otras cosas sus procedimientos, funciones y responsabilidades; y el Plan de Continuidad de Operaciones (PCO), que es protocolo resultado del análisis de la vulnerabilidad del sector, con el fin de que, en su caso, facilite una recuperación diligente de las funciones, priorizando aquellas consideradas críticas para su continuidad y el cumplimiento de sus objetivos.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Consultar a la cabeza del sector vivienda (o entidad equivalente) respecto a si se ha elaborado y aprobado formalmente en los últimos 5 años un PNE o un PCO (o equivalentes). 2. Consultar con el área rectora de la GRD a ese mismo respecto. 3. Revisar la información disponible en la página web de las instancias consultadas sobre la existencia de dichos planes. 4. Verificar la existencia material de esos planes sectoriales.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Para que se cumpla la condición en esta pregunta, el sector vivienda debe contar con un PNE o un PCO, aprobados formalmente al menos en los últimos 5 años (o que aún se encuentren dentro del periodo de vigencia del plan).</p> <p>Con relación al plan, si el mismo fue aprobado hace más de 5 años pero en su momento no fue establecido un periodo de vigencia, no se considerará cumplido el indicador.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
Perú: El Plan de Operaciones de Emergencia del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por Resolución Ministerial N° 026- 2010 VIVIENDA, del 11 de febrero de 2010.

Pregunta de respuesta cerrada
8. ¿Cuenta el sector educación con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años, y su entidad coordinadora o rectora ha recibido recursos para la preparación en caso de desastres en la última vigencia fiscal?
Descripción general del indicador
De las actividades propias del proceso de Preparación y Respuesta (PR) la planificación es una de las que más importancia tienen, pues además de ofrecer una guía respecto de un evento futuro probable, es un ejercicio reflexivo que permite alcanzar cierto grado de anticipación y el descubrimiento de debilidades y deficiencias que pueden ser resueltas <i>ex-ante</i> . La planificación se sirve de insumos valiosos: la información generada durante la evaluación de los riesgos, tanto el conocimiento sobre la vulnerabilidad como el de las amenazas; la información histórica de desastres pasados; los resultados de las acciones dirigidas a reducir los riesgos, etc. Por esa razón se considera como un factor de calidad de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en los países, que los distintos sectores de la administración pública ya sea nacional, central o federal –según el país de que se trate- recojan esta responsabilidad de planear en su ámbito. Este indicador tiene interés particular en el sector educación, valorando que al menos en los últimos 5 años, haya producido y sometido a la aprobación formal que corresponda, un Plan Nacional de Emergencia o contingencia (PNE), o bien, un Plan de Continuidad de Operaciones (PCO). En el entendido que un PNE es el marco de acción institucional sobre la GRD, que precisa entre otras cosas sus procedimientos, funciones y responsabilidades; y el Plan de Continuidad de Operaciones (PCO), que es protocolo resultado del análisis de la vulnerabilidad del sector, con el fin de que, en su caso, facilite una recuperación diligente de las funciones, priorizando aquellas consideradas críticas para su continuidad y el cumplimiento de sus objetivos. Adicionalmente, este indicador reconoce la importancia que la entidad coordinadora o rectora del sector educación haya recibido recursos para acciones de preparación en caso de desastres durante el último ejercicio o vigencia fiscal
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<p><i>Respecto de los planes de emergencia o contingencia o continuidad de negocio (o equivalente):</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Consultar a la cabeza del sector educación (o entidad equivalente) respecto a si se ha elaborado y aprobado formalmente en los últimos 5 años un PNE o un PCO (o equivalentes). 2. Consultar con el área rectora de la GRD a ese mismo respecto. 3. Revisar la información disponible en la página web de las instancias consultadas sobre la existencia de dichos planes. 4. Verificar la existencia material de esos planes sectoriales. <p><i>Respecto de la asignación de recursos:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar los recursos asignados, en la última vigencia fiscal, a la entidad rectora del sector educación para actividades de PR. 2. Revisar el presupuesto nacional, los informes presupuestales, informes de ejecución de gastos o documentos relacionados de carácter oficial. 3. Consultar, en su caso, a la entidad rectora del sector educación con el área de presupuesto. 4. Consultar, en su caso, con el área de presupuesto de la autoridad hacendaria, de economía, o de finanzas (o entidad equivalente).
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Para que se cumpla la condición en esta pregunta, el sector educación debe contar con un PNE o un PCO, aprobados formalmente al menos en los últimos 5 años (o que aún se encuentren dentro del periodo de vigencia del plan), y evidencia de al menos un proyecto de PR del sector, que constate la asignación de recursos a la entidad rectora del sector durante la última vigencia o ejercicio fiscal.
Con relación al plan, si el mismo fue aprobado hace más de 5 años pero en su momento no fue establecido un periodo de vigencia, no se considerará cumplido el indicador.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
Perú: El sector cuenta con el Plan de Educación Preventiva ante Sismos 2010, aprobado por Resolución

Directoral N° 463-2010-ED, del 2 de junio de 2010, que establece la obligatoriedad de formular a su vez en cada institución educativa el Plan de Gestión del Riesgo para la preparación ante sismos (resultado 1). Adicionalmente, la condición se cumple ya que el Ministerio como entidad rectora ha recibido recursos para la preparación en caso de desastres en la última vigencia fiscal. Ver el Anexo 5 de la Ley N° 29951 del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, del 30 de noviembre de 2012, que asigna en la página 73, recursos para instancias de gestión educativa descentralizada preparadas para la respuesta y rehabilitación del servicio de educación ante ocurrencia de emergencias y desastres - afianzamiento del soporte pedagógico para respuesta a desastres y emergencias.

Código: PR 2-9**Pregunta de respuesta cerrada**

9. *¿Cuenta el sector turismo con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?*

Descripción general del indicador

De las actividades propias del proceso de Preparación y Respuesta (PR) la planificación es una de las que más importancia tienen, pues además de ofrecer una guía respecto de un evento futuro probable, es un ejercicio reflexivo que permite alcanzar cierto grado de anticipación y el descubrimiento de debilidades y deficiencias que pueden ser resueltas *ex-ante*. La planificación se sirve de insumos valiosos: la información generada durante la evaluación de los riesgos, tanto el conocimiento sobre la vulnerabilidad como el de las amenazas; la información histórica de desastres pasados; los resultados de las acciones dirigidas a reducir los riesgos, etc. Por esa razón se considera como un factor de calidad de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en los países, que los distintos sectores de la administración pública ya sea nacional, central o federal –según el país de que se trate– recojan esta responsabilidad de planear en su ámbito. Este indicador tiene interés particular en el sector turismo, valorando que al menos en los últimos 5 años, haya producido y sometido a la aprobación formal que corresponda, un Plan Nacional de Emergencia o contingencia (PNE), o bien, un Plan de Continuidad de Operaciones (PCO). En el entendido que un PNE es el marco de acción institucional sobre la GRD, que precisa entre otras cosas sus procedimientos, funciones y responsabilidades; y el Plan de Continuidad de Operaciones (PCO), que es protocolo resultado del análisis de la vulnerabilidad del sector, con el fin de que, en su caso, facilite una recuperación diligente de las funciones, priorizando aquellas consideradas críticas para su continuidad y el cumplimiento de sus objetivos.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Consultar a la cabeza del sector turismo (o entidad equivalente) respecto a si se ha elaborado y aprobado formalmente en los últimos 5 años un PNE o un PCO (o equivalentes).
2. Consultar con el área rectora de la GRD a ese mismo respecto.
3. Revisar la información disponible en la página web de las instancias consultadas sobre la existencia de dichos planes.
4. Verificar la existencia material de esos planes sectoriales.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Para que se cumpla la condición en esta pregunta, el sector turismo debe contar con un PNE o un PCO, aprobados formalmente al menos en los últimos 5 años (o que aún se encuentren dentro del periodo de vigencia del plan).

Con relación al plan, si el mismo fue aprobado hace más de 5 años pero en su momento no fue establecido un periodo de vigencia, no se considerará cumplido el indicador.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Perú: El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) aprobó para el Plan Sectorial de Operaciones de Emergencia, aprobado por Resolución Ministerial N° 054-2008 MINCETUR-DM, del 31 de marzo del 2008, que establece las actividades de preparación y respuesta que se deben ejecutar en el sector del comercio exterior y del turismo.

Código: PR 2-10**Pregunta de respuesta cerrada**

10. ¿Cuenta el sector transporte (o equivalente) con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años, y su entidad coordinadora o rectora ha recibido recursos para la preparación en caso de desastres en la última vigencia fiscal?

Descripción general del indicador

De las actividades propias del proceso de Preparación y Respuesta (PR) la planificación es una de las que más importancia tienen, pues además de ofrecer una guía respecto de un evento futuro probable, es un ejercicio reflexivo que permite alcanzar cierto grado de anticipación y el descubrimiento de debilidades y deficiencias que pueden ser resueltas *ex-ante*. La planificación se sirve de insumos valiosos: la información generada durante la evaluación de los riesgos, tanto el conocimiento sobre la vulnerabilidad como el de las amenazas; la información histórica de desastres pasados; los resultados de las acciones dirigidas a reducir los riesgos, etc. Por esa razón se considera como un factor de calidad de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en los países, que los distintos sectores de la administración pública ya sea nacional, central o federal –según el país de que se trate– recojan esta responsabilidad de planear en su ámbito. Este indicador tiene interés particular en el sector transporte, valorando que al menos en los últimos 5 años, haya producido y sometido a la aprobación formal que corresponda, un Plan Nacional de Emergencia o contingencia (PNE), o bien, un Plan de Continuidad de Operaciones (PCO). En el entendido que un PNE es el marco de acción institucional sobre la GRD, que precisa entre otras cosas sus procedimientos, funciones y responsabilidades; y el Plan de Continuidad de Operaciones (PCO), que es protocolo resultado del análisis de la vulnerabilidad del sector, con el fin de que, en su caso, facilite una recuperación diligente de las funciones, priorizando aquellas consideradas críticas para su continuidad y el cumplimiento de sus objetivos. Adicionalmente, este indicador reconoce la importancia que la entidad coordinadora o rectora del sector transporte haya recibido recursos para acciones de preparación en caso de desastres durante el último ejercicio o vigencia fiscal.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

Respecto de los planes de emergencia o contingencia o continuidad de negocio (o equivalente):

1. Consultar a la cabeza del sector transporte (o entidad equivalente) respecto a si se ha elaborado y aprobado formalmente en los últimos 5 años un PNE o un PCO (o equivalentes).
2. Consultar con el área rectora de la GRD a ese mismo respecto.
3. Revisar la información disponible en la página web de las instancias consultadas sobre la existencia de dichos planes.
4. Verificar la existencia material de esos planes sectoriales.

Respecto de la asignación de recursos:

1. Identificar los recursos asignados, en la última vigencia fiscal, a la entidad rectora del sector transporte para actividades de PR.
2. Revisar el presupuesto nacional, los informes presupuestales, informes de ejecución de gastos o documentos relacionados de carácter oficial.
3. Consultar, en su caso, a la entidad rectora del sector transporte con el área de presupuesto.
4. Consultar, en su caso, con el área de presupuesto de la autoridad hacendaria, de economía, o de finanzas (o entidad equivalente).

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Para que se cumpla la condición en esta pregunta, el sector agricultura debe contar con un PNE o un PCO, aprobados formalmente al menos en los últimos 5 años (o que aún se encuentren dentro del periodo de vigencia del plan), y evidencia de al menos un proyecto de PR del sector, que constata la asignación de recursos a la entidad rectora del sector durante la última vigencia o ejercicio fiscal.

Con relación al plan, si el mismo fue aprobado hace más de 5 años pero en su momento no fue establecido un

periodo de vigencia, no se considerará cumplido el indicador.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>A falta de ejemplos en la región, se propone una situación hipotética para el cumplimiento de este indicador: En un país el sector transporte cuenta diversos planes de contingencia para varias actividades del sector: transporte terrestre, transporte de materiales peligrosos, etc., que permiten evidenciar que el sector está preparado para enfrentar emergencias en el ámbito de sus competencias. Adicionalmente se cuenta con presupuesto para realizar capacitaciones a los contratistas del sector vial para que puedan desarrollar actividades de respuesta siguiendo los lineamientos establecidos por el sector en sus planes.</p>

Código: PR 2-11

Pregunta de respuesta cerrada
11. <i>¿Cuenta el sector agua y saneamiento con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años, y su entidad coordinadora o rectora ha recibido recursos para la preparación en caso de desastres en la última vigencia fiscal?</i>
Descripción general del indicador
De las actividades propias del proceso de Preparación y Respuesta (PR) la planificación es una de las que más importancia tienen, pues además de ofrecer una guía respecto de un evento futuro probable, es un ejercicio reflexivo que permite alcanzar cierto grado de anticipación y el descubrimiento de debilidades y deficiencias que pueden ser resueltas <i>ex-ante</i> . La planificación se sirve de insumos valiosos: la información generada durante la evaluación de los riesgos, tanto el conocimiento sobre la vulnerabilidad como el de las amenazas; la información histórica de desastres pasados; los resultados de las acciones dirigidas a reducir los riesgos, etc. Por esa razón se considera como un factor de calidad de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en los países, que los distintos sectores de la administración pública ya sea nacional, central o federal –según el país de que se trate– recojan esta responsabilidad de planear en su ámbito. Este indicador tiene interés particular en el sector agua y saneamiento, valorando que al menos en los últimos 5 años, haya producido y sometido a la aprobación formal que corresponda, un Plan Nacional de Emergencia o contingencia (PNE), o bien, un Plan de Continuidad de Operaciones (PCO). En el entendido que un PNE es el marco de acción institucional sobre la GRD, que precisa entre otras cosas sus procedimientos, funciones y responsabilidades; y el Plan de Continuidad de Operaciones (PCO), que es protocolo resultado del análisis de la vulnerabilidad del sector, con el fin de que, en su caso, facilite una recuperación diligente de las funciones, priorizando aquellas consideradas críticas para su continuidad y el cumplimiento de sus objetivos. Adicionalmente, este indicador reconoce la importancia que la entidad coordinadora o rectora del sector agua y saneamiento haya recibido recursos para acciones de preparación en caso de desastres durante el último ejercicio o vigencia fiscal
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<p><i>Respecto de los planes de emergencia o contingencia o continuidad de negocio (o equivalente):</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Consultar a la cabeza del sector agua y saneamiento (o entidad equivalente) respecto a si se ha elaborado y aprobado formalmente en los últimos 5 años un PNE o un PCO (o equivalentes). 2. Consultar con el área rectora de la GRD a ese mismo respecto. 3. Revisar la información disponible en la página web de las instancias consultadas sobre la existencia de dichos planes. 4. Verificar la existencia material de esos planes sectoriales. <p><i>Respecto de la asignación de recursos:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar los recursos asignados, en la última vigencia fiscal, a la entidad rectora del sector agua y saneamiento para actividades de PR. 2. Revisar el presupuesto nacional, los informes presupuestales, informes de ejecución de gastos o documentos relacionados de carácter oficial. 3. Consultar, en su caso, a la entidad rectora del sector agua y saneamiento con el área de presupuesto. 4. Consultar, en su caso, con el área de presupuesto de la autoridad hacendaria, de economía, o de finanzas (o entidad equivalente).

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Para que se cumpla la condición en esta pregunta, el sector agua y saneamiento debe contar con un PNE o un PCO, aprobados formalmente al menos en los últimos 5 años (o que aún se encuentren dentro del periodo de vigencia del plan), y evidencia de al menos un proyecto de PR del sector, que constate la asignación de recursos a la entidad rectora del sector durante la última vigencia o ejercicio fiscal.</p> <p>Con relación al plan, si el mismo fue aprobado hace más de 5 años pero en su momento no fue establecido un periodo de vigencia, no se considerará cumplido el indicador.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>A falta de ejemplos en la región, se propone una situación hipotética para el cumplimiento de este indicador: En un país el sector agua y saneamiento cuenta con un Manual para Operaciones de Emergencia para los organismos a cargo de las cuencas que define competencias y responsabilidades en cuanto a respuesta y continuidad de operaciones, para situaciones de riesgos hidrometereológicos, aprobado en la última vigencia fiscal. Adicionalmente, en la última vigencia se incluyó un rubro en el presupuesto del sector para adquirir camiones cisterna que permitirán entregar agua a población que pudiere verse afectada en caso de desastres.</p>

Pregunta de respuesta cerrada
<p>12. ¿Cuenta el sector energía con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años, y su entidad coordinadora o rectora ha recibido recursos para la preparación en caso de desastres en la última vigencia fiscal?</p>
Descripción general del indicador
<p>De las actividades propias del proceso de Preparación y Respuesta (PR) la planificación es una de las que más importancia tienen, pues además de ofrecer una guía respecto de un evento futuro probable, es un ejercicio reflexivo que permite alcanzar cierto grado de anticipación y el descubrimiento de debilidades y deficiencias que pueden ser resueltas <i>ex-ante</i>. La planificación se sirve de insumos valiosos: la información generada durante la evaluación de los riesgos, tanto el conocimiento sobre la vulnerabilidad como el de las amenazas; la información histórica de desastres pasados; los resultados de las acciones dirigidas a reducir los riesgos, etc. Por esa razón se considera como un factor de calidad de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en los países, que los distintos sectores de la administración pública ya sea nacional, central o federal –según el país de que se trate– recojan esta responsabilidad de planear en su ámbito. Este indicador tiene interés particular en el sector energía, valorando que al menos en los últimos 5 años, haya producido y sometido a la aprobación formal que corresponda, un Plan Nacional de Emergencia o contingencia (PNE), o bien, un Plan de Continuidad de Operaciones (PCO). En el entendido que un PNE es el marco de acción institucional sobre la GRD, que precisa entre otras cosas sus procedimientos, funciones y responsabilidades; y el Plan de Continuidad de Operaciones (PCO), que es protocolo resultado del análisis de la vulnerabilidad del sector, con el fin de que, en su caso, facilite una recuperación diligente de las funciones, priorizando aquellas consideradas críticas para su continuidad y el cumplimiento de sus objetivos. Adicionalmente, este indicador reconoce la importancia que la entidad coordinadora o rectora del sector energía haya recibido recursos para acciones de preparación en caso de desastres durante el último ejercicio o vigencia fiscal</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<p><i>Respecto de los planes de emergencia o contingencia o continuidad de negocio (o equivalente):</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Consultar a la cabeza del sector energía (o entidad equivalente) respecto a si se ha elaborado y aprobado formalmente en los últimos 5 años un PNE o un PCO (o equivalentes). 2. Consultar con el área rectora de la GRD a ese mismo respecto. 3. Revisar la información disponible en la página web de las instancias consultadas sobre la existencia de dichos planes. 4. Verificar la existencia material de esos planes sectoriales. <p><i>Respecto de la asignación de recursos:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar los recursos asignados, en la última vigencia fiscal, a la entidad rectora del sector energía para actividades de PR. 2. Revisar el presupuesto nacional, los informes presupuestales, informes de ejecución de gastos o documentos relacionados de carácter oficial. 3. Consultar, en su caso, a la entidad rectora del sector energía con el área de presupuesto. 4. Consultar, en su caso, con el área de presupuesto de la autoridad hacendaria, de economía, o de finanzas (o entidad equivalente).
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Para que se cumpla la condición en esta pregunta, el sector energía debe contar con un PNE o un PCO, aprobados formalmente al menos en los últimos 5 años (o que aún se encuentren dentro del periodo de vigencia del plan), y evidencia de al menos un proyecto de PR del sector, que constate la asignación de recursos a la entidad rectora del sector durante la última vigencia o ejercicio fiscal.</p> <p>Con relación al plan, si el mismo fue aprobado hace más de 5 años pero en su momento no fue establecido un</p>

periodo de vigencia, no se considerará cumplido el indicador.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>A falta de ejemplos en la región, se propone una situación hipotética para el cumplimiento de este indicador: En un país de la región, el sector energía cuenta con un Manual para Operaciones de Emergencia para los entes a cargo de la distribución de energía que asigna competencias y responsabilidades en cuanto a respuesta y continuidad de operaciones, para situaciones de huracanes, aprobado en los últimos 5 años. Adicionalmente, en la última vigencia se incluyó un rubro en el presupuesto del sector para realizar simulacros respecto de la operatividad del Manual.</p>

Pregunta de respuesta cerrada
13. ¿La empresa prestadora del servicio público de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país, cuenta con un Plan de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones en caso de desastre?
Descripción general del indicador
De las actividades propias del proceso de Preparación y Respuesta (PR) la planificación es una de las que más importancia tienen, pues además de ofrecer una guía respecto de un evento futuro probable, es un ejercicio reflexivo que permite alcanzar cierto grado de anticipación y el descubrimiento de debilidades y deficiencias que pueden ser resueltas ex-ante. La planificación se sirve de insumos valiosos: la información generada durante la evaluación de los riesgos, tanto el conocimiento sobre la vulnerabilidad como el de las amenazas; la información histórica de desastres pasados; los resultados de las acciones dirigidas a reducir los riesgos, etc. Por esa razón se considera como un factor de calidad de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en los países, que las empresas que prestan servicios públicos recojan esta responsabilidad de planear en su ámbito. Este indicador tiene interés particular en la empresa prestadora del servicio público de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país, valorando que haya producido un Plan de Emergencia o contingencia (PE), o bien, un Plan de Continuidad de Operaciones (PCO). En el entendido que un PNE es el marco de acción de esa empresa sobre la GRD, que precisa entre otras cosas sus procedimientos, funciones y responsabilidades; y el Plan de Continuidad de Operaciones (PCO), que es protocolo resultado del análisis de la vulnerabilidad de esa empresa, con el fin de que, en su caso, facilite una recuperación diligente de sus funciones, priorizando aquellas consideradas críticas para la continuidad de sus servicios.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la empresa prestadora del servicio público de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país. 2. Verificar si esa empresa cuenta con un PE o PCO en caso de desastre. 3. Revisar, en su caso, la información disponible en la página web de la empresa. 4. Buscar los informes de gestión de la empresa. 5. Consultar, en su caso, a la empresa sobre este tema. 6. Establecer la existencia de los planes mediante consulta con el ente regulador del sector o con la entidad a cargo del proceso de adjudicación de concesiones.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Para que se cumpla la condición en esta pregunta, la empresa prestadora del servicio público de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país, debe contar con un PM o un PCO.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: El Servicio de Agua Potable y Alcantarrillado de Lima (SEDAPAL) tiene un Plan de Emergencia para situaciones de desastres formulado el año 2002 que incluye medidas de prevención, de preparación, de respuesta y rehabilitación del servicio. Abarca todo el sistema de abastecimiento.</p> <p>Jamaica: La Comisión Nacional del Agua (NWC, por sus siglas en inglés) ha desarrollado un Plan de Respuesta ante Huracanes formulado en 2010 que establece los procedimientos de preparación y respuesta ante contingencias por huracanes. Dicho plan establece los roles y responsabilidades de la compañía.</p> <p>Colombia: La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. (EAAB), es una empresa de carácter público alineada al Plan de Desarrollo "Bogotá Humana", tal y como lo declara en la introducción del Informe de Gestión 2012. De hecho la construcción de su propio Plan General Estratégico 2012-2016, se realizó teniendo en cuenta lo definido en el Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Humana". Ese Plan consta de tres ejes, figurando el de "Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua", que presenta el Programa de Gestión Integral de Riesgos, que a su vez comprende el proyecto prioritario "Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambio climático a través de acciones integrales". Ahora, por parte del Plan General Estratégico de EAAB, se alinea con la meta denominada "21 sitios críticos de quebradas en ladera y zonas aluviales intervenidos integralmente para prevenir crecientes súbitas o avalanchas".</p>

Pregunta de respuesta cerrada

14. ¿La empresa de generación, transmisión y distribución de energía con la mayor facturación en el país, cuenta con un Plan de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones en caso de desastre? (NOTA: en caso de no ser la misma empresa, deben cumplirlo todas)

Descripción general del indicador

De las actividades propias del proceso de Preparación y Respuesta (PR) la planificación es una de las que más importancia tienen, pues además de ofrecer una guía respecto de un evento futuro probable, es un ejercicio reflexivo que permite alcanzar cierto grado de anticipación y el descubrimiento de debilidades y deficiencias que pueden ser resueltas ex-ante. La planificación se sirve de insumos valiosos: la información generada durante la evaluación de los riesgos, tanto el conocimiento sobre la vulnerabilidad como el de las amenazas; la información histórica de desastres pasados; los resultados de las acciones dirigidas a reducir los riesgos, etc. Por esa razón se considera como un factor de calidad de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en los países, que las empresas que prestan servicios públicos recojan esta responsabilidad de planear en su ámbito. Este indicador tiene interés particular en la empresa de generación, transmisión y distribución de energía con la mayor facturación en el país, valorando que haya producido un Plan de Emergencia o contingencia (PE), o bien, un Plan de Continuidad de Operaciones (PCO). En el entendido que un PNE es el marco de acción de esa empresa sobre la GRD, que precisa entre otras cosas sus procedimientos, funciones y responsabilidades; y el Plan de Continuidad de Operaciones (PCO), que es protocolo resultado del análisis de la vulnerabilidad de esa empresa, con el fin de que, en su caso, facilite una recuperación diligente de sus funciones, priorizando aquellas consideradas críticas para la continuidad de sus servicios.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Identificar la empresa de generación, transmisión y distribución de energía con la mayor facturación en el país.
2. Verificar si esa empresa cuenta con un PE o PCO en caso de desastre.
3. Revisar, en su caso, la información disponible en la página web de la empresa.
4. Buscar los informes de gestión de la empresa.
5. Consultar, en su caso, a la empresa sobre este tema.
6. Establecer la existencia de los planes mediante consulta con el ente regulador del sector o con la entidad a cargo del proceso de adjudicación de concesiones.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Para que se cumpla la condición en esta pregunta, la empresa de generación, transmisión y distribución de energía con la mayor facturación en el país, debe contar con un PM o un PCO.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

México: La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con planes de emergencia tanto para la infraestructura de generación eléctrica, como de transmisión y distribución. Existe un Plan Nacional para la Atención de Emergencias en Líneas de Transmisión, que es parte del Sistema de Respuesta Temprana ante el Impacto de Huracanes (SIRETIH). El SIRETIH es apoyado por los Grupos de Ayuda Mutua (GAM), los cuales buscan integrar las capacidades de los gobiernos locales y de las unidades de protección civil, del sector privado y de la CFE. También se cuenta con el Plan de Respuesta a Emergencias para la Distribución de Electricidad. Finalmente, existen planes de emergencia para sus plantas termoeléctricas, evidenciado a través del ejemplo del Procedimiento de Emergencia ante huracanes del Complejo Termoeléctrico Presidente Adolfo López Mateos". Además, la CFE ha creado planes especiales basados en escenarios; en primer lugar, para la infraestructura crucial (como hospitales y aeropuertos), y, en segundo lugar, para el área metropolitana de la Ciudad de México, debido a su concentración demográfica y al efecto potencialmente desestabilizador que pudiera tener un apagón.

Guatemala: Se pudo constatar que la Empresa Eléctrica de Guatemala S.A., EEGSA, la empresa de transmisión y distribución que presta servicios al 60% de los usuarios del país, cuenta con un Plan de Emergencias que se aplica en alertas, emergencias y eventos sociales de gran envergadura. Adicionalmente, el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) dispone de planes de preparación ante emergencias para las

principales plantas hidroeléctricas del país, que contribuyen con el mayor porcentaje a la matriz energética de Guatemala. Se incluye el Plan de Preparación ante Emergencia de la Planta Hidroeléctrica de Chixoy, ubicada entre los Departamentos de Quiché, Baja y Alta Verapaz, que aporta aproximadamente el 30% de toda la matriz eléctrica del país y constituye la mayor fuente de generación eléctrica del país.

Pregunta de respuesta cerrada

15. ¿La empresa prestadora del servicio público de telecomunicaciones con la mayor cartera de usuarios en el país, cuenta con un Plan de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones en caso de desastre?

Descripción general del indicador

De las actividades propias del proceso de Preparación y Respuesta (PR) la planificación es una de las que más importancia tienen, pues además de ofrecer una guía respecto de un evento futuro probable, es un ejercicio reflexivo que permite alcanzar cierto grado de anticipación y el descubrimiento de debilidades y deficiencias que pueden ser resueltas ex-ante. La planificación se sirve de insumos valiosos: la información generada durante la evaluación de los riesgos, tanto el conocimiento sobre la vulnerabilidad como el de las amenazas; la información histórica de desastres pasados; los resultados de las acciones dirigidas a reducir los riesgos, etc. Por esa razón se considera como un factor de calidad de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en los países, que las empresas que prestan servicios públicos recojan esta responsabilidad de planear en su ámbito. Este indicador tiene interés particular en la empresa prestadora del servicio público de telecomunicaciones con la mayor cartera de usuarios en el país, valorando que haya producido un Plan de Emergencia o contingencia (PE), o bien, un Plan de Continuidad de Operaciones (PCO). En el entendido que un PNE es el marco de acción de esa empresa sobre la GRD, que precisa entre otras cosas sus procedimientos, funciones y responsabilidades; y el Plan de Continuidad de Operaciones (PCO), que es protocolo resultado del análisis de la vulnerabilidad de esa empresa, con el fin de que, en su caso, facilite una recuperación diligente de sus funciones, priorizando aquellas consideradas críticas para la continuidad de sus servicios.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Identificar la empresa prestadora del servicio público de telecomunicaciones con la mayor cartera de usuarios en el país.
2. Verificar si esa empresa cuenta con un PE o PCO en caso de desastre.
3. Revisar, en su caso, la información disponible en la página web de la empresa.
4. Buscar los informes de gestión de la empresa.
5. Consultar, en su caso, a la empresa sobre este tema.
6. Establecer la existencia de los planes mediante consulta con el ente regulador del sector o con la entidad a cargo del proceso de adjudicación de concesiones.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Para que se cumpla la condición en esta pregunta, la empresa prestadora del servicio público de telecomunicaciones con la mayor cartera de usuarios en el país, **debe contar con un PM o un PCO.**

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Chile: ENTEL, que es la empresa de mayor facturación, en su Reporte de Sustentabilidad Bienal 2011-2012, contiene bajo la sección "Continuidad del Servicio en Situaciones de Emergencia", entre otras cosas que: "... se han establecido 188 puntos críticos en los que se garantiza la transmisión de señal durante un mínimo 48 horas, aunque exista corte en el abastecimiento eléctrico".

Código: PR 3-1

Pregunta de respuesta cerrada
<i>1. ¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta establece mecanismos de participación de la sociedad civil en todas las unidades de gestión territorial?</i>
Descripción general del indicador
La participación comunitaria en los procesos de Preparación y Respuesta (PR) es importante para asegurar un máximo posible de capacidades autónomas de parte de los territorios. La Norma expresa deberá tener un articulado específico sobre la participación comunitaria y organizaciones sociales o no gubernamentales.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Utilizar la normativa identificada en el indicador PR 1A-1. 2. Verificar si dicha normativa específica establece mecanismos de participación comunitaria, organizaciones sociales o no gubernamentales en los procesos de PR. 3. Si la norma expresa tiene más de tres años y no incluye estos procesos, verificar la existencia de normas posteriores, tipo decreto o planes nacionales de PR, que identifiquen o establezcan estos procesos. Tomar en consideración que un plan nacional es un verificable válido solamente si ha sido aprobado por un decreto u otro acto normativo que lo haga vinculante.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Para que se cumpla la condición en esta pregunta, la normativa debe establecer mecanismos de participación comunitaria, organizaciones sociales o no gubernamentales en los procesos de PR.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Colombia: En Colombia existen mecanismos habilitados para la participación social y comunitaria en asuntos gubernamentales (Ley 472 de 1998 sobre acciones populares, Ley 850 de 2003 sobre Veedurías Ciudadanas, Ley 393 de 1997 sobre Acciones de Cumplimiento de Actos Administrativos, Ley 134 de 1994 sobre iniciativa popular legislativa y normativa, referendo, consulta popular, revocatoria del mandato, plebiscito y cabildo abierto). Todos estos mecanismos son aplicables a la gestión del riesgo de desastres, pero no hacen una referencia directa a la GRD en su articulado. La condición se cumple parcialmente a través del Decreto 267 de 2000, por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones, que en el numeral 8 del artículo 55, se establece que son funciones de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana <i>"Promover un especial seguimiento, con el apoyo de las demás contralorías delegadas, a los recursos estatales destinados a la participación ciudadana, a las emergencias y a los desastres"</i>. Posteriormente, con la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, se cumple plenamente la condición pues ésta norma establece en el Artículo 3, numeral 5, el Principio participativo, que se define como <i>"... Es deber de las autoridades y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, reconocer, facilitar y promover la organización y participación de comunidades étnicas, asociaciones cívicas, comunitarias, vecinales, benéficas, de voluntariado y de utilidad común. Es deber de todas las personas hacer parte del proceso de gestión del riesgo en su comunidad"</i>.</p> <p>Perú: El Reglamento de la Ley del SINAGERD, aprobado mediante Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, del 25 de mayo de 2011, establece en el Artículo 19, Las Plataformas de Defensa Civil, definidas como espacios permanentes de participación, coordinación y convergencia de esfuerzos, y estipula que: <i>"19.4 Es obligatoria la participación de las organizaciones sociales a través de sus representantes"</i> y <i>"19.5 Las organizaciones humanitarias vinculadas a la gestión del riesgo de desastres, apoyan y participan en las Plataformas de Defensa Civil"</i>.</p> <p>República Dominicana: La Ley No. 147-02, Sobre Gestión de Riesgos, del 22 de Septiembre del 2002, ofrece diversos artículos en el que privilegia la participación del sector social o privado: <i>"Artículo 5. ... Este Sistema Nacional de carácter abierto, dinámico y funcional estará integrado por los siguientes componentes... 2. Las organizaciones comunitarias y no gubernamentales cuyas acciones en</i></p>

materia de riesgos y desastres están relacionadas con la prevención, mitigación, atención y recuperación de la población... Artículo 9. Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres... 26. Tres representantes de la Sociedad Civil, designados por el Presidente de la República de las Asociaciones Empresariales, Profesionales, Laborales o Comunitarias representativas... Artículo 14. Comités Regionales, Provinciales y Municipales de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres... Párrafo 1. Estos Comités regionales, provinciales y municipales estarán integrados por las más altas autoridades provinciales y municipales....Asistirán además dos representantes de la Sociedad Civil organizada escogidos de las asociaciones gremiales, profesionales o comunitarias...".

Código: PR 3-2

Pregunta de respuesta cerrada
2. ¿El ente nacional de control ha realizado al menos una evaluación sobre preparativos para desastre en los últimos 5 años?
Descripción general del indicador
<p>Al igual que los indicadores MG 3-3, IR 3-5, o RR 3-2, interesa determinar si algún órgano de control o fiscalización, auditoría superior, contraloría, etc. (o quien haga sus veces en el país) ha realizado alguna verificación o evaluación específica sobre la Preparación y Respuesta (PR) al menos una vez en los últimos 5 años. No confundir esta evaluación con la condición que se pretende medir con el indicador PR 3-3, relativa al desempeño del gobierno en la respuesta tras un desastre.</p> <p>La evaluación a la que hace referencia este indicador PR 3-2 podría ser la misma que se presente como condición positiva en los indicadores MG 3-3, IR 3-5 o RR 3-2, siempre y cuando uno de los contenidos de la misma sea el tema específico los preparativos ante desastres (no sobre respuesta ante un desastre específico o ante un conjunto de desastres).</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la entidad específica encargada de realizar este tipo de evaluaciones, ya sea un órgano de control o fiscalización, auditoría superior, contraloría o entidad similar. 2. Indagar sobre la realización de al menos una verificación o evaluación del cumplimiento de la normativa de preparativos para desastre en los últimos 5 años en el país. 3. Entre los posibles verificables están los reportes del ente nacional de control sobre la gestión de desastres luego de una situación catastrófica. 4. Consultar directamente al ente encargado del proceso de evaluación, o a la entidad responsable del proceso de preparativos, ya que resulta difícil encontrar este tipo de evaluaciones por internet.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Para que se cumpla la condición en esta pregunta debe existir al menos un reporte de evaluación sobre el cumplimiento de la normativa de los preparativos para desastre en los últimos 5 años llevado a cabo por el ente nacional de control.</p> <p>Ojo: no confundir con evaluación de la respuesta a un desastre en particular (que es lo que se pregunta en el indicador PR 3-3). El indicador PR 3-2 se refiere específicamente a la evaluación del cumplimiento de la normativa de los preparativos para desastre.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Colombia: El Decreto 267 de 2000, por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones, disponiendo para ello un Sistema Nacional de Control descentralizado. De manera que existen Delegaciones de la Contraloría en cada Departamento. En entrevista sostenida con la Contraloría General de la República el día 6 de septiembre de 2013, se informó que en varios departamentos se han realizado evaluaciones sobre el cumplimiento de la Ley 1523 de 2012, presentándose un caso en el que la Contraloría General de Santander expidió la Función de Advertencia 004 el día 13 de marzo de 2013 al Gobernador del Departamento y a todos los Alcaldes Municipal, y bajo el rubro de Asunto siguiente: “<i>Incentivar y tener activos los Planes de Contingencia y Planes de Emergencia con el fin de prevenir y atender los desastres naturales provocados por la ola invernal como deslizamientos, inundaciones entre otros e igualmente prevenir y controlar los incendios forestales</i>”, exhortándoles a que: “<i>Conformen y organicen el Consejo de gestión del riesgo y los comités... Crear, conformar y organizar el fondo de gestión del riesgo de desastres- Este fondo deben constituirlo como una cuenta especial con autonomía técnica y financiera, con el propósito de: invertir, destinar, y ejecutar recursos en la adopción de medidas de conocimiento, reducción del riesgo de desastre, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción</i>”. En otros departamentos, se han realizado este tipo de acciones durante el primer semestre de 2013, lo que ha generado 10 Funciones de Advertencia relacionadas con la gestión del riesgo.</p>

México: La Auditoría de Desempeño 09-0-04100-07-0141, Secretaría de Gobernación, Protección Civil, incluida en el numeral II.4.1.1.3 del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009 tuvo como objetivo: *“Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados por la Secretaría de Gobernación, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de protección civil para prever y prevenir daños causados por fenómenos naturales y constatar la competencia profesional de los servidores públicos responsables de estas acciones...”*. En los contenidos del informe se verifica que la auditoría incluyó la evaluación de las actividades pertenecientes al ámbito de preparativos para desastres.

Costa Rica: Informe No. DFOE-PGAA-IF-15-2009. Informe sobre la Gestión de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, en materia de prevención. El informe hace un análisis exhaustivo de los mandatos de la CNE en todos los procesos, incluyendo preparativos.

Código: PR 3-3

Pregunta de respuesta cerrada
3. <i>¿El ente nacional de control ha realizado al menos una evaluación ex post sobre el desempeño del gobierno en la respuesta en alguna de las últimas 5 situaciones de desastre declaradas por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional?</i>
Descripción general del indicador
En múltiples casos este tipo de mecanismos ha permitido mejorar los procesos y estrategias nacionales de respuesta (el desempeño del gobierno se refiere al desempeño de cualquier institución pública involucrada en el manejo del desastre).
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la entidad específica encargada de realizar este tipo de evaluaciones, ya sea un órgano de control o fiscalización, auditoría superior, contraloría o entidad similar. 2. Indagar sobre la realización de al menos una verificación o evaluación sobre la calidad de la respuesta en alguna de las últimas 5 situaciones declaradas como desastre. 3. Entre los posibles verificables están los reportes del ente nacional de control sobre la gestión de desastres luego de una situación catastrófica. 4. Consultar directamente al ente encargado del proceso de evaluación, o a la entidad responsable del proceso de preparativos, ya que resulta difícil encontrar este tipo de evaluaciones por internet.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Para que se cumpla la condición en esta pregunta debe existir al menos una evaluación ex post sobre el desempeño del gobierno en la respuesta en alguna de las últimas 5 situaciones de desastre declaradas por el nivel nacional.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Chile: Informe Final Oficina Nacional de Emergencia, Informe N°: 150/10 (15 Diciembre 2010) - Contraloría General de la República, sobre la respuesta al terremoto y tsunami del 27 Febrero 2010, considera entre otras cosas la "<i>....se efectuaron validaciones sobre los procesos de recepción, control y distribución de los elementos de emergencias a los damnificados, en las Oficinas Regionales de Valparaíso, Rancagua, Talca, Bio Bio y de La Araucanía, para lo cual se requirió fiscalizar dicho proceso en algunos municipios de las respectivas regiones...</i>".</p> <p>Costa Rica: Informe N° DFOE-PGAA-IF-17-2010 Informe Acerca de Limitaciones que Presenta la Gestión de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) en la Coordinación, Supervisión y Control de la Atención de las Emergencias en las Fases de Rehabilitación y Reconstrucción del 15 de julio de 2010 (PR-3-3a). Determina en su página 4 que el alcance del informe que el estudio realizado abarcó las actividades de coordinación, supervisión y control desarrolladas por la CNE en el proceso de atención de los Decretos de Emergencia vigentes, conforme a la normativa que rige sobre esta materia.</p>

Código: PR 3-4

Pregunta de respuesta cerrada
<i>4. ¿La entidad nacional encargada de coordinar la preparación y la respuesta ha realizado al menos una evaluación sobre la calidad en sus procesos en los últimos 3 años?</i>
Descripción general del indicador
La realización de este tipo de evaluaciones es considerada un elemento que aproxima a la implementación concreta de lo establecido en las normas. Este ejercicio de control interno no incluye aquellos relacionados con los procesos administrativos en general, sino con los procesos sustanciales de la preparación y la respuesta.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none">1. Investigar la estructura del Sistema Nacional de GRD, así como la estructura del sistema de control y evaluación del país.2. Indagar sobre la realización de al menos una evaluación de la calidad de los procesos de preparación y la respuesta en los últimos 3 años en el país por parte de la entidad nacional coordinadora.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Para que se cumpla la condición en esta pregunta debe existir al menos un ejercicio de control interno sobre la calidad en los procesos de preparación y respuesta en los últimos 3 años por parte del ente nacional encargado.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>México: La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de la Gobernación produjo y publicó en línea en la Prevention Web, el Informe Nacional de Avances en la Implementación del Marco de Acción de Hyogo 2011-2013, documento en el que se evalúa el avance a través del mecanismo HFA Monitor del avance en la Prioridad 5, que se enfoca en preparativos y respuesta.</p> <p>Chile: Informe Nacional del Progreso en la Implementación del Marco de Acción de Hyogo (2009-2011).</p>

Código: PR 3-5

Pregunta de respuesta cerrada
5. <i>¿Las entidades nacionales encargadas de la preparación y la respuesta, han adoptado estándares de calidad en la asistencia humanitaria al menos en relación con agua, saneamiento, nutrición y albergue temporal?</i>
Descripción general del indicador
Un criterio que aproxima al mejoramiento de la calidad de los procesos de la preparación de respuesta es el reconocimiento formal de principios tales como la Carta Humanitaria y las Normas Mínimas de Respuesta Humanitaria en casos de desastre (Proyecto Esfera), o estándares mínimos equivalentes, con el fin de establecer normas básicas de ayuda humanitaria post-desastre.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none">1. Realizar entrevistas con las personas encargadas de los procesos de asistencia humanitaria.2. Identificar si existen reportes de parte de organismos internacionales que aborden el tema en el país.3. Identificar si se ha emitido algún tipo de resolución o acuerdo adoptando las normas mínimas.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Para que se cumpla la condición en esta pregunta las entidades nacionales encargadas de la preparación y la respuesta, deben haber adoptado estándares de calidad en la asistencia humanitaria al menos en relación con agua, saneamiento, nutrición y albergue temporal
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
Perú: Plan Logístico INDECI AF-2013 (PR 3-6a), aprobado por Resolución Jefatural 006-2013 del 16 de enero 2013, para la ayuda humanitaria ante emergencias o desastres. Numeral. 3: Concepto del apoyo logístico. C. Establece la adquisición de alimentos y la atención "tomando en cuenta las guías y manuales internacionales como la OPS, PMA y ONU". ..

Pregunta de respuesta cerrada
6. <i>¿En al menos una de las últimas 5 situaciones de desastre declaradas por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional, se ha activado algún mecanismo de participación comunitaria para la respuesta?</i>
Descripción general del indicador
En algunas normativas se establece el principio de participación, incluso se llega a la identificación de mecanismos específicos de participación de la sociedad civil; sin embargo la aplicación concreta de estos principios no es siempre evidente. Identificar la existencia real de estos mecanismos en la práctica es una aproximación al cumplimiento de lo establecido.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar si la normativa existente incluye la creación de mecanismos de participación y consulta. 2. Si estos mecanismos existen en la ley debe verificarse que están integrados y que incluyen instancias comunitarias, de sociedad civil y sector privado. 3. Indagar si procesos de fomento de la participación, tipo mesas de concertación, diálogos nacionales o mesas de consulta, no creados en la norma expresa, han sido validados por las entidades rectoras de la GRD como mecanismos de consulta (los procesos de elaboración del reporte del MAH pueden ser una fuente de información). 4. Indagar si alguna de las últimas cinco situaciones de desastre declarado fue activado alguno de estos mecanismos de participación.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Para que se cumpla la condición en esta pregunta debe existir al menos un mecanismo de participación comunitaria y de organizaciones sociales o no gubernamentales en la respuesta en alguna de las últimas 5 situaciones de desastre declaradas por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Colombia: En el Decreto Número 267 de 2000, por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones, se establece en el numeral 8, del artículo 55, las funciones de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, en particular la de “Promover un especial seguimiento, con el apoyo de las demás contralorías delegadas, a los recursos estatales destinados a la participación ciudadana, a las emergencias y a los desastres”. En cumplimiento de este mandato, y en el contexto del desastre nacional declarado a principios de 2011 por la llamada "ola invernal" (Fenómeno La Niña), la CGR de Colombia ha activado como mecanismo de participación un "programa para la vigilancia especial de los recursos para la prevención y atención de desastres". La participación comunitaria se ha previsto de dos maneras: (i) a través del sitio web donde se publica en "tiempo real" todo lo relacionado con el gasto y la gestión del gobierno (ver el sitio de la CGR para la participación ciudadana: http://186.116.129.19/web/guest/emergencia-invernal); Adicionalmente, se cuenta con (ii) las audiencias ciudadanas; según el último informe especial de la CGR sobre la gestión del gobierno en la "ola invernal"; se han realizado 35 audiencias, 18 departamentales y 17 nacionales con una asistencia de más de 2.100 personas.</p> <p>Panamá: Informe sobre el Sistema de Preparativos y Respuesta Comunitario activado en las inundaciones del 2010 en la cuenca del Río Chucunaque en la inundaciones de 2010 que afectaron gran parte del territorio nacional y llevaron a la declaración de emergencia nacional, se activó el sistema comunitario de preparativos y respuesta comunitario en la cuenca del río Chucunque, en la Provincia de Darién.</p> <p>Costa Rica: El Decreto Ejecutivo N° 34993-MP, del 12 de enero de 2009, muestra el Plan General de la Emergencia por sismo 6.2 Richter, Terremoto de Cinchona, que refiere en su Punto 5 - Acciones para la atención de la emergencia "Sección 5.1. Las labores de primer impacto o fase de respuesta estuvieron bajo la conducción de la CNE y la labor desplegada por las instituciones adscritas al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y los comités de emergencia. Sin embargo, hay que destacar la participación de las municipalidades con su propia estructura funcional y la participación voluntaria de la empresa privada y de personas."</p>

Código: RC 1A-1

Pregunta de respuesta cerrada
<i>1. ¿Existe normatividad sobre recuperación post-desastre que define la responsabilidad del estado frente a este proceso?</i>
Descripción general del indicador
La Recuperación Post-desastre (RC), se refiere al proceso de restablecimiento de condiciones aceptables y sostenibles de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción de la infraestructura, bienes y servicios destruidos, interrumpidos o deteriorados en el área afectada, y la reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad bajo condiciones de menor riesgo que lo que existía antes del desastre. La RC es un proceso de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), debido a que en la realización de sus actividades se busca no recrear las condiciones de riesgo pre-existentes. Este indicador busca en el marco legal del país, identificar la definición de la responsabilidad del estado para atender la RC.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad que existe sobre GRD. 2. Determinar si dentro de esta normatividad se ha integrado el proceso de RC (puede ser como actividad o ámbito de acción). 3. Determinar si la normatividad establece un marco de responsabilidades del estado frente al proceso de la RC.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Debería verificarse una normatividad que regule el accionar del Estado frente a los procesos de RC.</p> <p>Si en un determinado país existe normatividad solamente para la fase de rehabilitación (es decir, el restablecimiento de los servicios vitales indispensables interrumpidos o deteriorados por el desastre), pero no para las otras fases del proceso (reconstrucción de la infraestructura, bienes y servicios destruidos y reactivación o impulso del desarrollo económico y social) entonces la condición no se cumple.</p> <p>NOTA: aquí se pregunta por normatividad permanente frente a este proceso, no aplican normas <i>ad hoc</i> que se hayan generado para realizar una reconstrucción tras un desastre en particular y que se prevé que no continuarán luego de haber sido ejecutada la recuperación (por ejemplo cuando se crean fondos o programas especiales de reconstrucción temporales).</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: La Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), del 8 de febrero de 2011, al enlistar los Lineamientos de la Política Nacional de Gestión del Riesgos de Desastres, precisa en el marcado con la letra "i", que las <i>"entidades públicas, de todos los niveles de gobierno, evalúan su respectiva capacidad financiera y presupuestaria para la atención de desastres y la fase de reconstrucción posterior, en el marco de las disposiciones legales vigentes"</i>. Adicionalmente, el Reglamento de la Ley del SINAGERD, aprobado mediante Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, de fecha 25 de mayo de 2011, establece las responsabilidades del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) en materia de reconstrucción (Artículos 5 y 6).</p> <p>Costa Rica: La Ley N° 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, del 27 de octubre de 2005, establece la política de gestión del riesgo, la que <i>"... constituye un eje transversal de la labor del Estado Costarricense, articula los instrumentos, los programas y los recursos públicos en acciones ordinarias y extraordinarias, institucionales y sectoriales, orientadas a evitar la ocurrencia de los desastres y la atención de emergencias en todas sus fases"</i> en su Artículo 5. Asimismo, establece en el Artículo 30 las Fases para la atención de una emergencia: <i>"a) Fase de respuesta: ... b) Fase de rehabilitación: ... c) Fase de reconstrucción: Fase destinada a reponer el funcionamiento normal de los servicios públicos afectados; incluye la reconstrucción y reposición de obras de infraestructura pública y de interés social dañadas, así como la implementación de las medidas de regulación del uso de la tierra orientadas a evitar daños"</i></p>

posteriores. Para concluir la fase de reconstrucción, la Comisión contará con un plazo máximo de cinco años."

República Dominicana: La Ley No. 147-02, Sobre Gestión de Riesgos, del 22 de Septiembre del 2002, considera los esquemas de coordinación para la recuperación de la siguiente manera: "*Artículo 24. Plan de Acción Específico para la Atención y Recuperación Post-desastre. Declarada una situación de desastre y activado el Plan Nacional de Emergencias, la Comisión Nacional de Emergencia procederá a elaborar un plan de acción específico para el retorno a la normalidad, la recuperación y la reconstrucción de las áreas afectadas, que será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en el decreto de declaratoria, y sus modificaciones*".

Guatemala: El Reglamento de la Ley N° 109-96, Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado (CONRED), adoptado por Acuerdo Gubernativo N° 49-2012, del 14 de marzo del 2012, en el Capítulo VIII, Recuperación y Reconstrucción, señala lo siguiente: "*Artículo 106... Durante las etapas de recuperación y reconstrucción, todas las instancias que forman la CONRED velarán porque se cumplan con todos los manuales, códigos y normas aplicables con el objetivo de incluir medidas de reducción de riesgos a desastres, prevención y mitigación*", y "*Artículo 107... La CONRED elaborará un Protocolo de Recuperación Post-Desastre, el cual se conformará de actividades y proyectos que serán validados por funcionarios de la Secretaría Ejecutiva, previo a la búsqueda, ubicación y disponibilidad de los fondos necesarios para su implementación*".

Código: RC 1A-2

Pregunta de respuesta cerrada
2. ¿Existe normatividad que establezca que la recuperación de medios de vida es un propósito de la recuperación post-desastre?
Descripción general del indicador
<p>Este indicador es un atributo de calidad sobre la normatividad descrita en el indicador anterior (RC 1A-1). Intenta verificar si en el país se ha dado importancia y relevancia de forma explícita a la recuperación de medios de vida (entiéndase formas de producción y de subsistencia de las comunidades afectadas).</p> <p>El espíritu de este indicador radica en el reconocimiento de que la Recuperación Post-desastre (RC), debe ir más allá que la simple restitución de las viviendas o infraestructura afectada, es decir, que sean considerados además los procesos políticos, sociales y económicos dentro de la fase de RC.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad que existe sobre RC. 2. Identificar los propósitos, objetivos, metas (o equivalente) de la normatividad sobre RC. 3. Determinar si efectivamente se considera la recuperación de medios de vida como uno de los propósitos, objetivos, metas (o equivalente) de la normatividad sobre RC.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Los objetivos, propósitos o metas (incluso fundamentos) de la normatividad sobre RC deberán considerar la recuperación de los medios de vida (recuperación económica y social) y no solamente la restitución física de las viviendas e infraestructura afectada.</p> <p>NOTA: aquí se pregunta por normatividad permanente frente a este proceso, no aplican normas <i>ad hoc</i> que se hayan generado para realizar una reconstrucción tras un desastre en particular y que se prevé que no continuarán luego de haber sido ejecutada la recuperación (por ejemplo cuando se crean fondos o programas especiales de reconstrucción temporales).</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: La Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), del 8 de febrero de 2011, establece en el numeral 6.2, letra d, que el proceso de reconstrucción se considera como las <i>"Acciones que se realizan para establecer condiciones sostenibles de desarrollo en las áreas afectadas, reduciendo el riesgo anterior al desastre y asegurando la recuperación física, económica y social de las comunidades afectadas"</i>. Adicionalmente, el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), del 25 de mayo de 2011, en su numeral 34.2 señala como subproceso de rehabilitación a la <i>"normalización progresiva de los medios de vida"</i>.</p> <p>México: El artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, del 6 de junio de 2012, define a la reconstrucción como <i>"La acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de normalidad social y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir los efectos producidos por un agente perturbador en un determinado espacio o jurisdicción..."</i>. Existen varios programas federales que incorporan este principio en sus reglas de operación y brindan financiamiento público a procesos de recuperación económica post-desastre. Uno de ellos es el Programa de Empleo Temporal, PET, que incluye entre sus objetivos generales <i>"2.1. Contribuir al bienestar económico de la población afectada por emergencias u otras situaciones adversas que generan la disminución de sus ingresos, mediante apoyos otorgados por su participación en proyectos de beneficio social o comunitario"</i>. Otro ejemplo lo constituye Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura, FIRA, manejado por el Banco de México, que incluye el Programa Permanente de Apoyo a Zonas Afectadas por Desastres Naturales, cuyo propósito es <i>"Acelerar la respuesta institucional en la atención a las empresas y la reactivación económica de las regiones afectadas por desastres Naturales."</i> La activación de este Programa Especial es automática, una vez que la Secretaría de Gobernación emite la Declaratoria de Desastre Natural, o en su caso, con base al diagnóstico climatológico</p>

que emite la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Los apoyos de FIRA incluyen créditos refaccionarios para la reactivación de la economía regional a través de la generación de proyectos para la rehabilitación y apoyo de las empresas ubicadas en zonas afectadas, entre otros.

Guatemala: La Política Nacional para la Reducción de Riesgo a los Desastres, emitida mediante Acuerdo N° 06-2011, Acta 03-2011, del Consejo Nacional de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado (CONRED), del 15 de Julio de 2011, entre sus objetivos específicos establece el de: *"... Planificar e implementar acciones de manera coordinada y sistemática para restablecer, de forma pertinente, oportuna, segura y sostenida, las condiciones y medios de vida y recuperación del equilibrio con la naturaleza; la eventualidad en el que las familias, los sistemas productivos y el tejido social se han perdido como consecuencia de un evento socio-natural, evitando la reconstitución de los factores de riesgo."*

Código: RC 1A-3**Pregunta de respuesta cerrada**

3. ¿Existe normatividad que establezca esquemas institucionales para la coordinación de la reconstrucción post-desastre?

Descripción general del indicador

Este indicador busca determinar si se encuentra vigente en el país una normatividad de la GRD, en la que se establezcan esquemas institucionales para el proceso de la RC.

Se quiere determinar si el país ha considerado la importancia de que la RC (que incluye la reconstrucción) sea realizada dentro del marco normativo e institucional de la GRD en el país, al menos en los casos en que la magnitud del desastre no sobrepase las capacidades de las instituciones involucradas. Este indicador se deriva del reconocimiento que las organizaciones *ad hoc* que se generan comúnmente en situaciones de desastres, muchas veces ejecutan su gestión sin dejar ninguna capacidad instalada en el estado para enfrentar nuevos procesos de recuperación posteriores y como en la RC, lo que está en juego es la gestión prospectiva del riesgo, es decir, evitar conservar riesgos pre-existentes o genera otros.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Identificar la normatividad que existe sobre RC.
2. Determinar si esta normatividad define esquemas o procedimientos institucionales para la RC.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

La normatividad sobre RC debe considerar esquemas institucionales para la coordinación de la reconstrucción que eviten o limiten la creación de instituciones *ad hoc*.

NOTA: aquí se pregunta por normatividad permanente frente a este proceso, no aplican normas *ad hoc* que se hayan generado para realizar una reconstrucción tras un desastre en particular y que se prevé que no continuarán luego de haber sido ejecutada la recuperación (por ejemplo cuando se crean fondos o programas especiales de reconstrucción temporales).

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

República Dominicana: La Ley No. 147-02, Sobre Gestión de Riesgos, del 22 de Septiembre del 2002, considera los esquemas de coordinación para la recuperación de la siguiente manera: "*Artículo 24. Plan de Acción Específico para la Atención y Recuperación Post-desastre. Declarada una situación de desastre y activado el Plan Nacional de Emergencias, la Comisión Nacional de Emergencia procederá a elaborar un plan de acción específico para el retorno a la normalidad, la recuperación y la reconstrucción de las áreas afectadas, que será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en el decreto de declaratoria, y sus modificaciones*". También detalla en el Párrafo I, las instancias de coordinación interinstitucional correspondientes y los procedimientos a realizar cuando se trata de situaciones calificadas como regionales, provinciales o municipales.

México: La Ley General de Protección Civil, del 6 de junio de 2012, precisa lo que es un desastre (artículo 2, fracción XVI) y una declaratoria de desastre (artículos 7, fracción IV, y 19, fracción XI) y luego dedica el Capítulo XII, De los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos, para establecer un régimen de gestión financiera, estableciendo para ello los requisitos para detonar la declaratoria de desastre (bajo condiciones jurídicas y técnicas muy precisas) condición *sine qua non* para poder acceder a los recursos del fondo de desastres. Todo esto como un proceso estándar que se repite permanentemente. En ese capítulo el Artículo 63 supedita a la normativa administrativa, es decir las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y a los Lineamientos de Operación Específicos del FONDEN la regulación de los procedimientos, fórmulas de financiamiento y cofinanciamiento y demás requisitos para el acceso y ejercicio de los recursos para la reconstrucción post-desastre.

Guatemala: El Reglamento de la Ley N° 109-96, Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado (CONRED), adoptado por Acuerdo Gubernativo N° 49-2012, del 14 de marzo del 2012, establece en su Artículo 43, que *"la Dirección de Recuperación es la encargada de establecer la estrategia y los planes de rehabilitación y reconstrucción con transformación de las áreas afectadas en concordancia con los lineamientos y directrices dictadas por el gobierno central, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- y otras instancias nacionales relacionadas- así como la validación correspondiente..."*. Entre las responsabilidades específicas que define el Artículo 43 para esta Dirección se incluye: *"f. Coordinar y dirigir la estrategia de rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas por desastres de origen natural o provocado, de manera ágil y con la calidad pertinente, coordinando el apoyo con las distintas instituciones estatales y no estatales, de conformidad con el mandato legal de la institución en conjunto, y con las instituciones y sectores competentes en la materia."* Adicionalmente, en su Artículo 107, relativo al Protocolo de Recuperación Post-Desastre, el Reglamento establece: *"La CONRED elaborará un Protocolo de Recuperación Post-Desastre, el cual se conformará de actividades y proyectos que serán validados por funcionarios de la Secretaría Ejecutiva, previo a la búsqueda, ubicación y disponibilidad de los fondos necesarios para su implementación..."*. El Protocolo de Recuperación Pos-Desastre, cuya última actualización fue publicada por la SE-CONRED en noviembre de 2012, detalla la forma en que se lleva a cabo la activación del proceso de recuperación, la gestión estratégica y direccionamiento, así como la preparación de las condiciones e inicio de la recuperación. A nivel de la gestión estratégica y direccionamiento, el Protocolo detalla los subprocesos, responsabilidades y herramientas del proceso, y define que la Presidencia es la encargada de su implementación de esta fase. Finalmente, en el marco de la Mesa Nacional de Diálogo, se ha establecido una Mesa Técnica Multisectorial de Recuperación Post Desastre, que tiene como propósito de coordinar las acciones y tener la representatividad de todos los actores o sectores involucrados en los procesos de recuperación nacional.

Código: RC 1A-4

Pregunta de respuesta cerrada
4. ¿Existe normatividad que establezca la realización de estudios sobre las causas de los desastres para orientar una recuperación que evite la restitución de las condiciones de riesgo preexistentes?
Descripción general del indicador
<p>Uno de los avances recientes de la GRD, es la metodología llamada “estudio forense” de los desastres. Se trata de investigaciones sobre las causas de los desastres para orientar una recuperación que evite la restitución de las condiciones de riesgo preexistentes.</p> <p>Este indicador se deriva del reconocimiento que el riesgo es un proceso que siempre tiene agentes causales (presiones dinámicas y causas de fondo), que pueden ser en gran medida la razón fundamental de las pérdidas. Normalmente los agentes causales de los desastres son de tipo político, social y económico, puesto que los eventos naturales actúan como “detonantes” de condiciones preexistentes que determinan el riesgo de desastres. En ese tenor este indicador valora que desde la normativa de la GRD, o bien la que aplica en procesos de RC, se establezca como obligatorio estudiar las causas de los desastres, de manera que durante la reconstrucción no se reproduzcan los riesgos pre-existente.</p> <p>NOTA: El concepto de “presiones dinámicas y causas de fondo” se refiere al <i>Modelo de Presión y Liberación de los Desastres</i> (Blaikie, et al, 1994).</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad que aplica en procesos de RC. 2. Determinar si se establece de forma obligatoria el que se realicen estudios para determinar las causas del desastre.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>La normatividad debe establecer la realización de estudios a propósito de las causas del desastre, que no debe confundirse con evaluaciones sobre el impacto del desastre (por ejemplo las evaluaciones ex post que realiza CEPAL). En este indicador nos estamos refiriendo al análisis de los factores subyacentes del riesgo (por ejemplo: inadecuada ocupación del suelo, degradación ambiental, marginación y exclusión social, acelerado crecimiento urbano, falta de aplicación de normas de prevención en la construcción, etc.).</p> <p>NOTA: En este indicador se pregunta por normatividad permanente frente a este proceso; no aplican normas <i>ad hoc</i> que se hayan generado para realizar una reconstrucción tras un desastre en particular y que se prevé que no continuarán luego de haber sido ejecutada la recuperación (por ejemplo cuando se crean fondos o programas especiales de reconstrucción temporales).</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: El Reglamento de la Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado mediante Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, del 25 de mayo de 2011, establece en el artículo 36 los subprocesos de la Reconstrucción, entre esos el numeral 36.4, sobre la evaluación de impacto, que consiste en <i>"Realizar la evaluación del impacto socioeconómico en el escenario de desastre, identificando presiones dinámicas y causas de fondo"</i>. Lo que se complementa con el subproceso de planificación participativa, que según el numeral 36.7 se dirige a <i>"Formular participativamente el plan integral de reconstrucción que no reproduce los riesgos preexistentes, definiendo el alcance, estrategias de implementación, actividades y responsabilidades, presupuestos e indicadores de seguimiento y evaluación"</i>.</p> <p>México: Las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales (RGFONDEN), del 3 de diciembre de 2010, al enlistar los fines del FONDEN en su Artículo 4, fracción I, segundo párrafo, donde dice: <i>"... en el entendido de que la dependencia o entidad de la Administración Pública Federal responsable del sector deberá evaluar y, en su caso, validar los argumentos técnicos y los documentos de las mejoras y adiciones en las acciones incluidas en el programa de restauración de los daños, de tal manera que garanticen que los bienes operarán dentro de márgenes de seguridad recomendables"</i>. Adicionalmente, la Ley General de Protección Civil, del 6 de junio de 2012, establece en forma general en lo referente al proceso de la reconstrucción (Artículo 2, fracción XLIII), y en particular en su segunda parte: <i>"Reconstrucción: ... Este proceso debe buscar en la medida de lo posible la reducción de los riesgos existentes, asegurando la no generación de nuevos riesgos y mejorando para ello las condiciones preexistentes"</i>.</p>

Código: RC 1A-5

Pregunta de respuesta cerrada
5. <i>¿Existe normatividad que ordene la formulación de planes de recuperación post-desastre que explícitamente busquen reducir la vulnerabilidad preexistente?</i>
Descripción general del indicador
Se trata de un elemento de calidad de la norm sobre recuperación post-desastre: la formulación de un plan de reconstrucción que de forma explícita busque la reducción de la vulnerabilidad preexistente.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normativa que aplica a los procesos de RC. 2. Identificar si en esta normatividad se establece la formulación de planes <i>ex-post</i> de recuperación o reconstrucción. 3. Determinar si la normativa establece explícitamente que el plan debe buscar esencialmente la reducción de la vulnerabilidad preexistente.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Que el marco normativo que le aplica a la RC, establezca la formulación de planes <i>ex-post</i> de recuperación en los que se determine explícitamente como objetivo la reducción de la vulnerabilidad pre-existente.</p> <p>NOTA: aquí se pregunta por normatividad permanente frente a este proceso; no aplican normas <i>ad hoc</i> que se hayan generado para realizar una reconstrucción tras un desastre en particular y que se prevé que no continuarán luego de haber sido ejecutada la recuperación (por ejemplo cuando se crean fondos o programas especiales de reconstrucción temporales).</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: La Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), del 8 de febrero de 2011, en el numeral 6.2 se refiere a que la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se logra mediante el planeamiento, organización, dirección y control de las actividades y acciones; posteriormente en el proceso descrito en el apartado d, define el objetivo de la reconstrucción como el de "... establecer condiciones sostenibles de desarrollo en las áreas afectadas, reduciendo el riesgo anterior al desastre y asegurando la recuperación física, económica y social de las comunidades afectadas". Asimismo, el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664, del 25 de mayo de 2011, en el artículo 35 reitera como uno de los objetivos del proceso post-desastre, se tiene que la Ley N° 29664 en su artículo 10 sobre responsabilidades de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), numeral j, propone que esta entidad debe, en situaciones de desastres de gran magnitud y en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, "... proponer al Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres el esquema institucional y financiero de reconstrucción, sobre la base de un análisis de vulnerabilidades, daños y necesidades". Y finalmente el artículo 36, numeral 7 del Reglamento, define como parte del proceso de reconstrucción: "... formular participativamente el plan integral de reconstrucción que no reproduce los riesgos preexistentes".</p> <p>Costa Rica: El Plan Nacional para la Gestión del Riesgo 2010 – 2015, de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, en el Eje Temático 7, Recuperación y reconstrucción ante los desastres, Lineamiento de política 1, señala: "<i>Garantizar la recuperación de las poblaciones en las áreas afectadas por las emergencias y desastres, mediante la ejecución de las acciones y medidas que garanticen la seguridad de la vida, el acceso y la continuidad de los servicios básicos y vitales; todo esto debe plantearse dentro de un proceso paulatino de estabilización y de reestructuración emocional, social y económica y con la consigna de no promover el restablecimiento de la vulnerabilidad.</i>"</p> <p>México: Las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, ROFONDEN, del 3 de diciembre de 2010, establecen en el Artículo 4, fracción I, segundo párrafo: "<i>En los trabajos de reconstrucción o restitución de los bienes se deberán incluir, en lo posible y por separado, medidas de mitigación para daños futuros, a través de normas de diseño o construcción que reduzcan su vulnerabilidad ante futuras amenazas...</i>".</p>

Código: RC 1A-6

Pregunta de respuesta cerrada
6. <i>¿Existe normatividad que ordene la formulación ex-ante de planes de recuperación post desastre?</i>
Descripción general del indicador
<p>Este indicador busca determinar un criterio de calidad de la normatividad de RC sobre el proceso de reconstrucción, específicamente sobre el momento en el que se deberían formular los planes de recuperación.</p> <p>Normalmente, los países (aún sin una legislación al respecto) sólo se ocupan de la recuperación luego de ocurrido el desastre, incluso en aquellos que cuentan con escenarios de daños posibles y que han realizado procesos de preparativos de la respuesta y la rehabilitación de servicios públicos.</p> <p>A propósito de la planificación de la respuesta, se considerase una buena práctica que de forma anticipada se produzcan los planes de recuperación post-desastre. Planes basados en escenarios de daños, pérdidas y necesidades; conteniendo, entre otros, los siguientes elementos (i) un plan de generación de información y capacidades (en base a los déficits identificados en el análisis de los escenarios que incluya diversas acciones como capacitación, pero también inversiones como contar con bases de datos para planificar la recuperación), (ii) un plan que identifique los acuerdos interinstitucionales para la recuperación que deben ir preparándose (incluyendo acuerdos con el sector privado), (iii) un plan de financiamiento de la recuperación y (iv) una guía operativa para la recuperación que establezca protocolos de acción generales para la recuperación y protocolos específicos para los escenarios considerados.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad que aplica en los procesos de RC. 2. Determinar si se establece la formulación de planes de recuperación o reconstrucción. 3. Establecer si esta formulación se debe realizar de forma <i>ex-ante</i> (al menos a un nivel básico o general de la planificación).
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Existencia de normatividad que ordene la formulación <i>ex-ante</i> de planes de recuperación post-desastre, al menos a un nivel general o esquemático (planificación de actividades previas que podrían realizarse antes de que se verifique la condición de desastre).</p> <p>NOTA: aquí se pregunta por normatividad permanente frente a este proceso, no aplican normas <i>ad hoc</i> que se hayan generado para realizar una reconstrucción tras un desastre en particular y que se prevé que no continuarán luego de haber sido ejecutada la recuperación (por ejemplo cuando se crean fondos o programas especiales de reconstrucción temporales).</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>México: Este concepto se encuentra incorporado en los Planes de Continuidad de Operaciones que la Ley General de Protección Civil, del 6 de junio de 2012, define en su artículo 3, fracción XII, como “<i>Al proceso de planeación, documentación y actuación que garantiza que las actividades sustantivas de las instituciones públicas, privadas y sociales, afectadas por un agente perturbador, puedan recuperarse y regresar a la normalidad en un tiempo mínimo. Esta planeación deberá estar contenida en un documento o serie de documentos cuyo contenido se dirija hacia la prevención, respuesta inmediata, recuperación y restauración, todas ellas avaladas por sesiones de capacitación continua y realización de simulacros...</i>”.</p> <p>Costa Rica: La Ley N. 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, del 27 de octubre de 2005, se refiere en el Artículo 7 al Plan nacional de gestión del riesgo, señalando que “... <i>Para la aplicación de la política de gestión del riesgo, la Comisión queda obligada al diseño y la ejecución del Plan nacional de gestión del riesgo, como instrumento de planificación estratégica, que permita la articulación sistémica e integral de los programas parte de los subsistemas y, además, la delimitación de las competencias institucionales, la asignación de recursos, la organización y los mecanismos de verificación y control</i>”.</p>

Código: RC 1A-7

Pregunta de respuesta cerrada
7. <i>¿Existe normatividad que establece que los planes de recuperación post desastre deben definir la duración de la etapa en que se apoyará el restablecimiento de los medios de vida, durante la transición entre la respuesta y la reconstrucción?</i>
Descripción general del indicador
<p>Al igual que los indicadores precedentes, aquí se propone un criterio de calidad de la normatividad que aplica a la RC, específicamente relacionado con la determinación de la responsabilidad del Estado de definir la duración de la etapa de recuperación de los medios de vida y que ésta se realice durante “la transición” entre la respuesta (aspectos de ayuda humanitaria) y la reconstrucción de la infraestructura.</p> <p>Si la etapa de recuperación de los medios de vida afectados o destruidos no se atiende a su debido momento y no se la vincula con la etapa de ayuda humanitaria que es inmediata al impacto, las familias afectadas por el desastre pueden verse avocadas a una descapitalización (por ende a un empobrecimiento) y eventualmente a una migración forzosa a zonas de mayor actividad económica.</p> <p>Este indicador también apunta a evitar situaciones en las que se construye una nueva infraestructura para acoger a la población damnificada en una zona donde no se han creado en paralelo unas condiciones de actividad económica que aseguren la permanencia de dicha población en la nueva zona de residencia (p.ej. la experiencia inicial de reubicación de población damnificada de Tegucigalpa, Honduras, en el valle de Amarateca, tras el huracán Mitch. Posteriormente esta situación se corrigió parcialmente, fomentando actividades empresariales entre la población residente).</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad que aplica a los procesos de RC. 2. Analizar si dicha normatividad establece que se deben definir umbrales razonables de tiempo (máximos) para la ejecución de los planes de recuperación (éstos pueden variar dependiendo de la complejidad del escenario de desastre). 3. Determinar si la etapa de recuperación de medios de vida está incluida dentro de la transición entre la respuesta y la reconstrucción de las viviendas o infraestructura.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Debe verificarse la vigencia de normatividad que establece que los planes de recuperación post-desastre deben definir la duración de la etapa en que se apoyará el restablecimiento de los medios de vida, y que este proceso debe realizarse durante la transición entre la respuesta y la reconstrucción.</p> <p>NOTA: aquí se pregunta por normatividad permanente frente a este proceso, no aplican normas <i>ad hoc</i> que se hayan generado para realizar una reconstrucción tras un desastre en particular y que se prevé que no continuarán luego de haber sido ejecutada la recuperación (por ejemplo cuando se crean fondos o programas especiales de reconstrucción temporales).</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>A falta de ejemplos en la región, se propone una situación hipotética para el cumplimiento de este indicador que sería la existencia de normatividad vinculada con el marco normativo general del proceso de recuperación post-desastre, y que establece de forma específica la duración (puede ser en un intervalo de tiempo) de la etapa en que se apoyará el restablecimiento de los medios de vida, y además establece que este proceso debe hacerse durante la transición entre la respuesta y la reconstrucción.</p>

Código: RC 1A-8

Pregunta de respuesta cerrada
8. <i>¿Existe normatividad que establece que los planes de recuperación post desastre deben definir la duración del periodo en que se deben reparar o reconstruir las viviendas afectadas?</i>
Descripción general del indicador
<p>Al igual que el indicador RC 1A-7, interesa establecer si la normatividad que regula el proceso de RC prevé que los planes de recuperación deben definir la duración del periodo en que se deben reparar o reconstruir las viviendas afectadas, de responsabilidad fiscal del estado.</p> <p>La determinación de metas asociadas a plazos razonables dentro de los planes de reconstrucción se considera una buena práctica que reduce la incertidumbre en la población afectada y mejora la imagen y el desempeño del estado frente a este proceso de la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD).</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad que aplica a los procesos de RC. 2. Analizar si dicha normatividad establece que en los planes de recuperación se debe establecer un plazo razonable (máximo) para la etapa de reparación o reconstrucción de las viviendas.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Normatividad vigente que establece que los planes de RC deben definir la duración del periodo en que se deben reparar o reconstruir las viviendas afectadas (que sean de responsabilidad fiscal del Estado, según la norma). Usualmente en la región de América Latina y el Caribe, el estado se hace cargo total o parcialmente del costo de la reconstrucción de las viviendas afectadas en los estratos socioeconómicos más pobres.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>México: Los Lineamientos Operativos del Fondo de Desastres Naturales, LOFONDEN (2010), establecen que en las tareas de reconstrucción habrá calendarios de obras y acciones (artículo 20), incluso antes de autorizarse los recursos. En el Anexo IV “Atención de la vivienda”, el numeral 1, De los alcances, indica que una vez superada la fase de emergencia, las acciones de atención a la vivienda se realizarán en dos etapas, de atención inmediata o de reconstrucción. El numeral 2, Consideraciones específicas de las modalidades, específica que de acuerdo a la magnitud de afectación de las viviendas, se clasificarán en cuatro niveles de daños, y en el numeral 3.7 define las modalidades de terminación de los apoyos para las viviendas. Finalmente, en el numeral 7 del Anexo IV en el punto 7.5 precisa que sólo se podrá modificar los calendarios de obras en dos ocasiones.</p> <p>Costa Rica: La Ley N° 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, del 27 de octubre de 2005, establece en su Artículo 30, las fases para la atención de una emergencia, a saber: a) Fase de respuesta, b) Fase de rehabilitación y c) Fase de reconstrucción, y es en ésta que establece: <i>"Para concluir la fase de reconstrucción, la Comisión contará con un plazo máximo de cinco años."</i></p>

Código: RC 1B-1

Pregunta de respuesta cerrada
1. ¿La normatividad del sector ambiental define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?
Descripción general del indicador
<p>Este indicador valora que la normatividad del sector ambiental establezca la responsabilidad de realizar anticipadamente preparativos de la Recuperación Post-desastre (RC), en su ámbito de su competencia; es decir aquellas acciones de preparación hechas, al menos parcialmente, de forma <i>ex-ante</i> a la ocurrencia del desastre, y no solamente aquellas <i>ex-post</i> (que es la práctica más común en la región).</p> <p>Estos preparativos para la RC pueden incluir entre otras acciones: (i) el análisis de escenarios de daños, pérdidas y necesidades de recuperación potenciales para el sector, (ii) la elaboración de un plan de generación de información y capacidades (en base a los déficits de capacidades identificados en el análisis de los escenarios de recuperación que incluya diversas acciones como capacitación, pero también inversiones para contar con bases de datos <i>ex-ante</i> para planificar la recuperación), (iii) la elaboración y ejecución de un plan de acuerdos interinstitucionales para la recuperación (incluyendo acuerdos con el sector privado), (iv) la elaboración y ejecución de un plan de financiamiento de la recuperación (que incluirá herramientas de protección financiera pero también opciones de reorientación de presupuesto y programas) y (v) la elaboración de una guía operativa para la recuperación que establezca protocolos de acción generales para la recuperación y protocolos específicos para los escenarios considerados. Todo, en el ámbito de competencias del sector ambiente.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad del sector ambiente, relacionada con los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) o similar. 2. Establecer si en dicha normatividad se define la responsabilidad de realizar preparativos de la RC, en forma <i>ex-ante</i> a la ocurrencia del desastre y en el ámbito de sus competencias.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Normativa del sector ambiente, en el que se establezca la responsabilidad de realizar preparativos de la RC, en forma <i>ex-ante</i> al desastre.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>A falta de ejemplos en la región, se propone una situación hipotética para el cumplimiento de este indicador que sería la existencia de un marco normativo del sector que estableciera responsabilidades frente a la preparación de la recuperación (acciones ex ante) en el ámbito de sus propias competencias sectoriales. El tipo de actividades que deberían planificarse ex ante para el sector ambiente podrían incluir (dependiendo de las competencias específicas que estén asignadas en cada país al sector): (i) manejo de escombros generados por el desastre, (ii) promoción de una recuperación que incorpore consideraciones ambientales y de medios de vida ambientalmente sostenible y (iii) recuperación de ecosistemas (Adaptado de: Guidance Note on Recovery: Environment , ISDR, IRP, UNDP, 2010)</p>

Código: RC 1B-2

Pregunta de respuesta cerrada
<i>1. ¿La normatividad del sector agricultura, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?</i>
Descripción general del indicador
<p>Este indicador valora que la normatividad del sector agricultura establezca la responsabilidad de realizar anticipadamente preparativos de la Recuperación Post-desastre (RC), en su ámbito de su competencia; es decir aquellas acciones de preparación hechas, al menos parcialmente, de forma ex-ante a la ocurrencia del desastre, y no solamente aquellas ex-post (que es la práctica más común en la región).</p> <p>Estos preparativos para la RC pueden incluir entre otras acciones: (i) el análisis de escenarios de daños, pérdidas y necesidades de recuperación potenciales para el sector, (ii) la elaboración de un plan de generación de información y capacidades (en base a los déficits de capacidades identificados en el análisis de los escenarios de recuperación que incluya diversas acciones como capacitación, pero también inversiones para contar con bases de datos ex-ante para planificar la recuperación), (iii) la elaboración y ejecución de un plan de acuerdos interinstitucionales para la recuperación (incluyendo acuerdos con el sector privado), (iv) la elaboración y ejecución de un plan de financiamiento de la recuperación (que incluirá herramientas de protección financiera pero también opciones de reorientación de presupuesto y programas) y (v) la elaboración de una guía operativa para la recuperación que establezca protocolos de acción generales para la recuperación y protocolos específicos para los escenarios considerados. Todo, en el ámbito de competencias del sector agricultura.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad del sector agricultura, relacionada con los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) o similar. 2. Establecer si en dicha normatividad se define la responsabilidad de realizar preparativos de la RC, en forma ex-ante a la ocurrencia del desastre y en el ámbito de sus competencias.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Normativa del sector agricultura, en el que se establezca la responsabilidad de realizar preparativos de la RC, en forma <i>ex-ante</i> al desastre.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Un ejemplo de esta normatividad sería si el marco normativo del sector establece responsabilidades frente a la preparación de la recuperación (acciones ex ante) en el ámbito de sus propias competencias sectoriales, que para agricultura podrían ser las provisiones para reactivar la producción agrícola, identificando los sistemas de riego que podrían verse afectados (puntos críticos) así como la infraestructura de producción (silos, bodegas, almacenes, etc.), y tener previsto mecanismos de protección financiera para financiar la recuperación.</p> <p>Argentina: La Ley No. 26.509, que crea el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (Emergencia Agropecuaria), del 27 de agosto del 2009, precisa en el Artículo 12 que "<i>Los recursos asignados en la ley general de presupuesto destinados a las acciones de prevención, y los recursos del Fondo creado por la presente ley para mitigar y/o reparar los daños causados por las situaciones de emergencias y desastres agropecuarios contemplarán: 1. Gastos de inversión y funcionamiento de los entes públicos que desarrollarán los sistemas de prevención, ordenamiento de tierras, medidas de mitigación y preparación de los productores agropecuarios para reducir la vulnerabilidad; 2. Gastos de inversión y funcionamiento de los beneficiarios directos que se deriven de medidas de mitigación o para reducir la vulnerabilidad de sus unidades productivas con mayor riesgo de posibles emergencias y/o desastres agropecuarios. 3. Programas específicos permanentes de prevención y mitigación de emergencias y/o desastres agropecuarios desarrollados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos</i>". Y en el Artículo 13 se distingue aquellos recursos dirigidos a los entes públicos: "<i>Los recursos asignados en la ley general de presupuesto destinados a las acciones de prevención y los recursos del Fondo creado por la presente ley para mitigar y/o reparar los daños causados por las situaciones de emergencias y desastres agropecuarios para entes públicos serán: a) Subsidios por única vez para la elaboración de proyectos, organización de la comunidad beneficiaria, sistemas de monitoreo y transferencia de la información, obras de protección, realización de mapas de riesgo, entre otras acciones de preparación para la posible ocurrencia de eventos adversos; b) Subsidios para gastos de funcionamiento de los sistemas de alerta conformados durante los primeros tres (3) años</i>".</p>

Chile: El marco legal del sector agricultura, le asigna al Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) funciones y recursos que les permiten planificar y apoyar las acciones de recuperación del sector agropecuario después de desastres, tales como las que se presentan a continuación. Ley N° 18910, Ministerio de Agricultura (1990), Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), considera: "Artículo 3°.- Para el logro de los objetivos señalados, el Instituto podrá desarrollar, especialmente, las siguientes funciones...5) Otorgar los subsidios que la ley disponga para fines productivos, obras de desarrollo rural o para atender situaciones de emergencia en el sector rural...7) El otorgamiento de créditos y subsidios, los programas de desarrollo rural y asistencia crediticia, así como cualquier beneficio que otorgue el Instituto a personas naturales, jurídicas o comunidades, deberá concederse sobre la base de parámetros objetivos previamente reglamentados, salvo en situaciones de emergencia. Todos los potenciales beneficiarios del Instituto tendrán acceso a dicha información...". Resolución Exenta N° 1049, Instituto de Desarrollo Agropecuario (2010), establece procedimiento operativo para el otorgamiento de incentivos de emergencia, en sus objetivos consideran: "a) procurar la sobrevivencia de la masa ganadera, b) procurar la reposición de insumos agrícolas y/o veterinarios necesarios para proteger los sistemas productivos, c) permitir la reposición de cultivos dañados, de infraestructura predial y de los proyectos productivos... afectado por la situación de Emergencia...y d) Rehabilitar dentro del contexto de la situación de emergencia y de la oportunidad...a los productores agrícolas y campesinos...".

República Dominicana: La Resolución No. 34-11 del Ministerio de Agricultura, del 13 de junio de 2011, establece en su Artículo 5 "La misión del departamento será orientar la gestión y coordinar con la entidad del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, para aplicar la prevención y reducción de los riesgos y facilitar la organización de los preparativos para la atención de emergencias, la rehabilitación y reconstrucción en caso de desastre, incorporando la Gestión de Riesgo a desastre en la planificación del sector agropecuario dominicano...".

Código: RC 1B-3

Pregunta de respuesta cerrada
3. ¿La normatividad del sector salud, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?
Descripción general del indicador
<p>Este indicador valora que la normatividad del sector salud establezca la responsabilidad de realizar anticipadamente preparativos de la Recuperación Post-desastre (RC), en su ámbito de su competencia; es decir aquellas acciones de preparación hechas, al menos parcialmente, de forma <i>ex-ante</i> a la ocurrencia del desastre, y no solamente aquellas <i>ex-post</i> (que es la práctica más común en la región).</p> <p>Estos preparativos para la RC pueden incluir entre otras acciones: (i) el análisis de escenarios de daños, pérdidas y necesidades de recuperación potenciales para el sector, (ii) la elaboración de un plan de generación de información y capacidades (en base a los déficits de capacidades identificados en el análisis de los escenarios de recuperación que incluya diversas acciones como capacitación, pero también inversiones para contar con bases de datos <i>ex-ante</i> para planificar la recuperación), (iii) la elaboración y ejecución de un plan de acuerdos interinstitucionales para la recuperación (incluyendo acuerdos con el sector privado), (iv) la elaboración y ejecución de un plan de financiamiento de la recuperación (que incluirá herramientas de protección financiera pero también opciones de reorientación de presupuesto y programas) y (v) la elaboración de una guía operativa para la recuperación que establezca protocolos de acción generales para la recuperación y protocolos específicos para los escenarios considerados. Todo, en el ámbito de competencias del sector salud.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad del sector salud, relacionada con los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) o similar. 2. Establecer si en dicha normatividad se define la responsabilidad de realizar preparativos de la RC, en forma <i>ex-ante</i> a la ocurrencia del desastre y en el ámbito de sus competencias.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Normativa del sector salud, en el que se establezca la responsabilidad de realizar preparativos de la RC, en forma <i>ex-ante</i> al desastre. Para el sector salud, la normativa podría versar sobre preidentificación de infraestructuras de salud vulnerables ante desastres (p.ej. mediante la aplicación del índice de seguridad hospitalaria), definición de protocolos para guiar y agilizar el restablecimiento de la infraestructura de salud afectada, protocolos para el tratamiento de pacientes en condiciones de escasez prolongada de recursos (medicinas, personal), planes para la atención de salud de la población relocalizada en soluciones transitorias de vivienda, planes para la atención psicológica a población afectada por el eventual desastre, bases de datos con recursos y personal capacitado para la fase de recuperación, y el establecimiento <i>ex ante</i> de estrategias financieras para hacer frente a la recuperación.</p> <p>(Información adaptada de. Guidance Note on Recovery: Health , ISDR, IRP, UNDP, 2010)</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>República Dominicana: El Decreto No. 213-09, que establece el Reglamento de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, para la Prevención, Mitigación y Respuesta ante Emergencias y Desastres, de 10 de Marzo de 2009, dispone la realización de actividades de preparación de la recuperación post desastre: "17. Se crea el Comité de Emergencias de Salud (CES), el cual será responsable de desarrollar políticas de salud, realización de acciones de prevención, mitigación, preparación, respuesta y rehabilitación para reducir el impacto de los desastres...". Y en el caso de las unidades de gestión territorial "Artículo 24. Las funciones del Comité Provincial de Salud y del Comité Municipal de Salud para Emergencias y Desastres (CPSED), son las siguientes... 5. Desarrollar y actualizar planes de emergencia y contingencia para la preparación, respuesta y rehabilitación del sector salud en caso de desastre...". Y finalmente, además de la creación de los comités se determinan acciones específicas a través de la planeación: "34. La Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social elaborará un Plan Nacional de Emergencias para el Sector Salud, el cual describirá las actividades de prevención, preparación, mitigación, respuesta y rehabilitación para situaciones de emergencias y desastres".</p>

Código: RC 1B-4

Pregunta de respuesta cerrada
4. ¿La normatividad del sector vivienda, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?
Descripción general del indicador
<p>Este indicador valora que la normatividad del sector vivienda establezca la responsabilidad de realizar anticipadamente preparativos de la Recuperación Post-desastre (RC), en su ámbito de su competencia; es decir aquellas acciones de preparación hechas, al menos parcialmente, de forma <i>ex-ante</i> a la ocurrencia del desastre, y no solamente aquellas <i>ex-post</i> (que es la práctica más común en la región).</p> <p>Estos preparativos para la RC pueden incluir entre otras acciones: (i) el análisis de escenarios de daños, pérdidas y necesidades de recuperación potenciales para el sector, (ii) la elaboración de un plan de generación de información y capacidades (en base a los déficits de capacidades identificados en el análisis de los escenarios de recuperación que incluya diversas acciones como capacitación, pero también inversiones para contar con bases de datos <i>ex-ante</i> para planificar la recuperación), (iii) la elaboración y ejecución de un plan de acuerdos interinstitucionales para la recuperación (incluyendo acuerdos con el sector privado), (iv) la elaboración y ejecución de un plan de financiamiento de la recuperación (que incluirá herramientas de protección financiera pero también opciones de reorientación de presupuesto y programas) y (v) la elaboración de una guía operativa para la recuperación que establezca protocolos de acción generales para la recuperación y protocolos específicos para los escenarios considerados. Todo, en el ámbito de competencias del sector vivienda.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad del sector vivienda, relacionada con los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) o similar. 2. Establecer si en dicha normatividad se define la responsabilidad de realizar preparativos de la RC, en forma ex-ante a la ocurrencia del desastre y en el ámbito de sus competencias.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Normativa del sector vivienda, en el que se establezca la responsabilidad de realizar preparativos de la RC, en forma ex-ante al desastre. Un ejemplo de esta normatividad sería si el marco normativo del sector establece responsabilidades frente a la preparación de la recuperación (acciones ex ante) en el ámbito de sus propias competencias sectoriales. Para el sector vivienda, las previsiones que deberían existir se refieren a la identificación ex ante de viviendas en riesgo y de los lugares donde sería factible realizar los procesos de reconstrucción de las viviendas que requieren ser relocalizadas, así como la definición de protocolos para guiar y agilizar la implementación los procesos de recuperación y reubicación de viviendas.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>México: La Ley de Vivienda, del 27 de junio de 2006, establece en su Artículo 82: "<i>La Comisión promoverá la celebración de acuerdos y convenios con productores de materiales básicos para la construcción de vivienda a precios preferenciales para: I. La atención a programas de vivienda emergente para atención a damnificados, derivados de Desastres...</i>".</p>

Código: RC 1B-5

Pregunta de respuesta cerrada
5. ¿La normatividad del sector educación, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?
Descripción general del indicador
<p>Este indicador valora que la normatividad del sector educación establezca la responsabilidad de realizar anticipadamente preparativos de la Recuperación Post-desastre (RC), en su ámbito de su competencia; es decir aquellas acciones de preparación hechas, al menos parcialmente, de forma <i>ex-ante</i> a la ocurrencia del desastre, y no solamente aquellas <i>ex-post</i> (que es la práctica más común en la región).</p> <p>Estos preparativos para la RC pueden incluir entre otras acciones: (i) el análisis de escenarios de daños, pérdidas y necesidades de recuperación potenciales para el sector, (ii) la elaboración de un plan de generación de información y capacidades (en base a los déficits de capacidades identificados en el análisis de los escenarios de recuperación que incluya diversas acciones como capacitación, pero también inversiones para contar con bases de datos <i>ex-ante</i> para planificar la recuperación), (iii) la elaboración y ejecución de un plan de acuerdos interinstitucionales para la recuperación (incluyendo acuerdos con el sector privado), (iv) la elaboración y ejecución de un plan de financiamiento de la recuperación (que incluirá herramientas de protección financiera pero también opciones de reorientación de presupuesto y programas) y (v) la elaboración de una guía operativa para la recuperación que establezca protocolos de acción generales para la recuperación y protocolos específicos para los escenarios considerados. Todo, en el ámbito de competencias del sector educación.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad del sector educación, relacionada con los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) o similar. 2. Establecer si en dicha normatividad se define la responsabilidad de realizar preparativos de la RC, en forma <i>ex-ante</i> a la ocurrencia del desastre y en el ámbito de sus competencias.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Normativa del sector educación, en el que se establezca la responsabilidad de realizar preparativos de la RC, en forma <i>ex-ante</i> al desastre. Un ejemplo de esta normatividad sería si el marco normativo del sector establece responsabilidades frente a la preparación de la recuperación (acciones <i>ex ante</i>) en el ámbito de sus propias competencias sectoriales. Para el sector educación, las previsiones que deberían existir se refieren a la identificación <i>ex ante</i> de infraestructura educativa en riesgo (p.ej. a través de la aplicación de índices de seguridad escolar), definición de protocolos para guiar y agilizar el restablecimiento de la infraestructura educativa afectada, estrategias de preparación (recursos humanos, materiales educativos, etc..) para dar cobertura educativa a la población relocalizada en soluciones transitorias de vivienda y el establecimiento <i>ex ante</i> de estrategias financieras para hacer frente a la recuperación.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>A falta de ejemplos en la región, se propone una situación hipotética para el cumplimiento de este indicador que sería:</p> <p>México: La Ley General de Infraestructura Física Educativa, del 1 de febrero del 2008, establece responsabilidades para el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa (INFE) en relación a todas las fases de la GDR. En particular, el Artículo 11 de esta Ley señala responsabilidades: “<i>En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE... se asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, y se tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población</i>”</p>

Código: RC 1B-6

Pregunta de respuesta cerrada
6. ¿La normatividad del sector turismo, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?
Descripción general del indicador
<p>Este indicador valora que la normatividad del sector turismo establezca la responsabilidad de realizar anticipadamente preparativos de la Recuperación Post-desastre (RC), en su ámbito de su competencia; es decir aquellas acciones de preparación hechas, al menos parcialmente, de forma <i>ex-ante</i> a la ocurrencia del desastre, y no solamente aquellas <i>ex-post</i> (que es la práctica más común en la región).</p> <p>Estos preparativos para la RC pueden incluir entre otras acciones: (i) el análisis de escenarios de daños, pérdidas y necesidades de recuperación potenciales para el sector, (ii) la elaboración de un plan de generación de información y capacidades (en base a los déficits de capacidades identificados en el análisis de los escenarios de recuperación que incluya diversas acciones como capacitación, pero también inversiones para contar con bases de datos <i>ex-ante</i> para planificar la recuperación), (iii) la elaboración y ejecución de un plan de acuerdos interinstitucionales para la recuperación (incluyendo acuerdos con el sector privado), (iv) la elaboración y ejecución de un plan de financiamiento de la recuperación (que incluirá herramientas de protección financiera pero también opciones de reorientación de presupuesto y programas) y (v) la elaboración de una guía operativa para la recuperación que establezca protocolos de acción generales para la recuperación y protocolos específicos para los escenarios considerados. Todo, en el ámbito de competencias del sector turismo</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad del sector turismo, relacionada con los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) o similar. 2. Establecer si en dicha normatividad se define la responsabilidad de realizar preparativos de la RC, en forma ex-ante a la ocurrencia del desastre y en el ámbito de sus competencias.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Normativa del sector turismo, en el que se establezca la responsabilidad de realizar preparativos de la RC, en forma ex-ante al desastre.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>A falta de ejemplos en la región, se propone una situación hipotética para el cumplimiento de este indicador que sería la existencia de un marco normativo del sector que estableciera responsabilidades frente a la preparación de la recuperación (acciones ex ante) en el ámbito de sus propias competencias sectoriales. Para el sector turismo, las previsiones que deberían existir se refieren a la identificación ex ante y creación de bases de datos de zonas turísticas con mayor riesgo, definición de protocolos para guiar y agilizar el restablecimiento de la infraestructura crítica que utiliza el sector y que pudiera ser afectada, incluyendo la creación de fuentes de empleo temporal (eventualmente en coordinación con otros ministerios), recuperación de ecosistemas vinculados al turismo (en coordinación con el sector ambiental) y el establecimiento ex ante de estrategias financieras para hacer frente a la recuperación.</p>

Código: RC 1B-7

Pregunta de respuesta cerrada
7. ¿La normatividad del sector transporte (o sector equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?
Descripción general del indicador
<p>Este indicador valora que la normatividad del sector transporte establezca la responsabilidad de realizar anticipadamente preparativos de la Recuperación Post-desastre (RC), en su ámbito de su competencia; es decir aquellas acciones de preparación hechas, al menos parcialmente, de forma <i>ex-ante</i> a la ocurrencia del desastre, y no solamente aquellas <i>ex-post</i> (que es la práctica más común en la región).</p> <p>Estos preparativos para la RC pueden incluir entre otras acciones: (i) el análisis de escenarios de daños, pérdidas y necesidades de recuperación potenciales para el sector, (ii) la elaboración de un plan de generación de información y capacidades (en base a los déficits de capacidades identificados en el análisis de los escenarios de recuperación que incluya diversas acciones como capacitación, pero también inversiones para contar con bases de datos <i>ex-ante</i> para planificar la recuperación), (iii) la elaboración y ejecución de un plan de acuerdos interinstitucionales para la recuperación (incluyendo acuerdos con el sector privado), (iv) la elaboración y ejecución de un plan de financiamiento de la recuperación (que incluirá herramientas de protección financiera pero también opciones de reorientación de presupuesto y programas) y (v) la elaboración de una guía operativa para la recuperación que establezca protocolos de acción generales para la recuperación y protocolos específicos para los escenarios considerados. Todo, en el ámbito de competencias del sector transporte.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad del sector transporte, relacionada con los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) o similar. 2. Establecer si en dicha normatividad se define la responsabilidad de realizar preparativos de la RC, en forma <i>ex-ante</i> a la ocurrencia del desastre y en el ámbito de sus competencias.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Normativa del sector transporte, en el que se establezca la responsabilidad de realizar preparativos de la RC, en forma <i>ex-ante</i> al desastre.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Colombia: El Decreto 2056 de 2003, por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, y se dictan otras disposiciones, establece en el Artículo 2, Funciones del Instituto Nacional de Vías, numeral 2.2, la de "... <i>elaborar conjuntamente con el Ministerio de Transporte los planes, programas y proyectos tendientes a la construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación, conservación, atención de emergencias, y demás obras que requiera la infraestructura de su competencia</i>", y en el numeral 2.5 la de "... <i>asesorar y prestar apoyo técnico a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados encargados de la construcción, mantenimiento y atención de emergencias en las infraestructuras a su cargo, cuando ellas lo soliciten</i>". Finalmente, el Artículo 11, Oficina de Prevención y Atención de Emergencias, enumera una serie de responsabilidades derivadas del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), entre ellas la de "<i>administrar integralmente los procesos de atención y prevención de emergencias</i>". En cumplimiento del Decreto 2056 de 2003, el INVÍAS cuenta con procedimiento y protocolos establecidos <i>ex-ante</i> para la recuperación (rehabilitación y reconstrucción) de desastres en época de lluvias (el principal riesgo que afecta al sector son los deslizamientos de tierra y las inundaciones).</p>

Código: RC 1B-8

Pregunta de respuesta cerrada
8. ¿La normatividad del sector agua y saneamiento (o equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?
Descripción general del indicador
<p>Este indicador valora que la normatividad del sector agua y saneamiento establezca la responsabilidad de realizar anticipadamente preparativos de la Recuperación Post-desastre (RC), en su ámbito de su competencia; es decir aquellas acciones de preparación hechas, al menos parcialmente, de forma <i>ex-ante</i> a la ocurrencia del desastre, y no solamente aquellas <i>ex-post</i> (que es la práctica más común en la región).</p> <p>Estos preparativos para la RC pueden incluir entre otras acciones: (i) el análisis de escenarios de daños, pérdidas y necesidades de recuperación potenciales para el sector, (ii) la elaboración de un plan de generación de información y capacidades (en base a los déficits de capacidades identificados en el análisis de los escenarios de recuperación que incluya diversas acciones como capacitación, pero también inversiones para contar con bases de datos <i>ex-ante</i> para planificar la recuperación), (iii) la elaboración y ejecución de un plan de acuerdos interinstitucionales para la recuperación (incluyendo acuerdos con el sector privado), (iv) la elaboración y ejecución de un plan de financiamiento de la recuperación (que incluirá herramientas de protección financiera pero también opciones de reorientación de presupuesto y programas) y (v) la elaboración de una guía operativa para la recuperación que establezca protocolos de acción generales para la recuperación y protocolos específicos para los escenarios considerados. Todo, en el ámbito de competencias del sector agua y saneamiento.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad del sector agua y saneamiento, relacionada con los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) o similar. 2. Establecer si en dicha normatividad se define la responsabilidad de realizar preparativos de la RC, en forma <i>ex-ante</i> a la ocurrencia del desastre y en el ámbito de sus competencias.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Normativa del sector agua y saneamiento, en el que se establezca la responsabilidad de realizar preparativos de la RC, en forma <i>ex-ante</i> al desastre.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>A falta de ejemplos en la región, se propone una situación hipotética para el cumplimiento de este indicador que sería la existencia de un marco normativo del sector que estableciera responsabilidades frente a la preparación de la recuperación (acciones <i>ex ante</i>) en el ámbito de sus propias competencias sectoriales. Para el sector agua y saneamiento, las acciones claves que deberían estar normadas son: (i) identificar el costo de la recuperación de la infraestructura expuesta que por su nivel de vulnerabilidad se prevé que podría verse afectada severamente en un escenario de desastre factible; (ii) identificar cuáles serían las acciones básicas para efectuar un proceso de recuperación con transformación de los puntos críticos; (iii) definición de protocolos para guiar y agilizar el restablecimiento de la infraestructura afectada (iv) estrategias para dotar de agua y saneamiento a la población en soluciones transitorias de vivienda; y (v) definir estrategias de financiamiento requeridas.</p>

Pregunta de respuesta cerrada

9. ¿La normatividad del sector telecomunicaciones (o equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?

Descripción general del indicador

Este indicador valora que la normatividad del sector telecomunicaciones (o equivalente) establezca la responsabilidad de realizar anticipadamente preparativos de la Recuperación Post-desastre (RC), en su ámbito de su competencia; es decir aquellas acciones de preparación hechas, al menos parcialmente, de forma *ex-ante* a la ocurrencia del desastre, y no solamente aquellas *ex-post* (que es la práctica más común en la región).

Estos preparativos para la RC pueden incluir entre otras acciones: (i) el análisis de escenarios de daños, pérdidas y necesidades de recuperación potenciales para el sector, (ii) la elaboración de un plan de generación de información y capacidades (en base a los déficits de capacidades identificados en el análisis de los escenarios de recuperación que incluya diversas acciones como capacitación, pero también inversiones para contar con bases de datos *ex-ante* para planificar la recuperación), (iii) la elaboración y ejecución de un plan de acuerdos interinstitucionales para la recuperación (incluyendo acuerdos con el sector privado), (iv) la elaboración y ejecución de un plan de financiamiento de la recuperación (que incluirá herramientas de protección financiera pero también opciones de reorientación de presupuesto y programas) y (v) la elaboración de una guía operativa para la recuperación que establezca protocolos de acción generales para la recuperación y protocolos específicos para los escenarios considerados. Todo, en el ámbito de competencias del sector telecomunicaciones (o equivalente).

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Identificar la normatividad del sector telecomunicaciones (o equivalente), relacionada con los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) o similar.
2. Establecer si en dicha normatividad se define la responsabilidad de realizar preparativos de la RC, en forma *ex-ante* a la ocurrencia del desastre y en el ámbito de sus competencias.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Normativa del sector telecomunicaciones (o equivalente), en el que se establezca la responsabilidad de realizar preparativos de la RC, en forma *ex-ante* al desastre. Un ejemplo de esta normatividad sería si el marco normativo del sector establece responsabilidades frente a la preparación de la recuperación (acciones *ex ante*) en el ámbito de sus propias competencias sectoriales. Para el sector telecomunicaciones, las acciones claves que deberían estar normadas son: (i) identificar el costo de la recuperación de la infraestructura expuesta que por su nivel de vulnerabilidad se prevé que podría verse afectada severamente en un escenario de desastre factible; (ii) identificar cuáles serían las acciones básicas para efectuar un proceso de recuperación con transformación de los puntos críticos; (iii) definición de protocolos para guiar y agilizar el restablecimiento de la infraestructura afectada; y (iv) definir estrategias de financiamiento requeridas.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Chile: Ley N° 20478, Sobre recuperación y continuidad en condiciones críticas y de emergencia del sistema público de telecomunicaciones (2010), del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones considera en el Artículo 39 A que “El Ministerio, por medio de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, desarrollará un plan de resguardo de la infraestructura crítica de telecomunicaciones del país, con el objeto de asegurar la continuidad de las comunicaciones en situaciones de emergencia resultantes de fenómenos de la naturaleza, fallas eléctricas generalizadas u otras situaciones de catástrofe. Para este efecto, tendrá las siguientes atribuciones: a) Coordinar con los diversos organismos e instituciones de gobierno y con los agentes privados el diseño, implementación, desarrollo y mantenimiento de la política y plan de resguardo de las infraestructuras críticas de telecomunicaciones...”.

Pregunta de respuesta cerrada

10. ¿La normatividad del sector energía (o equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?

Descripción general del indicador

Este indicador valora que la normatividad del sector energía (o equivalente) establezca la responsabilidad de realizar anticipadamente preparativos de la Recuperación Post-desastre (RC), en su ámbito de su competencia; es decir aquellas acciones de preparación hechas, al menos parcialmente, de forma *ex-ante* a la ocurrencia del desastre, y no solamente aquellas *ex-post* (que es la práctica más común en la región).

Estos preparativos para la RC pueden incluir entre otras acciones: (i) el análisis de escenarios de daños, pérdidas y necesidades de recuperación potenciales para el sector, (ii) la elaboración de un plan de generación de información y capacidades (en base a los déficits de capacidades identificados en el análisis de los escenarios de recuperación que incluya diversas acciones como capacitación, pero también inversiones para contar con bases de datos *ex-ante* para planificar la recuperación), (iii) la elaboración y ejecución de un plan de acuerdos interinstitucionales para la recuperación (incluyendo acuerdos con el sector privado), (iv) la elaboración y ejecución de un plan de financiamiento de la recuperación (que incluirá herramientas de protección financiera pero también opciones de reorientación de presupuesto y programas) y (v) la elaboración de una guía operativa para la recuperación que establezca protocolos de acción generales para la recuperación y protocolos específicos para los escenarios considerados. Todo, en el ámbito de competencias del sector energía o (equivalente).

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Identificar la normatividad del sector energía (o equivalente), relacionada con los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) o similar.
2. Establecer si en dicha normatividad se define la responsabilidad de realizar preparativos de la RC, en forma *ex-ante* a la ocurrencia del desastre y en el ámbito de sus competencias.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Normativa del sector energía (o equivalente), en el que se establezca la responsabilidad de realizar preparativos de la RC, en forma *ex-ante* al desastre.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

A falta de ejemplos en la región, se propone una situación hipotética para el cumplimiento de este indicador que sería la existencia de un marco normativo del sector que estableciera responsabilidades frente a la preparación de la recuperación (acciones *ex ante*) en el ámbito de sus propias competencias sectoriales. Para el sector energía, las acciones claves que deberían estar normadas son: (i) identificar el costo de la recuperación de la infraestructura expuesta que por su nivel de vulnerabilidad se prevé que podría verse afectada severamente en un escenario de desastre factible; (ii) identificar cuáles serían las acciones básicas para efectuar un proceso de recuperación con transformación de los puntos críticos; (iii) definición de protocolos para guiar y agilizar el restablecimiento de la infraestructura afectada; y (iii) definir estrategias de financiamiento requeridas.

Código: RC 1C-1**Pregunta de respuesta cerrada**

1. ¿Existe normatividad que regule la evaluación, revisión o actualización de planes de desarrollo después de ocurrido un desastre en las unidades de gestión territorial afectadas?

Descripción general del indicador

La ocurrencia de desastres supone ventanas de oportunidad para corregir procesos de desarrollo que evidencian problemas o desajustes. En este sentido se considera una buena práctica que los planes de desarrollo (en cualquier nivel de gobierno) puedan ser actualizados después de ocurrido un desastre con el fin de reducir el riesgo preexistente. La revisión de estos planes de desarrollo se convierte en una oportunidad para integrar los diferentes sectores en un proceso de planificación que contribuya a reducir la vulnerabilidad evidenciada por el desastre.

Esto debería estar normado de forma explícita para garantizar una correcta integración de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en la planificación del desarrollo.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Identificar la normatividad que regula los procedimientos para la formulación, revisión y actualización de los planes de desarrollo en el país (puede ser nacional, regional o local) o instrumento equivalente.
2. Identificar si dicha normatividad establece procedimientos y circunstancias para la actualización o revisión de los planes de desarrollo.
3. Determinar si la ocurrencia de desastres se establece como causal de revisión, actualización o evaluación de los planes de desarrollo.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

La normativa que regula la formulación, revisión, actualización o evaluación de planes de desarrollo (en cualquier nivel de gobierno, pero especialmente en el nivel local), establece que la ocurrencia de desastres puede ser una de las razones para iniciar procesos de ajuste o revisión ordinaria o extraordinaria de los planes.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Chile: Ley N° 16282, Ministerio de Hacienda (1965), fija disposiciones para casos de sismos o catástrofes, establece normas para la reconstrucción de la zona afectada por el sismo de 28 de marzo de 1965 y modifica la Ley N° 16.250, considera: "*Artículo 1°- En el caso de producirse en el país sismos o catástrofes que provoquen daños de consideración en las personas o en los bienes, el "Presidente de la República dictará un decreto supremo fundado, señalando las comunas que hayan sido afectadas. En caso que los sismos o catástrofes se hayan producido en un país extranjero, el Presidente de la República podrá, por decreto supremo fundado, disponer la recolección de aportes y envío de ayudas al exterior, como un acto humanitario de solidaridad internacional. Sólo a contar de la fecha del decreto señalado podrán hacerse efectivas las disposiciones de este título cuanto fueren compatibles".* Y en el "ARTICULO C.- Dentro del plazo de 180 días a contar desde la publicación del decreto a que se refiere el artículo 1° de esta Ley, la Oficina de Planificación Nacional y los Organismos que integran el Sistema Nacional de Planificación creado por Decreto Supremo 180, de 2 de febrero de 1971, del Ministerio del Interior, deberán presentar al Presidente de la República los planes regionales de reconstrucción y **desarrollo** por cada una de las regiones a que se refiere dicho decreto..."

Código: RC 1C-2

Pregunta de respuesta cerrada
2. <i>¿Existe normatividad que regule la evaluación, revisión o actualización de planes de ordenamiento territorial después de ocurrido un desastre en las unidades de gestión territorial afectadas?</i>
Descripción general del indicador
<p>La ocurrencia de desastres supone ventanas de oportunidad para corregir procesos de ocupación y uso del suelo que evidencian problemas o desajustes. Después del desastre se requiere: (i) la revisión de la normativa de zonificación; (ii) verificar si el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) existente identificaba de forma apropiada el riesgo que el desastre evidenció; (iii) ajustar las zonificaciones vinculadas a códigos de construcción, e (iv) incluir en la nueva zonificación las nuevas condiciones generadas por el desastre, como nuevos asentamientos o declaración de zonas como de riesgo no mitigable.</p> <p>En este sentido se considera una buena práctica que los POT (o su equivalente en cada país) puedan ser actualizados después de ocurrido un desastre con el fin de reducir el riesgo preexistente. Esto debería estar normado de forma explícita para garantizar una correcta integración de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en la planificación del desarrollo.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad que regula los procedimientos para la formulación, revisión y actualización de los POT en el país (puede ser nacional, regional o local) o instrumento equivalente. 2. Identificar si dicha normatividad establece procedimientos y circunstancias para la actualización o revisión de los POT. 3. Determinar si la ocurrencia de desastres se establece como causal de revisión, actualización o evaluación de los POT.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
La normatividad que establece los procedimientos para la revisión y actualización de los POT debería considerar la ocurrencia de desastres en el área en cuestión como un causal de posible ajuste al documento.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Colombia: El Decreto 4002 de 2004, Por el cual se reglamentan los artículos 15 y 28 de la Ley 388 de 1997, establece en el Parágrafo único del artículo 5, Revisión de los planes de ordenamiento territorial, como razones excepcionales para la revisión de los planes de ordenamiento territorial las siguientes, "a) <i>La declaratoria de desastre o calamidad pública de que tratan los artículos 18 y 48 del Decreto Ley 919 de 1989, por la ocurrencia súbita de desastres de origen natural o antrópico...</i> b) <i>Los resultados de estudios técnicos detallados sobre amenazas, riesgos y vulnerabilidad que justifiquen la recalificación de áreas de riesgo no mitigable y otras condiciones de restricción diferentes de las originalmente adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente</i>". Adicionalmente, el Artículo 221 de la Ley 1450 (Plan Nacional de Desarrollo), establece que: "<i>Para garantizar la no generación o reproducción de las condiciones de riesgo de desastre, el Gobierno Nacional podrá condicionar la asignación de recursos para procesos de reconstrucción en los municipios afectados por desastres naturales, a la revisión excepcional de los Planes de Ordenamiento Territorial, de acuerdo con el artículo 5 del Decreto 4002 de 2004</i>".</p> <p>Costa Rica: El Decreto N° 34361-MP, Reglamento a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, del 21 de noviembre de 2007, instruye en el Artículo 25, Forma en que se debe realizar la reconstrucción de obras, "... <i>Para no reconstruir la vulnerabilidad, las obras por ejecutar durante la emergencia deberán realizarse con un enfoque preventivo, procurando que en futuros eventos no vuelvan a generar un estado de emergencia igual. En caso de existir un plan regulador municipal en los cantones afectados, la CNE por medio de las diferentes instancias del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Emergencias, recomendará las medidas de uso de la tierra y otras regulaciones relativas a la prevención de futuros desastres, las cuales se incorporarán como una actualización de dicho instrumento jurídico.</i>"</p> <p>Chile: La Ley N° 16282, que fija disposiciones para casos de sismos o catástrofes, establece normas para la reconstrucción de la zona afectada por el sismo de 28 de marzo de 1965 y modifica la Ley N° 16.250 (1965),</p>

del Ministerio de Hacienda, señala que: "*ARTICULO F.- El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo deberá, dentro del plazo de 90 días siguientes a la recepción del acuerdo respectivo, pronunciarse acerca de las modificaciones que aprueben las Municipalidades afectadas por un sismo o catástrofe a sus respectivos planos reguladores, debiendo dictarse de inmediato el decreto supremo correspondiente, si éstas fueren aprobadas. La modificación de los planos reguladores que acuerde la Municipalidad deberá contar con la aprobación del especialista antisísmico que la asesore o que fuere designado para este efecto por el Colegio de Ingenieros de Chile para prestarle atención gratuita. Cuando dichas comunas carezcan de planos reguladores definitivos, podrá el Presidente de la República, dentro de los dos años siguientes al sismo o catástrofe, aprobar proyectos parciales o anteproyectos de planos reguladores elaborados por la Municipalidad respectiva o por la Dirección de Planificación del Desarrollo Urbano del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Para todos los efectos legales estos proyectos parciales o anteproyectos serán considerados como planos reguladores y, para su aprobación, se estará a lo dispuesto en los incisos anteriores. Estos planos se harán sin costo alguno para la respectiva Municipalidad. Las Municipalidades de las zonas afectadas por el sismo o catástrofe podrán permutar los terrenos e inmuebles que sean necesarios para ejecutar el plan de remodelación*".

Pregunta de respuesta cerrada
<i>1. ¿Cuenta el Ministerio de Ambiente (o entidad rectora o coordinadora del ambiente) con un Plan ex-ante de recuperación post-desastre para su sector que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?</i>
Descripción general del indicador
<p>Este indicador busca establecer si la entidad rectora o coordinadora del sector ambiente ha formulado y se ha aprobado formalmente, al menos en los últimos 5 años, un plan <i>ex-ante</i> de Recuperación Post-desastre (RC), en el ámbito de sus competencias.</p> <p>El plan de recuperación podrá incluir entre otros aspectos: (i) el análisis de escenarios de daños, pérdidas y necesidades de recuperación potenciales para el sector, (ii) un plan de generación de capacidades (en base a los déficit de capacidades identificados en el análisis de los escenarios de recuperación), (iii) identificación de acuerdos interinstitucionales existentes y que deben elaborarse para la recuperación (incluyendo acuerdos con el sector privado), (iv) un plan de financiamiento de la recuperación (que incluirá herramientas de protección financiera pero también opciones de reorientación de presupuesto y programas) y (v) una guía operativa para la recuperación que establezca protocolos de acción generales para la recuperación y protocolos específicos para los escenarios considerados. Estos protocolos incluirán un esquema básico que facilite en el momento de la emergencia una rápida identificación e implementación ordenada de las acciones indispensables que se deben realizar.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar dentro de la entidad rectora o coordinadora del sector ambiente, el área, oficina o dependencia con responsabilidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD). 2. Verificar si cuenta con un plan <i>ex-ante</i> aprobado formalmente para orientar el proceso de RC. 3. Determinar si el periodo de formulación es anterior a 5 años.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Que la entidad rectora o coordinadora del sector ambiente haya formulado, en los últimos 5 años, un Plan <i>ex-ante</i> formalmente aprobado, que determine las acciones básicas y estratégicas que se deben realizar en caso de enfrentar un proceso de RC.</p> <p>NOTA: no debe confundirse este plan con un plan de emergencia o contingencia, o de operaciones en caso de desastre (de respuesta).</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Normalmente los sectores formulan este tipo de planes de forma ex post, sin embargo en este indicador se está indagando por la formulación <i>ex ante</i> de este tipo de instrumentos. Denota un nivel avanzado de responsabilidad en la gestión del riesgo de desastres del sector. No se identificaron ejemplos de condiciones positivas en la región. Como ejemplo hipotético el tipo de actividades que deberían incluirse en un plan ex ante para la recuperación del sector ambiente podrían incluir (dependiendo de las competencias específicas que estén asignadas en cada país al sector): (i) manejo de escombros generados por el desastre, (ii) promoción de una recuperación que incorpore consideraciones ambientales y de medios de vida ambientalmente sostenible y (iii) recuperación de ecosistemas (Adaptado de: Guidance Note on Recovery: Environment , ISDR, IRP, UNDP, 2010)</p>

Pregunta de respuesta cerrada
2. ¿Cuenta el Ministerio de Agricultura (o entidad equivalente) con un Plan <i>ex ante</i> de recuperación post-desastre para su sector que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?
Descripción general del indicador
<p>Este indicador busca establecer si la entidad rectora o coordinadora del sector agricultura ha formulado y se ha aprobado formalmente, al menos en los últimos 5 años, un plan <i>ex-ante</i> de Recuperación Post-desastre (RC), en el ámbito de sus competencias.</p> <p>El plan de recuperación del sector podrá incluir entre otros aspectos: (i) el análisis de escenarios de daños, pérdidas y necesidades de recuperación potenciales para el sector, (ii) un plan de generación de capacidades (en base a los déficit de capacidades identificados en el análisis de los escenarios de recuperación), (iii) identificación de acuerdos interinstitucionales existentes y que deben elaborarse para la recuperación (incluyendo acuerdos con el sector privado), (iv) un plan de financiamiento de la recuperación (que incluirá herramientas de protección financiera pero también opciones de reorientación de presupuesto y programas) y (v) una guía operativa para la recuperación que establezca protocolos de acción generales para la recuperación y protocolos específicos para los escenarios considerados. Estos protocolos incluirán un esquema básico que facilite en el momento de la emergencia una rápida identificación e implementación ordenada de las acciones indispensables que se deben realizar.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar dentro de la entidad rectora o coordinadora del sector agricultura, el área, oficina o dependencia con responsabilidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD). 2. Verificar si cuenta con un plan <i>ex-ante</i> aprobado formalmente para orientar el proceso de RC. 3. Determinar si el periodo de formulación es anterior a 5 años.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Que la entidad rectora o coordinadora del sector ambiente haya formulado, en los últimos 5 años, un Plan <i>ex-ante</i> formalmente aprobado, que determine las acciones básicas y estratégicas que se deben realizar en caso de enfrentar un proceso de RC.</p> <p>NOTA: no debe confundirse este plan con un plan de emergencia o contingencia, o de operaciones en caso de desastre (de respuesta).</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Normalmente los sectores formulan este tipo de planes de forma <i>ex post</i>, sin embargo en este indicador se está indagando por la formulación <i>ex ante</i> de este tipo de instrumentos. Denota un nivel avanzado de responsabilidad en la gestión del riesgo de desastres del sector.</p> <p>No se identificaron ejemplos de condiciones positivas en la región. Como ejemplo hipotético algunos de los aspectos que podría incluir un plan de recuperación <i>ex ante</i> para el sector serían previsiones para reactivar la producción agrícola, identificando los sistemas de riego que podrían verse afectados (puntos críticos) así como la infraestructura de producción (silos, bodegas, almacenes, etc.), y tener previsto mecanismos de protección financiera para financiar la recuperación.</p>

Pregunta de respuesta cerrada
3. ¿Cuenta el Ministerio de Salud (o entidad equivalente) con un Plan <i>ex ante</i> de recuperación postdesastre para su sector que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?
Descripción general del indicador
<p>Este indicador busca establecer si la entidad rectora o coordinadora del sector salud ha formulado y se ha aprobado formalmente, al menos en los últimos 5 años, un plan <i>ex-ante</i> de Recuperación Post-desastre (RC), en el ámbito de sus competencias.</p> <p>El plan de recuperación del sector podrá incluir entre otros aspectos: (i) el análisis de escenarios de daños, pérdidas y necesidades de recuperación potenciales para el sector, (ii) un plan de generación de capacidades (en base a los déficit de capacidades identificados en el análisis de los escenarios de recuperación), (iii) identificación de acuerdos interinstitucionales existentes y que deben elaborarse para la recuperación (incluyendo acuerdos con el sector privado), (iv) un plan de financiamiento de la recuperación (que incluirá herramientas de protección financiera pero también opciones de reorientación de presupuesto y programas) y (v) una guía operativa para la recuperación que establezca protocolos de acción generales para la recuperación y protocolos específicos para los escenarios considerados. Estos protocolos incluirán un esquema básico que facilite en el momento de la emergencia una rápida identificación e implementación ordenada de las acciones indispensables que se deben realizar.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar dentro de la entidad rectora o coordinadora del sector salud, el área, oficina o dependencia con responsabilidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD). 2. Verificar si cuenta con un plan <i>ex-ante</i> aprobado formalmente para orientar el proceso de RC. 3. Determinar si el periodo de formulación es anterior a 5 años.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Que la entidad rectora o coordinadora del sector salud haya formulado, en los últimos 5 años, un Plan <i>ex-ante</i> formalmente aprobado, que determine las acciones básicas y estratégicas que se deben realizar en caso de enfrentar un proceso de RC. No debe confundirse este plan con un plan de emergencia o contingencia, o de operaciones en caso de desastre (de respuesta).</p> <p>Algunas de los aspectos que podría incluir un plan de recuperación <i>ex ante</i> para el sector serían la preidentificación de infraestructuras de salud vulnerables ante desastres (p.ej. mediante la aplicación del índice de seguridad hospitalaria), definición de protocolos para guiar y agilizar el restablecimiento de la infraestructura de salud afectada, protocolos para el tratamiento de pacientes en condiciones de escasez prolongada de recursos (medicinas, personal), planes para la atención de salud de la población relocalizada en soluciones transitorias de vivienda, planes para la atención psicológica a población afectada por el eventual desastre, bases de datos con recursos y personal capacitado para la fase de recuperación, y el establecimiento <i>ex ante</i> de estrategias financieras para hacer frente a la recuperación. (Información adaptada de. Guidance Note on Recovery: Health, ISDR, IRP, UNDP, 2010).</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>México: El Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) que es la institución de salud y de seguridad social más grande de México, en coordinación con la Secretaría de Gobernación (SEGOB), evaluaron a todos los hospitales del Sector Salud, esfuerzo que concluyó en el Sistema Integral de Información de Protección Civil (SIIPC). Este esfuerzo, y adicionalmente el desarrollo de una herramienta informática, que se denominó Centro Virtual de Operaciones de Emergencias y Desastres (CVOED), da lugar al Plan Institucional frente a Emergencias y Desastres, publicado en 2011. En esta planeación se consideraron las tres fases de la planeación: antes, durante y después de una situación de crisis; además de tres niveles distintos: nacional (considerado como estratégico), estatal (táctico) y municipal (operativo). El “después” lo relaciona con la Recuperación o la vuelta a la normalidad, que es un “... <i>proceso de recuperación debe ser planeado desde el mismo reconocimiento de las amenazas que pueden afectar a la organización hasta la manera en que se iniciará la reconstrucción y se regresará a la actividad...</i>”.</p>

Pregunta de respuesta cerrada
4. ¿Cuenta el Ministerio de Vivienda (o entidad equivalente) con un Plan <i>ex ante</i> de recuperación posdesastre para su sector que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?
Descripción general del indicador
<p>Este indicador busca establecer si la entidad rectora o coordinadora del sector vivienda ha formulado y se ha aprobado formalmente, al menos en los últimos 5 años, un plan <i>ex-ante</i> de Recuperación Post-desastre (RC), en el ámbito de sus competencias.</p> <p>El plan de recuperación podrá incluir entre otros aspectos: (i) el análisis de escenarios de daños, pérdidas y necesidades de recuperación potenciales para el sector, (ii) un plan de generación de capacidades (en base a los déficit de capacidades identificados en el análisis de los escenarios de recuperación), (iii) identificación de acuerdos interinstitucionales existentes y que deben elaborarse para la recuperación (incluyendo acuerdos con el sector privado), (iv) un plan de financiamiento de la recuperación (que incluirá herramientas de protección financiera pero también opciones de reorientación de presupuesto y programas) y (v) una guía operativa para la recuperación que establezca protocolos de acción generales para la recuperación y protocolos específicos para los escenarios considerados. Estos protocolos incluirán un esquema básico que facilite en el momento de la emergencia una rápida identificación e implementación ordenada de las acciones indispensables que se deben realizar.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar dentro de la entidad rectora o coordinadora del sector vivienda, el área, oficina o dependencia con responsabilidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD). 2. Verificar si cuenta con un plan <i>ex-ante</i> aprobado formalmente para orientar el proceso de RC. 3. Determinar si el periodo de formulación es anterior a 5 años.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Que la entidad rectora o coordinadora del sector ambiente haya formulado, en los últimos 5 años, un Plan <i>ex-ante</i> formalmente aprobado, que determine las acciones básicas y estratégicas que se deben realizar en caso de enfrentar un proceso de RC.</p> <p>NOTA: no debe confundirse este plan con un plan de emergencia o contingencia, o de operaciones en caso de desastre (de respuesta).</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Normalmente los sectores formulan este tipo de planes de forma <i>ex post</i>, sin embargo en este indicador se está indagando por la formulación <i>ex ante</i> de este tipo de instrumentos. Denota un nivel avanzado de responsabilidad en la gestión del riesgo de desastres del sector.</p> <p>No se identificaron ejemplos de condiciones positivas en la región. Como ejemplo hipotético algunos de los aspectos que podría incluir un plan de recuperación <i>ex ante</i> para el sector serían la identificación <i>ex ante</i> de viviendas en riesgo y de los lugares donde sería factible realizar los procesos de reconstrucción de las viviendas que requieren ser relocalizadas, así como la definición de protocolos para guiar y agilizar la implementación los procesos de recuperación y reubicación de viviendas.</p>

Código: RC 2-5**Pregunta de respuesta cerrada**

5. ¿Cuenta el Ministerio de Educación (o entidad equivalente) con un Plan *ex ante* de recuperación posdesastre para su sector que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?

Descripción general del indicador

Este indicador busca establecer si la entidad rectora o coordinadora del sector educación ha formulado y se ha aprobado formalmente, al menos en los últimos 5 años, un plan *ex-ante* de Recuperación Post-desastre (RC), en el ámbito de sus competencias.

El plan de recuperación podrá incluir entre otros aspectos: (i) el análisis de escenarios de daños, pérdidas y necesidades de recuperación potenciales para el sector, (ii) un plan de generación de capacidades (en base a los déficit de capacidades identificados en el análisis de los escenarios de recuperación), (iii) identificación de acuerdos interinstitucionales existentes y que deben elaborarse para la recuperación (incluyendo acuerdos con el sector privado), (iv) un plan de financiamiento de la recuperación (que incluirá herramientas de protección financiera pero también opciones de reorientación de presupuesto y programas) y (v) una guía operativa para la recuperación que establezca protocolos de acción generales para la recuperación y protocolos específicos para los escenarios considerados. Estos protocolos incluirán un esquema básico que facilite en el momento de la emergencia una rápida identificación e implementación ordenada de las acciones indispensables que se deben realizar.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Identificar dentro de la entidad rectora o coordinadora del sector educación, el área, oficina o dependencia con responsabilidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD).
2. Verificar si cuenta con un plan *ex-ante* aprobado formalmente para orientar el proceso de RC.
3. Determinar si el periodo de formulación es anterior a 5 años.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Que la entidad rectora o coordinadora del sector educación haya formulado, en los últimos 5 años, un Plan *ex-ante* formalmente aprobado, que determine las acciones básicas y estratégicas que se deben realizar en caso de enfrentar un proceso de RC.

NOTA: no debe confundirse este plan con un plan de emergencia o contingencia, o de operaciones en caso de desastre (de respuesta).

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Normalmente los sectores formulan este tipo de planes de forma *ex post*, sin embargo en este indicador se está indagando por la formulación *ex ante* de este tipo de instrumentos. Denota un nivel avanzado de responsabilidad en la gestión del riesgo de desastres del sector.

No se identificaron ejemplos de condiciones positivas en la región. Como ejemplo hipotético algunos de los aspectos que podría incluir un plan de recuperación *ex ante* para el sector serían la identificación *ex ante* de infraestructura educativa en riesgo (p.ej. a través de la aplicación de índices de seguridad escolar), definición de protocolos para guiar y agilizar el restablecimiento de la infraestructura educativa afectada, estrategias de preparación (recursos humanos, materiales educativos, etc..) para dar cobertura educativa a la población relocalizada en soluciones transitorias de vivienda y el establecimiento *ex ante* de estrategias financieras para hacer frente a la recuperación.

Código: RC 2-6

Pregunta de respuesta cerrada
6. ¿Cuenta el Ministerio de Turismo (o entidad equivalente) con un Plan <i>ex ante</i> de recuperación post-desastre para su sector que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?
Descripción general del indicador
<p>Este indicador busca establecer si la entidad rectora o coordinadora del sector turismo ha formulado y se ha aprobado formalmente, al menos en los últimos 5 años, un plan <i>ex-ante</i> de Recuperación Post-desastre (RC), en el ámbito de sus competencias.</p> <p>El plan de recuperación podrá incluir entre otros aspectos: (i) el análisis de escenarios de daños, pérdidas y necesidades de recuperación potenciales para el sector, (ii) un plan de generación de capacidades (en base a los déficit de capacidades identificados en el análisis de los escenarios de recuperación), (iii) identificación de acuerdos interinstitucionales existentes y que deben elaborarse para la recuperación (incluyendo acuerdos con el sector privado), (iv) un plan de financiamiento de la recuperación (que incluirá herramientas de protección financiera pero también opciones de reorientación de presupuesto y programas) y (v) una guía operativa para la recuperación que establezca protocolos de acción generales para la recuperación y protocolos específicos para los escenarios considerados. Estos protocolos incluirán un esquema básico que facilite en el momento de la emergencia una rápida identificación e implementación ordenada de las acciones indispensables que se deben realizar.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar dentro de la entidad rectora o coordinadora del sector turismo, el área, oficina o dependencia con responsabilidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD). 2. Verificar si cuenta con un plan <i>ex-ante</i> aprobado formalmente para orientar el proceso de RC. 3. Determinar si el periodo de formulación es anterior a 5 años.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Que la entidad rectora o coordinadora del sector turismo haya formulado, en los últimos 5 años, un Plan <i>ex-ante</i> formalmente aprobado, que determine las acciones básicas y estratégicas que se deben realizar en caso de enfrentar un proceso de RC.</p> <p>NOTA: no debe confundirse este plan con un plan de emergencia o contingencia, o de operaciones en caso de desastre (de respuesta).</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Normalmente los sectores formulan este tipo de planes de forma <i>ex post</i>, sin embargo en este indicador se está indagando por la formulación <i>ex ante</i> de este tipo de instrumentos. Denota un nivel avanzado de responsabilidad en la gestión del riesgo de desastres del sector.</p> <p>No se identificaron ejemplos de condiciones positivas en la región. Como ejemplo hipotético algunos de los aspectos que podría incluir un plan de recuperación <i>ex ante</i> para el sector serían la identificación <i>ex ante</i> y creación de bases de datos de zonas turísticas con mayor riesgo, definición de protocolos para guiar y agilizar el restablecimiento de la infraestructura crítica que utiliza el sector y que pudiera ser afectada, incluyendo la creación de fuentes de empleo temporal (eventualmente en coordinación con otros ministerios), recuperación de ecosistemas vinculados al turismo (en coordinación con el sector ambiental) y el establecimiento <i>ex ante</i> de estrategias financieras para hacer frente a la recuperación.</p>

Código: RC 2-7**Pregunta de respuesta cerrada**

7. ¿Cuenta el Ministerio de Transporte (o entidad equivalente) con un Plan *ex ante* de recuperación post-desastre para su sector que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?

Descripción general del indicador

Este indicador busca establecer si la entidad rectora o coordinadora del sector transporte ha formulado y se ha aprobado formalmente, al menos en los últimos 5 años, un plan *ex-ante* de Recuperación Post-desastre (RC), en el ámbito de sus competencias.

El plan de recuperación podrá incluir entre otros aspectos: (i) el análisis de escenarios de daños, pérdidas y necesidades de recuperación potenciales para el sector, (ii) un plan de generación de capacidades (en base a los déficit de capacidades identificados en el análisis de los escenarios de recuperación), (iii) identificación de acuerdos interinstitucionales existentes y que deben elaborarse para la recuperación (incluyendo acuerdos con el sector privado), (iv) un plan de financiamiento de la recuperación (que incluirá herramientas de protección financiera pero también opciones de reorientación de presupuesto y programas) y (v) una guía operativa para la recuperación que establezca protocolos de acción generales para la recuperación y protocolos específicos para los escenarios considerados. Estos protocolos incluirán un esquema básico que facilite en el momento de la emergencia una rápida identificación e implementación ordenada de las acciones indispensables que se deben realizar.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Identificar dentro de la entidad rectora o coordinadora del sector transporte, el área, oficina o dependencia con responsabilidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD).
2. Verificar si cuenta con un plan *ex-ante* aprobado formalmente para orientar el proceso de RC.
3. Determinar si el periodo de formulación es anterior a 5 años.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Que la entidad rectora o coordinadora del sector transporte haya formulado, en los últimos 5 años, un Plan *ex-ante* formalmente aprobado, que determine las acciones básicas y estratégicas que se deben realizar en caso de enfrentar un proceso de RC.

NOTA: no debe confundirse este plan con un plan de emergencia o contingencia, o de operaciones en caso de desastre (de respuesta).

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

No se encontraron ejemplos de condiciones positivas en la región. Un ejemplo hipotético de cumplimiento sería que el sector transporte a partir de la información de tramos críticos de la red construyera escenarios de recuperación y sobre esta base planificara acciones *ex ante* de recuperación (definir preacuerdos con contratistas, soluciones progresivas...etc.).

Código: RC 2-8**Pregunta de respuesta cerrada**

8. ¿Cuenta el ente rector o coordinador del sector agua y saneamiento con un Plan *ex ante* de recuperación post desastre que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?

Descripción general del indicador

Este indicador busca establecer si la entidad rectora o coordinadora del sector agua y saneamiento ha formulado y se ha aprobado formalmente, al menos en los últimos 5 años, un plan *ex-ante* de Recuperación Post-desastre (RC), en el ámbito de sus competencias.

El plan de recuperación podrá incluir entre otros aspectos: (i) el análisis de escenarios de daños, pérdidas y necesidades de recuperación potenciales para el sector, (ii) un plan de generación de capacidades (en base a los déficit de capacidades identificados en el análisis de los escenarios de recuperación), (iii) identificación de acuerdos interinstitucionales existentes y que deben elaborarse para la recuperación (incluyendo acuerdos con el sector privado), (iv) un plan de financiamiento de la recuperación (que incluirá herramientas de protección financiera pero también opciones de reorientación de presupuesto y programas) y (v) una guía operativa para la recuperación que establezca protocolos de acción generales para la recuperación y protocolos específicos para los escenarios considerados. Estos protocolos incluirán un esquema básico que facilite en el momento de la emergencia una rápida identificación e implementación ordenada de las acciones indispensables que se deben realizar.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Identificar dentro de la entidad rectora o coordinadora del sector agua y saneamiento, el área, oficina o dependencia con responsabilidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD).
2. Verificar si cuenta con un plan *ex-ante* aprobado formalmente para orientar el proceso de RC.
3. Determinar si el periodo de formulación es anterior a 5 años.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Que la entidad rectora o coordinadora del sector agua y saneamiento haya formulado, en los últimos 5 años, un Plan *ex-ante* formalmente aprobado, que determine las acciones básicas y estratégicas que se deben realizar en caso de enfrentar un proceso de RC.

NOTA: no debe confundirse este plan con un plan de emergencia o contingencia, o de operaciones en caso de desastre (de respuesta).

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Normalmente los sectores formulan este tipo de planes de forma *ex post*, sin embargo en este indicador se está indagando por la formulación *ex ante* de este tipo de instrumentos. Denota un nivel avanzado de responsabilidad en la gestión del riesgo de desastres del sector.

No se identificaron ejemplos de condiciones positivas en la región. Como ejemplo hipotético algunos de los aspectos que podría incluir un plan de recuperación *ex ante* para el sector serían (i) identificar el costo de la recuperación de la infraestructura expuesta que por su nivel de vulnerabilidad se prevé que podría verse afectada severamente en un escenario de desastre factible; (ii) identificar cuáles serían las acciones básicas para efectuar un proceso de recuperación con transformación de los puntos críticos; (iii) definición de protocolos para guiar y agilizar el restablecimiento de la infraestructura afectada (iv) estrategias para dotar de agua y saneamiento a la población en soluciones transitorias de vivienda; y (v) definir estrategias de financiamiento requeridas.

Código: RC 2-9**Pregunta de respuesta cerrada**

9. ¿Cuenta el ente rector o coordinador del sector telecomunicaciones con un Plan *ex ante* de recuperación post desastre que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?

Descripción general del indicador

Este indicador busca establecer si la entidad rectora o coordinadora del sector telecomunicaciones ha formulado y se ha aprobado formalmente, al menos en los últimos 5 años, un plan *ex-ante* de Recuperación Post-desastre (RC), en el ámbito de sus competencias.

El plan de recuperación podrá incluir entre otros aspectos: (i) el análisis de escenarios de daños, pérdidas y necesidades de recuperación potenciales para el sector, (ii) un plan de generación de capacidades (en base a los déficit de capacidades identificados en el análisis de los escenarios de recuperación), (iii) identificación de acuerdos interinstitucionales existentes y que deben elaborarse para la recuperación (incluyendo acuerdos con el sector privado), (iv) un plan de financiamiento de la recuperación (que incluirá herramientas de protección financiera pero también opciones de reorientación de presupuesto y programas) y (v) una guía operativa para la recuperación que establezca protocolos de acción generales para la recuperación y protocolos específicos para los escenarios considerados. Estos protocolos incluirán un esquema básico que facilite en el momento de la emergencia una rápida identificación e implementación ordenada de las acciones indispensables que se deben realizar.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Identificar dentro de la entidad rectora o coordinadora del sector telecomunicaciones, el área, oficina o dependencia con responsabilidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD).
2. Verificar si cuenta con un plan *ex-ante* aprobado formalmente para orientar el proceso de RC.
3. Determinar si el periodo de formulación es anterior a 5 años

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Que la entidad rectora o coordinadora del sector telecomunicaciones haya formulado, en los últimos 5 años, un Plan *ex-ante* formalmente aprobado, que determine las acciones básicas y estratégicas que se deben realizar en caso de enfrentar un proceso de RC.

NOTA: no debe confundirse este plan con un plan de emergencia o contingencia, o de operaciones en caso de desastre (de respuesta).

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Normalmente los sectores formulan este tipo de planes de forma *ex post*, sin embargo en este indicador se está indagando por la formulación *ex ante* de este tipo de instrumentos. Denota un nivel avanzado de responsabilidad en la gestión del riesgo de desastres del sector.

No se identificaron ejemplos de condiciones positivas en la región. Como ejemplo hipotético algunos de los aspectos que podría incluir un plan de recuperación *ex ante* para el sector serían: (i) identificar el costo de la recuperación de la infraestructura expuesta que por su nivel de vulnerabilidad se prevé que podría verse afectada severamente en un escenario de desastre factible; (ii) identificar cuáles serían las acciones básicas para efectuar un proceso de recuperación con transformación de los puntos críticos; (iii) definición de protocolos para guiar y agilizar el restablecimiento de la infraestructura afectada; y (iv) definir estrategias de financiamiento requeridas.

Pregunta de respuesta cerrada
10. ¿Cuenta el ente rector o coordinador del sector energía con un Plan <i>ex ante</i> de recuperación post desastre que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?
Descripción general del indicador
<p>Este indicador busca establecer si la entidad rectora o coordinadora del sector energía ha formulado y se ha aprobado formalmente, al menos en los últimos 5 años, un plan <i>ex-ante</i> de Recuperación Post-desastre (RC), en el ámbito de sus competencias.</p> <p>El plan de recuperación podrá incluir entre otros aspectos: (i) el análisis de escenarios de daños, pérdidas y necesidades de recuperación potenciales para el sector, (ii) un plan de generación de capacidades (en base a los déficit de capacidades identificados en el análisis de los escenarios de recuperación), (iii) identificación de acuerdos interinstitucionales existentes y que deben elaborarse para la recuperación (incluyendo acuerdos con el sector privado), (iv) un plan de financiamiento de la recuperación (que incluirá herramientas de protección financiera pero también opciones de reorientación de presupuesto y programas) y (v) una guía operativa para la recuperación que establezca protocolos de acción generales para la recuperación y protocolos específicos para los escenarios considerados. Estos protocolos incluirán un esquema básico que facilite en el momento de la emergencia una rápida identificación e implementación ordenada de las acciones indispensables que se deben realizar.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar dentro de la entidad rectora o coordinadora del sector energía, el área, oficina o dependencia con responsabilidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD). 2. Verificar si cuenta con un plan <i>ex-ante</i> aprobado formalmente para orientar el proceso de RC. 3. Determinar si el periodo de formulación es anterior a 5 años
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Que la entidad rectora o coordinadora del sector energía haya formulado, en los últimos 5 años, un Plan <i>ex-ante</i> formalmente aprobado, que determine las acciones básicas y estratégicas que se deben realizar en caso de enfrentar un proceso de RC</p> <p>NOTA: no debe confundirse este plan con un plan de emergencia o contingencia, o de operaciones en caso de desastre (de respuesta).</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Normalmente los sectores formulan este tipo de planes de forma <i>ex post</i>, sin embargo en este indicador se está indagando por la formulación <i>ex ante</i> de este tipo de instrumentos. Denota un nivel avanzado de responsabilidad en la gestión del riesgo de desastres del sector.</p> <p>No se identificaron ejemplos de condiciones positivas en la región. Como ejemplo hipotético algunos de los aspectos que podría incluir un plan de recuperación <i>ex ante</i> para el sector serían: (i) identificar el costo de la recuperación de la infraestructura expuesta que por su nivel de vulnerabilidad se prevé que podría verse afectada severamente en un escenario de desastre factible; (ii) identificar cuáles serían las acciones básicas para efectuar un proceso de recuperación con transformación de los puntos críticos; (iii) definición de protocolos para guiar y agilizar el restablecimiento de la infraestructura afectada; y (iv) definir estrategias de financiamiento requeridas.</p>

Código: RC 3-1

Pregunta de respuesta cerrada
<i>1. ¿Existe normatividad que establezca mecanismos de participación de la sociedad civil o de organizaciones sociales y no gubernamentales en la recuperación post-desastre?</i>
Descripción general del indicador
<p>La Recuperación Post-desastre (RC) implica uno de los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastre (GRD) de mayor complejidad y costo político, pues generalmente las comunidades afectadas demandan prontitud en el restablecimiento de las condiciones de desarrollo.</p> <p>La comunicación y la participación de la sociedad civil o de organizaciones sociales y no gubernamentales en la RC se considera una buena práctica porque permite orientar la acción del estado hacia las necesidades más acuciantes de la población damnificada. Además, permite hacer de público conocimiento los esfuerzos que el estado viene desarrollando y mitiga, al menos parcialmente, el posible descontento que puede suscitar la recuperación en caso de desastres.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad que regula los procesos de RC y también la normatividad que regula la GRD en general. 2. Determinar si en dicha normatividad se establecen mecanismos de participación de la sociedad civil o de organizaciones sociales y no gubernamentales en la RC.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Debe identificarse normatividad que establezca mecanismos de participación de la sociedad civil o de organizaciones sociales y no gubernamentales en la RC.</p> <p>NOTA: los mecanismos de participación pueden ser: redes sociales, foros de comunicación y participación, etc.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Colombia: En Colombia existen mecanismos habilitados para la participación social y comunitaria en asuntos gubernamentales (Ley 472 de 1998 sobre "acciones populares", Ley 850 de 2003 sobre "Veedurías Ciudadanas", Ley 393 de 1997 sobre "Acciones de Cumplimiento de Actos Administrativos", Ley 134 de 1994 sobre "iniciativa popular legislativa y normativa, referendo, consulta popular, revocatoria del mandato, plebiscito y cabildo abierto"). Todos estos mecanismos son aplicables a la gestión del riesgo de desastres, no obstante no hacen una referencia directa a la GRD en su articulado. La condición se cumple parcialmente a través del Decreto 267 de 2000, por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones, en el numeral 8 del artículo 55, se establece que son funciones de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana: <i>"Promover un especial seguimiento, con el apoyo de las demás contralorías delegadas, a los recursos estatales destinados a la participación ciudadana, a las emergencias y a los desastres"</i>. Posteriormente, con la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, se cumple plenamente la condición pues esta norma establece en el Artículo 3, numeral 5, el "Principio participativo"; definido como: <i>"Es deber de las autoridades y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, reconocer, facilitar y promover la organización y participación de comunidades étnicas, asociaciones cívicas, comunitarias, vecinales, benéficas, de voluntariado y de utilidad común. Es deber de todas las personas hacer parte del proceso de gestión del riesgo en su comunidad"</i>.</p> <p>Costa Rica: La Ley N° 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, del 27 de octubre de 2005, establece precisamente como finalidad de la ley en su artículo 2o. el establecer un marco jurídico que permita definir e integrar los esfuerzos y las funciones del Gobierno Central, las instituciones</p>

descentralizadas, las empresas públicas, los gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil organizadas que participen en la prevención y atención de los impactos negativos de sucesos que sean consecuencia de fuerza mayor o caso fortuito, y considera en su Artículo 6o. la constitución del Sistema Nacional que debe procurar esa participación de la sociedad, a través de los diferentes subsistemas creados por la ley y definidos en su Reglamento. Debe precisarse que el artículo 10o. refiere para la coordinación de la gestión del riesgo y la atención a emergencias la creación de comités y en el marco de los comités regionales, municipales y comunales de emergencias, del inciso c) establece la participación de las organizaciones dentro de éstos comités, de las que se definirá su representación por medio de la autoridad interna de cada una de ellas. Finalmente el Artículo 33 de la misma ley establece una coordinación obligatoria interinstitucional para las instituciones públicas y admite la colaboración de los particulares y las organizaciones que voluntariamente colaboren al desarrollo de actividades con la CNE, a quien le brinda el mando y la obligación de coordinar en el proceso de atención y reconstrucción tras la emisión de la declaratoria.

República Dominicana: La Ley No. 147-02, Sobre Gestión de Riesgos, del 22 de Septiembre del 2002, considera la participación de la sociedad civil y de organizaciones sociales y no gubernamentales en los Comités de preparación, mitigación y reducción en cada uno de los diferentes niveles territoriales y dichos comités son los responsables de involucrarse en la recuperación, según lo que se indica en: *"Artículo 24. Plan de Acción Específico para la Atención y Recuperación Post-desastre: Declarada una situación de desastre y activado el Plan Nacional de Emergencias, la Comisión Nacional de Emergencia procederá a elaborar un plan de acción específico para el retorno a la normalidad, la recuperación y la reconstrucción de las áreas afectadas, que será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en el decreto de declaratoria, y sus modificaciones. Cuando se trate de situaciones calificadas como regionales, provinciales o municipales, el plan de acción específico será elaborado y coordinado en su ejecución por el Comité Provincial o Municipal respectivo, de acuerdo con las orientaciones establecidas en el decreto de declaratoria o en los que lo modifiquen, y con las instrucciones que impartan el Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, los Comités Técnico y Operativo y la Comisión Nacional de Emergencia. Párrafo I. Cuando una situación de desastre sea calificada como Regional o Provincial, las actividades y operaciones de los Comités Locales y de las autoridades municipales, se subordinarán a la dirección, coordinación y control del Gobernador Regional o Provincial, la Defensa Civil y el Presidente de la Cruz Roja Local en desarrollo de las directrices trazadas por el respectivo Comité Provincial".*

Código: RC 3-2

Pregunta de respuesta cerrada
2. <i>¿El ente nacional de control ha realizado al menos una evaluación sobre la gestión del gobierno en la recuperación en alguna de las últimas 5 situaciones de desastre de gran magnitud declarados por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional?</i>
Descripción general del indicador
<p>Este indicador busca detectar la participación de la entidad nacional de control o quien haga sus veces, en relación con los procesos de RC en alguna de las últimas 5 situaciones de desastre de gran magnitud declarados por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional.</p> <p>Es un indicador de desempeño ya que no se pregunta por una norma como tal, sino por una actuación específica de la entidad nacional de control.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Establecer contacto con la entidad nacional de control, con la entidad rectora de la GRD o con la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas (o equivalente). 2. Indagar por la realización de al menos una evaluación del proceso de RC por parte de esta entidad en alguna de las últimas 5 situaciones de desastre declaradas por el nivel nacional o en las que se solicitó ayuda internacional.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Se deberá verificar un documento de la entidad nacional de control en el que se evalúe la gestión del gobierno en la RC en alguna de las últimas 5 situaciones de desastre de gran magnitud declarados por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: En el año 2007, la Contraloría General de la República aprobó la Directiva N° 02-2007-CG/CA, para el ejercicio del Control Preventivo del Sistema Nacional de Control ante una Declaración de Estado de Emergencia por Catástrofe, del 21 de agosto de 2007. Esta normatividad aplica para procesos <i>ex-post</i>. En el año 2010 se aplicó esta directiva al caso del sismo de agosto de 2007, el análisis incluyó una veeduría al FORSUR y los programas sociales en el contexto de la recuperación posterior al desastre. De estas veedurías surgieron importantes recomendaciones, una de ellas dirigida al Presidente del Consejo de Ministros solicitó revisar la normativa en GRD del país. En este mismo contexto, la Contraloría realizó una evaluación sobre el uso de los fondos públicos. Actualmente en el Congreso hay una comisión investigadora sobre el uso de los fondos en ese desastre. En los casos de desastres regionales, como en Cusco 2010, personal de la contraloría visitó, revisó documentación y entrevistó sobre si la ayuda humanitaria estaba llegando a las zonas y si el gobierno regional tuvo un plan de emergencia. No hubo una evaluación posterior sobre la recuperación post-desastre.</p> <p>Costa Rica: El Informe N° DFOE-PGAA-IF-17-2010, Informe Acerca de Limitaciones que Presenta la Gestión de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) en la Coordinación, Supervisión y Control de la Atención de las Emergencias en las Fases de Rehabilitación y Reconstrucción, del 15 de julio de 2010, determina en su página 4 que el alcance del informe que el estudio realizado abarcó las actividades de coordinación, supervisión y control desarrolladas por la CNE en el proceso de atención de los Decretos de Emergencia vigentes, conforme a la normativa que rige sobre esta materia.</p> <p>México: La Cuenta Pública del Ejercicio fiscal del año 2007, en el numeral III.1.1.5.6. correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, resume la Auditoría: 07-0-06100-02-0517 practicada al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) sobre los Procedimientos Generales para la Autorización, Radicación y Ejercicio de los Recursos Federales-Tabasco y Chiapas, con el objetivo de “<i>Fiscalizar la gestión financiera de los mecanismos de control interno y procedimientos para la autorización, radicación, ejercicio y rendición de cuentas del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, en la atención de los daños ocasionados por los fenómenos naturales, y su aplicación en los estados de Tabasco y Chiapas</i>”. Las inundaciones que afectaron a los estados de Tabasco y Chiapas a finales de octubre de 2007 fueron los últimos casos en que el Gobierno de México solicitó apoyo internacional y el alcance de la auditoría mencionada incluyó las acciones de recuperación relacionadas con esta emergencia.</p>

Código: RC 3-3

Pregunta de respuesta cerrada
3. ¿En al menos una de las últimas 5 situaciones de desastre declaradas por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional, se ha activado algún mecanismo de información a la población afectada sobre la recuperación?
Descripción general del indicador
<p>Este indicador sigue la misma lógica del anterior, y es asimismo un indicador de desempeño pues no indaga por la normatividad sino por una condición de implementación específica que puede ser verificada en el país.</p> <p>Los mecanismos de comunicación pueden en este caso estar definidos o no por una normatividad específica.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Establecer las 5 últimas situaciones de desastre declaradas por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional. 2. Determinar si al menos en alguna de dichas ocasiones se ha activado algún mecanismo de información a la población afectada sobre la recuperación.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Deberá verificarse de forma objetiva (comprobable) si en al menos una de las últimas 5 situaciones de desastre declaradas por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional, se ha activado algún mecanismo de información a la población afectada sobre la recuperación.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Colombia: a partir de la declaratoria de Emergencia Social, Económica y Ambiental, a raíz de las inundaciones asociadas con intensas lluvias en el contexto del Fenómeno de La Niña ocurrido entre 2010 y 2011, el Gobierno Nacional establece una serie de procedimientos de respuesta, entre ellos la creación del “Fondo Adaptación” diseñado y programado para la recuperación de las áreas afectadas. Desde su creación, el Fondo ha establecido un canal de comunicación y transparencia institucional en un sitio web donde permanentemente se está divulgando todo tipo de actividades que se realizan con cargo a los recursos de la reconstrucción. (Ver: http://fondoadaptacion.gov.co/). Además cuenta con una plataforma para la suscripción en tiempo real del boletín semanal de la reconstrucción.</p> <p>México: La Ley General de Protección Civil (LGPC) ha estipulado en su artículo 5 que las autoridades de Protección Civil, deberán actuar con base en una serie de principios, entre los que se resalta el de Publicidad (fracción IV) ,que se refiere a que en todo momento se deberán estar dando a conocer a la población las acciones en materia de protección civil. Esta responsabilidad para la comunicación con la población en general, y la afectada en particular, se materializa en las páginas de las instancias de protección civil de los diferentes niveles, federal, estatales y municipales. Se proporciona como verificable el portal electrónico del FONDEN "RECONSTRUCCIÓNMX TRANSPARENCIA EN LAS ACCIONES DE RESPUESTA A LOS DESASTRES NATURALES", donde se incluye información detallada sobre las acciones de recuperación en todas las emergencias declaradas en el territorio mexicano.</p> <p>Guatemala: Se encontró evidencia que la CONRED informa por medio de la emisión de boletines en su página de internet sobre los avances en los procesos de recuperación. Como ejemplo se encuentra el Boletín Informativo No. 3406 (RC-3-3a) emitido por la CONRED el 7 de noviembre de 2013, informando sobre las acciones de reconstrucción en las zonas afectadas por el Terremoto de San Marcos, que afectó esa zona del país el 7 de noviembre de 2012.</p> <p>Chile: Con motivo del sismo ocurrido en Chile el 27 de febrero de 2010, el Gobierno de la República creó un portal disponible en la Red, con el propósito de difundir la información relativa a los planes y a los avances de la reconstrucción, y una línea telefónica específica para brindar información a la ciudadanía. Página web del Gobierno Bitácora de la Reconstrucción http://minvu.cl/opensite_20111111140833.aspx</p>

Código: RC 3-4

Pregunta de respuesta cerrada
4. ¿En al menos una de las últimas 5 situaciones de desastre declaradas por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional, se ha activado algún mecanismo de participación comunitaria para la recuperación?
Descripción general del indicador
<p>Este indicador sigue la misma lógica del anterior, y es asimismo un indicador de desempeño pues no indaga por la normatividad sino por una condición de implementación específica que puede ser verificada en el país.</p> <p>Los mecanismos de participación pueden en este caso estar definidos o no por una normatividad específica.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Establecer las 5 últimas situaciones de desastre declaradas por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional. 2. Determinar si al menos en una oportunidad se ha activado algún mecanismo de participación para la población afectada sobre la recuperación.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Deberá verificarse de forma objetiva (comprobable) si en al menos una de las últimas 5 situaciones de desastre declaradas por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional, se ha activado algún mecanismo de participación de la población afectada en el proceso de recuperación.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Colombia: En relación a la Emergencia Nacional declarada en 2010 por la llamada "Ola Invernal" (afectación por el Fenómeno de La Niña); en Colombia se instauró como mecanismo para la reconstrucción el Fondo Adaptación (FA); según el último Informe de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2011 - 2012, se tiene que "... el 100% de las regiones que serán intervenidas se han visitado para socializar los proyectos..." (Pág. 23). NOTA: El FA cuenta con un manual de procedimientos aprobado formalmente en el que se incluye como una de las estrategias institucionales la "Participación comunitaria", y se consideran las siguientes líneas de acción: (i) atender de manera integral las regiones afectadas, (ii) atender, acompañar, capacitar, promover el desarrollo con las comunidades beneficiarias de las intervenciones para garantizar sostenibilidad, (iii) identificar y articular los diferentes actores regionales y (iv) implementar mecanismos de comunicación de doble vía.</p> <p>Costa Rica: El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y Ministerio de Salud. Sistematización: Proceso de atención y reubicación de la población de Cinchona, afectada por el terremoto 2009. Punto 4.2 Lecciones Aprendidas: un 79% de los actores consultados en el proceso de sistematización del proceso, expresa que una de las principales fortalezas es la participación comunal e intervención de líderes en el proceso de atención y reubicación de la población afectada hacia Nueva Cinchona. Además, se llevó a cabo un proceso de involucramiento de los beneficiarios en la construcción de infraestructura como forma de crear las bases para el arraigo territorial.</p> <p>Chile: A raíz del terremoto/tsunami que afectó al país en 27 Febrero 2010, la Municipalidad de Constitución, con el apoyo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y otras instituciones locales llevaron adelante el PRES Constitución (Plan de Reconstrucción Sustentable de Constitución) el cual estaba enfocado a lograr la participación comunitaria en el proceso de reconstrucción de la ciudad.</p>

Pregunta de respuesta cerrada

1. ¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece fondos a nivel nacional para financiar gastos emergentes en situaciones de desastres?

Descripción general del indicador

La GRD, por la dimensión y naturaleza de su universo, el grado de incertidumbre que maneja, los valores y el patrimonio que tutela, requiere necesariamente de la viabilidad financiera posible y de los instrumentos que hagan falta para su funcionamiento. Es entonces importante que la normatividad nacional que regula a la GRD disponga la creación, regulación y capitalización de fondos o mecanismos financieros que permitan suministrar recursos para los gastos emergentes y las necesidades generadas a partir de la ocurrencia de los desastres. Este indicador reconoce el criterio de calidad para la GRD, que significa la existencia de fondos que sean nacionales y que tengan la máxima capacidad posible para atender las situaciones de desastre.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Revisar la normatividad nacional que regula la GRD en el país.
2. Verificar si de manera explícita se hace referencia a la creación de fondos o mecanismos equivalentes, del orden nacional, para financiar los gastos emergentes a atender, ante la ocurrencia de situaciones de desastres. Estos fondos pueden ser: fondos de reservas, calamidades, emergencias o fondos de desastres, entre otras denominaciones.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

La disposición en la normatividad nacional que regula la GRD en el país, para establecer fondos o mecanismos creados para financiar gastos emergentes en situaciones de desastres.

Cabe mencionar que la condición es positiva si los mecanismos se establecen en la norma que regula la GRD. Si son normas diversas no se considerará una condición positiva de este indicador.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Perú: El Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), fue creado mediante la Ley N° 27245 de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, que con Decreto Supremo N° 066-2009-EF, del 24 de marzo del 2009, se aprobó su Texto Único Ordenado. El FEF se creó con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las cuentas fiscales ante eventos adversos como caída súbita en los ingresos o emergencias nacionales, en el literal b del numeral 8.1 se estipula que *"los recursos del FEF sólo podrán ser utilizados... b) En las situaciones de excepción previstas en el Artículo 5 de la presente Ley"*. En dicho artículo 5, concretamente el numeral 5.1, señala las reglas de excepción: *"En casos de emergencia nacional... que puedan afectar seriamente la economía nacional..."*.

México: La Ley General de Protección Civil (LGPC), del 6 de junio de 2012, es el sustento jurídico, programático y presupuestal del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y el Fondo Para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN). A partir de 1996 se constituyó el Programa Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, dentro del Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación, con el propósito de atender de manera eficaz y oportuna los daños ocasionados a la infraestructura física pública no asegurable de los Gobiernos Federal, estatal y municipal. Este fondo fue recogido por la LGPC, la cual en su artículo 7 establece: *"Corresponde al Ejecutivo Federal... III. Contemplar en el PEF de cada ejercicio fiscal, recursos para el óptimo funcionamiento y operación de los instrumentos financieros de gestión de riesgos a que se refiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de promover y apoyar la realización de acciones de orden preventivo; así como las orientadas tanto al auxilio de la población en situaciones de emergencia, como la atención de los daños provocados por los desastres de origen natural"*.

Costa Rica: La Ley N° 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, del 27 de octubre de 2005, establece en su Artículo 43 la creación del Fondo Nacional de Emergencias y ordena: *"Créase el Fondo Nacional de Emergencias, destinado para atender y enfrentar las situaciones de emergencia, prevención y mitigación..."*.

Pregunta de respuesta cerrada
2. ¿La normatividad nacional establece el porcentaje anual de recursos a asignarse a los fondos a nivel nacional habilitados para gastos emergentes en situaciones de desastres?
Descripción general del indicador
La constitución de fondos destinados a suministrar recursos para gestionar desastres es sin duda un paso importante, pero no es suficiente. Se considera deseable que la normativa nacional que regula la GRD, u otra relacionada con el presupuesto y las finanzas públicas nacionales, fije en sus preceptos un porcentaje o parámetro sobre los recursos que se deban asignar al fondo o los fondos establecidos para sufragar los gastos emergentes provocados por las situaciones de desastre. Lo anterior, proporciona a estos fondos fortaleza y certidumbre, y así les facilita asegurar su permanencia y el cumplimiento de sus objetivos.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar la normatividad que regula la GRD en el país y verificar si de manera explícita se hace referencia a la creación de fondos o mecanismos equivalentes, del orden nacional, que puedan financiar los gastos de atención de emergencias por desastres. 2. Indagar, en caso, en esa normativa nacional o en la relacionada con el presupuesto nacional o las finanzas públicas, si de manera explícita se establece un porcentaje o parámetro de recursos que deben asignarse al fondo o mecanismo equivalente. Estos fondos pueden ser: fondos de reservas, calamidades, emergencias o fondos de desastres, entre otras denominaciones.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Que la normatividad nacional de GRD, o alguna otra en materia de finanzas públicas o el presupuesto mismo, establezcan la definición de un porcentaje o parámetro sobre los recursos que deben ser asignados al fondo o mecanismo equivalente.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Costa Rica: La Ley N° 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, del 27 de octubre de 2005, establece en su Artículo 46 que <i>"Todas las instituciones de la Administración central, la Administración Pública descentralizada y las empresas públicas, girarán a la Comisión un tres por ciento (3%) de las ganancias y del superávit presupuestario acumulado, libre y total, que cada una de ellas reporte, el cual será depositado en el Fondo Nacional de Emergencias, para el financiamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo..."</i>.</p> <p>México: La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Financiera, del 30 de marzo de 2006, define el porcentaje sobre el gasto programable dentro del Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal los fondos nacionales habilitados para previsión y gestión de desastres: <i>"Artículo 37. En el proyecto de Presupuesto de Egresos deberán incluirse las previsiones para el Fondo para la Prevención de Desastres así como para el Fondo de Desastres, y el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, con el propósito de constituir reservas para, respectivamente, llevar a cabo acciones preventivas o atender oportunamente los daños ocasionados por fenómenos naturales. Las asignaciones en el Presupuesto de Egresos para estos fondos, sumadas a las disponibilidades existentes en las reservas correspondientes, en su conjunto no podrán ser inferiores a una cantidad equivalente al 0.4 por ciento del gasto programable. La aplicación de los recursos de los Fondos se sujetará a las respectivas reglas de operación"</i>.</p>

Código: PF 1A-3

Pregunta de respuesta cerrada
3. <i>¿Existe normatividad que establezca la formulación de una estructura de retención y transferencia del riesgo de desastres en el país?</i>
Descripción general del indicador
<p>Para efectos de que el desarrollo e implementación de una estructura de gestión financiera del riesgo de desastres sea sostenible se requiere de una norma que establezca como mandato su desarrollo.</p> <p>Por estructura de retención y transferencia del riesgo de desastres se entiende una combinación óptima de instrumentos de retención y transferencia del riesgo, de acuerdo a las capas a cubrir (eventos recurrentes y no recurrentes) y los costos asociados.</p> <p>No se está haciendo referencia a la normatividad referente a la obligatoriedad de cubrir los activos públicos a través de pólizas de seguros.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar el marco normativo sobre la gestión de las obligaciones contingentes. 2. Revisar las normas de manuales de funciones de áreas de la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas (o entidad equivalente). 3. Revisar la norma nacional que rige la GRD. 4. Revisar la normatividad que regula los planes o programas nacionales de GRD. 5. Revisar la normatividad nacional que regula la planificación del desarrollo en el país. 6. Consultar el tema con la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas (o entidad equivalente). 7. Consultar el tema con la entidad rectora de la GRD. <p>Nota: no es necesario que la norma llegue al nivel de detalle de mencionar retención y transferencia o instrumentos <i>ex-ante</i> y <i>ex-post</i>. Bastaría con que haga mención a la formulación de una estructura de protección o gestión financiera del riesgo de desastres.</p>
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>La vigencia de alguna normativa nacional que mencione como meta la formulación de una estructura de retención y transferencia del riesgo de desastres en el país, o en su defecto, una estructura protección o de gestión financiera del riesgo de desastres.</p> <p>No se considera como condición positiva la normatividad referente a la obligatoriedad de cubrir los activos públicos a través de pólizas de seguros.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: El Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado por la Resolución Ministerial No. 223-2011-EF43, del 30 de marzo de 2011, dispone en el artículo 109 las funciones de la Dirección de Gestión de Riesgos. Lo anterior es consecuente con la Ley N° 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), del 18 de febrero de 2011. El literal b, del artículo 19 establece que las herramientas de SINAGERD incluyen una estrategia financiera para gestionar el riesgo debido a la ocurrencia de desastres generados por fenómenos naturales, la cual debe ser elaborada por el MEF.</p> <p>Panamá: El indicador se cumple parcialmente mediante el Decreto Ejecutivo No.110, del 4 de agosto de 2009, que crea la Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado (DICRE) adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, y se adoptan medidas de eficiencia administrativa, en cuyo artículo 2, incisos 7 y 8, relativo a las funciones de esa Dirección, se dispone la de revisar y recomendar a su superior la política en materia de riesgos, seguros y fianzas, además de verificar que los bienes nacionales estén cubiertos por un "...moderno sistema de administración de riesgos...". El indicador se cumple plenamente a través del Decreto Ejecutivo No. 479, de 22 de noviembre de 2011, que adiciona los numerales 10, 11, 12 y 13 al artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 110 de 4 de agosto de 2009, que trae responsabilidades adicionales en materia de gestión financiera del riesgo de desastres a la DICRE, al introducir en los artículos 10 y 11 la especificidad respecto de la transferencia de riesgos, y además, aunque vagamente, la condición de retención de riesgos.</p> <p>Jamaica: El Plan Nacional de Desarrollo: Visión 2030, aprobado en 2010, en su Capítulo 3: Resultado Nacional No. 14 – Reducción del Riesgo a Amenazas y Adaptación al Cambio Climático, incluye entre las estrategias sectoriales seleccionadas la de “<i>Crear e Introducir Instrumentos Económicos y Financieros de Mercado para la Transferencia del riesgo</i>”.</p>

Pregunta de respuesta cerrada
4. <i>¿La normatividad que regula las provisiones técnicas del sector asegurador establece que la estimación de reservas de riesgo catastrófico para bienes de características no homogéneas/especiales está sustentada en modelos de evaluación probabilista del riesgo definidos o certificados por el ente regulador del sector?</i>
Descripción general del indicador
<p>Los bienes de características no homogéneas/especiales corresponden a riesgos con características muy diferentes, tales como sistemas de acueductos y alcantarillado e infraestructura petrolera.</p> <p>Para efectos de asegurar que las aseguradoras tengan los recursos necesarios para responder en caso de ocurrencia de un desastre, se requiere que las reservas se estimen teniendo en cuenta modelos de evaluación probabilista del riesgo, los cuales deben estar certificados por el ente regulador del sector. Adicionalmente, deben tener en cuenta las características particulares de los riesgos.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar la normatividad que regula las provisiones técnicas del sector asegurador. 2. Revisar que la norma estipule que las provisiones técnicas del sector asegurador se deben establecer teniendo en cuenta modelos de evaluación probabilista. 3. Identificar que la norma hace referencia a la estimación de reservas para bienes de características no homogéneas/especiales (o equivalentes). 4. Revisar la página web del ente de supervisión del mercado de seguros. 5. Consultar al ente supervisor del mercado de seguros.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
La normatividad que regula las provisiones técnicas del sector asegurador debe señalar de manera explícita que las reservas para los bienes de características no homogéneas/especiales (o equivalentes) deben estimarse mediante modelos de evaluación probabilista del riesgo definidos o certificados por el ente regulador del sector asegurador.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: Mediante Resolución de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (S.B.S.) N° 1305 -2005, que aprueba el Reglamento para la Constitución de la Reserva de Riesgos Catastróficos y de Siniestralidad Incierta, del 19 de agosto de 2005, la SBS estableció que las empresas de seguros deben efectuar un estudio que permita calcular la Pérdida Máxima Probable (PML) sobre la cual se determinarán las coberturas catastróficas mínimas requeridas para el mercado nacional. Lo anterior se estipula en el artículo 3. <i>"Las empresas constituirán mensualmente la reserva catastrófica como la sumatoria de los siguientes componentes: a) El monto equivalente al producto del PML determinado de conformidad con la Nota Técnica por el Monto Total Expuesto de los edificios y naves industriales. b) El importe de la pérdida máxima esperada de estructuras especiales diferentes a edificios y naves industriales"</i>. Es decir, la estimación de reservas para bienes no homogéneos debe estar soportada en modelos de evaluación probabilista del riesgo. Cabe mencionar, que aún no se ha elaborado la nota técnica respectiva para estructuras especiales diferentes a edificios y naves especiales, por lo cual la estimación de reservas está soportada en la estimación del PML de edificios y naves industriales.</p> <p>México: La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) manifestó que en México, independiente de si el bien es homogéneo o no homogéneo se aplica el mismo modelo. En el Capítulo 7.2. de la Circular Única de Seguros, De las bases técnicas para la valuación de la reserva de riesgos en curso y de la Perdida Máxima Probable de los seguros de terremoto, se establece <i>"Para efectos del cálculo de la Pérdida Máxima Probable que se utilizará para determinar el requerimiento de solvencia y el límite de la reserva de riesgos catastróficos de los seguros de terremoto, se deberá observar lo siguiente: La Pérdida Máxima Probable se determinará mensualmente aplicando las bases técnicas que se indican en el Anexo 7.2.1 y mediante el sistema de cómputo "Sistema R®" que será proporcionado por la Comisión, conforme a lo indicado en el Anexo 7.2.2"</i>. Con relación al Anexo 7.2.1., referente a las Bases técnicas para la determinación de la prima de riesgo y la Perdida Máxima Probable de los seguros de terremoto, la CNSF manifestó que la descripción de dicho modelo corresponde a un modelo probabilista. Dicho modelo se aplica para bienes de características no homogéneas.</p>

Código: PF 1A-5

Pregunta de respuesta cerrada
5. <i>¿La normatividad que regula las provisiones técnicas del sector asegurador establece que la estimación de reservas de riesgo catastrófico para bienes de características homogéneas/uniformes está sustentada en modelos de evaluación probabilista del riesgo definidos o certificados por el ente regulador del sector?</i>
Descripción general del indicador
<p>Los bienes de características homogéneas/uniformes corresponden a bienes con las mismas características físicas, por ejemplo edificios de oficinas, de concreto y con una antigüedad de 10 años.</p> <p>Para efectos de asegurar que las aseguradoras tengan los recursos necesarios para responder en caso de ocurrencia de un desastre, se requiere que las reservas se estimen teniendo en cuenta modelos de evaluación probabilista del riesgo, los cuales deben estar certificados por el ente regulador del sector. Adicionalmente, deben tener en cuenta las características particulares de los riesgos.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar la normatividad que regula las provisiones técnicas del sector asegurador. 2. Revisar que la norma estipule que las provisiones técnicas del sector asegurador se deben establecer teniendo en cuenta modelos de evaluación probabilista. 3. Identificar que la norma haga referencia a la estimación de reservas para bienes de características homogéneas/uniformes. 4. Revisar la página web del ente de supervisión del mercado de seguros. 5. Consultar al ente supervisor del mercado de seguros.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
La normatividad que regula las provisiones técnicas del sector asegurador debe señalar de manera explícita que las reservas para los bienes de características homogéneas/uniformes deben estimarse mediante modelos de evaluación probabilista del riesgo definidos o certificados por el ente regulador del sector asegurador.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: Mediante Resolución de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (S.B.S.) N° 1305 -2005, que aprueba el Reglamento para la Constitución de la Reserva de Riesgos Catastróficos y de Siniestralidad Incierta, de 19 de agosto de 2005, la SBS estableció que las empresas de seguros deben efectuar un estudio que permita calcular la Pérdida Máxima Probable (PML) sobre la cual se determinarán las coberturas catastróficas mínimas requeridas para el mercado nacional. Lo anterior se estipula en el Artículo 3 <i>"Las empresas constituirán mensualmente la reserva catastrófica como la sumatoria de los siguientes componentes: a) El monto equivalente al producto del PML determinado de conformidad con la Nota Técnica por el Monto Total Expuesto de los edificios y naves industriales. b) El importe de la pérdida máxima esperada de estructuras especiales diferentes a edificios y naves industriales"</i>.</p> <p>México: La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) manifestó que en México, independiente de si el bien es homogéneo o no homogéneo se aplica el mismo modelo. En el Capítulo 7.2. de la Circular Única de Seguros, De las bases técnicas para la valuación de la reserva de riesgos en curso y de la Perdida Máxima Probable de los seguros de terremoto, se establece <i>"Para efectos del cálculo de la Pérdida Máxima Probable que se utilizará para determinar el requerimiento de solvencia y el límite de la reserva de riesgos catastróficos de los seguros de terremoto, se deberá observar lo siguiente: La Pérdida Máxima Probable se determinará mensualmente aplicando las bases técnicas que se indican en el Anexo 7.2.1 y mediante el sistema de cómputo "Sistema R®" que será proporcionado por la Comisión, conforme a lo indicado en el Anexo 7.2.2"</i>. Con relación al Anexo 7.2.1., referente a las Bases técnicas para la determinación de la prima de riesgo y la Perdida Máxima Probable de los seguros de terremoto, la CNSF manifestó que la descripción de dicho modelo corresponde a un modelo probabilista. Dicho modelo se aplica para bienes de características no homogéneas.</p>

Pregunta de respuesta cerrada
6. <i>¿Existe normatividad que establezca fondos de desarrollo habilitados para financiar actividades de manejo de desastres?</i>
Descripción general del indicador
Los fondos de desarrollo pueden ser una fuente de recursos muy importante para financiar actividades de manejo de desastres.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar los principales fondos de desarrollo (o mecanismo equivalente). 2. Indagar en la ley de dichos fondos (o mecanismo equivalente) si están habilitados para financiar actividades de manejo de desastres 3. Indagar con el área de presupuesto y de riesgo (en caso que exista) de la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas (o entidad equivalente) respecto de la posibilidad que existan fondos de desarrollo (o mecanismo equivalente) que estén habilitados para financiar actividades de gestión de desastres. 4. Indagar con el área legal sobre la capacidad legal de los principales fondos de desarrollo (o mecanismo equivalente) identificados para financiar actividades de manejo de desastres.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Existencia de al menos un fondo de desarrollo (o mecanismo equivalente) habilitado para financiar actividades de manejo de desastres (respuesta, rehabilitación, reconstrucción).
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>México: En México existen varios casos de fondos de desarrollo habilitados para financiar actividades de manejo de desastres, por ejemplo: (i) El Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad, FONAES, que se rige por el ACUERDO mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad para el ejercicio fiscal 2012, del 21 de diciembre de 2011, habilitado para “7. Cobertura. Los recursos y acciones destinadas a solventar los efectos ocasionados por desastres naturales, deberán apegarse a los lineamientos y mecanismos que determinen la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en sus ámbitos de competencia y demás disposiciones aplicables”; (ii) El Fondo del Programa “Esta Es Tu Casa”, que según el Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda “Esta Es Tu Casa”, para el Ejercicio Fiscal 2013, del 28 de febrero del 2013, indica en el numeral “4.3. Fenómenos naturales y zonas de riesgo. En situaciones de emergencia originadas por fenómenos naturales... la Instancia Normativa tendrá la atribución, previo análisis de la suficiencia presupuestal y capacidad de respuesta, de otorgar subsidios federales a personas con viviendas afectadas por fenómenos naturales o con viviendas edificadas en zonas de riesgo, mediante esquemas de complementariedad con subsidios estatales y/o municipales, sin necesidad de que medie financiamiento o ahorro previo a cargo de los damnificados...”.</p> <p>Panamá: La Ley 38, que crea el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) y modifica la Ley 34 de 2008 sobre Responsabilidad Fiscal Social, de 5 de junio de 2012, con el objeto de, según los numerales 1, 2 y 3, establecer un mecanismo de ahorro y estabilización macroeconómica para atender los estados de emergencia y no recurrir a instrumentos de deuda. La Ley permite, según el artículo 5 numeral 1, retiros asociados a situaciones de Estado de Emergencia declarado por el Consejo de Gabinete, siempre que el costo asociado al evento sea igual o superior al 0.5% del PIB (excluyendo el monto de cobertura del seguro y de líneas de crédito contingente) y que los activos de FAP superen 2% del PIB nominal del año anterior. Adicionalmente, el FAP está habilitado para adquirir seguro catastrófico. Se incluye el Decreto Ejecutivo No. 1068, de 6 de septiembre de 2012, que reglamentó la Ley 38, resaltando el artículo 6 sobre los retiros en caso de estado de emergencia y el 7 sobre la contratación de bonos catastróficos.</p>

Código: PF 1B-1

Pregunta de respuesta cerrada
1. <i>¿Existe normatividad que establezca la responsabilidad fiscal del estado frente al riesgo de desastres?</i>
Descripción general del indicador
La responsabilidad del estado frente al riesgo de desastres define el pasivo contingente que éste debe gestionar y por ende los aspectos a considerar en el diseño e implementación de la estrategia de gestión financiera del riesgo de desastres.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar la Constitución, la normatividad que rige la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y normas relacionadas con gestión de contingentes. 2. Indagar si la normatividad hace referencia de manera explícita a las responsabilidades del Estado en caso de ocurrencia de desastres.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Normatividad vigente que defina el alcance de la responsabilidad fiscal del estado ante la ocurrencia de desastres. No se considera un verificable una interpretación respecto de algún artículo de la normativa vigente en el país.</p> <p>Tampoco se considera como verificable algún antecedente del tema, tal como un pronunciamiento de un órgano de la rama legal.</p> <p>El texto debe ser explícito, a manera de ejemplo podría ser: “...ante la ocurrencia de un desastre, el Estado es responsable por sus activos y los de la población más vulnerable, entendida ésta como...”, o “...ante la ocurrencia de un desastre, el estado no será responsable por los activos de los privados...”.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>México: La Ley General de Protección Civil, del 6 de junio de 2012, dispone en el artículo 7 la obligación del Ejecutivo Federal en materia de protección civil para: “... III. Contemplar, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, recursos para el óptimo funcionamiento y operación de los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos a que se refiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de promover y apoyar la realización de acciones de orden preventivo; así como las orientadas tanto al auxilio de la población en situación de emergencia, como la atención de los daños provocados por los desastres de origen natural...”. También, se incluyen responsabilidades en los siguientes artículos: (i) “Artículo 62. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, proveerá los recursos financieros para la oportuna atención de las situaciones de emergencias y de desastres, por lo que en caso de que los recursos disponibles se hayan agotado, se harán las adecuaciones presupuestarias para la atención emergente de la población y la reconstrucción de la infraestructura estratégica”; (ii) “Artículo 91. Es responsabilidad del Gobierno Federal y de las entidades federativas atender los efectos negativos provocados por fenómenos climatológicos extremos en el sector rural”.</p> <p>Argentina: La Ley 26.509, Emergencia Agropecuaria, que crea el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios, del 27 de agosto de 2009, señala que el gobierno es responsable por: (i) “Artículo 9. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos gestionará ante el Poder Ejecutivo nacional la declaración del estado de emergencia y/o desastre agropecuario propuesto por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios. Declarado el estado de emergencia y/o desastre agropecuario la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, deberá: (a) Asignar y/o reasignar los recursos humanos, financieros y otros que el estado de situación demande...(c) Asistir técnica y financieramente a los productores para restablecer la capacidad financiera, productiva y económica; (d) Asistir técnica y, financieramente a los entes públicos durante el estado de emergencia y/o desastre agropecuario. Se entiende por entes públicos a aquellas dependencias del Estado o entes</p>

descentralizados o desconcentrados del Estado nacional, de las provincias o municipalidades que desarrollen planes, programas o acciones en el marco de la presente ley para disminuir la vulnerabilidad de los productores agropecuarios y las poblaciones rurales; (e) Coordinar con las provincias, municipios, Banco de la Nación Argentina, agentes financieros provinciales o municipales, la asistencia al productor agropecuario afectado por los fenómenos adversos, facilitando, con sujeción a las condiciones que establezca la autoridad de aplicación, la provisión de los recursos en tiempo y forma; (ii) “Artículo 10. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, en forma directa y/o conjuntamente con los Estados provinciales, municipales o comunales, implementará acciones con posterioridad al lapso comprendido en la situación de emergencia y/o desastre agropecuario para: (a) Asistir financieramente a la reconstitución del aparato productivo; (b) Control y monitoreo del sistema de asistencia para que los recursos asignados sean destinados a los fines propuestos por la presente ley; (c) Asistir a los productores agropecuarios para reducir las pérdidas durante la emergencia y/o el desastre agropecuario, recuperar la capacidad productiva de los sistemas de producción y reducir la vulnerabilidad para eventos futuros”.

Pregunta de respuesta cerrada

2. ¿Existe normatividad que asigne competencias al sector Hacienda, Finanzas o Economía, en materia de protección financiera frente al riesgo de desastres?

Descripción general del indicador

Una estrategia integral del riesgo de desastres requiere del componente de gestión financiera del riesgo de desastres, el cual debería ser responsabilidad del sector acendario, de finanzas o de economía (o entidad equivalente). Consecuentemente, se trata de identificar si en algún marco normativo, como por ejemplo el marco sobre pasivos u obligaciones contingentes se estipulan de manera explícita funciones relacionadas con la formulación de una estructura de retención y transferencia del riesgo de desastres en el país. Es deseable que este marco exista para poder insertar allí el riesgo de desastres como un pasivo u obligación contingente (explícito o implícito). Si no existe un marco sobre obligaciones o pasivos contingentes hay que revisar si existe normatividad que asigne funciones a un área para que gestione desde el punto de vista financiero el riesgo de desastres, como por ejemplo el manual de funciones del sector hacendario, de finanzas o de economía (o entidad equivalente), o el marco normativo de la Gestión del Riesgo de Desastre (GRD).

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Revisar el marco normativo sobre la gestión de las obligaciones contingentes.
2. Revisar los manuales de funciones de áreas del sector hacendario, de finanzas o de economía (o entidad equivalente).
3. Revisar la normativa nacional que rige la GRD.
4. Revisar la normatividad nacional que regula la planificación nacional de la GRD.
5. Revisar la normatividad nacional que regula la planificación del desarrollo nacional.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Normatividad nacional que asigne funciones al sector hacendario, de finanzas o de economía (o entidad equivalente), para que gestione desde el punto de vista financiero el riesgo de desastres.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Perú: El Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado por la Resolución Ministerial No. 223-2011-EF43, del 30 de marzo de 2011, en la sección donde se asignan funciones a la Dirección de Riesgo en el artículo 109 inciso a, se establece la de "*Diseñar y proponer las políticas, directrices y estrategias de gestión de riesgos financieros (mercado, liquidez, crediticio y/o contraparte, inversiones, país), operativos y contingentes de naturaleza jurídica o contractual ; o derivados de desastres naturales*"

(http://snipnet.mef.gob.pe/contenidos/politicas/presentacion/RM223_2011EF43.pdf)

Panamá: La Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado (DICRE), adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, creada mediante Decreto Ejecutivo No. 110, del 4 de agosto de 2009, incluyen entre otras funciones, establecer una política de manejo de riesgo y asegurar que los activos públicos tengan protección financiera (artículos 7 y 8). El Decreto Ejecutivo No. 479, de 22 de noviembre de 2011, que adiciona los numerales 10, 11, 12 y 13 al artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 110 de 4 de agosto de 2009, suma responsabilidades en gestión financiera del riesgo de desastres a la DICRE (artículos 10 y 11). Finalmente, la Política Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres (PNGIRD), aprobada junto al Decreto Ejecutivo No. 1101 del 30 de diciembre de 2010 y publicado en la Gaceta Oficial en enero de 2011 (PF 1B-3c), y contenida según se instruye en el artículo 2, en un documento anexo, también estipula responsabilidades para MEF en esta materia (Eje A, medida 2 Protección financiera de la inversión).

México: La Ley General de Protección Civil, del 6 de junio de 2012, establece en el Artículo 19 que "*La coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la secretaría por conducto de la Coordinación Nacional, la cual tiene las atribuciones siguientes en materia de protección civil: (a) Asesorar y apoyar a los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en*

el análisis y selección del modelo requerido para la transferencia de riesgos a que se refiere el artículo 18 de esta Ley y (b) Proponer, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los modelos de contratación de seguros e instrumentos financieros de gestión de riesgos, que garanticen a la Federación las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”. Por otra parte, en los Lineamientos de Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales de 2011, se establece en el Capítulo VII, De los Soportes para la transferencia de riesgos, Sección I, Aspectos generales, numeral 35. “Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 de las Reglas, el Comité Técnico podrá solicitar recomendaciones de la Unidad de Seguros, respecto de las Estrategias de Gestión Integral de Riesgos que se presenten. La Unidad de Seguros presentará al Comité Técnico la propuesta de los Soportes Técnicos o Soportes Económicos que se podrán proporcionar, con base en las características de las estrategias y lo establecido en los Lineamientos de Operación. El Comité Técnico podrá autorizar la erogación de recursos para la contratación de expertos en materia de administración y transferencia de riesgos que lo apoyen en la realización o revisión de las acciones citadas en las fracciones I a III del numeral siguiente”.

Colombia: En Colombia, aun cuando no se reconoce explícitamente que la ocurrencia de desastres es un pasivo explícito (Ley 819 de 2003), si se reconoce de manera implícita al incluirlo en el reporte de obligaciones contingentes que publica el país.

Pregunta de respuesta cerrada
3. <i>¿Existe normatividad que establezca que las entidades sectoriales deben cubrir sus activos públicos con pólizas de seguro u otro tipo de mecanismo equivalente?</i>
Descripción general del indicador
Se asume que las entidades sectoriales son responsables por el aseguramiento de sus activos públicos. En ese sentido, se considera relevante que las entidades sectoriales cubranlos aseguren igualmente ante la ocurrencia de desastres. Este tema es clave pues es la base de la protección financiera de los bienes públicos.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar por la normatividad relacionada con la gestión de los activos del estado. 2. Indagar por la normatividad relacionada con normas de control interno o con los códigos disciplinarios aplicables a los funcionarios públicos.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Normatividad que establezca de manera taxativa el cubrimiento de los activos públicos con pólizas de seguro catastrófico o con otras formas de cobertura.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Colombia: La Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, asigna competencias al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en materia de protección financiera en el Artículo 51, Subcuentas para apoyar el financiamiento de la gestión del riesgo, se crea en el numeral 5 la Subcuenta para la Protección Financiera: "Los recursos de esta subcuenta serán destinados a apoyar el financiamiento de la protección financiera. A través de esta subcuenta, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público gestionará, adquirirá o celebrará los instrumentos o contratos con entidades nacionales o extranjeras que permitan la protección financiera frente al riesgo de desastres".</p> <p>Perú: El Decreto Supremo No. 007-2008-Vivienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, General del Sistema Nacional de los Bienes Estatales, del 14 de marzo de 2008, señala en el artículo 10, que dentro de las funciones, atribuciones y obligaciones de las entidades está la de "Contratar las pólizas de seguros para los bienes de su propiedad y los que se encuentren bajo su administración, conforme a la prioridad y disponibilidad presupuestal". En consecuencia, las entidades sectoriales deben cubrir sus activos públicos con pólizas de seguro.</p> <p>Panamá: La Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado (DICRE), adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, creada mediante Decreto Ejecutivo No. 110, del 4 de agosto de 2009, manifestó en entrevista que todas las entidades sectoriales deben cubrir sus activos públicos. Lo anterior, en razón a lo estipulado en el Decreto de Gabinete No. 17, del 5 junio de 1991, por el cual se establece el manejo de los seguros del Estado: (i) Artículo 3. "La Comisión deberá establecer un sistema moderno de administración de riesgos, por medio de concurso, según lo establecido en el Código Fiscal, con la participación de la mayor cantidad de corredores profesionales de seguros para el manejo, organización y reclamación de los seguros de cada una de las instituciones..."; (ii) Artículo 5. "Este sistema será diseñado con el objeto de que se considere al Estado Panameño como un solo cliente...".</p> <p>México: La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, del 4 de enero de 2000, estipula esa obligación y su excepción en su artículo 5, señalando que "Será responsabilidad de las dependencias y entidades contratar los servicios correspondientes para mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los bienes con que cuenten. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando por razón de la naturaleza de los bienes o el tipo de riesgos a los que están expuestos, el costo de aseguramiento represente una erogación que no guarde relación directa con el beneficio que pudiera obtenerse o bien, se constate que no exista oferta de seguros en el mercado para los bienes de que se trate. La Secretaría autorizará previamente la aplicación de la excepción".</p>

Código: PF 1B-4**Pregunta de respuesta cerrada**

4. ¿Existe normatividad sobre incentivos para el aseguramiento de la vivienda de los privados por riesgo de desastres?

Descripción general del indicador

Ante la ocurrencia de un desastre es conveniente que los privados estén asegurados. En ese sentido, se indaga si se promueven incentivos para el aseguramiento de los privados frente a desastres, diferentes a la suscripción de seguros relacionados con créditos hipotecarios.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Indagar con el gremio asegurador respecto de la existencia de este tipo de programas.
2. Consultar al área del sector hacendario, de finanzas o de economía (o entidad equivalente), a cargo de desarrollar la estrategia de gestión financiera del riesgo de desastres, en caso que en el país esa función este asignada a un sector.
3. Consultar con el sector de la vivienda.
4. Revisar la información disponible de la página web del ente de supervisión del mercado de seguros.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Evidencia de una norma que incluya incentivos para el aseguramiento de los privados por riesgo de desastres.

No se considera una condición positiva la obligatoriedad de asegurar la vivienda cuando se suscribe un crédito hipotecario.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

Turquía: El Pool de Seguros contra Desastres en Turquía (TCIP). El gobierno de Turquía estableció un esquema donde el Estado y las compañías aseguradoras participan, con el fin de ofrecer aseguramiento contra terremoto a propietarios de bienes privados. En caso de ocurrencia de terremoto, el gobierno turco sólo ayudará a los residentes privados que estén asegurados.

Haití: El Plan Estratégico de Desarrollo de Haití, del 2012, estipula: Subprograma 2.5.1, Mejora del acceso al seguro, que dada la limitación de recursos del Estado debe darse el mejor uso del sector privado para promover el crecimiento el uso de seguros y, en el corto plazo, hacer obligatorio su contratación para diversos actos o situaciones de riesgo. En la próxima PTI, será identificar e implementar medidas para mejorar la cobertura del seguro en todas las áreas, especialmente con respecto “... (VI) *bienes muebles e inmuebles*; y (VII) *seguro a todo riesgo*”. Es Decir, se promueve el aseguramiento de bienes muebles inmuebles y del Sector Privado.

Colombia: La Ley 734, por la cual se expide el Código Disciplinario Único, del 5 de febrero de 2002, establece en el Título Único la descripción de las faltas disciplinarias, y en el Capítulo I, las consideradas como faltas gravísimas, entre las que señala la contenida en el Artículo 48, numeral 63: “*No asegurar por su valor real los bienes del Estado ni hacer las apropiaciones presupuestales pertinentes*”. Lo anterior comprende a todos los gestores de las entidades sectoriales.

Código: PF 1C-1

Pregunta de respuesta cerrada
<i>1. ¿Existe normatividad que establezca que las entidades de los niveles territoriales deben cubrir sus activos públicos con pólizas de seguro u otro tipo de mecanismo equivalente?</i>
Descripción general del indicador
Se asume que las entidades de los niveles territoriales son responsables por el cubrimiento de sus activos públicos. En ese sentido, se considera relevante que las entidades de los niveles territoriales los cubran ante la ocurrencia de desastres.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar por la normatividad relacionada con la gestión de los activos del estado. 2. Revisar por la normatividad relacionada con normas de control interno o con los códigos disciplinarios aplicables a los funcionarios públicos que laboran en los niveles territoriales.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Normatividad que establezca de manera taxativa el cubrimiento de los activos públicos de las entidades de los niveles territoriales con pólizas de seguro catastrófico o con otras formas de cobertura.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Colombia: La Ley 734, por la cual se expide el Código Disciplinario Único, del 5 de febrero de 2002, establece en el Título Único la descripción de las faltas disciplinarias, y en el Capítulo I, las consideradas como faltas gravísimas, entre las que señala la contenida en el Artículo 48, numeral 63: “<i>No asegurar por su valor real los bienes del Estado ni hacer las apropiaciones presupuestales pertinentes</i>”. Lo anterior comprende a todos los gestores de las entidades sectoriales.</p> <p>Perú: El Decreto Supremo No. 007-2008-Vivienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, General del Sistema Nacional de los Bienes Estatales, del 14 de marzo de 2008, señala en el Artículo 10, que dentro de las funciones, atribuciones y obligaciones de las entidades está la de “<i>Contratar las pólizas de seguros para los bienes de su propiedad y los que se encuentren bajo su administración, conforme a la prioridad y disponibilidad presupuestal</i>”. En ese sentido, las entidades de los niveles territoriales deben cubrir sus activos públicos con pólizas de seguro.</p> <p>Panamá: La Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado (DICRE), adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, creada mediante Decreto Ejecutivo No. 110, del 4 de agosto de 2009, manifestó en la entrevista que todas las entidades de los niveles territoriales deben cubrir sus activos públicos. Lo anterior, en razón a lo estipulado en el Decreto de Gabinete No. 17, de 5 junio de 1991, por el cual se establece el manejo de los seguros del Estado, por el cual se establece el manejo de seguros del estado para todas las instituciones del Estado Panameño: (i) Artículo 3. “<i>La Comisión deberá establecer un sistema moderno de administración de riesgos, por medio de concurso, según lo establecido en el Código Fiscal, con la participación de la mayor cantidad de corredores profesionales de seguros para el manejo, organización y reclamaciones de los seguros de cada una de las instituciones...</i>”; (ii) Artículo 5. “<i>Este sistema será diseñado con el objeto de que se considere al Estado Panameño como un solo cliente...</i>”. NOTA: estos artículos del Decreto 17 aplican para todas las entidades públicas del país, incluyendo aquellas del nivel territorial.</p> <p>Costa Rica: La Ley N° 8232, Ley de Control Interno, del 4 de septiembre de 2002, establece en el Artículo 15 a las “<i>Actividades de control. Respecto de las actividades de control, serán deberes del jerarca y de los titulares subordinados, entre otros, los siguientes...</i> b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas como los procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, los siguientes... ii. La protección y conservación de todos los activos institucionales”. Consecuentemente, de acuerdo al concepto de abogados expertos en tema de aseguramiento en el país, las entidades sectoriales deben cubrir sus activos públicos.</p>

Código: PF 1C-2

Pregunta de respuesta cerrada
2. <i>¿Existe normatividad que obligue a la implementación de estructuras de protección financiera ante desastres en ciudades con más de 100 mil habitantes?</i>
Descripción general del indicador
De manera general, las ciudades con más de 100.000 habitantes concentran mayor exposición. En este sentido, es conveniente que implementen estructuras de protección financiera ante el riesgo de desastres, es decir, que implementen una combinación óptima de instrumentos de retención y transferencia del riesgo, de acuerdo a las capas a cubrir (eventos recurrentes y no recurrentes) y los costos asociados.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<p><i>Países centralizados</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Consultar con el sector hacendario, de finanzas o de economía (o entidad equivalente) con las áreas a cargo del seguimiento a los municipios. 2. Consultar a la entidad que representa al gremio asegurador. <p><i>Países federales</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Investigar si está vigente alguna normativa que establezca políticas o estrategias por las que ciudades con más de 100 mil habitantes deban contar con estructuras de protección financiera ante desastres. 2. Consultar con el sector hacendario, de finanzas o de economía (o entidad equivalente), a propósito de una política a este propósito.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Evidencia de una normatividad que disponga que las ciudades con más de 100 mil habitantes, deban implementar estrategias de gestión financiera del riesgo de desastres.</p> <p>Nota: si el país no es descentralizado y existe una norma que obliga al país al diseño e implementación de estrategias de gestión financiera del riesgo de desastres, pero no existe normatividad específica para los municipios no se considera una condición positiva.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Panamá: La Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado (DICRE), adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, creada mediante Decreto Ejecutivo No. 110, del 4 de agosto de 2009, tiene dentro de sus funciones, ante la escasa descentralización del país, la protección financiera ante desastres en ciudades, incluso con más de 100 mil habitantes. Esto, dentro de las medidas de eficiencia administrativa del DICRE que incluyen, entre otros, establecer una política de manejo de riesgo y asegurar que los activos públicos tengan protección financiera (artículos 7 y 8).</p>

Código: PF 1C-3

Pregunta de respuesta cerrada
3. <i>¿La ciudad capital del país cuenta con un fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres?</i>
Descripción general del indicador
Es importante que la ciudad capital del país cuente con un mecanismo habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres.
Nota: si el país no es descentralizado y existe un mecanismo del orden nacional habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres, pero no existe el mecanismo a nivel de la ciudad capital del país no se considera una condición positiva.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<p><i>Países centralizados</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Hay que revisar la normatividad que regula la GRD en el país y revisar si de manera explícita se hace referencia a mecanismos a nivel municipal que estén habilitados para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres. Hay que indagar con el área rectora de la gestión del riesgo de desastres del municipio si dispone de un mecanismo habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres. Dicho mecanismo puede ser: fondos de reservas, calamidades, emergencias o fondos de desastres, entre otras denominaciones. <p><i>Países federales</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Revisar el estatuto o ley que rige política y administrativamente a la ciudad capital del país. Buscar en el marco legal que rige a la ciudad capital del país, y revisar la norma relativa a las finanzas públicas, o bien, la que regula a la GRD o cualquier otra que pudiera regular el tema del fondo para el manejo de desastres. Consultar, en su caso, con sector hacendario, de finanzas o de economía del gobierno de la ciudad capital del país.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Evidencia de un mecanismo que permita que la ciudad capital del país contar con un fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>México: La Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 8 de julio de 2011, tiene el objeto de “... regular la integración, organización, coordinación y funcionamiento del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, así como establecer las obligaciones del gobierno y los derechos y obligaciones de los particulares, en la aplicación de los mecanismos y medidas de prevención, auxilio y recuperación para la salvaguarda de las personas, sus bienes, el entorno y el funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos ante la eventualidad de una emergencia, siniestro o desastre”. Esta ley establece tres fondos o instrumentos financieros destinados a distintas fases de la gestión de los desastres: el FIPDE o Fideicomiso Preventivo de Desastres, el FADE o Fondo de Atención a Desastres y Emergencias, y el FOPDE o Fondo de Prevención de Desastres. El FIPDE o Fideicomiso Preventivo de Desastres tiene como finalidad realizar acciones preventivas de carácter urgente, para evitar afectaciones a la vida y patrimonio de la población o la estructura de la Ciudad ante la inminente ocurrencia de fenómenos perturbadores (artículo 7, XXVI). El FADE o Fondo de Atención a Desastres y Emergencias es activado mediante las declaratorias de emergencia y desastre, para el otorgamiento de suministros de auxilio y asistencia por la ocurrencia de fenómenos perturbadores y la recuperación de los daños causados por los mismos (artículo 7, XXVII). Y finalmente el FOPDE o Fondo de Prevención de Desastres que apoya acciones programadas de carácter preventivo para mitigar los efectos causados por la posible ocurrencia de fenómenos perturbadores (artículo 7, XXVIII).</p>

Pregunta de respuesta cerrada

4. ¿El fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres de la ciudad capital del país, cuenta con capacidad de acumulación de recursos en el tiempo?

Descripción general del indicador

Es importante que la ciudad capital del país cuente con un mecanismo habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres, y que además tenga capacidad de acumulación de recursos en el tiempo.

Nota: si el país no es descentralizado y existe un mecanismo del orden nacional habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres con capacidad de acumulación de recursos en el tiempo, pero no existe dicho mecanismo a nivel de la ciudad capital del país no se considera una condición positiva.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida*Países centralizados*

1. Hay que revisar la normatividad que regula la Gestión de Riesgos de Desastre (GRD) en el país y revisar si de manera explícita se hace referencia a mecanismos del orden municipal que estén habilitados para financiar o cofinanciar actividades de manejo de desastres y que tengan capacidad de acumulación de recursos en el tiempo.
2. Hay que indagar con el área rectora de la gestión del riesgo de desastres del municipio si dispone de un mecanismo habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres, con capacidad de acumulación de recursos en el tiempo.
3. Estos mecanismos pueden ser: fondos de reservas, calamidades, emergencias o fondos de desastres, entre otras denominaciones.

Países federales

1. Revisar el estatuto o ley que rige política y administrativamente a la ciudad capital del país.
2. Buscar en el marco legal que rige a la ciudad capital del país, y revisar la norma relativa a las finanzas públicas, o bien, la que regula a la GRD o cualquier otra que pudiera regular el tema del fondo para el manejo de desastres, concretamente sobre si cuenta o no con capacidad de acumulación de recursos en el tiempo.
3. Consultar, en su caso, con sector hacendario, de finanzas o de economía del gobierno de la ciudad capital del país.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

Evidencia de que el fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres de la ciudad capital del país, cuente con la capacidad de acumulación de recursos en el tiempo.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

México: La Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 8 de julio de 2011(en su calidad de entidad federativa), dispone en su artículo 7, fracción XXV, la existencia de un fideicomiso para darle cabida a los recursos presupuestales del Fondo de Atención a Desastres y Emergencias (FADE), que según esa fracción este fideicomiso podrá tener como patrimonio los "... remanentes, provenientes de los ejercicios financieros anuales del FADE". De tal manera que eso le permitiría acumular recursos por el paso del tiempo. Adicionalmente, el artículo 175 dispone que "... La totalidad de los recursos obtenidos por el pago de derechos en materia de protección civil a los que se refiere el Código Fiscal del Distrito Federal serán destinados a integrar parte de los recursos del FADE", recursos que desde luego serán acumulables.

Colombia: El Acuerdo 11 de 1987, por el cual se crea el Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias en el Distrito Especial de Bogotá y se dictan otras disposiciones (PF-1C-4a), tiene la misión de promover la reducción de riesgos de origen natural y humano no intencional y garantizar el manejo efectivo de las situaciones de emergencia minimizando los efectos negativos sobre la población de Bogotá, a través del Sistema Distrital.

Código: PF 1C-5**Pregunta de respuesta cerrada**

5. *¿El fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres de la ciudad capital del país, está basado en una regla óptima de acumulación y gasto basada en la pérdida anual esperada y la información registrada sobre las pérdidas por desastres en años anteriores?*

Descripción general del indicador

Se considera una condición deseable para la gestión del riesgo de desastres, desde el punto de vista del componente financiero, que la ciudad capital del país cuente con un fondo o mecanismo equivalente dimensionado y financiado de acuerdo a las necesidades de la ciudad capital del país. En ese sentido, el fondo debería tener definida una regla óptima de acumulación y gasto basada en la pérdida anual esperada y en la información registrada sobre las pérdidas por desastres en años anteriores.

Este indicador sólo aplica si efectivamente la ciudad capital del país cumple con la condición de tener un fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento y cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres.

Nota: si el país no es descentralizado y existe un mecanismo del orden nacional habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres basado en una regla óptima de acumulación y gasto basada en la pérdida anual esperada y la información registrada sobre las pérdidas por desastres en años anteriores, pero no existe dicho mecanismo a nivel de la ciudad capital del país no se considera una condición positiva.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Indagar con el área de hacienda, economía o finanzas (o entidad equivalente) de la ciudad capital del país, de manera particular con el área de riesgo (en caso que exista) si el fondo o mecanismo equivalente tiene definida una regla óptima de acumulación y gasto basada en la pérdida anual esperada y en información registrada sobre las pérdidas por desastres en años anteriores.
2. Se sugiere revisar la ley de creación del fondo o mecanismo equivalente.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva

El fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento y cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres, debe estar dimensionado y financiado de acuerdo a las necesidades de la ciudad capital, por lo cual tiene definida una regla óptima de acumulación y gasto basada en la pérdida anual esperada y la información registrada sobre las pérdidas por desastres en años anteriores.

Ejemplos de condiciones positivas en países de la región

A falta de ejemplos en la región, se propone una situación hipotética para el cumplimiento de este indicador: La ciudad capital de un país de la región cuenta con un fondo de reservas habilitado para el manejo de desastres, el cual recibe un monto fijo de recursos anuales del presupuesto de la ciudad (ver por ejemplo el Decreto 652 de 1990 que reglamenta el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, D. E que establece en el Art. 7: “una suma anual de forzosa de inclusión en el presupuestos distrital no inferior al 0,5% de los ingresos corrientes tributarios de la Administración Central”.

Código: PF 2-1

Pregunta de respuesta cerrada
<i>1. ¿La ciudad capital del país cuenta con una estructura de protección financiera en caso de desastre?</i>
Descripción general del indicador
De manera general, la ciudad capital concentra la exposición. En ese sentido, es conveniente que desarrolle estructuras de protección financiera en caso de desastres.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se sugiere indagar con el área de hacienda, economía o finanzas (o entidad equivalente) de la ciudad capital del país. 2. Se sugiere indagar con la autoridad del sector hacendario, de economía o de finanzas (o entidad equivalente) a cargo del seguimiento a los municipios (si es un país centralizado).
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
La ciudad donde reside la administración central del país debe evidenciar que tiene varios instrumentos de protección financiera articulados en una estrategia.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>México: La Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 8 de julio de 2011, dispone “...la integración, organización, coordinación y funcionamiento del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, así como establecer las obligaciones del gobierno y los derechos y obligaciones de los particulares, en la aplicación de los mecanismos y medidas de prevención, auxilio y recuperación para la salvaguarda de las personas, sus bienes, el entorno y el funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos ante la eventualidad de una emergencia, siniestro o desastre”. En esta protección financiera se consideran los tres instrumentos financieros destinados a distintas fases de la gestión de los desastres: el FIPDE o Fideicomiso Preventivo de Desastres, el FADE o Fondo de Atención a Desastres y Emergencias y el FOPDE o Fondo de Prevención de Desastres. La Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 8 de julio de 2011 (PF-2-1a), dispone “...la integración, organización, coordinación y funcionamiento del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, así como establecer las obligaciones del gobierno y los derechos y obligaciones de los particulares, en la aplicación de los mecanismos y medidas de prevención, auxilio y recuperación para la salvaguarda de las personas, sus bienes, el entorno y el funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos ante la eventualidad de una emergencia, siniestro o desastre”. En esta protección financiera se consideran los tres instrumentos financieros destinados a distintas fases de la gestión de los desastres: el FIPDE o Fideicomiso Preventivo de Desastres, el FADE o Fondo de Atención a Desastres y Emergencias y el FOPDE o Fondo de Prevención de Desastres.</p>

Pregunta de respuesta cerrada
2. ¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía, ha dimensionado las necesidades de recursos para cubrir Pérdidas Máximas Probables (PMP) por eventos catastróficos para diferentes periodos de retorno?
Descripción general del indicador
<p>El dimensionamiento de las necesidades de recursos para cubrir Pérdidas Máximas Probables (PMP) por eventos catastróficos para diferentes periodos de retorno es información fundamental para establecer las necesidades de recursos en caso de ocurrencia de un desastre y consecuentemente establecer la combinación óptima de diferentes instrumentos financieros que conformarán la estrategia de protección financiera.</p> <p>Se refiere a las necesidades de recursos para cubrir las pérdidas en bienes de responsabilidad fiscal del estado en los procesos de respuesta, rehabilitación y reconstrucción derivadas de la ocurrencia de eventos catastróficos.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar con la autoridad o cabeza del sector hacendario, de economía, o de finanzas (o entidad equivalente) sobre la existencia de estudios para dimensionar las necesidades de recursos para cubrir Pérdidas Máximas Probables (PMP) por eventos catastróficos para diferentes periodos de retorno. 2. Indagar con la entidad rectora de la gestión del riesgo de desastres en el país sobre la existencia de estudios para dimensionar las necesidades de recursos para cubrir Pérdidas Máximas Probables (PMP) por eventos catastróficos para diferentes periodos de retorno. 3. Identificar si el país se ha empoderado de algún estudio, mediante la revisión de documentos oficiales o presentaciones realizadas por el la autoridad o cabeza del sector hacendario, de economía, o de finanzas (o entidad equivalente) sobre el tema de gestión financiera del riesgo de desastres.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Hay que evidenciar que el país ha contratado estudios para dimensionar las necesidades de recursos para cubrir Pérdidas Máximas Probables (PMP) por eventos catastróficos para diferentes periodos de retorno o que el país se ha empoderado de resultados de algún estudio realizado por terceros (p.ej. BID o BM). En ese sentido, el verificable puede corresponder a algún documento oficial o presentación realizada por el Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía (o entidad equivalente) sobre el tema de gestión financiera del riesgo de desastres donde se mencionen los resultados de dicho estudio.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: Los estudios del BID (2009) estiman pérdidas totales a nivel país por terremoto para periodos de recurrencia de 50, 100, 250, 500 y 1000 años. Dichas cifras han sido empleadas en presentaciones efectuadas y documentos elaborados por la Dirección de Gestión de Riesgo del MEF, por ejemplo, en su <i>Propuesta de Lineamientos de Estrategia Financiera</i> remitida al Vice-Ministro de Hacienda en marzo de 2013. La Nota Técnica #IDB-TN-169, Indicadores de Riesgo de Desastres y Gestión del Riesgo de Desastres, Programa para América Latina y el Caribe, Perú; del Banco Interamericano de Desarrollo (PF-2-2a) estima, en el Capítulo 3, Indicadores de Riesgo de Desastre y de Gestión del riesgo, pérdidas totales a nivel país por terremoto para periodos de recurrencia de 50, 100, 250, 500 y 1000 años. Dichas cifras han sido empleadas en presentaciones efectuadas por la Dirección de Gestión de Riesgo del MEF.</p> <p>Panamá: Las Notas Técnicas # IDB-TN_169 del BID sobre Indicadores de Riesgo de Desastre y de Gestión de Riesgos, Programa para América Latina y el Caribe (septiembre 2010) estiman en el Capítulo 3 Indicadores de Riesgo de Desastre y de Gestión del Riesgo, las pérdidas totales a nivel país por terremoto para periodos de recurrencia de 50, 100, 250, 500 y 1000 años. Dicha información fue empleada por el GdP para elaborar sus lineamientos de protección financiera (2012)</p> <p>Colombia: El gobierno de Colombia acogió las estimaciones efectuadas por GAR (2011) sobre el dimensionamiento de las necesidades de recursos para cubrir Pérdidas Máximas Probables (PMP) por eventos catastróficos para diferentes periodos de retorno, las cuales son presentadas en los informes que elabora el país, tales como <i>Government of Mexico and the World Bank (2012). Improving the assessment of</i></p>

disaster risks to strengthen financial resilience. A special joint G20 publication by the Government of Mexico and the World Bank.

El gobierno de Colombia acogió las estimaciones efectuadas por GAR (2011) sobre el dimensionamiento de las necesidades de recursos para cubrir Pérdidas Máximas Probables (PMP) por eventos catastróficos para diferentes periodos de retorno, las cuales son presentadas en los informes que elabora el país, tales como *Improving the assessment of disaster risks to strengthen financial resilience. A special joint G20 publication in 2012 by the Government of Mexico and the World Bank (PF-2-2a)*

República Dominicana: El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo junto con la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, realizaron en el 2012 el estudio "Amenazas y Riesgos Naturales REPÚBLICA DOMINICANA, Compendio de Mapas" (PF-2-2a), empleando la plataforma CAPRA. Dicho estudio permitió la evaluación del riesgo de desastre con métricas probabilistas y técnicas avanzadas. El estudio incluye la evaluación probabilística para pérdidas económicas, para diferentes períodos de retorno de 200, 475, 1000 y 2500 años.

México: Esto se logró con el R-FONDEN o Sistema de Estimación de Pérdidas para el Riesgo Federal (PF-2-2a), un modelo de evaluación probabilística del riesgo de desastres, desarrollado en 2010 a solicitud del Comité Técnico del FONDEN, que considera los principales activos públicos que cubre el FONDEN (infraestructura carretera, hidráulica, escuelas y hospitales y las viviendas de la población de bajos recursos enfrentan ante las amenazas naturales más importantes) y proporciona modelos de posibles daños por desastre a dichos activos con el objeto de perfeccionar las estrategias para el financiamiento de riesgos. El R-FONDEN puede calcular las pérdidas por desastres a través de la simulación probabilística de fenómenos naturales históricos y posibles, la pérdida promedio anual y las curvas de probabilidad de pérdidas en exceso y la elaboración de modelos de sus efectos en la infraestructura de referencia.

Pregunta de respuesta cerrada
3. ¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía, ha dimensionado las necesidades de recursos previstas para cubrir anualmente los procesos de respuesta, rehabilitación y reconstrucción ocasionados por eventos menores y frecuentes?
Descripción general del indicador
Información fundamental para establecer las necesidades de recursos para atender la ocurrencia de eventos recurrentes.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar con la autoridad o cabeza del sector hacendario, de economía, o de finanzas (o entidad equivalente) sobre la existencia de estudios para dimensionar las necesidades de recursos para cubrir anualmente los procesos de respuesta, rehabilitación y reconstrucción ocasionados por eventos menores y frecuentes. 2. Indagar con la entidad rectora de la gestión del riesgo de desastres en el país sobre la existencia de estudios para dimensionar las necesidades de recursos previstas para cubrir anualmente los procesos de respuesta, rehabilitación y reconstrucción ocasionados por eventos menores y frecuentes. 3. Identificar si el país se ha empoderado de algún estudio, mediante la revisión de algún documento oficial o presentación realizada por la autoridad o cabeza del sector hacendario, de economía, o de finanzas (o entidad equivalente) sobre el tema.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Hay que evidenciar que el país ha contratado estudios para dimensionar las necesidades de recursos para cubrir anualmente los procesos de respuesta, rehabilitación y reconstrucción ocasionados por eventos menores y frecuentes o que el país se ha empoderado de resultados de algún estudio realizado por terceros (p.ej. BID o BM). En ese sentido, el verificable puede corresponder a algún documento oficial o presentación realizada por la autoridad o cabeza del sector hacendario, de economía, o de finanzas (o entidad equivalente) sobre el tema.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Colombia: El gobierno de Colombia acogió las estimaciones efectuadas por GAR (2011) sobre el dimensionamiento de las necesidades de recursos para cubrir Pérdidas Anuales Esperadas, las cuales son presentadas en la sección respecto de la estimación de las obligaciones contingentes incluidas en los informes que elabora el país, tales como <i>Government of Mexico and the World Bank (2012). Improving the assessment of disaster risks to strengthen financial resilience. A special joint G20 publication by the Government of Mexico and the World Bank.</i></p> <p>México: Esto se logró con el R-FONDEN o Sistema de Estimación de Pérdidas para el Riesgo Federal, un modelo de evaluación probabilística del riesgo de desastres, desarrollado en 2010 a solicitud del Comité Técnico del FONDEN, que considera los principales activos públicos que cubre el FONDEN (infraestructura carretera, hidráulica, escuelas y hospitales y las viviendas de la población de bajos recursos enfrentan ante las amenazas naturales más importantes) y proporciona modelos de posibles daños por desastre a dichos activos con el objeto de perfeccionar las estrategias para el financiamiento de riesgos. El R-FONDEN provee métricas tales como la Pérdida Anual Esperada y Curvas de Excedencia de Pérdida. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público manifestó que R-FONDEN permite estimar pérdidas tanto para eventos catastróficos como para eventos recurrentes.</p>

Código: PF 2-4

Pregunta de respuesta cerrada
<i>4. ¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía o entidad competente, ha aprobado estándares para el aseguramiento de edificaciones públicas en caso de desastres?</i>
Descripción general del indicador
Se considera pertinente que existan estándares respecto de los contenidos de las pólizas de seguros que deben ser contratadas por las entidades públicas para cubrir sus edificaciones públicas.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none">1. Indagar con la autoridad o cabeza del sector hacendario, de economía, o de finanzas (o entidad equivalente), de manera particular con el área de riesgo (en caso que exista) respecto de la existencia de estándares para el aseguramiento de edificaciones públicas en caso de desastres.2. Indagar con el área responsable de la contratación estatal respecto de la existencia de estándares para el aseguramiento de edificaciones públicas en caso de desastres.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Una póliza estandarizada para el aseguramiento de las edificaciones públicas contra riesgo de desastres, la cual debe haber sido aprobada por la autoridad o cabeza del sector hacendario, de economía, o de finanzas (o entidad equivalente).
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
No se identificaron ejemplos en la región, por lo que se propone una situación hipotética para el cumplimiento de este indicador: El Ministerio de Economía, Finanzas (o entidad equivalente) de uno de los países de la región aprobó una póliza estándar para el aseguramiento de las edificaciones públicas para el ramo de todo riesgo.

Pregunta de respuesta cerrada
5. ¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía o entidad competente, ha aprobado estándares para el aseguramiento de las concesiones de al menos un servicio básico o infraestructura crítica en caso de desastres?
Descripción general del indicador
Se considera pertinente que existan estándares respecto de los contenidos de las pólizas de seguros que deben ser exigidas a las entidades que suscriben concesiones con el Estado. Lo anterior, con el fin de proteger los activos concesionados ante la ocurrencia de desastres.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar con la autoridad o cabeza del sector hacendario, de economía, o de finanzas (o entidad equivalente), de manera particular con el área de riesgo (en caso que exista) respecto de la existencia de estándares para los contenidos de las pólizas de seguros que deben ser exigidas a las entidades que suscriben concesiones con el Estado. 2. Indagar con el área responsable de la contratación estatal de pólizas de seguros respecto de la existencia de estándares para los contenidos de dichas pólizas que deben ser exigidas a las entidades que suscriben concesiones con el Estado. 3. Indagar con la entidad que sea responsable de licitar las concesiones más cuantiosas en el país respecto de la existencia de estándares para los contenidos de las pólizas de seguros que deben ser exigidas a las entidades que suscriben concesiones con el Estado.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Una propuesta de contenidos de las pólizas de seguros que deben ser exigidas a las entidades que suscriben concesiones con el Estado, la cual debe haber sido aprobada por la autoridad o cabeza del sector hacendario, de economía, o de finanzas (o entidad equivalente).
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>México: De acuerdo a la normatividad vigente, existe infraestructura crítica a nivel federal que debe ser asegurada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público apoya estos procesos, de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento de elaboración de programas de aseguramiento. Cada caso se analiza de acuerdo al tipo de infraestructura a ser cubierta. En ese sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite un documento de lineamientos a las diferentes dependencias. En caso que la dependencia no acoja las recomendaciones, debe soportar su actuación. Lo anterior, en razón a lo estipulado en el Decreto de Uso Eficiente de Recursos. Para el caso del SEP, en el numeral 1.1 de la convocatoria para la licitación pública nacional para la contratación del aseguramiento de los bienes patrimoniales y responsabilidades para la Secretaría de Educación Pública se menciona que consultaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de los requisitos mínimos para contratación de seguros patrimoniales estipulados por la Secretaría de Función Pública.</p> <p>Chile: El Decreto N° 956, del 6 de octubre de 1997 -con última reforma del 28 de abril del 2010 mediante decreto No. 215 del Ministerio de Obras Públicas (MOP), emite el Reglamento al Decreto con Fuerza de Ley MOP No. 164 de 1991, Modificado por las Leyes 19.252 de 1993 y 19.460 de 1996, establece en su artículo 36 que "<i>La sociedad concesionaria deberá tomar pólizas de seguro que cubran las responsabilidad civil por daños a terceros y los riesgos catastróficos que puedan ocurrir durante el periodo de la concesión</i>". Las coberturas están contempladas para la etapa de construcción y para la de explotación y se mantienen vigentes durante toda la etapa. Estos seguros a favor del MOP son sometidos a un proceso de fiscalización. En los pliegos de la licitación se establecen las condiciones particulares. Adicionalmente, en el Artículo 96 del Decreto Supremo MOP No. 75 del 2 de febrero de 2004, que "Deroga el decreto N°15, de 1992, y sus Modificaciones Posteriores y Aprueba Reglamento Para Contratos de Obras Públicas" establece que "<i>el contratista cuyo contrato se acepta deberá presentar como garantía de fiel cumplimiento del contrato, una boleta bancaria o bien una póliza de seguro, por la cantidad y vigencia establecidas en el Artículo. La póliza de seguros, será la inscrita en el Registro de Pólizas de la Superintendencia de Valores y Seguros, como "Póliza de Seguro de Garantía de Obras Públicas". Sin perjuicio de lo anterior, las bases administrativas podrán aumentar el monto de la garantía, y ampliar su plazo, si a juicio de la Dirección así conviniere</i>".</p>

Código: PF 2-6

Pregunta de respuesta cerrada
<i>6. ¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía o entidad competente, ha aprobado requisitos mínimos para la participación de los agentes aseguradores y reaseguradores en los contratos de seguros y de reaseguros para al menos algún bien de responsabilidad fiscal del Estado?</i>
Descripción general del indicador
Se considera una buena práctica establecer requisitos para la participación de los agentes aseguradores y reaseguradores en los contratos de seguros y de reaseguros, con el fin de asegurar que sean capaces de responder ante el Estado en caso de ocurrencia de un desastre.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none">1. Indagar con la autoridad o cabeza del sector hacendario, de economía, o de finanzas (o entidad equivalente), de manera particular con el área de riesgo (en caso que exista) respecto de la existencia de requisitos para la participación de los agentes aseguradores y reaseguradores en los contratos de seguros y de reaseguros.2. Indagar con el área responsable de la contratación estatal respecto de la existencia requisitos para la participación de los agentes aseguradores y reaseguradores en los contratos de seguros y de reaseguros.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Una propuesta de requisitos para la participación de los agentes aseguradores y reaseguradores en los contratos de seguros y de reaseguros, la cual debe haber sido aprobada por la autoridad o cabeza del sector hacendario, de economía, o de finanzas (o entidad equivalente).
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
No se identificaron ejemplos de cumplimiento de la condición en la región por lo que se propone una situación hipotética para el cumplimiento de este indicador: El Ministerio de Economía, Finanzas (o entidad equivalente) ha establecido requerimientos respecto de calificaciones mínimas de riesgo para que los agentes aseguradores y reaseguradores puedan participar en los contratos de seguros y de reaseguros de las edificaciones públicas.

Pregunta de respuesta cerrada
7. ¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía o entidad competente, ha generado directrices para las entidades territoriales para la protección financiera frente al riesgo de desastres?
Descripción general del indicador
El riesgo se manifiesta localmente. En ese sentido, se considera pertinente que los territorios reciban directrices para la protección financiera frente al riesgo de desastres, con el fin que avancen en el diseño e implementación de instrumentos de gestión financiera del riesgo de desastres.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar con la autoridad o cabeza del sector hacendario, de economía, o de finanzas (o entidad equivalente), de manera particular con el área de riesgo (en caso que exista) respecto de la existencia de directrices para las entidades territoriales para la protección financiera frente al riesgo de desastres. 2. Indagar con la autoridad o cabeza del sector hacendario, de economía, o de finanzas (o entidad equivalente), de manera particular con el área a cargo del seguimiento a los municipios respecto de la existencia de directrices para las entidades territoriales para la protección financiera frente al riesgo de desastres.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Documento aprobado por el Ministerio de Economía o Finanzas (o entidad equivalente) que establezca directrices territoriales para la protección financiera frente al riesgo de desastres.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>México: La Ley General de Protección Civil, del 6 de junio de 2012, después de establecer la obligación de todos los órdenes de gobierno de asegurar su infraestructura contra los daños causados por desastres de orden natural (artículos 18 y 88), dispone paralelamente la obligación de la Coordinación Nacional de Protección Civil, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de asesorar a los estados en la definición y selección del modelo requerido para la transferencia de riesgos (artículo 19, fracción VII). Es decir, ese soporte técnico y especializado no será igual para todos los casos, sino que cada estado podría recibir una atención particularizada, de acuerdo a sus muy especiales circunstancias y problemática.</p> <p>Los Lineamientos de Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales (LOFONDEN), del 31 de enero de 2011, dedican el Capítulo VII, De los Soportes para la transferencia de riesgos, para describir con detalle las acciones y responsables para la consecución de la estrategia ordenada desde la Ley: “<i>Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 de las Reglas, el Comité Técnico podrá solicitar recomendaciones de la Unidad de Seguros, respecto de las Estrategias de Gestión Integral de Riesgos que se presenten. La Unidad de Seguros presentará al Comité Técnico la propuesta de los Soportes Técnicos o Soportes Económicos que se podrán proporcionar, con base en las características de las estrategias y lo establecido en los Lineamientos de Operación. El Comité Técnico podrá autorizar la erogación de recursos para la contratación de expertos en materia de administración y transferencia de riesgos que lo apoyen en la realización o revisión de la acciones citadas...</i>”, (numeral 35).</p>

Pregunta de respuesta cerrada
8. ¿Existe un fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres?
Descripción general del indicador
Se considera una condición deseable para la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), desde el punto de vista del componente financiero, contar con un fondo o mecanismo equivalente para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres. A diferencia del indicador PF 1A-1, aquí se pregunta por fondos habilitados, es decir, que estén operativos y que cuenten con asignación de recursos.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar por la existencia de dicho fondo o mecanismo equivalente con la autoridad o cabeza del sector hacendario, de economía, o de finanzas (o entidad equivalente). 2. Investigar por la existencia de dicho fondo o mecanismo equivalente con la entidad rectora de la GRD en el país. 3. Revisar la ley de creación del fondo o mecanismo equivalente, en caso que exista. 4. Indagar por la operatividad del fondo y la asignación de recursos respectiva con la autoridad o cabeza del sector hacendario, de economía, o de finanzas (o entidad equivalente) o con la entidad rectora de la GRD en el país.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Evidencia legal de la existencia de un fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres y evidencia que el fondo esté operativo y cuente con asignación de recursos.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Costa Rica: La Ley N° 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, del 27 de octubre de 2005, considera en su Artículo 43 la creación del Fondo Nacional de Emergencia, y establece: "<i>El Fondo y los recursos que se obtengan de las inversiones que de él se realicen, se utilizarán para atender y enfrentar las situaciones de emergencia y de prevención y mitigación...</i>". Asimismo, el Documento Presupuestos Públicos 2012, Situación y Perspectivas, de la Contraloría General de la República, febrero 2012, refieren en su numeral VI "<i>Aspectos relevantes sobre los presupuestos de algunas instituciones pública... Comisión Nacional de Emergencias (CNE). Mantiene para el 2012 el comportamiento inicial de los últimos tres periodos, al presupuestar menos recursos para la gestión preventiva del riesgo, sin que se aporte en los documentos presupuestarios la razón que lo justifique. Este proceder se presenta a pesar de que el Fondo Nacional de Emergencias, va a contar para el 2012 con €32.505,0 millones, lo cual permite pensar que la mayoría de los recursos del Fondo van a destinarse a su función extraordinaria, que es la atención de emergencias</i>", lo que confirma que el Fondo sí se encuentra habilitado.</p> <p>República Dominicana: La Ley No. 423-06, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, promulgada el 17 de diciembre del 2006, estipula en su Artículo 33 que "<i>El Proyecto de Presupuestos de Ingresos y Ley de Gastos Públicos consignará anualmente una apropiación destinada a cubrir imprevistos generados por calamidades públicas que será equivalente al uno por ciento (1%) de los Ingresos Corrientes estimados del Gobierno Central. Estos recursos serán utilizados por disposición del Presidente de la República, en conformidad con las medidas que adopte la Comisión Nacional de Emergencia de acuerdo a lo dispuesto en la ley 147-02 sobre gestión de riesgos</i>". Por otra parte, la Ley No. 147-02, Sobre Gestión de Riesgos, del 22 de Septiembre del 2002, establece el Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres en el Artículo 20, señalándolo como un fondo "<i>... con autonomía administrativa, técnica y financiera, con el objeto de captar y administrar asignaciones del presupuesto nacional, contribuciones y aportes financieros efectuados a cualquier título por gobiernos e instituciones públicas y privadas tanto nacionales como extranjeras, para tomar medidas de reducción de riesgos o para prestar a la población asistencia y rehabilitación cuando se produzcan desastres, de manera subsidiaria o complementaria bajo esquemas interinstitucionales de cofinanciación y concurrencia</i>".</p>

Panamá: Se cuenta con el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), creado mediante la Ley 38, de 5 de junio de 2012, que crea el Fondo de Ahorro de Panamá y modifica la Ley 34 de 2008, sobre Responsabilidad Fiscal Social, con el objeto de, según los numerales 1, 2 y 3, establecer un mecanismo de ahorro y estabilización macroeconómica para atender los estados de emergencia y no recurrir a instrumentos de deuda. La Ley permite, según el artículo 5 numeral 1, retiros asociados a situaciones de Estado de Emergencia declarado por el Consejo de Gabinete, siempre que el costo asociado al evento sea igual o superior al 0.5% del PIB (excluyendo el monto de cobertura del seguro y de líneas de crédito contingente) y que los activos de FAP superen 2% del PIB nominal del año anterior. Adicionalmente, el FAP está habilitado para adquirir seguro catastrófico. Se incluye el Decreto Ejecutivo No. 1068, de 6 de septiembre de 2012, que reglamenta la Ley 38, de 5 de junio de 2012, que crea el Fondo de Ahorro de Panamá y modifica la Ley 34 de 5 de junio de 2008, sobre Responsabilidad Fiscal Social, resaltando el artículo 6 sobre los retiros en caso de estado de emergencia y el 7 sobre la contratación de bonos catastróficos.

México: La Ley General de Protección Civil, del 6 de junio de 2012, prevé en el artículo 60 el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), que es un instrumento financiero de gestión del riesgo, y que es regulada por el Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, RGFONDEN, del 3 de diciembre del 2010, y que en el Artículo 1 de esa normativa le señala como objeto “... *ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil*”.

Pregunta de respuesta cerrada
9. <i>¿El fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres, cuenta con capacidad de acumulación de recursos en el tiempo?</i>
Descripción general del indicador
Es importante que el país cuente con un fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres que tenga capacidad de acumulación de recursos en el tiempo. Este fondo no necesariamente corresponde al fondo creado por la normatividad de GRD.
Este indicador solo aplica si el país cuenta con un fondo o mecanismo habilitado para el manejo de desastres, no necesariamente por la normativa de GRD.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar con la autoridad o cabeza del sector hacendario, de economía, o de finanzas (o entidad equivalente), de manera particular con el área de riesgo (en caso que exista) y el área de presupuesto si el fondo o mecanismo equivalente habilitado para el manejo de desastres tiene capacidad de acumulación de recursos en el tiempo. 2. Revisar la ley de creación del fondo o mecanismo equivalente, en caso que exista. 3. Consultar al área legal de la entidad encargada de administrarlo si cuenta con capacidad de acumulación de recursos en el tiempo.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
El fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres, cuenta con capacidad de acumulación de recursos en el tiempo.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: El Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), fue creado mediante la Ley N° 27245 de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, Ley que mediante Decreto Supremo N° 066-2009-EF, del 24 de marzo de 2009, aprobó su Texto Único Ordenado, Fondo con la capacidad de acumular recursos en el tiempo, de acuerdo, al artículo 2 del Texto Único Ordenado: <i>"El Estado debe asegurar el equilibrio o superávit fiscal en el mediano plazo, acumulando superávits fiscales en los períodos favorables y permitiendo únicamente déficits fiscales moderados y no recurrentes en períodos de menor crecimiento"</i>.</p> <p>Costa Rica: La Ley N° 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, del 27 de octubre de 2005, contempla en su Artículo 43, la Creación del Fondo Nacional de Emergencia, y refiere: <i>"... Este Fondo será administrado por la Comisión, la cual queda autorizada para invertir en títulos de instituciones y empresas del sector público, para ello el Fondo Nacional de Emergencias quedará excluido de la aplicación de las disposiciones correspondientes a la Caja Única del Estado, contempladas en la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos. El Fondo y los recursos que se obtengan de las inversiones que de él se realicen, se utilizarán para atender y enfrentar las situaciones de emergencia y de prevención y mitigación..."</i>.</p> <p>México: En el caso del FONDEN, nos remitimos a las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, RGFONDEN, del 3 de diciembre del 2010, que en su artículo 3 establecen que el Fondo de Desastres Naturales se integra por tres instrumentos, entre estos... <i>"III. El Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales"</i>. Entonces se afirma que la capacidad de acumular o ser acumulable como fondo, la provee su naturaleza de corresponder a la figura de fideicomiso. Los fideicomisos en México son regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, del 27 de agosto de 1932 (última reforma 9 de abril del 2012), de la cual resalta el artículo 386 que dice que <i>"Los bienes que se den en fideicomiso se considerarán afectos al fin a que se destinan y, en consecuencia, sólo podrán ejercitarse respecto a ellos los derechos y acciones que al mencionado fin se refieran, salvo los que expresamente se reserve el fideicomitente, los que para él deriven del fideicomiso mismo o los adquiridos legalmente respecto de tales bienes, con anterioridad a la constitución del fideicomiso, por el fideicomisario o por terceros. La institución fiduciaria deberá registrar contablemente dichos bienes o derechos y mantenerlos en forma separada de sus activos de libre disponibilidad..."</i>. De manera que el patrimonio del fideicomiso (léase FONDEN) solo se podrá utilizar para los fines expresados en el contrato correspondiente, y en sus Reglas y Lineamientos Generales, de manera que se acumularán en la medida que no se apliquen los recursos.</p>

Pregunta de respuesta cerrada
<i>10. ¿El fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres, está basado en una regla óptima de acumulación y gasto basada en la pérdida anual esperada y la información registrada sobre las pérdidas por desastres en años anteriores?</i>
Descripción general del indicador
Se considera una condición deseable para la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), desde el punto de vista del componente financiero, contar con un fondo o mecanismo equivalente dimensionado y financiado de acuerdo a las necesidades del país. En ese sentido, el fondo debería tener definida una regla óptima de acumulación y gasto basada en la pérdida anual esperada y en la información registrada sobre las pérdidas por desastres en años anteriores. Este indicador sólo aplica si el país cuenta con un fondo nacional o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar con la autoridad o cabeza del sector hacendario, de economía, o de finanzas (o entidad equivalente), de manera particular con el área de riesgo (en caso que exista) y el área de presupuesto si el fondo o mecanismo equivalente tiene definida una regla óptima de acumulación y gasto basada en la pérdida anual esperada y la información registrada sobre las pérdidas por desastres en años anteriores. 2. Revisar la ley de creación del fondo o mecanismo equivalente. 3. Indagar con el área legal de la entidad encargada de administrarlo si tiene definida una regla óptima de acumulación y gasto basada en la pérdida anual esperada y la información registrada sobre las pérdidas por desastres en años anteriores.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
El fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres debe estar dimensionado y financiado de acuerdo a las necesidades del país, por lo cual tiene definida una regla óptima de acumulación y gasto basada en la pérdida anual esperada y la información registrada sobre las pérdidas por desastres en años anteriores.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
No se identificaron ejemplos de cumplimiento en la región por lo que se propone una situación hipotética para el cumplimiento de este indicador: Un país de la región cuenta con un fondo de reservas habilitado para el manejo de desastres, el cual recibe un monto fijo de recursos anuales del presupuesto del gobierno nacional. El monto fijo de asignación de recursos se estableció teniendo en cuenta los estudios sobre la PAE (Pérdida Anual Esperada) y la información histórica registrada sobre las pérdidas por desastres en años anteriores.

Pregunta de respuesta cerrada
11. ¿El país tiene suscrito al menos un crédito contingente explícitamente vinculado con la financiación de gastos emergentes en situaciones de desastre?
Descripción general del indicador
Los créditos contingentes explícitamente vinculados con la financiación de gastos emergentes en situaciones de desastre proporcionan “ <i>al país recursos líquidos para cubrir necesidades apremiantes de financiamiento que surgen inmediatamente después de que un desastre natural ocurra de manera inesperada y súbita y sea de proporciones inusitadas</i> ”. Lo anterior supone varios pasos previos, tales como el dimensionamiento de las necesidades de liquidez para atender los posibles gastos derivados de un desastre.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Consultar al área de crédito público de la autoridad o cabeza del sector hacendario, de economía, o de finanzas (o entidad equivalente) respecto de créditos contingentes explícitamente vinculados con la financiación de gastos emergentes en situaciones de desastre. 2. Consultar en la página web de la autoridad o cabeza del sector hacendario, de economía, o de finanzas respecto de los créditos contingentes explícitamente vinculados con la financiación de gastos emergentes en situaciones de desastre 3. Consultar las páginas web del país tanto del BID como del BM respecto de las operaciones aprobadas.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Al menos una línea de crédito contingentes suscrita, la cual debe estar explícitamente vinculada con la financiación de gastos emergentes en situaciones de desastre.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>República Dominicana, Perú, Colombia, Panamá, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Guatemala tienen suscritas líneas de crédito contingente ante la ocurrencia de desastres.</p> <p>República Dominicana: Un Préstamo Contingente para Emergencias por Desastres Naturales, suscrito entre la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo fue suscrito el 18 de febrero de 2010 a través del Contrato de Préstamo No. DR-X1003 (PF-2-12a), por un valor de 100 millones de dólares americanos. En dicho Contrato, en el numeral 1 de la Introducción de las Estipulaciones Especiales se señala su objeto como “... <i>cooperar en la ejecución de un programa para mejorar la eficiencia de la gestión financiera de los riesgos de desastres naturales en República Dominicana...</i>”, y en su Capítulo VI de Disposiciones varias, en la Cláusula 6.01, Vigencia del contrato, se señala que iniciará una vez que adquiera plena validez jurídica y su terminación una vez que se haya pagado el total del préstamo más sus intereses y comisiones.</p> <p>Perú: El Decreto Supremo N° 254-2010-EF, que aprueba un financiamiento con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF, del 15 de diciembre del 2010, por valor de 100 millones de dólares americanos bajo la modalidad <i>Catastrophe Deferred rawdown Option</i> - CAT DDO, denominado “<i>Préstamo de Política de Desarrollo de Administración de Riesgos de Desastre</i>”.</p> <p>Costa Rica: El Gobierno de Costa Rica, firmó en 2009 con el Banco Mundial (BM) el préstamo de Opción de Desembolso Diferido ante el Riesgo de Catástrofe (CAT DDO), por USD 65 millones. Dicho crédito fue renovado en 2011 por un periodo de tres años. De otra parte, suscribió en 2012 con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el Préstamo CR-X1010, Préstamo Contingente para Emergencias por Desastres Naturales por USD 100 millones.</p>

Pregunta de respuesta cerrada
<i>12. ¿Al menos un municipio de la ciudad capital del país cuenta con un instrumento vigente de transferencia del riesgo de desastres para un portafolio de bienes de responsabilidad fiscal del Estado?</i>
Descripción general del indicador
En razón a que usualmente en la capital del país se concentra la mayor parte de la exposición a gestionar, se considera pertinente que al menos un municipio de la ciudad capital cuente con un instrumento vigente de transferencia del riesgo de desastres para un portafolio de bienes de responsabilidad fiscal del Estado. A manera ilustrativa, un instrumento podría ser un aseguramiento colectivo para un portafolio de bienes de responsabilidad fiscal del Estado.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Consultar al área de la autoridad o cabeza del sector hacendario, de economía, o de finanzas (o entidad equivalente) de la ciudad capital, con el área de presupuesto o de riesgo (si existe) respecto de la existencia de instrumentos vigentes de transferencia del riesgo de desastres para un portafolio de bienes de responsabilidad fiscal. 2. Consultar al área rectora de la GRD de la ciudad capital respecto de la existencia de instrumentos vigentes de transferencia del riesgo de desastres para un portafolio de bienes de responsabilidad fiscal. 3. Consultar al área de crédito público de la autoridad o cabeza del sector hacendario, de economía, o de finanzas (o entidad equivalente) de la ciudad capital respecto de la existencia de instrumentos vigentes de transferencia del riesgo de desastres para un portafolio de bienes de responsabilidad fiscal mediante instrumentos del mercado de capitales.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Al menos un municipio de la ciudad capital del país que cuente con un instrumento vigente de transferencia del riesgo de desastres para un portafolio de bienes de responsabilidad fiscal del Estado.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
No se identificaron ejemplos positivos en la región por lo que se propone una situación hipotética para el cumplimiento de este indicador: Un municipio de la ciudad capital de un país de la región tiene vigente un esquema de aseguramiento colectivo de todas sus edificaciones escolares.

Código: PF 2-13

Pregunta de respuesta cerrada
<i>13. ¿Se ha implementado al menos un mecanismo de transferencia del riesgo para cubrir de forma colectiva el portafolio de bienes fiscales de al menos un sector?</i>
Descripción general del indicador
Se considera una buena práctica transferir de manera colectiva el riesgo de un portafolio con el fin de aprovechar los beneficios de gestionar un portafolio diversificado y con una suma asegurable importante, lo cual puede resultar atractivo para el sector asegurador.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none">1. Consultar a la autoridad o cabeza del sector hacendario, de economía, o de finanzas (o entidad equivalente), de manera particular con el área de riesgo (si existe) o con el área de presupuesto, si existe un mecanismo de transferencia del riesgo para cubrir de forma colectiva el portafolio de bienes fiscales de al menos un sector.2. Consultar a las autoridades o cabezas del sectores de salud y educación, si han implementado mecanismos de transferencia del riesgo para cubrir de forma colectiva su portafolio de bienes fiscales.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Al menos una evidencia de una transferencia colectiva del portafolio de edificios (sedes) ministeriales de al menos un sector en el nivel nacional.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Costa Rica: La Caja Costarricense de Seguro Social (la cual es la entidad líder en servicios de salud públicos en Costa Rica) cubre todas sus edificaciones para prestar servicios de salud con una póliza colectiva. Lo anterior, se evidencia en el informe de gestión de un ex-funcionario de la Caja (PF-2-13a), que menciona que en 2012 se renovó la póliza todo riesgo "que incluye la totalidad de los edificios, equipos, mobiliario, maquinaria y mercadería de la Institución".</p> <p>México: Existen pólizas globales para la Secretaría de Educación Pública.</p>

Pregunta de respuesta cerrada
14. ¿El Ministerio o Secretaría de Planificación del Desarrollo Nacional, o el Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía, o la Entidad encargada de la Gestión del Riesgo de Desastres o el sector Agricultura, cuenta con al menos un instrumento financiero diseñado ex ante para incentivar la reactivación económica en áreas afectadas por desastres?
Descripción general del indicador
Se considera una buena práctica tener diseñados de forma ex ante instrumentos que permitan incentivar la reactivación económica en áreas afectadas por desastres.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar con la autoridad o cabeza del sector hacendario, de economía, o de finanzas (o entidad equivalente), de manera particular con el área de presupuesto respecto de la existencia de instrumentos financieros que hayan sido diseñados de manera ex ante para incentivar la reactivación económica en áreas afectadas por desastres. 2. Consultar a la autoridad o cabeza del sector agricultura respecto de la existencia de instrumentos financieros que hayan sido diseñados de manera <i>ex-ante</i> para incentivar la reactivación económica en áreas afectadas por desastres. 3. Revisar el tipo de instrumentos financieros que el país ha empleado para enfrentar la ocurrencia de desastres pasados. 4. Investigar por evidencia del uso de dichos instrumentos.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Al menos una evidencia de instrumentos financieros implementados de forma <i>ex-ante</i> , para incentivar la reactivación económica en áreas afectadas por desastres.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>Perú: El Decreto Ley N° 25977, de Pesca, del 7 de diciembre de 1992, en el artículo 57 da fuerza de Ley al Decreto Supremo N° 010-92-PE, que crea el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES). El Fondo de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) puede brindar créditos a propietarios para reparación de embarcaciones y puede suministrar insumos para la pesca.</p> <p>Panamá: Panamá tiene un Fondo Especial para Créditos de Contingencia, creado mediante la Ley No. 24, de 4 de junio de 2001, que adopta medidas para apoyar a los productores agropecuarios afectados por las condiciones climatológicas adversas y otras contingencias aprobada con el propósito, según artículo 2, de brindar asistencia financiera dirigido a los productores afectados por los ataques de plagas, por condiciones climatológicas adversas, por las abruptas caídas del precio de los productos en el mercado o para apoyar a los rubros afectados para lograr su reconversión.</p> <p>México: La Ley General de Protección Civil, del 6 de junio de 2012, dedicando un capítulo entero al tema: <i>XVIII De la Atención a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas</i>. Este capítulo se señalan responsabilidades e instrumentos en los siguientes artículos: “Artículo 91. Es responsabilidad del Gobierno Federal y de las entidades federativas atender los efectos negativos provocados por fenómenos climatológicos extremos en el sector rural, en este sentido, se deberá contar con los mecanismos que permitan atender de manera ágil y oportuna mediante apoyos directos y contratación de seguros catastróficos a los productores agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros, de bajos ingresos, afectados por contingencias climatológicas extremas...”; “Artículo 93. Los gobiernos Federal y Estatal deberán concurrir tanto en acciones como en la aportación de recursos, para la instrumentación de programas que coadyuven a la reincorporación de los productores de bajos ingresos a sus actividades productivas”, y “Artículo 94. El Gobierno Federal deberá crear una reserva especial para el sector rural con el propósito de proveer de recursos en forma expedita al Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, cuando los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación se hubiesen agotado”. Una evidencia de la aplicación de estos instrumentos fue la respuesta ante el paso de Ingrid y Manuel en 2013. Por otra parte, en la página web de SAGARPA (http://pacc.sagarpa.gob.mx/info/padrones/pub/padrones_2011.asp) se evidencia la existencia de beneficiarios del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas.</p>

Guatemala: En el Plan Operativo Anual 2013 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (PF-2-14a), publicado en julio de 2012 por la Dirección de Planificación, se hace referencia a “Agricultores apoyados en la gestión de créditos y pago de primas de seguro agropecuario como instrumento de administración del riesgo climático en la producción”, a través de Guate Invierte (Fideicomiso Para el Desarrollo Rural). Los subsidios para la compra de seguro agrícola se consideran un instrumento ex ante, dado que permiten que los agricultores reciban recursos que permiten la reactivación económica en áreas afectadas por desastres.

Chile: En la Resolución N° 1049, del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), del 10 de Septiembre de 2010, respecto de los procedimientos operativos para el otorgamiento de incentivos de emergencia, se establece que la línea especial de financiamiento para pequeños productores agrícolas y campesinos podrá orientarse a: (i) bonos de emergencia para compra de insumos; (ii) líneas de incentivos de inversión, asistencia técnica y crediticia para la reconstrucción de proyectos productivos; (iii) líneas de incentivos de rehabilitación o compensación para mitigar el costo de las inversiones por la emergencia

Pregunta de respuesta cerrada
15. ¿El Ministerio de Agricultura tiene una estructura de protección financiera del sector agricultura (o equivalente) frente al riesgo de desastres?
Descripción general del indicador
La ocurrencia de desastres, particularmente los ocasionados por eventos hidrometeorológicos usualmente tienen un impacto muy fuerte sobre el sector agrícola. En ese sentido, se considera relevante que este sector tenga una estructura de protección financiera frente al riesgo de desastres, la cual es uno de los componentes de una estrategia integral de gestión del riesgo del sector. Dentro de los instrumentos de la estrategia de gestión financiera del riesgo de desastres se incluye: (i) aseguramiento y bonos catastróficos, (ii) ahorros de precaución y (iii) préstamos contingentes. Cabe mencionar que el aseguramiento puede incluir tanto instrumentos indemnizatorios como instrumentos paramétricos. De otra parte, es importante señalar que la adquisición de dichas pólizas en algunos países es subsidiada por el gobierno.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Consultar a la autoridad o cabeza del sector agricultura (o entidad equivalente) respecto de los instrumentos de protección financiera que tiene implementados. 2. Indagar con el gremio agrícola respecto de los instrumentos financieros a los cuales podría acceder para cubrirse en caso de ocurrencia de desastres.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Una estructura de protección financiera del sector agricultura (o equivalente) frente al riesgo de desastres, que incluya al menos dos instrumentos de la estrategia de protección financiera para el sector agrícola.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
<p>México: La estructura de protección financiera del sector agricultura, se materializa en el Sistema Nacional de Aseguramiento al Medio Rural (SNAMR) y los programas federales que por su parte están asignados a AGROASEMEX.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistema Nacional de Aseguramiento al Medio Rural (SNAMR) en el que operan dos esquemas de seguro: <ul style="list-style-type: none"> - El seguro comercial, operado por fondos de aseguramiento y aseguradoras privadas (apoyado con presupuesto del Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario); - El seguro catastrófico, operado por AGROASEMEX y aseguradoras privadas (en el que intervienen presupuestos al Programa del Seguro para Contingencias Climatológicas administrado por AGROASEMEX; el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, Componente de Atención a Desastres Naturales CADENA en el Sector Agropecuario y Pesquero operado por la SAGARPA; y recursos de los gobiernos de los estados). 2. AGROASEMEX tiene asignados para su administración y operación los siguientes programas: <ul style="list-style-type: none"> (i) Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario que busca ampliar la cobertura del seguro agropecuario y (ii) Fondo de Contingencias y Autoseguro. Este programa tiene como propósito potenciar la capacidad financiera del Gobierno Federal, mediante el pago de la prima para la contratación de seguros catastróficos paramétricos, para proteger las desviaciones financieras que se originen por la ocurrencia de contingencias climatológicas que afecten la actividad agropecuaria, lo que permitirá incrementar la cobertura física del CADENA. La experiencia de México en materia de seguros agropecuarios se evidencia en una presentación de SAGARPA en 2013 (PF-2-15b) <p>Perú: La Ley N° 29951 del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013, en la Distribución del gasto del presupuesto del Sector Público por pliegos del Gobierno Nacional a nivel de productos, proyectos y actividades, Anexo 5, Pliego 13 del Ministerio de Agricultura, se evidencian recursos para “Fondo de garantía para el campo y del seguro agropecuario” (pg. 274). A través de este rubro se respalda AGROPROTEGE, que tiene como objetivo financiar hasta el 100% del costo de póliza dirigida a los campesinos más pobres. AGRO PROTEGE nace con el respaldo del Fondo de Garantía del Seguro Agropecuario aprobado por Ley N° 28939, que aprueba crédito suplementario y transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2006, dispone la creación de fondos y dicta otras medidas, de 21 de diciembre de 2006, cuya finalidad es garantizar los créditos otorgados por las instituciones financieras a los medianos y pequeños productores rurales organizados que orienten su actividad hacia mercados nacionales y/o internacionales dinámicos; así como financiar mecanismos de aseguramiento agropecuario, ofrecidos a través del Sistema de Seguros, destinados a reducir la exposición de los productores</p>

agropecuarios, tales como comunidades campesinas, nativas, pequeños y medianos agricultores, a riesgos climáticos y presencia de plagas, que afecten negativamente su producción y rentabilidad.

Panamá: El Instituto de Seguros Agropecuarios es una entidad autónoma del Estado Panameño creada mediante la Ley No. 34, de 29 de abril de 1996, por la cual se crean el Seguro Agropecuario y el Instituto de Seguro Agropecuario (PF 2-15a); "... *contra pérdidas fortuitas no controladas que puedan ocurrir en las inversiones, con garantía de compensación para éstas, con el propósito de ofrecer protección básica a las personas, naturales o jurídicas, dedicadas a la actividad agropecuaria*" (artículo 1).

Código: PF 3-1

Pregunta de respuesta cerrada
<i>1. ¿El ente nacional de control ha realizado al menos una verificación o evaluación del cumplimiento de la normativa existente sobre mecanismos de protección financiera en los últimos 5 años?</i>
Descripción general del indicador
Se trata de la verificación de los procesos de protección financiera establecidos en el país, por parte del ente nacional de control.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none">1. Hay que indagar si existe una normativa que obligue a la implementación de estrategias de protección financiera.2. Se sugiere revisar los informes publicados en la página web por el ente nacional de control.3. Se sugiere indagar con el ente nacional de control y con la autoridad o cabeza del sector hacendario, de economía, o de finanzas.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
<p>Documento de verificación o evaluación del cumplimiento de la normativa existente sobre mecanismos de protección financiera. A manera ilustrativa, dicho documento podría incluir una verificación sobre si los bienes de responsabilidad fiscal del estado están asegurados o cubiertos por otras formas de cobertura (en caso que este tema sea de obligatorio cumplimiento de acuerdo a la Ley).</p> <p>Los informes de los entes de control sugiriendo mejoras en el uso de recursos empleados para atender la etapa de emergencia no son evidencia de evaluaciones respecto del cumplimiento de la normativa sobre protección financiera.</p>
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
No se identificaron ejemplos de cumplimiento en la región por lo que se propone una situación hipotética para el cumplimiento de este indicador: En un país de la región, en donde existe normatividad que obligue a la implementación de estrategias de protección financiera, el ente de control realizó una evaluación sobre su cumplimiento, en términos de los instrumentos de retención y transferencia del riesgo implementados para cubrir los principales riesgos identificados.

Código: PF 3-2

Pregunta de respuesta cerrada
<i>2. ¿El ente rector del sector asegurador ha realizado al menos una verificación o evaluación sobre el uso del modelo de evaluación probabilista del riesgo para la estimación de las reservas de riesgo catastrófico de las compañías de seguro en los últimos 3 años?</i>
Descripción general del indicador
Se trata de la verificación sobre los modelos de evaluación probabilista del riesgo en la estimación de las reservas de riesgo catastrófico de las compañías de seguro en los últimos 3 años. Lo anterior es fundamental para asegurar el adecuado aprovisionamiento de reservas y que por ende el sector asegurador tenga capacidad de responder por los siniestros en caso de ocurrencia de un desastre.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none">1. Se sugiere revisar los informes publicados en la página web por el ente rector del sector asegurador para indagar si han realizado una verificación o evaluación sobre el uso del modelo de evaluación probabilista del riesgo la estimación de las reservas de riesgo catastrófico de las compañías de seguro en los últimos 3 años.2. Se sugiere indagar con el ente rector del sector asegurador respecto de la verificación o evaluación sobre el uso del modelo de evaluación probabilista del riesgo en la estimación de las reservas de riesgo catastrófico de las compañías de seguro en los últimos 3 años.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Documento de verificación o evaluación sobre el uso del modelo de evaluación probabilista del riesgo en la estimación de las reservas de riesgo catastrófico de las compañías de seguro en los últimos 3 años.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
México: La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas dispuso la publicación el 5 de octubre de 2012 de la Circular modificatoria 54/12 de la Única de Seguros (Diversas modificaciones al Capítulo 7.2.; se modifican los Anexos 7.2.1. y 7.2.7.; se adiciona el Anexo 7.2.2.; y se suprimen los Anexos 7.2.5. y 7.2.8.) con el objeto dar a conocer la actualización del estudio que contiene las bases técnicas con las que se determinan la prima de riesgo y la pérdida máxima probable de los seguros de terremoto, así como proporcionar el sistema de cómputo con el que las Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, podrán realizar el procesamiento de información para calcular dicha prima de riesgo y pérdida máxima probable. Esto por la necesidad de hacer una revisión y actualización que permita incorporar los adelantos tecnológicos y conocimientos actualizados del fenómeno de terremoto. Para ello, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas ha realizado actualizaciones al estudio técnico para el cálculo de la prima de riesgo y la pérdida máxima probable de los seguros de terremoto, (lo cual es mencionado en los considerandos de la Circular modificatoria 54/12 de la Única de Seguros).

Código: PF 3-3

Pregunta de respuesta cerrada
<i>3. ¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía ha realizado al menos una evaluación sobre la aplicación de los procesos de protección financiera en el país en los últimos 3 años?</i>
Descripción general del indicador
Se trata de la evaluación interna de los procesos de protección financiera establecidos en el país, por parte del sector responsable del tema.
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none">1. Revisar los informes publicados en la página web por la autoridad o cabeza del sector hacendario, de economía, o de finanzas (o entidad equivalente) relacionados con evaluaciones sobre la aplicación de los procesos de protección financiera en el país en los últimos 3 años.2. Consultar al área la autoridad o cabeza del sector hacendario, de economía, o de finanzas (o entidad equivalente) con responsabilidades en el diseño e implementación de una estrategia de gestión financiera ante el riesgo de desastres respecto de evaluaciones al respecto en los últimos 3 años.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar la condición positiva
Informe elaborado, en los últimos 3 años, por la autoridad o cabeza del sector hacendario, de economía, o de finanzas (o entidad equivalente); dicho informe debe estar aprobado o publicado en la página web y debe incluir una evaluación sobre la aplicación de los procesos de protección financiera en el país.
Ejemplos de condiciones positivas en países de la región
México: En la entrevista sostenida con la Unidad de Seguros de la Secretaría de Hacienda manifestaron que para poder sacar al mercado nuevos instrumentos financieros deben hacer una evaluación de todo el esquema. En ese sentido, en el libro sobre FONDEN, publicado en 2012 se describen la evolución de los activos por cubrir y los instrumentos seleccionados.